
ANATOMÍA DEL OCTUBRE CHILENO

REFLEXIONES A 5 AÑOS

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ

(EDITOR)

Claudio Sapelli · Patricio Órdenes · María José del Solar · Cristián Larroulet ·
Martina Cionci · María Paz Raveau · Melany Sosa · Pablo Paniagua · Natalia González ·
Rodrigo Pérez de Arce · Víctor Espinosa · Iván Carrino · Felipe Schwember
Jacqueline Dussailant · Jorge Cordero · Pedro Villarino · Pablo Celis

ANATOMÍA DEL OCTUBRE CHILENO

Reflexiones a 5 años

Miguel Ángel Fernández (Editor)

Claudio Sapelli – Patricio Órdenes – María José del Solar – Cristián
Larroulet – Martina Cionci – María Paz Raveau – Melany Sosa – Pablo
Paniagua – Natalia González – Rodrigo Pérez de Arce – Victor Espinosa –
Iván Carrino – Felipe Schwember – Jacqueline Dussaillant – Jorge Cordero
– Pedro Villarino – Pablo Celis.

Faro UDD

SANTIAGO, OCTUBRE DE 2024

TABLA DE CONTENIDOS

Prólogo	I
SECCIÓN I	
1. La Chispa	1
2. El Furor	17
3. La Frustración	39
4. Las Aulas	59
5. La Atrofia	76
SECCIÓN II	
6. La Hipocresía	93
7. La Legitimidad	111
8. La Economía	128
9. La Argentinización	145
SECCIÓN III	
10. El Mito	162
11. El Discurso	180
12. La Religión	195
13. El Objeto	217

PRÓLOGO

EL OCTUBRE CHILENO, 5 AÑOS DESPUÉS

A usted que comienza a leer esta compilación quiero invitarlo a una reflexión: ¿Dónde estaba el 18 de octubre de 2019? He repetido esta pregunta en clases, foros, conversaciones y programas radiales, y un porcentaje cercano al 99% de los chilenos me pueden dar una respuesta detallada. Lo anterior es consecuencia de que existen eventos en la historia de una tierra que son de más fácil memoria en comparación a cualquier otro día del calendario. Para la generación de chilenos a la que pertenecemos, ese viernes se encuentra forjado en la consciencia colectiva, pero la interpretación y emociones que nos evoca no son generalizables. Desde diferentes ciudades, barrios e incluso países, todos tenemos una versión personal y otra pública de lo que fue el octubre chileno.

En el caso de quién escribe estas palabras, mi recuerdo comienza recorriendo la misma calle que muchos viernes previos. Alejado de la contingencia país y los debates que en ese tiempo se suscitaban, la llamada que recibiría – anunciando que incendios afectaban el transporte público de Santiago – me tomo con un tono de incredulidad, pero sin mayor aprehensión. Años antes, fallas eléctricas en alguna estación de metro me habían obligado a caminar largos kilómetros para llegar a casa: creí, erróneamente, que algo de la misma naturaleza estaba ocurriendo. La inocencia de la distancia se rompió bruscamente al momento de conectarme a algún canal de televisión de Chile y ver – con preocupación que escalaba por segundo – las crudas imágenes de estaciones de metro destruidas y edificios en llamas.

Frente a la incertidumbre que reinaba, mi reacción fue consumir más y más información, conectar con canales de televisión abierta y de cable, leer comentarios en redes sociales y mirar historias de manera casi obsesiva. Las primeras sensaciones me transmitían diversas y disimiles emociones.

En todos los espacios de la plaza pública virtual se comenzaba a sentir la infección emocional que se agolpaba en redes de amigos y paneles de conversación en el país. El paso de los días y las semanas solo incrementaron una sensación de imposibilidad teórica y empírica: ¿qué ocurría en Chile? A la distancia, separado por dieciocho mil kilómetros de mi querido Concepción, todo lo que veía estaba teñido de descontrol. Cada minuto que pasaba apoyaba la instalación de un discurso radical como nunca había observado en mis años de vida. Chile – según esta versión populista y radical – se dividía en grupos antagónicos: una élite corrupta y egoísta que había privado a los chilenos de una mejor vida, y un pueblo virtuoso y valiente que se levantaba para enfrentar a fuerzas fácticas que los oprimían. Un mensaje breve, pero de gran factura viral y peso ideológico, era la sombra que recorría los espíritus que habitaban este país: #ChileDespertó.

Esas dos palabras instaladas usualmente al finalizar los mensajes en redes sociales escondían el espesor ideológico de lo que sería la interpretación que desde ese día impera en parte del rincón del mundo que nos cobija. La tumba del neoliberalismo, la independencia de las cadenas de opresión capitalista y el clamor popular de un descontento generalizado y universal eran parte de los tonos que recorrían los análisis en el país. ¿De qué había despertado Chile? Para algunos, de la falsación de identidad de un sistema capitalista que no permitía observar la realidad. Esas dos palabras unidas gracias a una etiqueta son, quizás, el mayor triunfo de una teoría de lucha de clases en nuestro país en largas décadas.

Sumado a lo anterior, la prensa mostraba compilaciones sobre los 10 o 20 mejores carteles de quienes se aglomeraban en las calles. En ellos destacaban frases contra la presidencia, contra la democracia y contra el sistema que nos gobernaba. Mensajes sobre la frustración de situaciones personales y de rabia frente al país que habíamos construido. El furor octubrista se conversaba en todas las mesas, ninguna familia desde la Línea de la Concordia hasta las islas Diego Ramirez estaba libre del tema, y la idea de los 30 años (o 30 pesos) se transformaba en una verdad revelada de pretensión absoluta y universal. Pocos se atrevieron a levantar una voz distinta en público, pues la narrativa dominante establecía que Chile era una tierra que oprimía a sus ciudadanos, que dejaba de lado a sus hijos y que estaba llamada a superar las fuerzas de la historia neoliberal. Atrás había quedado el asilo contra la opresión, la libertad de la esperanza que venía y los triunfos en materia de reducción de la pobreza, incremento de la escolaridad, mejoramiento de la salud pública y expansión de las oportunidades de movilidad social.

Con el pasar de los años, la ola de violencia que inició en Santiago, e infectó cada rincón del país, ha decantado. Así lo muestran encuestas recientes, y con ello no solo se fue parte de ese furor que recorrió Chile – donde muchos se vieron forzados a bailar para cruzar una calle. Para ello, tuvieron que pasar dos procesos constitucionales fallidos, la batería de elecciones de mayor volumen en la historia del país y cientos de miles de horas de conversación y discusión sobre el fenómeno que comenzó ese octubre de 2019. Desde el borde del abismo institucional en que estuvimos hasta ahora ha pasado bastante, y por eso llega el momento de poner una primera piedra en la reflexión sobre lo ocurrido desde una mirada interdisciplinaria, a través del uso del método científico y la lógica de la reflexión como aliados principales.

Por eso, en esta compilación se busca descomponer al octubrismo chileno en tres secciones de distinta naturaleza académica. En la primera parte, los ensayos de Sapelli, Órdenes, del Solar, Larroulet, Cionci, Raveau, Sosa y Paniagua buscan comprender la naturaleza de las movilizaciones, el rol que tuvo el fin de la era de alto crecimiento económico, el incremento de la frustración de una generación y la pérdida que la expectativa meritocrática tuvo en el llamado a las protestas más masivas de las últimas tres décadas.

Esta primera sección examina cómo la frustración económica y la pérdida de expectativas movilizaron a la ciudadanía en octubre de 2019. Claudio Sapelli y Patricio Órdenes explican cómo la caída en los ingresos de los jóvenes, especialmente aquellos nacidos después de 1989, fue un factor detonante del malestar. Destacan que este grupo, al experimentar menores oportunidades económicas en comparación con generaciones anteriores, sintió que el sistema meritocrático había dejado de funcionar para ellos. María José del Solar y quien escribe, Miguel Ángel Fernández, complementamos este análisis al reconstruir el perfil del manifestante octubrista. Cuestionamos la noción de un malestar universal, mostrando que las movilizaciones no reflejan la totalidad del sentir ciudadano, sino las frustraciones de un grupo específico afectado por las expectativas incumplidas. Cristián Larroulet y Martina Cionci abordan la relación entre la desaceleración económica y el debilitamiento institucional, proponiendo que estos factores contribuyeron al contexto de las protestas. Por otro lado, Melany Sosa y María Paz Raveau analizan el papel de la educación en la formación de valores políticos, mostrando cómo las dinámicas dentro del aula influyen en la participación política juvenil. Finalmente, Pablo Paniagua cierra esta sección con un enfoque macroeconómico, argumentando que el agotamiento del modelo chileno ha erosionado las posibilidades de movilidad social, alimentando el malestar que se manifestó en las calles.

En la segunda sección, los ensayos de González, Pérez de Arce, Carrino y Espinosa se centran en el rol de la institucionalidad, de la política y la economía como factores a prestar especial atención en el período 2019-2024.

La segunda sección de la compilación inicia con la reflexión de Natalia González, quién examina la construcción de la narrativa octubrista presentó a las élites como insensibles y villanas, lo que facilitó una agenda refundacional. Su análisis muestra cómo este discurso marginó a sectores políticos tradicionales y fomentó la deslegitimación de la institucionalidad previa. Por su parte, Rodrigo Pérez de Arce aborda las tensiones entre la legitimidad institucional y el populismo, destacando cómo los discursos polarizantes afectaron la estabilidad del sistema político y abrieron camino a la incertidumbre política. En el siguiente capítulo, Víctor Espinosa investiga el deterioro económico del país y argumenta que este se debió a las políticas anti-mercado implementadas durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet; así, sugiere, que estas reformas erosionaron los fundamentos económicos, lo que desencadenó una desaceleración que amplificó las tensiones sociales. Finalmente, Iván Carrino analiza las similitudes entre el estallido chileno y los procesos económicos argentinos; el autor advierte sobre los riesgos de expandir el rol del Estado de manera similar al modelo argentino, lo que podría haber puesto en peligro la estabilidad económica y la independencia del Banco Central.

Por último, la tercera parte de esta obra incorpora las miradas de Schwember, Dussillant, Cordero, Villarino y Celis para derribar el mito octubrista, posicionarlo en la historia y meditar sobre su objeto en la naturaleza humana y las ciencias sociales.

Esta última sección se enfoca en las narrativas simbólicas y su influencia en la comprensión del estallido social. Así, el ensayo de

Felipe Schwember reflexiona sobre cómo el mito “octubrista” simplificó la complejidad de los acontecimientos, convirtiéndose en un poderoso relato de emancipación. En su reflexión histórica, Jacqueline Dussailant, analiza cómo las distintas narrativas del malestar se han desarrollado a lo largo de la historia chilena y cómo las movilizaciones de 2019 fueron el resultado de una articulación de demandas influenciada por discursos críticos previos provenientes desde espacios teóricos. Tras ella, Jorge Cordero y Pedro Villarino entregan una interpretación de las religiones intramundanas de los símbolos del octubre chileno, argumentando que ciertos elementos de las protestas tomaron características sacralizadas. Por último, Pablo Celis cierran la obra con un análisis que combina perspectivas sociológicas y filosóficas para cuestionar si problematizar el objeto del octubre chileno dentro de las ciencias sociales.

Este libro no pretende cerrar el debate sobre lo que ocurrió en octubre de 2019. Más bien, busca abrir nuevas conversaciones, desde miradas diversas y enfoques interdisciplinarios. Al descomponer los eventos de aquel octubre en múltiples aristas —económicas, sociales, políticas y simbólicas— esperamos contribuir al desarrollo de investigaciones futuras y a una discusión pública más informada. Solo con análisis rigurosos y perspectivas amplias podremos evitar que el país quede atrapado en divisiones irreconciliables.

Miguel Ángel Fernández
Editor

SECCIÓN I:

Crecimiento, Frustración y Movilizations.

LA CHISPA

LA CAÍDA DE LOS INGRESOS DE LOS JÓVENES Y LAS MANIFESTACIONES DE 2019

Por Claudio Sapelli y Patricio Órdenes

Resumen

Lo ocurrido en octubre de 2019 nos invita a reflexionar sobre cuáles podrían haber sido sus posibles causas. El fenómeno es complejo y requiere del análisis multidisciplinario. Desentrañar las múltiples razones que subyacen, no solo lo que gatilla las movilizaciones, sino también el descontento que lo antecede -- muchas veces llamado "malestar" -- es necesario para corregir errores y, al mismo tiempo, apreciar los múltiples logros que alcanzó Chile en las últimas décadas. En lo que sigue nos centraremos en lo que llamamos "la chispa" que incendió la pradera. Mencionaremos además otras posibles causas que son el objeto de análisis de nuestro esfuerzo. En este trabajo pondremos énfasis en la caída de los ingresos que sufrieron las generaciones más jóvenes en el mercado de trabajo. Dichos malos resultados, comparados con los buenos obtenidos por generaciones anteriores, dan pie a la hipótesis que las diferentes experiencias económicas de las generaciones generaron un sentimiento de malestar y frustración, que fue la chispa que desató el incendio. La hipótesis es que la situación fue el "pasto seco" que se fue acumulando y que fue encendida por "la chispa" del deterioro de los ingresos de las generaciones más jóvenes.

Introducción

Para muchos, lo que ocurrió en octubre de 2019 fue inesperado. Ocurrió después de varias décadas de importantes logros que permitieron a Chile transitar desde ser un país pobre, al borde de un conflicto civil, a comienzos de la década de 1970, a otro muy distinto y, en muchas dimensiones, con mejores indicadores de progreso. Chile modernizó su economía, creció en forma sostenida, redujo la pobreza e innovó en materia de política social y económica, convirtiéndose, en el camino, en un modelo sobre el cual se basaron un amplio espectro de políticas en el mundo en las últimas décadas. ¿Cómo, en esas condiciones, era posible un malestar tan profundo como extendido, que explicara lo que ocurrió en octubre de 2019 y los eventos que lo siguieron?¹.

En retrospectiva, los eventos de fines del 2019 ocurren en un contexto de malestar en amplios sectores de la población². Sin embargo, es en el grupo de los jóvenes -- aquellos individuos que nacieron a partir del año 1989, es decir, los que para los eventos de octubre de 2019 tenían entre 25 y 30 años -- en el cual se observa mayor protagonismo y descontento, por lo que pondremos énfasis en identificar si las circunstancias económicas que vivieron ellos difieren de las generaciones que los preceden³. Desentrañar las múltiples razones que subyacen a este descontento es una actividad que requiere del

¹ Lo que se intenta explicar en este ensayo es el malestar que se expresa en la marcha "del millón", que ocurre una semana de los hechos de violencia del 18 de octubre, y no este último evento.

² Un intento temprano de identificar las causas de dicho malestar es González (2017).

³ Según el estudio "El Chile que viene" de la consultora Cadem (2019), la población menor de 35 años ha sido la cara visible de las movilizaciones. De acuerdo con el sondeo, el 57% de los jóvenes reconoce haber participado en marchas ciudadanas o caceroleos, versus el 34% del grupo entre 35 a 54 años, y el 20% del segmento de mayores de 55. Cox, González y Le Foulon (2024) muestran que un 62% de los encuestados caracterizados como manifestantes fuertes en todo el país tenían menos de 36 años y un 40% de ellos al menos un año de educación superior.

aporte de todas las ciencias sociales. Acá aspiramos a iluminar algunos aspectos centrados en las distintas circunstancias económicas vividas por diferentes sectores de la población.

En múltiples dimensiones se da, para las generaciones más jóvenes, que las realizaciones han defraudado las expectativas, lo que contrasta con la experiencia de las generaciones previas, en que muchas veces las realizaciones superaban las expectativas. Adicionalmente, entre los jóvenes, el deterioro de la situación económica ha generado generaciones menos afortunadas que sienten que hicieron todo bien y, por lo tanto, no aceptan que ello sea un resultado justo. En resumen, la frustración por el incumplimiento de las expectativas de los jóvenes pareciera ser un buen candidato para explicar su malestar.

En las siguientes partes de este capítulo se describe la estimación de los ingresos por generación y el resultado de que hay una baja en los ingresos de las generaciones más jóvenes. Adicionalmente, se analizan los resultados por niveles educativo y se discute más detalladamente los resultados y sus posibles causas. Por último, se vincula estos resultados con la literatura sobre expectativas defraudadas y frustración.

El Deterioro de los Ingresos de las Generaciones Jóvenes

En lo que sigue miramos los datos por cohortes/generaciones. Dicha mirada permite identificar un hecho clave: un importante deterioro de los ingresos de los jóvenes en los años previos al octubre 2019⁴. Dicho deterioro, repentino y profundo, tiene la fuerza por sí mismo

⁴ Cuando uno organiza los datos por año de encuesta, y no por generación, que es la forma tradicional de ver los datos, las encuestas Casen muestran un mercado de trabajo en constante mejora previo a octubre 2019, aun cuando a tasas decrecientes. Es decir, el análisis a partir de los datos globales impedía ver el deterioro sufrido por las generaciones más jóvenes.

para explicar un fenómeno de la magnitud de la revuelta. Esta es una característica importante que no cumplen otros factores que han sido postulados como posibles causas. Por ejemplo, la caída en las tasas de retorno de la educación terciaria se produce en forma gradual y sostenida. La tasa de crecimiento de la economía también cae por décadas en forma sostenida. Ninguno de estos dos fenómenos, por lo tanto, tienen la dimensión y la oportunidad para explicar la revuelta. Pero como sin dudas alimentaron el malestar que lo precede, han de haber cumplido un rol. Usando una metáfora, la hipótesis es que el malestar fue la "paja seca" que se fue acumulando y que fue encendida por "la chispa" del deterioro de los ingresos de las generaciones más jóvenes.

Sin dudas que la baja en la tasa de crecimiento del PIB ha de haber afectado al mercado de trabajo como un todo. Los datos examinados aquí nos dicen que ello afecta muy fuertemente a las generaciones más jóvenes⁵. A su vez, hay un importante shock de oferta por la inmigración, que se concentra en pocos años, y que además se concentra en los jóvenes porque la mayor parte de los inmigrantes pertenece a dicho grupo etario.

Lo que se hace en este trabajo es ordenar la información por generación y luego identificar el efecto específico por cohorte a través de la descomposición de Deaton, un método estadístico que separa la evolución de la variable en efectos año, edad y cohorte (Deaton, 1997). Presentamos los resultados en el Cuadro 1-1.

⁵ Un tema es a qué generaciones pudo afectar el quiebre en el crecimiento detectado en 2013. Podemos especular que, si suponemos que los que salen a trabajar al terminar secundaria lo hacen a los 18, y los que salen a trabajar al terminar terciaria a los 24, tenemos que ese quiebre debe haber afectado a las generaciones nacidas entre 1989 (igual a 2013 menos 24) y 1995 (igual a 2013 menos 18), en forma progresiva y "a full" a todas las generaciones posteriores.

Los resultados que hemos anticipado se encuentran tanto con los datos de la Encuesta de Ocupación y Desocupación de la Universidad de Chile, como con los datos de la CASEN⁶ (acá se reportan solo los resultados obtenidos con la CASEN⁷).

Cuadro 1-1: Evolución del efecto propio del ingreso de cada cohorte (porcentaje anual acumulado entre puntas). Tasa de crecimiento anual acumulado entre cohortes.

Para las generaciones nacidas entre:	El ingreso promedio de la vida varió en:
1964 a 1982	+4,2%
1982 a 1989	+2,7%
1989 a 1995	-5,6%

Nota: Estimaciones propias en base a pool de encuestas Casen desde 1996 a 2022.

El resultado observado, entonces, es que hay un fuerte deterioro del ingreso a partir de la generación nacida en 1989. La caída es producto de una caída tanto en la generación de empleo como en los salarios en las generaciones más jóvenes. Para ponerle números al deterioro, después de 25 generaciones con aumentos en sus ingresos, los ingresos caen 5,6% anual acumulado para las generaciones nacidas a partir de 1989⁸.

⁶ Se trabaja con la CASEN en dos formatos diferentes. Un primer formato, que es del cual se derivan los resultados del Cuadro 1, hace un pool de los datos de las CASEN desde 1996 a 2022. Un segundo formato hace el pool hasta la CASEN 2017, para no contaminar el análisis con datos post revuelta. Los resultados no cambian cualitativamente. Los periodos definidos son los mismos.

⁷ La razón es que, si bien los datos de ingresos por generación cuentan una historia muy similar, los datos de la Encuesta de la U. de Chile muestran un deterioro por cohorte mayor que los de la CASEN, y hemos preferido ser prudentes y reportar solamente los datos de la CASEN.

⁸ La tasa de crecimiento anual acumulada del efecto propio del ingreso para las cohortes entre 1989 y 1997 es de -1,6%. Es decir, cuando se agregan las generaciones del 96 y 97 al grupo, el resultado negativo que reportamos se reduce en su magnitud, y aquello se explica porque para estas últimas dos generaciones se observa un incipiente cambio de tendencia

Es importante subrayar el hecho de que estas generaciones son precisamente aquellas que ingresan al mercado laboral en momentos en que la economía comienza a mostrar signos importantes de menor crecimiento.

También, hay que destacar que el efecto cohorte que reportamos es el efecto sobre lo que se llama el *“lifetime income”*, o sea, el ingreso promedio a lo largo de toda la vida para cada generación. Eso hace aún más potentes los resultados, ya que estamos diciendo que las generaciones nacidas entre 1964 y 1982 aumentaron su ingreso promedio a lo largo de la vida en 4,2%. Cada generación era 4,2% más rica que la anterior hasta llegar a generaciones que eran más del doble de ricas que las iniciales. Esa tasa de crecimiento primero cae a 2,7% para luego volverse negativa. O sea, tenemos generaciones cada vez más pobres, con menores ingresos vitales, siendo la generación nacida en 1995 algo más de un tercio más pobre que la nacida en 1989. De una situación de bonanza se pasa, en relativamente poco tiempo, a la situación opuesta.

Finalmente, vale la pena subrayar que la caída en los ingresos por parte de las generaciones más jóvenes es un fenómeno que ya se podía advertir con los datos que había disponibles en los años previos a la revuelta de 2019. Utilizando datos hasta la encuesta Casen del año 2017, se encuentra que para las generaciones nacidas entre 1989 y 1992 los ingresos caen en 8,6% para cada generación. En resumidas cuentas, hubo un deterioro del ingreso para las generaciones más jóvenes que parte previo a octubre 2019, y que no es detectado por las estadísticas anuales porque solo se advierte al mirar los datos por generación y no al mirar los datos por año calendario.

en la evolución del efecto. Sin embargo, será necesario esperar los resultados de las siguientes encuestas para confirmar si dicho quiebre de tendencia se mantiene en el tiempo. Igual permanece el deterioro de las generaciones nacidas entre 1989 y 1995 en dimensiones importantes.

Resultados por nivel educativo

La evolución de los ingresos de las generaciones con diferentes niveles educativos es distinta. Aquellos con secundaria completa (o menos) tienen una constante mejora en sus ingresos desde la generación nacida en 1960. La tendencia al alza se quiebra en 1989 y ahí se estanca, pero no hay una caída. El estancamiento contribuye a que el quiebre a nivel global, que se produce principalmente por la caída de los ingresos de aquellos con terciaria completa, sea más claro. Los ingresos de aquellos con terciaria incompleta y con terciaria completa empiezan a caer a partir de la generación nacida en 1986/87 (hoy 37/38 años; en 2019 32/33 años). La caída es particularmente acentuada para la última categoría a partir de la generación nacida en 1989. Y es un contraste dramático después del muy importante aumento de ingresos que dicha categoría había tenido previo a dicho quiebre (ver Cuadro 1-2).

Esta tendencia a un quiebre para todos los niveles educativos apunta a que hay motivos comunes, que operan a nivel del mercado de trabajo, que contribuyen a estas tendencias. Pero hay una caída particularmente fuerte en el caso de aquellos con educación terciaria. Es bien posible que la caída en ese grupo haya contribuido en forma importante al malestar que rodeó la revuelta de 2019. Acá entra a operar además el tema de las expectativas. En particular para aquellos con educación terciaria completa está presente la desilusión por el no cumplimiento de la promesa de ascenso de clase social⁹.

Lo anterior también puede observarse a partir de la caída relativa de los ingresos de quienes tienen educación terciaria completa versus quienes tienen educación secundaria completa. Una medida que se

⁹ Punto que hace Pablo Ortúzar en su libro “Sueños de Cartón”.

llama en la literatura “*skill premium*” y que es una forma alternativa de medir el retorno a la educación terciaria. Una mirada en ese sentido a nivel de cohorte exhibe una caída sostenida a partir de la generación nacida en 1982¹⁰.

Cuadro 1-2: Evolución del efecto propio del ingreso de cada cohorte por nivel educativo (Porcentajes de cambio punta a punta)¹¹

Generaciones/ Nivel Educativo	Educación secundaria completa	Educación terciaria incompleta	Educación terciaria completa
1964-82	+1%	-4,4%	+18,2%
1982-89	+4,9%	+1,3%	-6,5%
1989-95	0%	-0,9%	-14,8%
1995-97	-0,4%	-2,7%	+1,3%

Nota: Estimaciones propias en base a pool de encuestas Casen desde 1996 a 2022.

Discusión más detallada de los resultados y sus posibles causas

Al observar estos resultados surge la pregunta de a qué se debe la magnitud del deterioro y por qué afecta especialmente a los más jóvenes. Seguramente se debe a una multiplicidad de factores. Algunos de ellos son relativamente sencillos de identificar. Pero la dimensión de la caída pareciera ser muy grande para explicarla

¹⁰ Es importante destacar que la tasa de retorno a la inversión en educación terciaria sigue siendo alta en la actualidad, lo que significa que, para la mayoría de las personas, sigue siendo beneficioso adquirir educación terciaria.

¹¹ No reportamos aquí los porcentajes de cambio punta a punta para educación secundaria incompleta, ya que presentan cambios muy violentos que están explicados por ser un grupo reducido y que se va haciendo cada vez más pequeño en el tiempo.

solamente por la caída en el crecimiento y el shock de oferta que significó la migración.

El deterioro en los ingresos de las generaciones más jóvenes coincide con un aumento en los niveles de informalidad para el mercado de trabajo como un todo, en particular en el segmento del trabajo por cuenta propia. Además, coincide con un aumento del uso de contratos a plazo fijo, por obra o faena. En España se ha detectado (ver Sapelli 2022) que el mayor uso de los contratos a plazo fijo y la disminución del lapso de contratación se concentra en los jóvenes y los ha llevado a tener un deterioro importante en su bienestar. Algo similar parece estar pasando en Chile, en que la forma en que funciona el mercado de trabajo implica una alta rotación laboral y salarios que crecen muy poco con la experiencia, cuestión que perjudica particularmente a los jóvenes. Esto ha sido así desde hace mucho tiempo, pero se observa que dicha precariedad aumentó.

El trabajo de Barrero et al., (2017) muestra que el empleo formal crece hasta fines de 2013 y que todo el aumento posterior es de empleo por cuenta propia (que asimilan a informal). También muestran que el gap de ingresos entre los dos grupos (formal e informal) aumenta desde 2010. O sea, no solo aumenta la informalidad, sino que el premio por la formalidad crece. Por su lado, González y Huneeus (2016), con datos del seguro de cesantía, muestran cómo el porcentaje de contratos a plazo fijo (temporales) en Chile es el más alto de la OECD.

Parro y Reyes (2019) concluyen que el empleo joven es mucho más sensible a la tasa de crecimiento de la economía, lo que es compatible con lo que encontramos. Muestran que el porcentaje del empleo total que son asalariados del sector privado tuvo un *peak* en 2013 de 60% y luego cayó. El quiebre en 2013 coincide con el momento en que la tasa de crecimiento de la economía se enlentece dramáticamente.

Finalmente, el Banco Central de Chile (2018) provee información acerca de que la precariedad de los puestos de trabajo en Chile es muy alta. Entre los resultados mencionados por el Banco Central están: a.- Chile tiene bajos retornos a la experiencia. Esto tiene (al menos en parte) que ver con la precariedad del empleo y la alta rotación; b.- La duración promedio de los empleos en Chile es muy baja. Es cerca de un tercio de la duración de los países de Europa. Como consecuencia la tasa rotación en Chile es el doble que en otros países de la OECD; y c.- En el uso de contratos temporales, Chile aparece como líder, y al lado de España. Su nivel es tres veces la mediana de la OECD.

En resumen, la creciente rigidez de la regulación del mercado laboral ha terminado por perjudicar a los jóvenes en forma similar a lo que ha ocurrido en España.

Expectativas defraudadas y frustración

La hipótesis que este trabajo formula es que la importante caída en los ingresos que experimentaron las generaciones más jóvenes en los años anteriores a 2019, especialmente los menores de 30 años, es un factor de primer orden para explicar la revuelta. Postulamos esta hipótesis a la luz del rol que juegan las expectativas defraudadas en impulsar la frustración, y esto último en ser el motor que explicaría la emergencia de la revuelta.

En lo que sigue se explica cómo la frustración surge a partir de un desajuste entre expectativas y satisfacción, y por qué dicha frustración podría haber sido más intensa bajo las condiciones culturales y socioeconómicas del Chile de 2019. Finalmente, abordamos por qué esta frustración pudo ser aún mayor para quienes cursaron estudios de educación superior.

James Davies, un teórico de la revolución, explica que las revoluciones advienen cuando un periodo prolongado de prosperidad socioeconómica es seguido abruptamente por un cambio drástico en la tendencia, mientras que las expectativas de las personas continúan creciendo. Según Davies (1962), en estas circunstancias, “la gente teme subjetivamente que el terreno ganado con gran esfuerzo se perderá por completo, y su estado de ánimo se vuelve revolucionario”. Es lo que ocurrió en Chile con las generaciones que vieron caer su ingreso respecto a las precedentes, especialmente si habían visto que durante 25 años (1964-1989), cada generación venía incrementando sus ingresos con respecto a las anteriores, lo cual posiblemente generó expectativas de que continuaría esta tendencia¹². Apenas comenzaron a experimentar que dicha mejora no se estaba materializando, y más bien estaba empeorando, comenzaron a sentir frustración a partir de dicho desajuste.

El impacto emocional de las expectativas no cumplidas por el deterioro de la situación económica tiene una dimensión adicional debido a que las generaciones jóvenes se criaron en una cultura meritocrática, por lo que viven con mucha fuerza la frustración de que, habiendo hecho todo “bien”, no hayan recibido el premio al que aspiraban y creían merecer. Dentro de una cultura meritocrática, tener un mal resultado se percibe como una “falta de méritos”, lo que genera un sentimiento de injusticia respecto del propio sistema de

¹² La teoría de la frustración afirma que las personas realizan un proceso interpersonal de comparación de los resultados que obtienen, que se conoce como privación relativa. Lo anterior explica que la posibilidad de experimentar frustración no depende de las condiciones materiales absolutas de una persona, sino de cómo estas condiciones se comparan con aquellas que han alcanzado el tipo de individuos que para ellos son relevantes (Smith et al., 2012).

movilidad social¹³. Como se ve más abajo, un trabajo de Cox (2024) demuestra a través de encuestas que esto fue así.

Las generaciones para las cuales los ingresos no caen, pero sí atenúan su crecimiento, también sufren de frustración. Aquí opera la “paradoja de Tocqueville”: “Las sociedades (...) se sienten más incómodas y frustradas cuando mejor están” (De Tocqueville, 1856). Esta intuición es útil porque explica cómo puede ocurrir una rebelión aun cuando las cosas estén mejorando. Llama a estar atentos a las expectativas que una mejora en la condición de vida puede despertar. Además, podría explicar por qué existe la “trampa del ingreso medio”, ya que nos ofrece una hipótesis al respecto; que -vamos a exagerar un poco- en la ruta entre problemas 0% solucionados (país pobre) a problemas 100% solucionados (país rico) un mal manejo de las expectativas puede llevar a un país a extraviar el camino dando lugar justamente a la trampa del ingreso medio. Esto se daría, por ejemplo, al llegar a un 50% de solución. ¿La población va a poner el énfasis en el progreso entre 0 y 50, o en que aún no se llegó a 100? Dependiendo de las expectativas esto puede ser visto como un fracaso y no como un logro. Puede suceder en un país que se estanca en 50% de resolución de los problemas, habiendo despertado las expectativas de que serían resueltos en su totalidad. En este dilema se encuentra Chile hoy: despertó expectativas, y no las cumplió.

Finalmente, como vimos, la caída en los ingresos fue especialmente fuerte en el caso de aquellas generaciones jóvenes con educación terciaria. La educación ha sido siempre vista como el mecanismo de movilidad social por excelencia. Y aún más la educación terciaria. En Chile, un 81% de las personas cree que la educación superior permite

¹³ En un contexto más igualitario y meritocrático, cualquier reducción en las posibilidades de ascenso socioeconómico provoca una mayor insatisfacción que en un contexto más desigual y menos meritocrático. Esto lo ilustran Stouffer et al. (1949) con el caso de los distintos sistemas de promoción que existen en instituciones militares.

a las personas tener una mejor vida que sus padres (CEP, 2017). Sin embargo, dicho alto grado de expectativas implica que, cuando la realidad se revela como insuficiente, la frustración también sea amplificada. Según Loreto Cox (2024), en Chile un 65% de los graduados en su primer año ganaba menos de lo que esperaba al momento de haber finalizado sus estudios.

Dicho trabajo también provee información acerca de las implicancias ideológicas y políticas que tienen las expectativas insatisfechas en el mercado laboral. En particular, encuentra que mientras mayor es la brecha entre expectativas y resultados salariales, más tienden las personas a echarle la culpa al sistema, a rechazar que el sistema sea efectivamente meritocrático. Además, Cox (2024) encuentra que el resultado es asimétrico, con un efecto mucho más fuerte sobre la ideología cuando se defraudan las expectativas que cuando se sobre cumplen¹⁴.

Reflexión final

Se ha aportado evidencia de que hay un importante deterioro de los ingresos de las generaciones más jóvenes (a nivel global ello ocurre desde los nacidos en 1989 en adelante, pero para algunos niveles educativos parte un poco antes). Este deterioro puede haber sido una causa importante de la revuelta de 2019 en Chile. Dicho deterioro tiene entre sus causas la caída en la tasa de crecimiento de la economía y el fuerte aumento de la migración de jóvenes, pero seguramente hay otras.

La frustración ante expectativas no cumplidas tiene que haber jugado un rol importante en el descontento o malestar que sentía la

¹⁴ En línea con el sesgo de aversión a las pérdidas (loss aversion) descrito por Kahneman y Tversky.

población, y en particular los jóvenes. Esto tiene que ver con el sostenido deterioro del crecimiento económico que dividió a Chile según tramos etarios, siendo los tramos etarios más viejos los que disfrutaron sorpresas positivas respecto de sus expectativas, en tanto que los tramos más jóvenes sufrieron sorpresas negativas respecto de ellas. A su vez, hay algo particularmente doloroso para las generaciones menos afortunadas, cuando no se cumplen las expectativas en una sociedad con valores meritocráticos. A los que les va mal en un esquema meritocrático es a quienes no tienen suficientes méritos, pero muchos sintieron que sí habían hecho los méritos correspondientes. Como con la caída del crecimiento los perdedores eran más que los ganadores, esto llevó a cuestionar primero y a deslegitimar después, el esquema meritocrático.

La contribución principal del trabajo es identificar una causa de la revuelta potencialmente clave: la importante desilusión de las expectativas económicas de los más jóvenes que contrasta fuertemente con lo que ocurrió para muchas generaciones mayores.

REFERENCIAS

Banco Central de Chile. (2018). “Mercado laboral: hechos estilizados e implicancias macro”.

Barrero, A., Fuentes, M., & Mena, J. (2018). “Formalidad y brechas de ingresos en el mercado laboral chileno”. *Economía Chilena*, Banco Central de Chile, 21(2), 108-127.

CADEM. (2019). *El Chile que viene*.

CEP. (2017). *Estudio nacional de opinión pública N°80, julio-agosto 2017*. Centro de Estudios Públicos.

Cherkaoui, M. (2019 [2003]). “El Estado y la revolución: lógica del poder monopolista y mecanismos sociales en el Antiguo Régimen y la Revolución

Capítulo 1: La Chispa

de Tocqueville”. En Guellec, L (comp.), (2019). *Tocqueville y el Espíritu de la Democracia (337-358)*. Fondo de Cultura Económica y Universidad Adolfo Ibáñez.

Cox, L., González, R., & Le Foulon, C. (2024). “The 2019 Chilean social upheaval: A descriptive approach”. *Journal of Politics in Latin America*, 16(1), 68-89.

Cox, L. (2024). “Great expectations: The effect of unmet labor market expectations after higher education on ideology”. *American Journal of Political Science*.

Davies, J. (1962). “Towards a Theory of Revolution”. *American Sociological Review*, 6: 5-19.

De Tocqueville, A. (1856). *The Old Regime and the Revolution*, traducido por John Bonner. NY: HARPER & BROTHERS, PUBLISHERS.

Deaton, A. (1997). *The analysis of household surveys: A microeconomic approach to development policy*. World Bank Publications.

González, R. (Ed.). (2017). *¿Malestar en Chile?* Centro de Estudios Públicos (CEP).

González, S., & Huneeus, C. (2016). *Dinámica laboral en Chile 2009-2015*. Ministerio de Trabajo.

Ortúzar, P. (2024). *Sueños de cartón*. Taurus.

Parro, F., & Reyes, L. (2019). “Economic growth and the Chilean labor market”. *Economía Chilena*, Banco Central de Chile, 22(2), 70-95.

Peña, C. (2020). *Pensar el malestar*. Taurus.

Sapelli, C. (2005). “Returns to schooling and income distribution by cohort in Chile: An analysis based on synthetic panel data”. Documento de Trabajo 290. Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile.

_____. (2009). “Los retornos a la educación en Chile: Estimaciones por corte transversal y por cohortes”. Documento de Trabajo PUC, 349, 1-77.

_____. (2011). “A cohort analysis of the income distribution in Chile”. *Estudios de Economía*, 38(1), 223-242.

_____. (2016). Chile ¿Más equitativo? Ediciones UC.

_____. (2022). "Deteriorating outcomes for the young cohorts in Spain: Trends and possible explanations".

Smith, Heather J., Thomas F. Pettigrew, Gina M. Pippin, y Silvana Bialosiewicz. (2012). "Relative Deprivation: A Theoretical and Meta-Analytic Review". *Personality and Social Psychology Review* 16(3): 203-32.

Stouffer, S., Suchman, E., & DeVinney, L. (1949). *The American Soldier*. Princeton: Princeton Univeristy Press.

EL FUROR

GRUPOS, MERITOCRACIA Y LAS MOVILIZACIONES DE OCTUBRE

Por Miguel Ángel Fernández y María José del Solar

Resumen

El fenómeno de las movilizaciones de octubre de 2019 en Chile ha sido objeto de numerosas interpretaciones y análisis. La narrativa pública dominante sostuvo que la multitud congregada alrededor de Plaza Italia era una radiografía cuasi perfecta del estado de la sociedad nacional, estableciendo lo que denominamos la hipótesis de la “universalidad del malestar”. Este estudio propone un enfoque que pone a prueba dicho argumento, basado en un análisis empírico que busca entender las diferencias entre quienes participaron en las movilizaciones y quienes no lo hicieron. Los resultados evidencian que una amplia mayoría de la población (79%) no fue parte de las manifestaciones octubristas y sugieren un perfil probabilístico de quiénes presentaban mayor latencia de participación en los eventos de protesta. Así, el análisis invita a considerar que las movilizaciones de octubre de 2019 no fueron simplemente una radiografía del malestar universal. Más bien, surgieron como resultado de un proceso influenciado por la ralentización de oportunidades económicas y el desencanto con las expectativas meritocráticas en un grupo específico de la población.

Introducción

Tal como sostiene Meyer (2004), los movimientos de protesta hacen historia: Era 25 de octubre de 2019 y un millón doscientas mil personas se congregan alrededor de Plaza Italia en Santiago para manifestarse. El número marcó titulares y se convirtió en una de las piedras sagradas para el análisis sobre la historia, contingencia y futuro del país. Entre manifestaciones, olas de violencia, comentarios mediáticos y el rol de agentes políticos, se construyó una narrativa que buscó explicar lo que ocurría en las calles y que millones de personas observaban a través de medios de comunicación y redes sociales. Incluso hoy, es común que dichas narrativas sean utilizadas por representantes, analistas y comentaristas como punto de partida para justificar sus decisiones, posiciones de política pública y como premisa inicial de prácticamente cualquier análisis.

Un buen ejemplo de la instalación de la narrativa pública dominante se encuentra en la frase “no fueron 30 pesos, fueron 30 años”, la cual sostenía un estado de descontento generalizado con el camino que el país había tomado. Esta suerte de "furor" instalado, es decir, una afición o enamoramiento ciego de individuos por lo que fue el octubre chileno es fuente inagotable de interpretaciones.

La masiva convocatoria y el furor que generó en la narrativa que se instaló en nuestra sociedad se plantea, usualmente, sobre la base de una premisa de pretensión universal: la manifestación es una cuasi-perfecta radiografía del estado del país y una verdad revelada de un malestar generalizado frente al estado de las bases del sistema social que nos rige. A la interpretación recién presentada la denominamos hipótesis de la "universalidad del malestar"¹⁵.

¹⁵ Buscamos ilustrar en esta hipótesis la posición dominante en medios, artículos académicos y narrativas que vinculan – casi indisolublemente – a quienes se manifestaron

Por eso, y cinco años después, quizás es hora de un análisis distinto -- algo más alejado de las pasiones del momento y de los carteles que invadieron redes sociales, calles y programas de opinión. Una primera constatación que pondría en riesgo la hipótesis de la universalidad del malestar se encuentra en que, en una ciudad de casi 8 millones de personas, la convocatoria a la manifestación más intensa de las últimas décadas representa un 15,1% de la población de la metrópolis¹⁶. Para quien crea en el argumento universalista, este número contrasta brutalmente con su línea argumentativa. Y a pesar de las críticas que puede levantar este ejercicio -- pues algunos responderán que la acción no es sinónimo de adhesión (y justa razón tienen) -- se hace necesario partir desde una base provocativa para hacer mención de que uno de los mayores desafíos en fenómenos sociales de gran impacto es operar bajo el posible sesgo de respuesta social (Adida et al., 2019).

Este sesgo opera en diferentes aspectos, y así como los individuos suelen declarar en tasas mayores su participación en elecciones (Epstein, 2006), también es plausible sostener que el apoyo a ciertas acciones que se perciben como masivas o generales podría aumentar la propensión del individuo a declarar su apoyo en momentos de alta convulsión, sin necesariamente significar que están lo suficientemente de acuerdo con ellas como para participar.

Para evitar caer en lo anterior, en este trabajo tomamos dos decisiones metodológicas que permiten transparencia y replicabilidad: estudiar la acción política individual (no la declaración de apoyo) y construir el

con la población general, como consecuencia del descontento político y socioeconómico con el modelo neoliberal (Somma, 2017; Somma et al., 2020).

¹⁶ Como referencia, inclusive durante las elecciones presidenciales con menor tasa de participación, alrededor del 50% de la población de la región (y el país) salieron de sus casas para emitir su preferencia electoral. Por ello, en sistemas democráticos es inviable sostener que una manifestación -- por lo masiva que sea -- pueda reflejar una imagen general de la sociedad.

estado latente de los mismos (no directamente su auto-reporte). El argumento anterior se basa en la premisa de que no es posible establecer a priori que quienes se manifestaron representan a la población del país, como así tampoco establecer que los eventos del octubre chileno son un fenómeno de la misma naturaleza que otros tipos de participación política existentes en la historia reciente del país. En otras palabras, iniciamos nuestro análisis desde un punto de sano escepticismo científico.

El argumento central de nuestra reflexión se basa en comprender el octubre chileno descomponiéndolo en diferentes fenómenos y tomando la decisión de analizar lo que fueron las manifestaciones. En el caso de estas, teorizamos que los altos niveles de violencia experimentados a partir del viernes 18 de octubre incrementaron los niveles de ansiedad de quienes habitan el país. A raíz de ello, los sujetos buscaron información al respecto y al verse expuestos a ella -- donde, por supuesto, opera la lógica de autoselección y caja de resonancia -- se gatillaron predisposiciones políticas y psicológicas que dividieron las aguas entre manifestantes y no manifestantes. De esta forma, basamos nuestra exploración empírica en la idea de que existen diferencias sustanciales entre quienes fueron parte de las movilizaciones acontecidas a partir de octubre de 2019 y quienes no.

Con el objetivo de poner a prueba la hipótesis anterior, se utilizaron datos recolectados por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, a través del Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) entre 2016 y 2022, para construir una categoría latente que clasifique a individuos en manifestantes y no manifestantes. La encuesta ELSOC permite seguir a los mismos individuos a lo largo del tiempo, y así observar los cambios de los sujetos antes y después del evento, exhibir sus opiniones, percepciones y características. Los resultados son consistentes con nuestro enfoque, subrayando las diferencias ideológicas, demográficas y de opinión existentes entre grupos. Ellas

debilitan la hipótesis de la universalidad del malestar y arrojan evidencia que apuntaría en la dirección de que el decaimiento de la economía chilena y el desapego al canon meritocrático forman parte de los factores relevantes para comprender las movilizaciones del octubre chileno.

Cuatro elementos centrales son la base para este análisis. Primero, la clasificación de quienes respondieron a las distintas olas de ELSOC en cuatro categorías (manifestantes habituales, manifestantes no octubristas, manifestantes nuevos y nunca manifestantes). Segundo, el apego o creencia de dichos grupos a lo que llamaremos el canon meritocrático, es decir, un alto nivel de acuerdo con la noción de que el esfuerzo y la inteligencia dan recompensas en la vida. Tercero, las características demográficas y políticas de los individuos que componen cada categoría. Por último, la descripción de las características de diferentes cohortes generacionales en los atributos antes mencionados.

Reconstruyendo al manifestante octubrista

Para analizar el perfil del manifestante octubrista se llevó a cabo un análisis en dos etapas. En primer lugar, se utilizó un modelo de clase latente¹⁷ (LCA por sus siglas en inglés) para clasificar a los individuos entre manifestantes y no manifestantes a partir de las respuestas que declararon en las preguntas sobre frecuencia de participación en marchas y manifestaciones y sobre disposición a la participación en diferentes movimientos sociales. En ambos casos, se aprovechó la

¹⁷ Un análisis de clase latente es una técnica estadística que permite identificar subgrupos no observables directamente dentro de una población. Ello, en función de las respuestas a múltiples variables observadas. Esto permite identificar patrones de respuesta, disminuir la complejidad de agrupar individuos y poseer una clasificación robusta y excluyente. Para más detalles sobre el modelo, consultar el texto de Vermunt y Magidson (2004).

escala ordinal implementada por ELSOC para identificar subgrupos dentro de una población a través de la estrategia LCA, a fin de entender mejor las relaciones entre dichas categorías y una serie de variables de interés. Este procedimiento se realizó en la muestra sin atrición para el período 2016-2022 (5 olas del estudio longitudinal), con un total de observaciones de 1280 casos (1180 válidos para el modelo estadístico), implementando el ponderador longitudinal incorporado en la base de datos en todos los análisis aquí presentados.

Gracias a esta clasificación transversal de las observaciones longitudinales, se logró reconstruir una categoría de manifestantes mediante un cruce entre la clasificación de 2016 y 2019. Esta arrojó cuatro categorías posibles: (a) *Nunca manifestantes*, siendo estos individuos que no presentan latencia de manifestación ni en 2016 ni en 2019; (b) *Manifestantes habituales*, siendo estos sujetos aquellos que tienen una propensión constante a manifestarse tanto en 2016 como en 2019; (c) *Manifestantes nuevos*, siendo dichas personas quienes no eran parte de movimientos o manifestantes en 2016 pero sí se involucraron en las de 2019; (d) *Manifestantes no octubristas*, siendo dichos individuos que participaron de movimientos y manifestaciones en 2016 pero no en 2019. Una nota de advertencia aquí es necesaria, tal como sostiene Vassallo (2018), la operacionalización de la protesta es un desafío en sí mismo e incluso hoy, la forma de medirlo y clasificarlo es fuente de discusión y debate en las ciencias sociales.

Ya con la clasificación latente realizada y la construcción longitudinal de categorías, resulta interesante observar las variaciones entre diferentes años. La Figura 2-1 exhibe el estado de las transiciones entre las observaciones de las olas de 2016, 2019 y 2022. El resultado exhibe distintos grupos que revisten interés para el análisis. En primer lugar, la mayor proporción de los encuestados queda clasificada en el grupo "no manifestante" en 2019, representando un 79% del total de

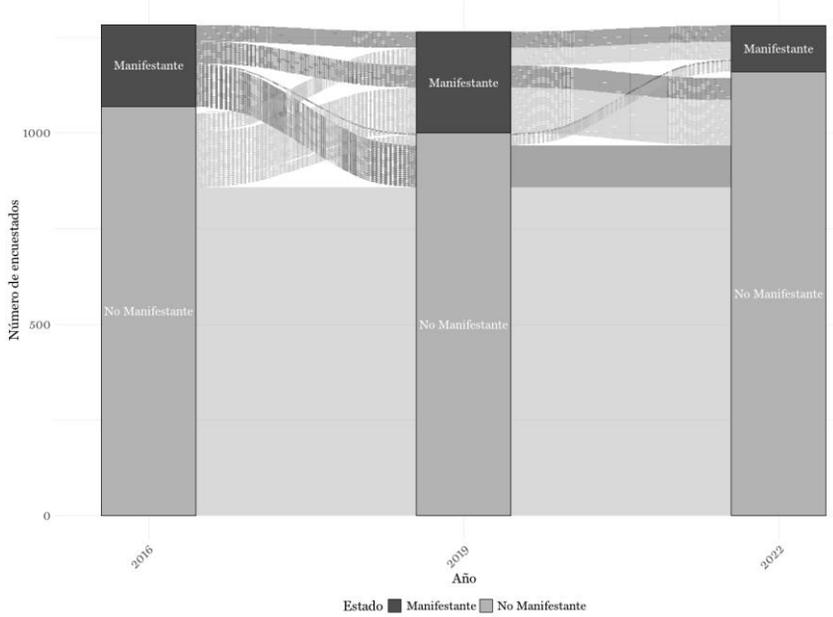
la población encuestada. Este dato es aún más relevante al mirar las transiciones durante los distintos años de corte, en donde es posible observar cómo quienes se movilizaron en 2019 provienen de dos corrientes que se unieron, los nuevos manifestantes (13%) y quienes usualmente utilizan repertorios de protesta y marcha como forma de acción política (8%).

Lo anterior entrega tres aprendizajes a destacar. En primera instancia, existe un grupo de encuestados (8% de la muestra) que, independiente del contexto, suelen emplear repertorios no convencionales (fuera de, por ejemplo, votar o participar en partidos políticos) para participar en la vida pública. Ello significa que, aproximadamente, un 38% de quienes recorrieron las calles en octubre de 2019 provenían de movimientos y grupos con experiencia en manifestaciones, dejando en entredicho la idea -- sostenida por autores como Somma y Bargsted (2020) -- de que las organizaciones de movimientos sociales habían jugado un rol marginal durante las protestas.

Segundo, la mayor parte de los encuestados no presenta latencia manifestante en ninguno de los años explorados, reforzando la noción de que las manifestaciones fueron un fenómeno masivo, pero no de ninguna forma mayoritario. Tercero, la movilización de nuevos individuos representa la mayor parte del conjunto de manifestantes, pero de ellos existe un grupo que, participando de las protestas de 2019, no mantuvo esa propensión en años posteriores¹⁸.

¹⁸ La cantidad de observaciones de esta naturaleza, que revisten especial interés pues podrían ser un grupo de manifestantes “arrepentidos”, no son suficientes como para hacer análisis independientes. En vista de aquello, no serán considerados en los ejercicios estadísticos incorporados en este trabajo.

Figura 2-1: Transiciones de estado manifestantes en Chile, 2016 – 2019 – 2022.



Nota: Elaboración propia con datos ELSOC 2023

En vista de lo anterior, resulta aún más relevante observar las razones detrás de quienes se manifestaron durante octubre de 2019. Si la tesis de la universalidad del malestar tiene evidencia a favor, las diferencias entre manifestantes y no manifestantes deberían ser casi inexistentes en el momento previo a los acontecimientos de 2019 (es decir, en el año 2016). En cambio, si existen diferencias sustanciales en los grupos en los años previos al octubre chileno, podría ocurrir que dichos contrastes se exhiban antes (2016), durante (2019) o con posterioridad (2022) a los eventos octubristas. En caso de presentarse previamente y tender a desaparecer en las olas posteriores, estaríamos frente a una hipótesis de activación de predisposiciones políticas y psicológicas como mecanismo explicativo de las movilizaciones. Si dichos grupos son estadísticamente distintos a los de no manifestantes (o manifestantes no octubristas), entonces existiría

evidencia a favor de la idea de que la hipótesis de la universalidad del malestar fue más una construcción narrativa-mediática que un estado general del país.

Ansiedad, movilización y la expectativa meritocrática

¿Cuál es el motor que lleva a las personas a manifestarse? La literatura ha establecido diferentes hipótesis que nos ayudan a comprender las motivaciones de quienes deciden utilizar métodos no convencionales de participación política (Opp, 1989; Stekelenburg y Klandermans, 2013). En un panorama general, se suele establecer que son la ideología, la identidad con un grupo, la instrumentalidad (necesidades y la sensación de eficacia en su respuesta), y la ira los principales catalizadores que motivan a los individuos a participar en instancias de protesta (Van Stekelenburg, Klandermans y Van Dijk, 2011). En ese sentido, los movimientos de manifestación cumplen la función de transformar las necesidades individuales y emociones en actos colectivos (Van Troost, Van Stekelenburg y Klandermans, 2013).

En el contexto del octubre chileno, la respuesta a la interrogante anterior se ha presentado usualmente como el producto del descontento generalizado con el modelo neoliberal (Somma et al., 2020; Jiménez-Yañez, 2021) o la conjunción de una serie de crisis de participación, eficacia y respuesta del sistema democrático (Morales Quiroga, 2020; Bellolio, 2020). Por lo anterior, un análisis desde los individuos es de mayor relevancia. El mecanismo que habría generado que diferentes grupos de chilenos decidieran activarse políticamente a través de movilizaciones puede estar generado por múltiples motivaciones y gatillos. En breve, una posible línea de argumentación teórica establecería que los actos de violencia descontrolada que se vivieron el 18 de octubre de 2019 produjeron un alza en los niveles de ansiedad de la población, incrementando la exposición de los chilenos

a noticias e información en medios y redes sociales (Wagner y Morisi, 2019). Ello, los habría involucrado en un entorno mediático donde el mensaje principal de desilusión y fastidio con el estado del sistema chileno conllevaba el cuestionamiento a un elemento central de la sociedad nacional: las expectativas frente al canon meritocrático.

Por este último se entiende el sistema social en el cual el avance social es posible con base en méritos personales (esfuerzo, inteligencia, entre otros) y no como resultado de elementos adscritos a la familia, riqueza intergeneracional o bagaje social (Kim y Choi, 2017). De esta forma, grupos de chilenos que tenían mayor apego a este ideal previo al período octubrista deberían tender a presentar menor propensión a manifestarse en 2019, pues, de alguna u otra forma, no aceptaron como verdad absoluta el furor octubrista.

Si bien no poseemos acceso a los datos necesarios para poner a prueba el efecto de la ansiedad e incremento de información, sí existen registros que nos permiten observar si sujetos con características tales como menor creencia en que el esfuerzo y la inteligencia se recompensan en la vida (canon meritocrático), menores niveles de satisfacción con su vida y mayor adhesión a identidades políticas de izquierda tendrían mayores niveles de propensión a manifestarse que otros.

En ese sentido, teorizamos de que si un individuo transformó la ansiedad causada por los eventos violentos del 18 de octubre en mayores niveles de atención política, y la información que allí recogió reforzaba predisposiciones existentes tales como ideología, mayores niveles de insatisfacción personal o percepciones que venían incubándose en su interior en relación con el canon meritocrático nacional, entonces deberíamos observar que también serán individuos que presentarán mayores probabilidades de movilización latente (tanto habituales como en el contexto del octubre chileno).

Para poner a prueba lo anterior, construimos un modelo logístico multinomial donde la clasificación latente de manifestantes es la variable dependiente. Para los factores independientes se incorporaron una serie de características demográficas (edad, escolaridad, religión, género, estudiante) y cuatro variables que creemos teóricamente son fundamentales para comprender el fenómeno de movilización de 2019 desde una perspectiva cuantitativa; estas incluyen¹⁹ ideología política reportada (izquierda, centro, derecha e independientes), satisfacción con la democracia (no satisfecho versus satisfecho), satisfacción con la vida (desde totalmente insatisfecho hasta totalmente satisfecho) y nivel de acuerdo con la expectativa del canon meritocrático (escala de 9 niveles construida a partir de la suma de preguntas sobre grado de acuerdo con que el esfuerzo/inteligencia son recompensadas en la vida²⁰).

Los resultados del modelo de participación latente muestran tendencias claras, (ver Cuadro 2-1), pues de los dos grupos que compusieron quienes se movilaron durante el octubre chileno (Manifestantes habituales y Manifestantes octubristas) existen importantes similitudes. Así, son personas con mayor probabilidad de

¹⁹ Aquí una breve descripción del proceso de depuración de las variables: ideología basada en escala de 1 a 10, donde izquierda es 1 a 4, centro 5 y 6 y derecha 7 a 10; satisfacción con la democracia basada en escala de 1 a 5, donde 1 a 3 es insatisfecho y 4 y 5 satisfecho; satisfacción con la vida basada en escala de 1 a 5 donde 1 a 3 es insatisfecho y 4 y 5 satisfecho; expectativa del canon meritocrático basada en la sumatoria de dos escala de 1 a 5 (para la versión binaria se utilizó como alto apego respuestas de 7 a 10 puntos en la sumatoria). La variable *edad* se basa en respuestas de edad simple, *estudiante* hace relación al estatus del individuo como estudiante (1) o no estudiante (0), y *escolaridad* representa los años de educación formal del individuo.

²⁰ A través del método de Spearman, nos percatamos del alto grado de correlación entre las preguntas sobre recompensa en la vida gracias a esfuerzo e inteligencia (0,7 con significancia estadística al 1%). Por ello, y así evitar problemas de colinealidad, decidimos implementar una escala de canon meritocrático en base a la sumatoria simple de las respuestas. Cuando utilizamos la escala binaria, tomamos la decisión de dividir a quienes tienen algo nivel de adhesión por el canon meritocrático cuando el individuo responde al menos una de las preguntas en un alto nivel de acuerdo y la segunda en al menos un nivel de acuerdo regular.

ser parte de los grupos que marcharon en 2019 las personas más jóvenes (grupo de 18 a 29 años), identificadas principalmente con posiciones políticas de izquierda, y con menor creencia en que la inteligencia o el esfuerzo son motores de éxito en la vida.

Ello resulta especialmente relevante como respuesta a una de las aproximaciones actuales a la sombra octubrista: la existencia de un malestar profundo que sigue recorriendo las venas nacionales y que puede causar un evento de naturaleza similar al experimentado en 2019. De ser esta última consideración cierta, las variables que explican la latencia de manifestaciones mantendrían niveles nulos (o al menos bajos) de variación en el tiempo.

Para explorar lo anterior, hacemos un seguimiento a algunas variables relevantes comparando los puntos de 2016, 2019 y 2022. A fin de simplificar la exposición de los resultados, aquí dividimos a los individuos en dos grupos: manifestantes octubristas (la suma de los manifestantes habituales y nuevos, quienes representan un 21% del total de observaciones válidas) en contraste con los no manifestantes (la suma de manifestantes no octubristas y los nunca manifestantes, quienes representan un 79% de las observaciones válidas). La Figura 2-2 exhibe la visualización de resultados con base en dichos grupos para cuatro variables de especial interés (Apego al canon meritocrático, Satisfacción con la vida, Satisfacción con la democracia y Autoidentificación política con sectores de izquierda).

Cuadro 2-1: Modelo Multinomial²¹ Manifestaciones (referencia es “Nunca Manifestante” y variables corresponden a mediciones 2018)

Variable	Manifestante Habitual	Manifestante No Octubristas	Manifestante Nuevo
Escala Meritocracia	0,803 (0,06)***	0,904 (0,06)	0,788 (0,06)***
Sat. con la Vida	0,786 (0,13)*	0,908 (0,14)	0,665 (0,11)***
Sat. con Democ.	0,643 (0,23)	0,945 (0,23)	1,036 (0,2)
Ident. Política (ref. Ninguna)			
<i>Izquierda</i>	5,726 (0,35)***	1,649 (0,36)	7,116 (0,32)***
<i>Centro</i>	2,003 (0,35)**	1,426 (0,34)	2,674 (0,32)***
<i>Derecha</i>	0,258 (0,48)***	1,086 (0,35)	1,479 (0,35)
Edad	0,936 (0,01)***	0,986 (0,01)*	0,921 (0,01)***
Mujer	1,331 (0,23)	0,921 (0,22)	0,854 (0,19)
Escolaridad	1,628 (0,05)***	1,394 (0,05)***	1,241 (0,04)***
Estudiante	2,74 (0,37)***	0,916 (0,52)	1,363 (0,36)
Religión (ref. Ninguna)			
<i>Católica</i>	0,532 (0,26)**	1,046 (0,25)	1,76 (0,22)**
<i>Evangélica</i>	0,35 (0,38)***	1,27 (0,32)	0,663 (0,3)
Intercepto	0,036 (1,02)***	0,009 (0,97)***	3,486 (0,88)
No. Obs.	1180		

Nota: Odd Ratio reportados, error estándar entre paréntesis. Significancia bajo regla * ≤ 0.1 , ** ≤ 0.05 , *** ≤ 0.001

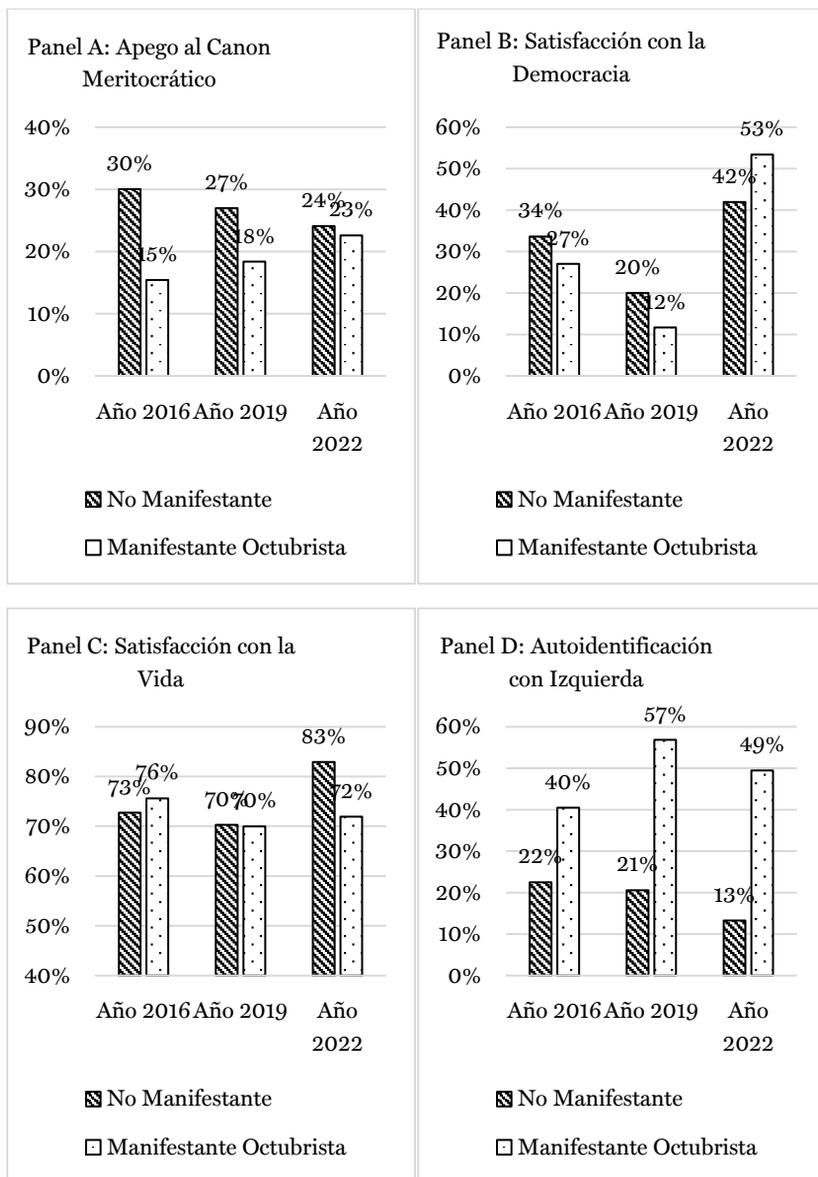
²¹ Para probar la robustez de los modelos, se construyeron ejercicios multivariados a través de regresiones logísticas (separados en diferentes grupos). En todos los análisis, los resultados arrojaron coeficientes e impactos estadísticamente similares.

Los resultados son consistentes con lo que hemos propuesto en estas páginas y entregan una mirada más exhaustiva sobre el perfil de quienes se manifestaron y los caminos que recorrieron a partir de las movilizaciones acontecidas en 2019. En primer lugar (ver Figura 2-2, Panel A), los no manifestantes presentaban tasas muy superiores a los octubristas en relación con el canon meritocrático (específicamente, el doble); si bien la diferencia se redujo a partir de 2019, resulta interesante observar que el grupo que sí concurrió a las calles experimentó un incremento tres años después de los eventos en que participó. Lamentablemente, existe la posibilidad de que la pandemia haya afectado estos indicadores, por lo que su interpretación debe tomarse con cuidado.

Los resultados que exhibe la Figura 2-2, Panel B deben ser tomados con especial atención. El grupo de manifestantes octubristas presentó durante 2016 y 2019 menores niveles de satisfacción con la democracia que quienes no marcharon. Ahora bien, la caída en el período es de similar magnitud para ambos grupos (ilustrando el estado caótico institucional que vivió Chile). A pesar de ello, resulta interesante que tres años después los niveles son incluso superiores a los observados en 2016 y, en el grupo de manifestantes octubristas, incluso mayores a los que no se manifestaron. Hitos políticos como el triunfo de Gabriel Boric podrían explicar esta situación²².

²² Evidencia apunta a que cuando un candidato triunfa en elecciones, sus seguidores y votantes experimentan un alza en sus niveles reportados de satisfacción con la democracia (Conroy-Krutz y Ken 2015). Siguiendo las respuestas reportadas de votación en la base de datos trabajada, un 79% de los manifestantes octubristas habrían apoyado a Gabriel Boric en segunda vuelta.

Figura 2-2: Evolución Manifestantes Octubristas versus No Manifestantes 2016-2019 y 2022



Nota: Elaboración propia con datos ELSOC 2023.

En cuanto a satisfacción con la vida (ver Figura 2-2, Panel C), resulta interesante observar que las menores diferencias previas a octubre desaparecieron entre ambos grupos en 2019, pero el efecto exhibido hacia 2022 es de una alta diferencia. Así, sujetos que marcharon presentan las tasas 13 puntos inferiores a quienes no lo hicieron, mostrando -- quizás -- otro nuevo elemento que lleve a pensar en la tesis de la frustración.

Un último punto que queremos destacar es el impacto en la autoidentificación ideológica (ver Figura 2-2, Panel D). Resulta interesante ver la trayectoria inversa que siguen no manifestantes y manifestantes octubristas. Mientras el primer grupo ve disminuido el porcentaje de personas identificadas con sectores de izquierda progresivamente en el período 2016-2022, el segundo presenta un incremento del 43% entre 2016 y 2019, con una posterior estabilización para 2022. Es factible sostener que el octubre chileno polarizó las posiciones de los chilenos y que la adhesión al movimiento octubrista trajo como resultado la activación de identidades políticas. Es más, en este punto vale la pena mencionar que, así como entre 2019 y 2022 existió una disminución de los individuos que se autoidentificaban con la izquierda y que participaron de las manifestaciones de octubre, también existió un incremento en el reporte de cercanía con las posiciones de derecha entre el grupo (de 9% a 19%).

Crecimiento, generaciones y manifestaciones.

Con los resultados anteriores, una nueva interrogante surge: ¿qué produjo mayores o menores niveles de creencia en el canon meritocrático chileno, satisfacción con la democracia o satisfacción con la vida personal? En línea con el argumento presentado por Sapelli y Órdenes en la reflexión anterior, -- donde se plantea la

hipótesis de que es la ralentización de la economía chilena y el quiebre entre expectativa y realidad de retorno económico de la educación lo que habría sido la chispa que movilizó a un importante grupo de chilenos -- hemos realizado un análisis de las principales variables observadas en el apartado anterior a partir de las cuatro cohortes de encuestados²³.

De ser consistente la hipótesis de Sapelli y Órdenes con nuestros resultados, deberíamos encontrar diferencias estadísticamente significativas a nivel de latencia de manifestaciones y en variables independientes como las observadas en la sección anterior. Todo ello a través de las cohortes de individuos con diferentes trayectorias de ingresos. El Cuadro 2-2 exhibe la participación en los distintos grupos de manifestantes por cohorte generacional. De estos, llaman la atención algunos elementos descriptivos. Cuando se observa la composición generacional de los manifestantes octubristas, una proporción mayoritaria de quienes son parte de la generación estancada económicamente pertenecen al grupo latente de manifestantes de 2019. El siguiente grupo que contribuye en mayor proporción a dicho grupo son aquellos que nacieron en el grupo de chilenos que experimentaron el final de la era de crecimiento económico. Por el contrario, los no manifestantes tienen mayor presencia en las cohortes previas al auge económico nacional y aquellos que vivieron los beneficios de un sistema con altas tasas de crecimiento y retorno económico.

²³ Para mejor interpretación de los resultados, expandimos las categorías bases construidas empíricamente por Sapelli y Órdenes. Así, tenemos cuatro “generaciones”: Primero, una cohorte que experimentó el período “Pre-Crecimiento”, compuesta por sujetos nacidos entre los años 1927 y 1963. Segundo, la cohorte que vivió el estadio del “Crecimiento” en Chile, donde se incorporan individuos nacidos entre los años 1964 y 1981. Tercero, la cohorte que experimento el “Fin del Crecimiento”, donde se encontrarían individuos nacidos entre los años 1982 y 1988. Por último, la cohorte que convive con una economía estancada y retornos más bajos de educación terciaria, donde se encuentran los sujetos que nacieron entre 1989 y 2001.

Por consiguiente, es posible sostener que efectivamente una parte central de la masividad de lo acontecido en octubre de 2019 proviene desde cohortes generacionales que tendrían razones para sentirse frustradas como consecuencia de los bajos niveles de expansión de la economía chilena y las cada vez más complejas dinámicas del mercado laboral.

Cuadro 2-2: Tipos de Manifestantes por Cohorte Generacional

	Manifestantes Octubristas		No Manifestantes	
	Manifestante Habitual	Manifestante Nuevo	Manifestante No Octubrista	Nunca Manifestante
Pre-Crecimiento (1927-1963)	5%	6%	12%	77%
Crecimiento (1964-1981)	13%	19%	10%	58%
Fin-Crecimiento (1982-1988)	19%	23%	14%	43%
Estancamiento (1989-2001)	40%	30%	6%	25%

Nota: Elaboración propia con datos ELSOC 2023.

En un paso más allá de la preminencia de las cohortes que han convivido con un país creciendo en diferentes tasas, cuando observamos el apego al canon meritocrático entre los grupos que presentaron mayor y menor propensión para participar en las protestas de 2019 se ven diferencias de 8 puntos porcentuales previo a los eventos de octubre²⁴. Esta comparación de grupos también

²⁴ La comparación de grupos también muestra diferencias estadísticamente significativas en la autoidentificación con posiciones de izquierda y satisfacción con la democracia, que son coherentes con los análisis antes presentados. Sin embargo, resulta interesante que no presentan distancias substanciales en cuanto a la satisfacción promedio con su vida.

muestra diferencias estadísticamente significativas en la autoidentificación con posiciones de izquierda y satisfacción con la democracia, que son coherentes con los análisis antes presentados. Sin embargo, resulta interesante que no presentan distancias sustanciales en cuanto a la satisfacción con su vida que declaran antes del proceso de manifestaciones.

Superando la idea de un efecto de ciclo vital, como sería la hipótesis de que los más jóvenes siempre participan en mayor cuantía de movimientos de protesta, la evidencia aquí presentada nos lleva a considerar que son las expectativas de vida y el apego a la noción de que el esfuerzo y la inteligencia son recompensados parte fundamental del motor que llevó a grupos de chilenos a salir a las calles. Lo anterior refuerza dos ideas: en primer lugar, la tesis universal del descontento no condice con un análisis empírico que logre separar a los individuos entre manifestantes octubristas y no manifestantes; segundo, la forma en que los chilenos convivieron con los procesos de cambio económicos y sociales serían elementos fundamentales a la hora de comprender el fenómeno que atravesó el país hace cinco años.

Reflexión final

El furor de octubre tendría un grupo base que, a su vez, presenta un marcado perfil político y psicológico. Un grupo de individuos que experimentaron una sociedad con niveles menores de crecimiento y una restricción de oportunidades en comparación a las generaciones anteriores, que se sentían más cercanos a posiciones políticas de izquierda y que comulgaban en menor nivel con las ideas de meritocracia que sus pares consentían. A diferencia de lo que se instaló en la narrativa mayoritaria, esto no habría sido un sentimiento colectivo arraigado en la gran mayoría de los chilenos, sino más bien

concentrado en individuos con características basales similares que fueron gatilladas por los eventos que ocurrieron a partir del 18 de octubre de 2019.

En ese sentido, este ensayo buscó poner a prueba empíricamente la hipótesis de la universalidad del malestar; esa idea arraigada en ciertos analistas y académicos que establecían como mecanismo causal de las manifestaciones y el octubre chileno la estructura de lo que llaman el "modelo neoliberal" y que (aún) sostiene que ello es un evento generalizado en la población chilena. Los resultados encuentran evidencia en una dirección contraria a la de dicha posición dominante, dejando constancia de que, si bien las movilizaciones fueron un evento masivo, no representaron las percepciones, ideas y creencias de la mayoría de la población del país.

Adicionalmente, nuestros hallazgos dan luces sobre otros eventos relevantes. Primero, los manifestantes octubristas presentaban menores niveles de apego al canon meritocrático, es decir, creían en niveles más bajos en que el esfuerzo e inteligencia daban recompensas. Adicionalmente, eran individuos más jóvenes (18-29 años) que han crecido en un país estancado económicamente y en donde el retorno de la educación terciaria había caído.

Segundo, entre el grupo de manifestantes octubristas existió una importante activación de predisposiciones ideológicas. No solo aumentaron -- a nivel de grupo -- la autoidentificación con posiciones de izquierda a partir de 2019, sino también se observa un sorprendente incremento de quienes sienten cercanía a posiciones de derecha. Este último punto debe ser observado con mayor atención, pues podría estar mostrando señales de la polarización ciudadana o bien de un proceso de arrepentimiento y rechazo a lo que fue octubre de 2019.

En este último sentido, debemos terminar con una nota de precaución. Los datos disponibles permiten observar a los manifestantes y no manifestantes antes y después de los eventos de 2019, pero eventos como la pandemia y la serie de eventos electorales que ha experimentado Chile también podrían ser parte de la historia que nos relatan. Por ello, es necesario contrastar estos resultados con otras bases disponibles y seguir investigando qué ocurre con quienes participaron (y quienes no) en las protestas.

REFERENCIAS

- Adida, C., Gottlieb, J., Kramon, E., y McClendon, G. (2019). "Response bias in survey measures of voter behavior: Implications for measurement and inference". *Journal of Experimental Political Science*, 6 (3), pp. 192-198.
- Bellolio, C. (2020). "Populismo como democracia iliberal: Una hipótesis sobre el estallido social chileno". *Revista de Sociología*, 35 (1), pp. 43-55.
- Conroy-Krutz, J. y Kerr, N. (2015). "Dynamics of democratic satisfaction in transitional settings: Evidence from a panel study in Uganda". *Political Research Quarterly*, 68 (3), pp. 593-606.
- ELSOC-COES. (2023). "Chilean Longitudinal Social Survey". Harvard Dataverse.
- Epstein, W. (2006). "Response bias in opinion polls and American social welfare". *The Social Science Journal*, 43 (1), pp. 99-110.
- Jiménez-Yañez, C. "#Chiledespertó: causas del estallido social en Chile". *Revista Mexicana de Sociología*, 82 (4), pp. 949-957.
- Kim, C. y Choi, Y. (2017). "How meritocracy is defined today? Contemporary aspects of meritocracy". *Economics & Sociology*, 10 (1), pp. 112-121.
- Meyer, D. (2004). "Protest and political opportunities". *Annual Reviews of Sociology*, 30 (1), pp. 125-145.

Morales-Quiroga, M. (2020). “Estallido social en Chile 2019: Participación, representación, confianza institucional y escándalos públicos”. *Análisis Político*, 33 (98), pp. 3-25.

Opp, K.D. (1989). “The rationality of political protest”. Routledge Press.

Somma, N. (2017). “Discontent, collective protest, and social movements in Chile”. En A. Joignant, M. Morales y C. Fuentes (Eds.), *Malaise in representation in Latin American Countries* (pp. 47-68). Palgrave MacMillan.

Somma, N., Bargsted, M., Disi, R., y Medel, R. (2020). “No water in the oasis: the Chilean Spring of 2019-2020”. *Social Movement Studies*, 20 (4), pp. 495-502.

Stekelenburg, J. y Klandermans, B. (2013). “The social psychology of protest”. *Current Sociology*, 61 (5-6), pp. 886-905.

Van Stekelenburg, J., Klandermans, B., y Van Dijk, W. (2011). “Combining motivations and emotion: The motivational dynamics of protest participation”. *Revista de Psicología Social*, 26 (1), pp. 91-104.

Van Troost, D., Van Stekelenburg, J. y Klandermans, B. (2013). “Emotions of protest”. En N. Demertzis (Ed.) *Emotions in politics: The affect dimension in political tension* (pp. 186-203). Palgrave Macmillan Press.

Vassallo, F. (2018). “The evolution of protest research: Measures and approaches”. *PS: Political Science & Politics*, 51 (1), pp. 67-72.

Vermunt, J. y Magidson, J. (2004). “Latent class analysis”. *The SAGE Encyclopedia of Social Science Research Methods* (pp. 549-553). SAGE.

Wagner, M. y Morisi, D. (2019). “Anxiety, fear, and political decision-making”. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, p. 1-22.

LA FRUSTACIÓN

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS, PROGRESO Y LAS CALLES

Por Cristián Larroulet, Martina Cionci y Miguel Ángel Fernández

Resumen

Este estudio propone un análisis integral de las protestas ocurridas en Chile en 2019, cuestionando las explicaciones basadas únicamente en la desigualdad estructural. El enfoque adoptado considera una compleja interacción de factores económicos y políticos, incluyendo teorías de privación relativa y conflictos sociales. Así, se identifican diversos elementos clave que contribuyeron al fenómeno: el deterioro económico y la pérdida de oportunidades laborales desde el segundo gobierno de Bachelet, la caída de confianza en las instituciones públicas, y la influencia de grupos promotores del caos social. Además, se señala el impacto de redes sociales y la falla del Estado en asegurar el orden público. Por efecto, sugerimos que el estancamiento económico y la frustración de expectativas en los sectores medios jugaron un papel crucial. Ello es reflejo de una crisis de bienestar socioeconómica más profunda, originada por el debilitamiento del proceso modernizador chileno. Así, buscamos aportar a una mirada más amplia sobre los eventos que ocurrieron en 2019 y que son, principalmente, el resultado de la interacción entre elementos socioeconómicos y políticos.

Introducción

El fenómeno de protestas y violencia que tuvo lugar en Chile a partir de octubre del 2019 ha sido y será objeto de extensos debates y análisis en el mundo político y académico. La narrativa predominante, liderada por sectores de izquierda -si se analizan la mayoría de los libros publicados sobre el tema en los últimos años- ha enfatizado las causas estructurales, como la mala distribución del ingreso y el "modelo económico", como causantes del descontento generalizado. Este ensayo propone un enfoque integral que recoge la investigación sobre teorías de privación relativa, es decir, el impacto que produce en la sociedad las reducciones en el bienestar tanto entre grupos como entre generaciones. Además, se analizan estudios que observan los conflictos al interior de las sociedades y el rol del Estado para contenerlos, observando el impacto de la acción colectiva y la capacidad de respuesta del Estado como actor principal en la provisión de "Orden Público".

El octubre chileno conmocionó al país con la ola más violenta de atentados incendiarios, la destrucción de estaciones de metro, buses de transporte público, edificios y supermercados, quizás, de la historia chilena. La información oficial entre el 18 de octubre de 2019 y el 22 de marzo de 2020 revela cifras alarmantes: 11.827 desórdenes públicos, de los cuales 2.896 fueron graves, más de 1.000 saqueos, 544 cuarteles policiales atacados, 77 estaciones de metro dañadas, de las cuales 25 fueron incendiadas, y 33 personas fallecieron según el Ministerio Público.

Cinco años después de estos eventos, las interpretaciones siguen siendo variadas y controvertidas. Algunos lo interpretan como una manifestación espontánea de un pueblo descontento frente a la desigualdad, las políticas neoliberales y las violencias estructurales que han permeado la sociedad (Somma, 2021). Además, se considera

como una respuesta natural a los casos de colusión en empresas privadas, corrupción en las fuerzas armadas, así como el financiamiento irregular de las campañas políticas. Otros autores, como Larraín (2020), enfatizan su naturaleza de "fenómeno multicausal", donde jugaron un rol los elementos económicos, las frustraciones generadas por la insatisfacción de las expectativas, los procesos de modernización acelerada, la acción de grupos promotores de la violencia como instrumento de cambio, el desprestigio de las instituciones y la influencia del cambio tecnológico acelerado.

Nuestros resultados sugieren que el fenómeno fue impulsado por una compleja interacción de factores económicos y políticos. La frustración económica, en gran parte explicada por el fuerte deterioro en el crecimiento y la pérdida de oportunidades de empleo que se inició principalmente durante el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet, jugó un papel crucial. A esto se suma la progresiva caída en la confianza de instituciones públicas fundamentales que agravaron las "fallas del Estado" en materia de seguridad pública.

Además, no se puede ignorar la influencia de grupos que, aprovechándose de la realidad descrita, trataron de promover el caos social. Aquí se incluyen sectores asociados al narcotráfico, promotores del anarquismo, y grupos ideológicos impulsores de la violencia como instrumento para el cambio social. También se consideran los esfuerzos de sectores de partidos y movimientos políticos de izquierda que buscaron el término del Gobierno de Sebastián Piñera a través de la violencia en las calles y la destrucción de infraestructura básica del país.

Es importante señalar que estos esfuerzos fueron apoyados internacionalmente por grupos y/o gobiernos no democráticos utilizando las redes sociales, un fenómeno global señalado por el analista Naim (2022). Los análisis de redes sociales mostraban la

influencia cubana, venezolana y rusa en las peticiones de renuncia del presidente. La investigación de Constella Intelligence (2020) reveló que, en Chile, el 0,5% de los usuarios generaba el 28% de los resultados relacionados con las protestas callejeras, y el 58% de los que notificaron su geolocalización se encontraban en Venezuela.

En este contexto, nuestro ensayo adopta un enfoque estructural-racional, integrando dos teorías sobre las manifestaciones sociales: la teoría de "la privación relativa" de Gurr (1968, 1970), que observa la frustración del individuo resultante de su percepción de las diferencias entre sus expectativas y la materialización efectiva de ellas, y la teoría de "la contención de poder" de Muller y Weede (1994), que tiene en cuenta los beneficios y costos esperados de la violencia.

Nos proponemos responder a la siguiente pregunta: ¿Cuáles fueron los factores subyacentes que motivaron los eventos? Nuestra hipótesis plantea que la revuelta política-social u "octubrismo" que tuvo lugar en Chile se debe a dos causas complementarias: a) la brecha entre las expectativas generadas por la falta del progreso económico y las insuficiencias para satisfacer las aspiraciones de los ciudadanos; b) la debilidad, la disminución de la confianza y/o el bajo prestigio de las instituciones fundamentales, lo que hace que los beneficios de manifestarse en un conflicto político rebelde sean más atractivos dados los menores costos internalizados.

Octubre chileno, factores para entender una revuelta política y descartar mitos

Para tener una visión desde las ciencias sociales de lo que ocurrió en nuestro país, es necesario comprender la discusión teórico-académica en la que se encuadra. Así, el fenómeno que tuvo lugar en Chile durante 2019 ha sido objeto de numerosos análisis desde diversas

perspectivas teóricas y empíricas (Peña 2020; Donoso 2020; Somma 2021; Morales-Quiroga 2020; a los que se suman los capítulos de esta obra) y un sinfín de definiciones conceptuales que buscan aproximarse a él. Por ello, es crucial examinar tanto las teorías clásicas sobre revoluciones como los estudios más recientes sobre el caso chileno en particular.

En el ámbito de la Ciencia Política, el concepto de conflicto político rebelde (CPR) propuesto por Muller y Weede (1994) proporciona un marco útil para analizar los sucesos que tuvieron lugar en Chile. Según los autores, el CPR se define como la acción de un grupo de individuos que busca cambiar instituciones, gobiernos o políticas mediante métodos ilegales o violentos de acción política colectiva. Una de las miradas fundamentales para entender este tipo de conflictos es la teoría de la privación relativa, desarrollada por Gurr (1968, 1970). Ella sostiene que el descontento social surge cuando existe una discrepancia entre las expectativas de progreso de las personas y su realidad concreta. Esta brecha entre expectativas y realidad puede generar frustración, ira y, eventualmente, una respuesta agresiva.

Históricamente, el estructuralismo, y particularmente el Marxismo (Marx y Engels, 1848), ha sido una perspectiva dominante para explicar las causas de los conflictos sociales. Sin embargo, la aplicabilidad universal de esta teoría ha sido sólidamente cuestionada, ya que los sucesos de violencia colectiva ocurren tanto en sociedades capitalistas como no capitalistas. En una vereda complementaria, la lógica de las "jaulas de poder" de Weber (1978) sugiere que el poder se distribuye de manera desigual en la sociedad y se ejerce a través de diversas instituciones.

Más allá de ello, en esta reflexión nos basamos en lo que se conoce como la "paradoja de Tocqueville" (1856). Esta perspectiva propone que las revoluciones son más probables después de mejoras sociales,

lo que ofrece una perspectiva interesante para analizar el caso chileno. Si bien esta idea ha sido corroborada por estudios más recientes, como el de Finkel y Gehlbach (2018), su aplicabilidad al caso de nuestro país no se encuentra suficientemente desarrollada. Por ello, creemos útil unirla con la consideración de sobrecarga política de Huntington (1968). Esta última aporta una mirada que sostiene que la inestabilidad surge cuando las demandas sobrepasan la capacidad del sistema político, lo que unido a Olson nos permite teorizar que problemas o dificultades que reducen o contraen el crecimiento económico tendrán un efecto de largo plazo negativo sobre la estabilidad política de un territorio (Goldsmith 1987; Olson, 1982).

Adicionalmente, el fenómeno chileno debe mirar lo que sostiene la teoría de la movilidad social y estabilidad de la democracia de Acemoglu, Egorov y Sonin (2018). En esta, se sugiere que las reformas sociales aumentan las expectativas de más reformas que pueden no ser posibles. Si sumamos a esta perspectiva lo que sostiene Goodwin y Jasper (2006), quienes proponen que las percepciones sobre la realidad pueden generar emociones que movilizan a la acción colectiva, y el rol que las redes sociales pueden causar en distorsionar la realidad (Zuckerman, 2015) y facilitar la movilización individual (Kuran y Romero, 2019), tenemos un cuadro teórico más completo para comprender qué ocurrió en Chile.

En esta reflexión, proponemos que los eventos de violencia y movilización que tuvieron lugar en Chile son fruto de un mecanismo complejo arraigado en la historia reciente del país. Argumentamos que, en un contexto donde Chile experimentó un rápido proceso de modernización económica caracterizado por un fuerte crecimiento y una notable movilidad social, durante el cual se expandió de manera efectiva la cobertura de necesidades sociales básicas, incluyendo mejoras significativas en educación, salud, vivienda y servicios esenciales, y que coincidió con un rápido incremento en el acceso a

internet y el uso de redes sociales, los eventos de conflicto político rebelde se vuelven más probables cuando se produce una desaceleración económica como la que se produjo entre 2013 y 2017. Esta ralentización generó una brecha entre las altas expectativas creadas durante el período de crecimiento y la nueva realidad económica más restrictiva. Esta se explica, en gran parte, por las reformas introducidas en el periodo señalado, como por ejemplo el significativo aumento del impuesto a la inversión de las empresas y el cambio en el sistema electoral que aumento la falta de gobernabilidad al dificultar los acuerdos políticos. Estas detuvieron el crecimiento sentando las bases para la crisis, al crear una generación de ciudadanos que, frente al estancamiento económico del país no solo desconfiaban de las instituciones políticas, sino que también experimentaban una profunda frustración ante las condiciones económicas observadas. Esta discrepancia entre las expectativas elevadas y la percepción de una realidad que no cumplió con dichas expectativas, en un entorno de desconfianza política, se convierte en el catalizador fundamental del conflicto político rebelde que tuvo lugar en Chile en 2019, reflejando así la compleja interacción entre el desarrollo económico, las expectativas sociales y la capacidad de respuesta institucional.

Respecto al tema del rol de la desigualdad de ingresos, Briones (2023) lo analiza con profundidad, señalando que la preocupación de la población por ella no se ha profundizado en los últimos 30 años. Por de pronto, ello no nos debe extrañar ya que los estudios sobre la distribución muestran una mejoría gradual, como ha ocurrido en las experiencias históricas exitosas en la materia. Hay numerosos trabajos que lo confirman. Por ejemplo, Sapelli (2016), que estudia la materia evaluando lo que ocurre observando los datos por generaciones, concluye que el índice de Gini para toda la población, como la distribución del ingreso por generaciones muestran mejoras

sustanciales. También el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés estimó que el decil de mayor pobreza aumentó sus ingresos entre 1990 y 2015 en 439% y el 10% más rico de los chilenos lo hizo solo en un 208% (Valdés, 2018). Una buena síntesis es la que plantea Paniagua cuando señala que es un mito la afirmación de que es la desigualdad económica lacerante la causa de la crisis social (Paniagua, 2021).

Lo que, si ocurre, y es lo propio de una sociedad que se moderniza y progresa, es una demanda por mayor dignidad especialmente en trato y oportunidades, aspecto al cual las políticas públicas deben dar especial atención.

Finalmente, también hay que analizar la validez del argumento de que la causa del malestar es el “modelo económico” el que la izquierda denomina como el “neoliberalismo”, propio de Chile. Aquí también hay aporte de académicos que muestran como los movimientos de protesta que ocurrieron en el mundo ese año 2019 ocurrieron en muy diversos países, con diversas estrategias económicas, en diferentes continentes y con realidades económicas y sociales muy diferentes a la chilena. Como muy bien dice Tironi (2020), el octubre chileno es parte de una ola planetaria, y como lo enfatiza Paniagua (2021) el supuesto neoliberalismo imperante en Chile no parece guardar ninguna relación con lo que ocurrió en octubre de 2019. Basta observar gran parte de los países con fenómenos de protesta en el mismo periodo que el chileno, para descartar el tema del modelo ya que en esos países los modelos económicos son más bien socialdemócratas.

Contexto, movilizaciones y violencia

Desde una perspectiva histórica, el inicio del proceso contencioso ocurrió el 4 de octubre -cuando el Ministerio de Transporte y

Telecomunicaciones anunció un aumento en las tarifas del transporte público. En respuesta, grupos de estudiantes, impulsados por organizaciones que promueven la violencia como método principal para lograr cambios revolucionarios, iniciaron evasiones masivas en el Metro de Santiago, coordinadas por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y también la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (CONES). Días después, se marcó un punto de inflexión: El viernes 18 de octubre fue la jornada donde se produjeron los actos de protesta más violentos desde el retorno a la democracia en 1990. La respuesta del Gobierno -y parte del sistema político- condenó inmediatamente la violencia desatada, llegando a la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado y el establecimiento de un Estado de Emergencia Constitucional. Sin embargo, la decisión fue duramente criticada por la oposición, llegando inclusive figuras del Frente Amplio a declarar que el gobierno había renunciado a la democracia y sus procesos²⁵.

Continuaron los actos de violencia. Un mes de manifestaciones, quema de decenas de edificios y una sensación de caos que recorrió al país intentando poner en jaque al sistema democrático nacional. La marcha del 25 de octubre incrementó dicha sensación e impulsó la instalación de una narrativa de malestar contra el núcleo y naturaleza del sistema económico y político que había gobernado al país durante las últimas décadas, haciendo posible el mayor aumento de bienestar de la historia nacional. No entraremos en detalle en dicho proceso, pero es importante destacar aquí la salida institucional promovida por el llamado del Presidente de la República a “lograr un acuerdo por la paz, por la justicia y por una nueva Constitución” (Blumel, 2023). Ese llamado permitió firmar el acuerdo político del 15 de noviembre con

²⁵ En concreto, la excandidata presidencial por el Frente Amplio, Beatriz Sánchez declaró esta frase. Para más información ver: <https://eldesconcerto.cl/2019/10/19/beatriz-sanchez-por-estado-de-excepcion-el-gobierno-renuncio-a-la-democracia>.

las fuerzas políticas del país (se excluyeron el Partido Comunista y gran parte del Frente Amplio) para dar una salida democrática a la ola de violencia y frustrando el intento de provocar el término anticipado del Gobierno.

Un último punto que queremos tratar en esta sección son las encuestas de opinión pública durante el período de la revuelta y cinco años después. Ellas colaboran a entender cuán sólidas son las acciones de violencia que hemos conocido. Según la encuesta Critería de septiembre de 2019, las principales preocupaciones de la ciudadanía eran el combate a la delincuencia y el narcotráfico (42%), seguidos por la inflación (26%) y el acceso universal a la salud (25%). En ese momento, la propuesta de una nueva constitución ocupaba el octavo lugar de las demandas sociales, con un 17% de las preferencias. Sin embargo, después de los eventos de octubre, la reforma constitucional ganó prominencia en la agenda pública. Un estudio de la encuesta Cadem mostró que, en la primera semana de noviembre, el 27% de los jóvenes mencionaban la reforma constitucional como la principal preocupación, frente al 20% de las personas entre 35 y 54 años y al 14% de los mayores de 55. Esa transformación de la opinión pública fue producto directo de los eventos violentos y la instalación de la narrativa política en la esfera de discusión. El capítulo “La Chispa”, en este libro, ilustra el fenómeno económico del deterioro en el bienestar de los jóvenes que ayuda a explicar el malestar juvenil y su movilización.

La reciente encuesta CEP de los meses agosto-septiembre del presente año 2024 es muy ilustrativa. Así, la creencia sobre que “en el largo plazo el trabajo duro generalmente conlleva a una mejor vida”, recibía un apoyo de 64% en oct.-nov. de 2018, luego tuvo una caída significativa a 40% en dic. del 2019 y ahora un apoyo de 61% en ago.-sept. del presente año. Lo que nos estaría indicando la creencia de la relevancia del esfuerzo individual para el progreso y no la necesidad

de un cambio de modelo hacia el Socialismo. Asimismo, la encuesta CEP recién mencionada, nos señala el descontento con las manifestaciones de fines del año 2019. El apoyo a las manifestaciones de octubre alcanzó a 55% en dic. del 2019 y cayó a solo 23% en ago.-sept. del presente año. Por ello la mayoría de las encuestas están señalando hoy que las preferencias ciudadanas son el orden y el progreso.

El ambiente revolucionario en gran parte ha desaparecido y la mayoría de los chilenos han vuelto a valorar la seguridad y el crecimiento. En suma, las razones asociadas al modelo económico y las diferencias de ingreso parecen haber sido transitorias. Lo que el país necesita es retomar una agenda que permita volver a crecer

Economía, expectativas y frustraciones

Entender el fenómeno que tuvo lugar en Chile durante 2019 representa un desafío significativo requiriendo un enfoque metodológico que permita desenredar parte de los múltiples factores que desembocaron en el fenómeno político rebelde.

Queremos explicar los factores que están detrás de las “acciones contenciosas”, las que se definen como la expresión de malestar colectivo en el espacio público por parte de un actor, grupo o movimiento social, en un momento y lugar específicos (COES, 2023). Es importante destacar que esta definición abarca una amplia gama de acciones, desde manifestaciones pacíficas hasta actos de violencia y destrucción de propiedad.

Durante el período estudiado, se registraron 25.429 acciones contenciosas, con una variación significativa a lo largo del tiempo. El punto máximo se alcanzó en noviembre de 2019, con 1.798 acciones contenciosas, marcando un alejamiento exponencial del estatus quo.

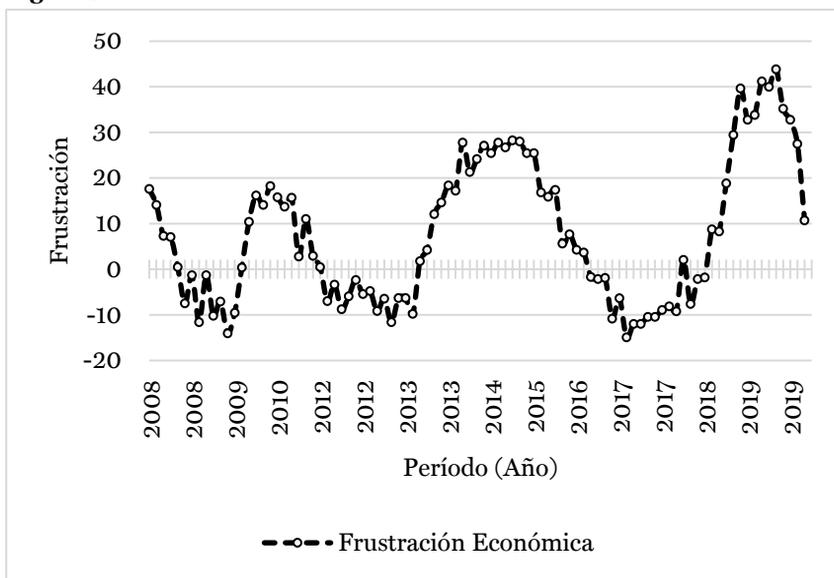
Esta cifra es particularmente reveladora, considerando que el 50% de los meses del período observado tuvieron 149 acciones contenciosas o menos. Analizamos también, durante ese periodo, la evolución de la aprobación presidencial en base a la Encuesta CADEM, e indicadores económicos como el desempleo, el de Actividad Económica y el de Percepción de la Economía.

Los resultados indican que las acciones contenciosas a nivel país ocurrieron en mayor medida cuando la aprobación presidencial disminuía, los indicadores de percepciones económicas se deterioraban y la frustración económica aumentaba.

Los resultados anteriores nos llevan a mirar más detenidamente dos factores: los indicadores económicos y los de naturaleza política a través del tiempo.

En cuanto a los indicadores económicos, se analizaron IMACEC, el IPEC, la tasa de desempleo y el nivel de frustración por percepción de economía. Estas variables permiten, teóricamente, observar la discrepancia entre expectativas y realidad económica que podrían incrementar los eventos de movilización y protesta siguiendo a Davies (1962). De ellas, destaca el análisis de la Frustración Económica, que revela tres ciclos distintos entre 2008 y 2019 en donde existieron puntos altos de frustración. Tal como ilustra la Figura 3-1, el tercer ciclo, que comienza a finales del primer semestre de 2018 y concluye a finales de 2019, se caracteriza por ser el período de mayor intensidad en términos de frustración económica. Esta observación podría ser crucial para entender los factores detrás de las manifestaciones y movilizaciones de 2019.

Figura 3-1: Evolución frustración económica 2008-2020.



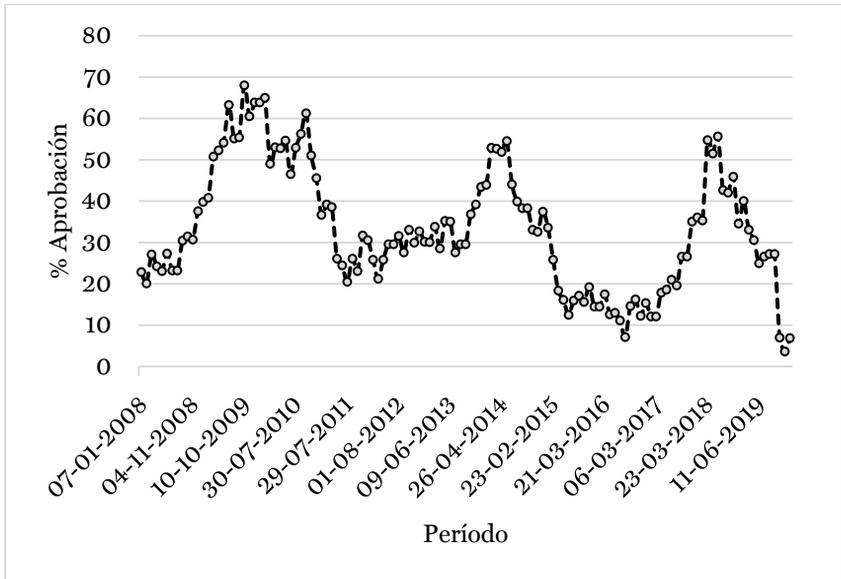
Nota: Elaboración propia en base a datos IPEC.

En relación con los otros indicadores, se observa un aumento gradual desde 2014 en relación con la tasa de desocupación; esto nos lleva a pensar que el aumento del desempleo sería otro factor que contribuye a las movilizaciones por la disminución en la capacidad de satisfacer necesidades de la población. En la misma línea, el Índice de Incertidumbre Económica muestra una tendencia al alza a partir de 2011, alcanzando su punto más alto a finales de 2019; este aumento en la incertidumbre también está en línea con el argumento de que la caída en el crecimiento y estabilidad económica posee un correlato tanto con el aumento de las acciones contenciosas como con lo acontecido en 2019.

En cuanto a indicadores políticos, analizaremos la evolución de la variable aprobación presidencial (ver Figura 3-2). Esta variable muestra ciclos marcados, con tendencias a la baja durante los períodos de gobierno. Si bien es cierto que los niveles de aprobación dependen de la coyuntura de cada gobierno, resulta interesante notar la

constante erosión de los niveles máximos, exhibiendo que independiente de quién estuviese administrando el ejecutivo, existía una tendencia paulatina a la desconfianza o desaprobación del sistema político. Aquí, es importante notar que la disociación observada entre las cifras económicas y la aprobación presidencial sugiere que la percepción pública del desempeño del gobierno no siempre se alinea con los indicadores económicos objetivos.

Figura 3-2: Evolución aprobación presidencial 2008-2020.



Nota: Elaboración propia en base a datos CADEM.

Un examen descriptivo de la evolución de los indicadores nos llevan a sostener que existe evidencia a favor de la noción de que el deterioro de las condiciones económicas del país, el aumento de la frustración frente a las expectativas económicas instaladas y un progresivo debilitamiento del Estado en su rol de asegurar el orden público son factores que se correlacionan directamente con el aumento de las acciones de manifestación y, por consiguiente, con los eventos ocurridos el último trimestre de 2019 en Chile.

Conclusiones

El análisis exhaustivo de las variables económicas, sociales y políticas en el contexto del fenómeno que tuvo lugar en Chile durante 2019 arroja luz sobre las complejas dinámicas que llevaron a este evento histórico. Los resultados de esta investigación tienden a rechazar los argumentos que serían factores estructurales como el deterioro en la distribución del ingreso y el modelo económico, las causas del conflicto político rebelde en el país.

En primer lugar, la hipótesis sobre el efecto de la discrepancia percibida entre las expectativas generadas por el significativo crecimiento durante tres décadas y la significativa caída de este, producto de las reformas iniciadas en el segundo gobierno de M. Bachelet, las que afectaron la inversión, el empleo, la formación de capital humano y el funcionamiento del sistema político.

Chile ha experimentado un progreso económico significativo en las últimas tres décadas, con un crecimiento real del ingreso per cápita de 4,64% entre 1985 y 2000, de 3,37% entre 2001 y 2013. Sin embargo, desde 2014 hasta 2019 ese crecimiento cayó a solo 0,72%, es decir una desaceleración considerable en el crecimiento del PIB. Esta yuxtaposición de un crecimiento histórico sustancial seguido por un período de estancamiento parece haber creado un terreno fértil para la frustración económica. En la misma línea, la significancia de la desocupación nacional en el periodo a partir de 2014 subraya la importancia de las condiciones del mercado laboral en la generación de descontento social. El aumento gradual del desempleo desde 2014 coincide con la percepción de estancamiento económico, alimentando la teoría de la privación relativa.

Así, el impacto significativo de la Frustración Económica respalda la idea de que la perspectiva de las personas juega un papel crucial en la evaluación de las condiciones económicas. Esto sugiere una

característica *egotrópica* en la evaluación de la economía por parte de los chilenos, donde la situación personal tiene más peso que los indicadores macroeconómicos generales.

La segunda hipótesis, que plantea que la disminución de la confianza en las instituciones hace que los beneficios de manifestarse en un conflicto político rebelde sean más atractivos, más aún cuando existen falencias en el rol de asegurador del orden público por parte del Estado.

En conclusión, el fenómeno que tuvo lugar en Chile durante 2019 parece ser el resultado de una compleja interacción de factores económicos y políticos. La frustración económica, alimentada por la percepción de estancamiento y el aumento del desempleo, junto con la baja confianza en las instituciones políticas, crearon un terreno fértil para el descontento social. La incertidumbre económica, amplificada por las redes sociales con influencia internacional o doméstica, jugó un papel crucial en la formación de percepciones negativas. Y lo mismo se puede señalar por la influencia de grupos en la sociedad que promueven la violencia, ya sea por motivaciones económicas o ideológicas. Como dice Colodro (2020), se trataba de “reinstalar una asonada contra las bases del “modelo”.

Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para la comprensión de los movimientos sociales y la formulación de políticas públicas. Sugieren que abordar solo los indicadores económicos objetivos puede no ser suficiente para prevenir eventos de alto impacto social. Es crucial considerar también las percepciones económicas individuales y trabajar en la construcción de confianza en las instituciones políticas.

Futuras investigaciones podrían beneficiarse de la inclusión de datos más granulares, incluyendo información sobre redes y otros factores sociales y culturales. También sería valioso explorar cómo estos

factores interactúan a lo largo del tiempo y cómo los eventos específicos pueden actuar como catalizadores para la acción colectiva. En última instancia, este análisis subraya la complejidad de los movimientos sociales y la importancia de considerar múltiples perspectivas teóricas para comprender plenamente fenómenos como el que ocurrió en Chile en 2019. Solo a través de un enfoque integral que considere tanto los factores estructurales como los procesos de toma de decisiones individuales y colectivos podremos desarrollar una comprensión más profunda de estos eventos cruciales en la historia de una nación.

REFERENCIAS

- Acemoglu, D., Egorov, G., & Sonin, K. (2018). "Social mobility and stability of democracy: Reevaluating de Tocqueville". *The Quarterly Journal of Economics*, 133(2), 1041-1105.
- Blumel, G. (2023) "La vuelta larga". Ediciones UC
- Briones, I. (2023) "La crisis de Octubre de 2019 en Chile". Cuadernos de Tocqueville, Universidad Adolfo Ibañez.
- CADEM (2019). "Plaza Pública DEM". Recuperado de: <https://cadem.cl/wp-content/uploads/2019/09/Track-PP-294-Agosto-S5-VF-2.pdf>
- Cionci, M. (2024). "Anatomía del estallido social". Tesis de Ciencia Política y Políticas Públicas, Facultad de Gobierno, UDD.
- Colodro, M. (2020) "Chile indócil, huellas de una confrontación histórica". Santiago: Tajamar Editores
- Constella Intelligence (2020). "Reporte uso redes sociales". sd.
- Cortazar, R. (2019). "Reglas del juego y el fin del desarrollo acelerado". CIEPLAN.
- Criteria (2019). "Agenda Ciudadana Criteria". Recuperado de: <https://www.criteria.cl/wp-content/uploads/2019/11/ACC-Noviembre-2019.pdf>

Davies, J. (1962). "Toward a theory of revolution". *American Sociological Review*, 27(1), 5-19.

Tironi, E. (2020). "El desborde". Editorial Planeta.

Finkel, E., & Gehlbach, S. (2018). "The Tocqueville Paradox: When Does Reform Provoke Rebellion?" *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3202013>

Goldsmith, M. (1987). "Mancur Olson and the theory of the state". *Political Science Quarterly*, 102(2), 285-303.

González, R. (2017). "¿Malestar en Chile? Puntos de Referencia". CEP

Goodwin, J., & Jasper, J. M. (2006). "Emotions and social movements". In J. E. Stets & J. H. Turner (Eds.), *Handbook of the Sociology of Emotions* (pp. 611-635). Springer.

González T R. (2017) "¿Malestar en Chile? A la luz de las elecciones 2017.Puntos de Referencia, CEP

Gurr, T. R. (1968). "A causal model of civil strife: A comparative analysis using new indices". *American Political Science Review*, 62(4), 1104-1124.

_____. (1970). "Why men rebel". Princeton University Press.

Huntington, S. P. (1968). "Political order in changing societies". Yale University Press.

Jiménez-Yañez, C. (2020). "Chile despertó: causas del estallido social en Chile". *Revista mexicana de sociología*, 82(4), 949-957.

Kuran, T., & Romero, D. L. (2019). "The logic of revolutions: Rational choice perspectives". In *Handbook of Historical Economics* (pp. 297-315). Elsevier.

Landaeta L., Víctor Herrero (2021). "La revuelta", Editorial Planeta

Marx, K., & Engels, F. (1848). "The Communist Manifesto". Penguin.

Mayol A., (2019). "Big Bang: estallido social". Editorial Catalonia

Morales Quiroga, M. (2020). "Estallido social en Chile 2019: Participación, representación, confianza institucional y escándalos públicos". *Análisis Político*, 33 (98), pp. 3-25.

Capítulo 3: La Frustración

Muller, E. N., & Weede, E. (1994). "Theories of rebellion: Relative deprivation and power contention". *Rationality and Society*, 6(1), 40-57.

Naim, M. (2022). "La revancha de los poderosos". *Editorial Debate*.

Olson, M. (1965). "The logic of collective action: Public goods and the theory of groups". Harvard University Press.

_____. (1982). "The rise and decline of nations: Economic growth, stagflation, and social rigidities". Yale University Press.

Paniagua, P. (2021). "Atrofia: Nuestra encrucijada y el desafío de la modernización". RIL Editores.

Peña C., Patricio Silva (2021). "La revuelta de octubre en Chile". Fondo de Cultura Económica

Peña C., (2020). "Pensar el malestar: sobre la crisis de octubre y la cuestión constitucional". Editorial Taurus.

Sapelli, C. (2016). "Chile: ¿más equitativo? Una mirada a la dinámica social de Chile". Santiago: Ediciones UC.

_____. (2023). "Las causas del estadillo, una discusión desde la economía". Documento de trabajo.

Somma, N. M. (2021). "Power cages and the October 2019 uprising in Chile". *Social Identities*, 27(5), 1-17.

Tilly, C. (1978). "From mobilization to revolution". Addison-Wesley.

Tironi, E. (2020). "El Desborde: Vislumbres y aprendizajes del 18-O". Santiago: Editorial Planeta.

Tocqueville, A. de. (1856). "The Old Regime and the French Revolution". Anchor.

Valdés, R. (2018) "Growth-Redistribution Balance and Shifting Coalitions: A view from Chile". *Latin America Policy Journal*, 7 (1), 28-34.

Weber, M. (1978). "Economy and society: An outline of interpretive sociology". University of California Press.

Zuckerman, E. (2015). "Cute cats to the rescue? Participatory media and political expression". In D. Allen & J. Light (Eds.), *From Voice to Influence: Understanding Citizenship in a Digital Age* (pp. 131-154). University of Chicago Press.

LAS AULAS

COLEGIO, SOCIALIZACIÓN POLÍTICA Y LAS MANIFESTACIONES²⁶

Por Melany Sosa y María Paz Raveau

Resumen

Este ensayo examina los factores que influyen en la participación de jóvenes secundarios chilenos en las manifestaciones de octubre de 2019. Utilizando datos de asistencia escolar como proxy de participación en protestas, el estudio analiza cómo el ambiente familiar y escolar afecta la movilización política juvenil. Los resultados revelan que la organización de debates en clase y la participación en el consejo de curso tienen un efecto positivo en la propensión a manifestarse. En contraste, la percepción de respeto en el ambiente escolar y la participación de los apoderados en actividades escolares desalientan la movilización. Así, el estudio sugiere que la familia transmite valores políticos fundamentales, mientras que la escuela proporciona información política y espacios de participación. Se observa una posible transferencia de funciones socializadoras de los padres a las escuelas, planteando preocupaciones sobre el pluralismo político juvenil.

²⁶ Esta investigación utilizó como fuente de información las bases de datos de la Agencia de Calidad de la Educación. Los autores agradecen a la Agencia el acceso a la información. Todos los resultados del estudio son de responsabilidad de los autores y en nada comprometen a dicha institución.

Introducción

Las manifestaciones de octubre de 2019 en Chile marcaron un hito en la historia reciente del país, con repercusiones que se extendieron desde la agenda política hasta la vida cotidiana de los ciudadanos. Más allá de sus causas o efectos económicos, políticos y sociales, la masiva participación en estas marchas merece un análisis detallado en el contexto de los procesos de participación política, especialmente entre los adolescentes secundarios. Este grupo etario presentó altos niveles de actividad durante manifestaciones y protestas, actuando como catalizador e influyendo en personas de todas las edades a lo largo del país bajo diversas consignas (Somma y Mackenna, 2020; Rivera-Aguilera et al., 2021).

La prominente participación juvenil en estas manifestaciones, especialmente de estudiantes secundarios, puede interpretarse como un síntoma del desencanto con la política tradicional y sus métodos convencionales de expresión ciudadana (Gerlach, 2020; Rivera-Aguilera et al., 2021). Este fenómeno no es exclusivo de Chile, sino que refleja una crisis más amplia de legitimidad en las democracias representativas occidentales. En este contexto, explorar las motivaciones y los factores que influyen en la participación política juvenil se vuelve crucial para fortalecer y renovar los sistemas democráticos.

Chile ha experimentado una disminución significativa en la participación electoral desde el retorno a la democracia, posicionándose entre los países con mayores bajas a nivel mundial. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2017), Chile ha visto un descenso del 36% en la participación electoral desde 1990. Esta tendencia es usualmente más pronunciada entre los jóvenes, quienes muestran los niveles más bajos de percepción de eficacia política.

En este ensayo, nos proponemos analizar los factores que influyen en la decisión de los estudiantes secundarios chilenos de participar en manifestaciones políticas, con un enfoque particular en el papel de la socialización política. Utilizaremos como caso de estudio las manifestaciones de octubre de 2019, explorando cómo los diferentes agentes socializadores, principalmente la familia y la escuela, moldean las actitudes y comportamientos políticos de los jóvenes. Este análisis no solo nos permitirá comprender mejor las dinámicas de la participación política juvenil en Chile, sino que también arrojará luz sobre los desafíos y oportunidades para fomentar una ciudadanía más activa y comprometida entre las nuevas generaciones.

Tendencias y desafíos en la participación política juvenil

La participación política de los jóvenes en Chile presenta un panorama complejo y aparentemente contradictorio. Por un lado, las estadísticas muestran una disminución en la participación electoral tradicional, pero por otro, se observa un creciente interés en formas alternativas de expresión política. Esta dicotomía refleja un cambio fundamental en la manera en que las nuevas generaciones entienden y practican la ciudadanía, y es parte fundamental del puzle de la participación.

La Encuesta Nacional de Juventud (INJUV, 2018) ofrece una imagen reveladora de las actitudes políticas de los jóvenes chilenos. Casi la mitad de los encuestados (49%) considera que las votaciones son factores de cambio en la sociedad, y un 40% conversa sobre política con otras personas. Estos datos sugieren que existe un interés latente en los asuntos públicos. Sin embargo, este interés coexiste con un alto nivel de desconfianza en las instituciones políticas tradicionales. El 38% de los jóvenes se declara insatisfecho con la democracia en Chile, y un alarmante 65% no se identifica con ninguna tendencia política.

La confianza en instituciones como los partidos políticos, el Congreso y el Gobierno se encuentra en niveles preocupantemente bajos.

Este desencanto con las formas convencionales de participación política no ha derivado en apatía, sino en la búsqueda de métodos alternativos de expresión ciudadana. Los jóvenes chilenos muestran una mayor propensión que otros grupos etarios a justificar y participar en acciones políticas no convencionales, como marchas, tomas de terrenos, huelgas de hambre y expresiones artísticas de protesta (INJUV, 2018). Esta tendencia se manifestó de manera contundente durante las movilizaciones de octubre de 2019, donde los jóvenes no solo fueron participantes activos sino también organizadores y catalizadores del movimiento (Somma y Mackenna, 2020; Rivera-Aguilera et al., 2021).

El contraste entre la baja participación electoral y la alta disposición a involucrarse en formas alternativas de acción política plantea importantes interrogantes sobre el futuro de la democracia chilena. ¿Cómo se puede canalizar este evidente interés político hacia formas de participación que fortalezcan las instituciones democráticas? ¿Qué papel juegan los diferentes agentes socializadores en la formación de estas actitudes políticas?

Para abordar estas cuestiones, es fundamental examinar el proceso de socialización política de los jóvenes secundarios chilenos. Este proceso, que incluye el desarrollo de ideas y comportamientos políticos propios (Easton, 1968), está influenciado por diversos agentes, siendo los más prominentes la familia y la escuela. La interacción entre estos agentes y su influencia relativa en el contexto chileno actual merece un análisis detallado.

La familia, tradicionalmente considerada como el primer y más influyente agente socializador, ha experimentado cambios significativos en su estructura y dinámica en las últimas décadas. El

aumento de hogares monoparentales, la mayor participación laboral femenina y el incremento en la escolaridad promedio de los padres han alterado los patrones de interacción familiar y, potencialmente, los procesos de transmisión de valores políticos (Castillo, 2000; Koskimaa y Rapeli, 2015; Sandoval Moya y Hatibovic Díaz, 2010).

Por su parte, la escuela emerge como un espacio cada vez más relevante en la formación cívica y política de los jóvenes. Más allá de las clases formales de educación cívica, el "currículum oculto" - las normas implícitas y el ambiente escolar - juega un papel crucial en el desarrollo de actitudes y comportamientos políticos (Gutmann, 1999; Willeck y Mendelberg, 2022). La escuela no solo transmite conocimientos, sino que también proporciona un espacio para la práctica de la participación y el debate, elementos esenciales para la formación de ciudadanos activos (Denver y Hands, 1990).

En el contexto de estos cambios sociales y educativos, resulta imperativo examinar cómo estos diferentes agentes socializadores influyen en la decisión de los jóvenes de participar en manifestaciones políticas. ¿Qué aspectos del ambiente familiar y escolar fomentan o inhiben la participación en protestas? ¿Cómo interactúan estos factores entre sí?

Para responder a estas preguntas, nuestro análisis se centra en los estudiantes de segundo medio de la Región Metropolitana y su participación en las manifestaciones de octubre de 2019. Utilizando datos sobre la asistencia escolar como proxy de la participación en protestas, exploramos cómo factores como la participación de los padres en actividades escolares, la percepción del ambiente escolar, y las prácticas pedagógicas influyen en la propensión de los jóvenes a involucrarse en acciones políticas no convencionales.

Este enfoque nos permitirá no solo comprender mejor las dinámicas de la participación política juvenil en Chile, sino también identificar

posibles vías para fomentar una ciudadanía más activa y comprometida. En un momento en que la democracia chilena enfrenta desafíos significativos, entender y canalizar el entusiasmo político de las nuevas generaciones se vuelve una tarea crucial para el futuro del país.

Desentrañando los factores de participación juvenil

En este estudio, nos propusimos examinar los factores que influyen en la participación de los jóvenes en las manifestaciones de octubre de 2019 en Chile. Para ello, nos basamos en tres fuentes principales de datos: las asistencias mensuales promedio proporcionadas por el Centro de Estudios del Ministerio de Educación, datos de la Agencia de Calidad de la Educación, y las encuestas Simce 2018, estas últimas solicitadas directamente a la Agencia de Calidad de la Educación por no estar disponibles públicamente. Nuestra muestra se compuso de 746 colegios municipales y particulares subvencionados de la Región Metropolitana, representando una diversidad de realidades educativas y socioeconómicas.

La variable central de nuestro estudio fue la diferencia en las asistencias promedio de los colegios entre noviembre de 2018 y noviembre 2019, utilizada como proxy de la participación estudiantil en las manifestaciones. Esta elección metodológica responde a la imposibilidad de obtener datos directos sobre la participación de menores en marchas. La variable se construyó restando la asistencia promedio de noviembre 2019 a la de noviembre 2018, resultando en valores entre -1 y 1, donde un valor positivo indica un aumento en la inasistencia en 2019.

Para explicar esta diferencia en asistencias, desarrollamos varios indicadores basados en las encuestas Simce 2018 a padres y

estudiantes, inspirados en los trabajos de Ehman (1980) y Andolina et al. (2003). Estos indicadores, todos agregados a nivel de establecimiento educativo, incluyen la participación escolar estudiantil, la percepción de respeto en el ambiente escolar, la participación escolar de los apoderados y la participación en el consejo de curso. El indicador de participación escolar estudiantil se construyó a partir de seis preguntas sobre la frecuencia de situaciones como la expresión de opiniones en clase, la organización de debates y la participación en actividades académicas. La percepción de respeto en el ambiente escolar se basó en ocho preguntas que evalúan el respeto mutuo entre estudiantes y profesores, así como el cumplimiento de normas de convivencia. La participación escolar de los apoderados se midió con cuatro preguntas sobre el involucramiento de los padres en actividades escolares, desde la definición de normas hasta la participación en eventos recreativos y académicos. Por último, la participación en el consejo de curso se evaluó mediante tres preguntas sobre la dinámica de participación estudiantil en este espacio organizativo.

Además de estos indicadores principales, incluimos variables de control como el grupo socioeconómico del establecimiento, la dependencia administrativa, el tipo de educación ofrecida (científico-humanista o técnico profesional), la calidad de la educación, el nivel educativo del padre y la proporción de hogares monoparentales. Estas variables se construyeron a partir de datos del Simce 2018 y de MINEDUC, y nos permiten controlar por factores socioeconómicos y familiares que podrían influir en la participación estudiantil.

Para el análisis, empleamos modelos de regresión por mínimos cuadrados ordinarios. La variable dependiente fue la diferencia en los promedios de asistencia, mientras que las variables independientes incluyeron los indicadores mencionados y las variables de control. Este enfoque nos permite estimar el efecto del ambiente escolar y de

participación en los cambios de asistencia, controlando por factores socioeconómicos y familiares relevantes.

Esta metodología, al combinar datos de asistencia con información detallada sobre el ambiente escolar y familiar, nos ofrece una visión integral de los factores que moldean la participación política juvenil en Chile. Aunque reconocemos las limitaciones inherentes al uso de proxies, creemos que este enfoque proporciona aportes valiosos sobre cómo se forman y expresan las actitudes políticas de los jóvenes en un contexto de movilización social.

Debates, convivencia escolar y manifestaciones

El análisis de los datos recopilados revela una compleja interacción de factores que influyen en la participación de los jóvenes en las manifestaciones de octubre de 2019. El Cuadro 4-1 muestra los resultados de nuestro modelo de regresión por mínimos cuadrados ordinarios (OLS), que arroja luz sobre cómo diversos aspectos del entorno escolar y familiar se relacionan con la propensión de los estudiantes a participar en estas formas no convencionales de acción política.

Como se observa en los resultados del Cuadro 4-1, nuestro modelo considera dos escenarios: el Modelo 1, que incluye todas las variables de participación y ambiente escolar, y el Modelo 2, que solo considera las variables de control. Esta aproximación nos permite aislar el efecto específico de los factores relacionados con la participación y el ambiente escolar, controlando por variables socioeconómicas y estructurales.

Cuadro 4-1: Modelos de manifestación juvenil secundaria

	Modelo 1	Modelo 2
Nivel Socioec. (ref. Bajo)		
Medio-Bajo	0,03 (0,02)	0,03(0,02)
Medio	0,05 (0,03)	0,05 (0,03)
Medio-Alto	0,03 (0,04)	0,03 (0,04)
Alto	0,07 (0,06)	0,04 (0,06)
Colegio (ref. Púb.)		
Part. Subvencionado	-0,07 (0,02)***	-0,08 (0,02)***
Técnico-Profesional	-0,12 (0,03)***	-0,12 (0,03)***
Desempeño (ref. Bajo)		
Medio-Bajo	-0,001 (0,02)	0,003 (0,02)
Medio	0,01 (0,02)	0,003 (0,02)
Alto	0,03 (0,03)	0,02 (0,03)
Nivel educativo Padre	0,01 (0,01)	0,01 (0,01)
Prop. Hog. Monoparentales	0,11 (0,06)*	0,12 (0,06)*
Part. Consejo de Curso	0,06 (0,03)**	
Part. Apoderados	-0,04 (0,02)**	
Part. Estudiantes	0,04 (0,01)***	
Percep. Respeto Estudiantes	-0,05 (0,01)***	0,13 (0,10)
Constante	0,20 (0,10)*	
R2 Ajustado	0,104	0,076

Nota: Regla de decisión, $P < 0,1^$; $p < 0,05^{**}$; $P < 0,001^{***}$. Modelo no estandarizado. En las celdas se muestran los coeficientes de los estimadores. Entre paréntesis se muestra el error estándar.*

Uno de los hallazgos más significativos, como se muestra en la Tabla 1, es el efecto positivo y significativo que tiene la proporción de hogares monoparentales dentro del curso sobre la participación en manifestaciones. Este resultado podría interpretarse de diversas maneras. Por un lado, podría reflejar una mayor autonomía de los jóvenes en estos hogares, lo que les permitiría tomar decisiones más independientes sobre su participación política. Por otro lado, también podría ser indicativo de una mayor exposición a dificultades socioeconómicas, las cuales podrían motivar una participación más activa en movimientos de protesta.

La participación en el consejo de curso emerge como otro factor con un efecto positivo y significativo en la movilización estudiantil, según los resultados del Modelo 1. Este hallazgo es particularmente interesante, ya que sugiere que los espacios de participación democrática dentro de la escuela pueden actuar como catalizadores de la participación política más amplia. Al profundizar en este aspecto, encontramos que el componente específico "la Directiva de curso toma en cuenta las opiniones de los estudiantes del curso" es el que tiene un efecto positivo estadísticamente significativo ($p < 0,1$). Esto indica que no es solo la existencia de estos espacios lo que importa, sino la percepción de los estudiantes de que sus voces son realmente escuchadas y valoradas.

El nivel de participación escolar estudiantil también muestra un efecto positivo en la movilización, según se observa en la Tabla 1. Sin embargo, al desagregar esta variable, descubrimos que es específicamente la organización de debates dentro del aula de clases lo que tiene un efecto positivo significativo ($p < 0,05$). Este componente es quizás el indicador más directo de politización en el aula que tenemos en nuestro estudio, ya que se refiere explícitamente al desarrollo de debates sobre temas de interés público. Este hallazgo sugiere que la exposición a discusiones políticas en un entorno

educativo estructurado puede fomentar un mayor compromiso político fuera del aula.

Por otro lado, encontramos factores que parecen desincentivar la participación en manifestaciones. Como se muestra en la Tabla 1, la percepción de respeto dentro del establecimiento educativo muestra una influencia negativa y significativa en la movilización no convencional estudiantil. Este resultado es intrigante y merece una reflexión más profunda. Podría ser que un ambiente escolar percibido como respetuoso genere una mayor satisfacción con el estado actual de las cosas, reduciendo así la motivación para participar en protestas. Alternativamente, podría reflejar una cultura escolar que valora la conformidad y el orden por encima de la expresión de disenso.

De manera similar, el nivel de participación de los apoderados en actividades escolares también muestra un efecto negativo en la movilización estudiantil, según los resultados del Modelo 1. Este hallazgo podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría indicar que una mayor presencia parental en la vida escolar de los jóvenes se traduce en un mayor control sobre sus actividades, incluyendo su participación en manifestaciones. Por otro lado, podría reflejar que los estudiantes cuyos padres están más involucrados en la escuela tienen una experiencia educativa más positiva y, por lo tanto, menos motivos para protestar.

Es importante notar que estos resultados sobre la participación parental y la percepción de respeto podrían estar interrelacionados. Podríamos estar observando un efecto de refuerzo mutuo donde los valores de respeto y conformidad se transmiten tanto en el hogar como en la escuela. En hogares donde se fomenta el respeto a la autoridad y a las normas establecidas, es posible que estos valores se reflejen en una mayor participación de los padres en las actividades

escolares. A su vez, estas actitudes podrían ser reforzadas en un ambiente escolar que valora y promueve el respeto mutuo.

Nuestros hallazgos también arrojan luz sobre el papel de la politización en el aula. El hecho de que la organización de debates sobre temas de interés público tenga un efecto positivo en la participación en manifestaciones sugiere que la exposición a discusiones políticas en un entorno educativo puede fomentar un mayor compromiso cívico. Esto plantea preguntas interesantes sobre el papel de la educación cívica y política en las escuelas. ¿Deberían las escuelas fomentar más activamente estos debates? ¿Cómo se puede equilibrar esto con la necesidad de mantener un ambiente de respeto y orden?

Es importante señalar que nuestros resultados deben interpretarse con cautela. La participación en manifestaciones es un fenómeno complejo influenciado por una multitud de factores, muchos de los cuales pueden estar fuera del alcance de nuestro estudio. Además, nuestra medida de participación en manifestaciones, basada en las diferencias de asistencia escolar, es una aproximación y puede estar sujeta a otras influencias no relacionadas con la participación política.

A pesar de estas limitaciones, nuestros hallazgos proporcionan perspectivas valiosas sobre los factores que influyen en la participación política no convencional de los jóvenes en Chile. Sugieren que tanto el entorno familiar como el escolar juegan papeles cruciales, a veces complementarios y a veces contradictorios, en la formación de las actitudes y comportamientos políticos de los estudiantes.

Estos resultados tienen implicaciones importantes para la política educativa y la promoción de la participación cívica entre los jóvenes. Sugieren que fomentar espacios de debate y participación democrática en las escuelas puede ser una vía efectiva para promover

el compromiso político. Al mismo tiempo, plantean preguntas sobre cómo equilibrar la promoción del respeto y el orden con la necesidad de fomentar una ciudadanía activa y crítica.

En última instancia, nuestros hallazgos subrayan la complejidad del proceso de socialización política de los jóvenes. Muestran que la participación política no convencional, como las manifestaciones, no puede entenderse simplemente como un acto de rebeldía juvenil, sino como el resultado de un proceso complejo de formación cívica influenciado por múltiples factores del entorno familiar y escolar.

¿Colegio versus familia?

Los resultados de nuestro estudio arrojan luz sobre la compleja dinámica de la socialización política de los jóvenes en Chile, particularmente en el contexto de las manifestaciones de octubre de 2019. Nuestros hallazgos sugieren que, durante la adolescencia, los jóvenes se ven influenciados por la familia y la escuela en medidas prácticamente equivalentes, lo que puede generar tanto sinergias como tensiones en el proceso de formación política.

Un aspecto crucial que emerge de nuestro análisis es el papel diferenciado que parecen jugar estos dos agentes socializadores principales. Por un lado, la familia parece ser el principal vehículo de transmisión de valores políticos y sociales fundamentales. Esto se refleja en nuestros resultados sobre la influencia de la participación de los apoderados en las actividades escolares y la estructura familiar (representada por la proporción de hogares monoparentales). Por otro lado, la escuela emerge como un espacio crucial para la transmisión de información política y, más importante aún, como un laboratorio para la práctica de la participación democrática.

La existencia de un currículo estandarizado plantea la posibilidad de que estemos presenciando un traspaso gradual de ciertas funciones socializadoras de los padres a las escuelas. En este escenario, las instituciones educativas podrían estar convirtiéndose en las principales influencias políticas de la juventud, no solo a través de las enseñanzas políticas explícitas del currículo, sino también mediante el ambiente escolar y las prácticas pedagógicas implícitas.

Este posible desplazamiento de la influencia socializadora hacia las escuelas tiene implicaciones profundas que merecen una reflexión cuidadosa. Si bien un currículo estandarizado podría contribuir a una base común de conocimientos y valores cívicos, es crucial que este proceso no se convierta en un adoctrinamiento que socave los valores tradicionales y el respeto por las instituciones establecidas.

Nuestros resultados sobre la influencia positiva de los debates en clase y la participación en el consejo de curso en la propensión a participar en manifestaciones plantean un desafío importante. Si bien es valioso fomentar el pensamiento crítico y la participación, debemos ser cautelosos para que estos espacios no se conviertan en incubadoras de disidencia injustificada o de rechazo a la autoridad legítima. Es fundamental que las escuelas cultiven un ambiente de respeto, orden y adhesión a las normas establecidas, valores que son la base de una sociedad estable y próspera.

Por último, es crucial no confundir esta tendencia con una justificación para formas de expresión política que puedan ser disruptivas o incluso destructivas para el tejido social. A pesar de que incentivaron la participación de los jóvenes en Chile, las manifestaciones de octubre de 2019 pusieron de manifiesto los riesgos que puede llegar a presentar una participación política no canalizada adecuadamente.

Conclusiones

Los resultados obtenidos sugieren que, durante la adolescencia, los jóvenes se ven influenciados por la familia y la escuela prácticamente en la misma medida, lo que puede generar conflictos entre los agentes socializadores y sus enseñanzas cuando estos discrepan, o bien dar paso a instancias de reforzamiento de lo aprendido cuando dichas enseñanzas coinciden.

Basándose en los resultados obtenidos, y en línea con lo observado en casos como la India y Estados Unidos, podría pensarse que la familia transmite valores políticos y sociales, mientras que la escuela transmite información política y ofrece instancias de participación en las que se refuerzan los valores aprendidos en casa. De cumplirse esto, y cuando además se toma en cuenta que Chile posee un currículum escolar único, se podría estar ante un traspaso de ciertas funciones socializadoras de los padres a las escuelas, convirtiéndose estas últimas en las principales influencias políticas de la juventud, a través de las enseñanzas políticas implícitas (ambiente escolar) y explícitas (currículum) que se estén dando en ellas. Si esto sucede, es necesario considerar las implicancias que ello podría tener en el pluralismo político de la juventud chilena, la cual estaría siendo principalmente influenciada por las escuelas, sus planes de estudio y sus prácticas educativas.

Más allá de las causas que explican la desafección a formas tradicionales de participación por parte de jóvenes (ya expresadas durante su estancia en educación media), es importante recalcar que ello no implicaría que los jóvenes no estén interesados en la política, sino que buscan formas alternativas para participar. Por ello, es necesario aprovechar este interés y conducirlo, así como darles espacios de participación más formales. De esta forma, podremos construir generaciones menos apáticas hacia la política en general, y

asegurarnos de que la democracia siga siendo algo en lo que todos puedan verse representados.

REFERENCIAS

- Andolina, M. W., Jenkins, K., Zukin, C. y Keeter, S. (2003). "Habits from home, lessons from school: Influences on youth civic engagement". *PS: Political Science & Politics*, 36(2), 275-280.
- Castillo, A. M. J. (2000). "Familia y socialización política. La transmisión de orientaciones ideológicas en el seno de la familia española". *Reis*, 92, 71-92.
- Denver, D. y Hands, G. (1990). "Does studying politics make a difference? The political knowledge, attitudes and perceptions of school students". *British Journal of Political Science*, 20(2), 263-279.
- Easton, D. (1968). "The theoretical relevance of political socialization". *Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique*, 1(2), 125-146.
- Ehman, L. H. (1980). "Change in high school students' political attitudes as a function of social studies classroom climate". *American Educational Research Journal*, 17(2), 253-265.
- Gerlach, V. (2020). "Tan cerca, tan lejos". *Cuadernos Digitales Injuv: Juventudes de Chile y El Estallido Social*, 6-8.
- Gutmann, A. (1999). "Democratic education" (ed. rev.). Princeton University Press.
- Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). (2018). "9na Encuesta Nacional de Juventud 2018".
- Koskimaa, V. y Rapeli, L. (2015). "Political socialization and political interest: The role of school reassessed". *Journal of Political Science Education*, 11(2), 141-156.
- Michalski, P., Marchlewska, M., Furman, A., Szczepańska, D., Panayiotou, O., Molenda, Z. y Górska, P. (2023). "To advise and scrutinize the government?"

Capítulo 4: La Aulas

Two types of political knowledge, political trust and unconventional participation”. *Current Psychology*, 42(14), 12104-12117.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2017). “Diagnóstico sobre la participación electoral en Chile”.

Rivera-Aguilera, G., Imas, M. y Jiménez-Díaz, L. (2021). “Jóvenes, multitud y estallido social en Chile”. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 19(2), 230-252.

Sandoval Moya, J. y Hatibovic Díaz, F. (2010). “Socialización política y juventud: el caso de las trayectorias ciudadanas de los estudiantes universitarios de la región de Valparaíso”. *Última década*, 18(32), 11-36.

Somma, N. y Mackenna, B. (2020). “El estallido social, la juventud, las calles y las urnas”. *Cuadernos Digitales Injuv: Juventudes de Chile y El Estallido Social*, 9-12.

Stockemer, D. (2014). “What drives unconventional political participation? A two level study”. *The Social Science Journal*, 51(2), 201-211.

Willeck, C. y Mendelberg, T. (2022). “Education and political participation”. *Annual Review of Political Science*, 25(1), 89-110.

LA ATROFIA

EL OASIS ERA UN ESPEJISMO²⁷

Por Pablo Paniagua

Resumen

A cinco años del estallido social del 18-O, la evidencia económica desafía las narrativas predominantes sobre sus causas. La tesis de la desigualdad como motor principal del malestar se desmorona ante los datos: Chile ha experimentado una disminución constante en sus índices de desigualdad desde 1990. El verdadero catalizador parece ser una profunda atrofia de nuestra modernización, manifestada en una década de desaceleración económica sin precedentes. Esta "década perdida" (2014-2024) ha visto el crecimiento más bajo en 30 años, coincidiendo con un estancamiento salarial que ha frustrado las expectativas de la clase media. El contraste entre el rápido progreso de 1990-2010 y el posterior declive ha exacerbado la percepción de malestar. Mientras algunos argumentan que el estallido es producto del éxito de nuestra modernización, la evidencia sugiere lo contrario: es el resultado de un proceso modernizador truncado. Esta atrofia, más que las contradicciones inherentes al capitalismo, explica el fenómeno del 18-O, desafiándonos a repensar nuestras estrategias de desarrollo y a abordar las raíces económicas del malestar social.

²⁷ El presente ensayo se inspira en el libro *Atrofia: nuestra encrucijada y el desafío de la modernización*, publicado por el autor en el 2021. Agradezco además al economista Nicolás Durán por sus comentarios y edición del texto.

Introducción

Se cumplen cinco años desde el estallido social del 18 de octubre de 2019, cuyos efectos aún repercuten en lo político, lo constitucional y en la degradación del estado de derecho. Retrospectivamente, se ha escrito mucho al respecto y diversos intelectuales han analizado el fenómeno desde distintas perspectivas, pero pocos lo han hecho desde la economía política y con evidencia empírica. No se ha enfatizado suficientemente en los aspectos económicos del malestar ni en la evidencia que cuestiona muchas de las tesis comunes sobre el estallido social. Para abordar estas deficiencias en el debate público, he contribuido con el libro "Atrofia: Nuestra encrucijada y el desafío de la modernización" (Paniagua, 2021), sobre el cual reflexionaré en este ensayo.

A pesar de aquel derrame de tinta y de los análisis hechos para explicar el estallido, pocos han puesto énfasis en el real proceso de deterioro del bienestar social y económico que han experimentado muchos chilenos en los últimos años y mucho antes del 2019. Esto es lamentable, ya que es probable que el malestar y la furia que se desbordaron en octubre del 2019 estén muy relacionados con este proceso de deterioro del bienestar en Chile; fenómeno al que yo denomino como "atrofia" de nuestra modernización. Claramente, argumentar que la crisis del 2019 es solo producto de una "atrofia económica" y de un "estancamiento de nuestra modernización" resultaría reduccionista y equivocado; fenómenos como lo ocurrido en el 2019 son sin duda multicausales y tienen orígenes en distintas esferas como en la política, en el sistema electoral, en lo social, en lo ideológico, etcétera. Sin embargo, a la luz de la evidencia disponible, no me cabe duda de que la atrofia económica fue uno de los aspectos

principales en generar las condiciones que condujeron al estallido social²⁸.

En este ensayo examinaremos dos elementos claves y contrastantes del debate en torno al estallido: primero, pondré en duda una de las tesis más conocidas –y uno de los mitos más errados– respecto al malestar social: que el origen de la crisis se encuentra en la desigualdad económica. Segundo, trataré de presentar una tesis alternativa relacionada con una crisis relativa de bienestar, producto de la atrofia de nuestra modernización y de una desaceleración económica sin precedentes, y no, como creen algunos (véase Peña, 2020a), producto de su gran éxito. De esta forma, podremos notar cómo el famoso “oasis” del que se hablaba en el 2019, era en realidad un mero “espejismo”, al menos a nivel económico.

El mito de la desigualdad económica

La tesis más mencionada después del 18-O es que Chile sería el país más desigual de Latinoamérica y uno de los más desiguales del mundo, donde la desigualdad económica sería tan brutal que condujo a muchos chilenos a rebelarse contra un sistema que la exacerbaba. Esta tesis carece de veracidad por varios motivos.

Al analizar la evolución de la desigualdad económica en Chile, se observa que desde 1990 en adelante, muchos índices de desigualdad han disminuido bajo distintas mediciones. Tanto el coeficiente de Gini

²⁸ Este proceso de “atrofia” es un fenómeno de “deterioro del bienestar” y, por ende, *va mucho más allá* del simple factor de tasas de crecimiento económico. Mi tesis respecto a la crisis ocurrida en el 2019 es amplia y abarca temas tales como: lo macroeconómico, la movilidad social, salarios relativos, ausencia de oportunidades en el mercado laboral y expectativas no cumplidas de la educación superior, fallas del Estado en la provisión de bienes públicos, etc. Por motivos de espacio me concentro aquí solo en los aspectos macroeconómicos.

como el coeficiente de Palma han mostrado una tendencia a la baja durante el proceso de modernización chileno, como se puede ver en el Cuadro 5-1.

Cuadro 5-1: Desigualdad de ingresos en Chile, 1990-2015

Año	Gini	Palma D10/(D4-D1)	Razón quintiles Q5/Q1	% Pobreza de ingresos	% Salario mujer/hombre
1990	52,1	3,58	14,8	68	76,9
1996	52,2	3,61	15,2	42,1	80,9
2000	54,9	4,17	17,5	36	84,8
2003	52,8	3,72	15,3	35,4	84,6
2006	50,4	3,25	13,3	29,1	88
2009	50	3,16	12,8	25,3	84,3
2011	49,1	3,01	12,2	22,4	86,4
2013	48,8	2,96	11,6	14,4	84,6
2015	47,6	2,78	10,8	11,7	84,4

Nota: Datos de PNUD (2017). Desiguales, p. 21.

Además, diversos estudios y evidencia empírica sobre la desigualdad económica en Chile muestran que tanto la desigualdad como la concentración de la riqueza no han aumentado significativamente en estos últimos 30 años, sino que más bien han disminuido levemente, mejorando la mayoría de los índices de desigualdad en comparación con los de los años 1980 (ECLAC, 2017; Flores, et al., 2019; Paniagua, 2021; Peña, 2020b; PNUD, 2017, 2019; Sapelli, 2016; Urzúa, 2018).

Complementariamente, un estudio realizado por el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés (2018) señala que el modelo chileno ha mejorado las oportunidades económicas y el bienestar de manera

transversal, beneficiando especialmente a los sectores menos favorecidos. Valdés estimó que, entre 1990 y 2015, el 10% más pobre de la población incrementó sus ingresos en un 439%, el 20% más pobre en un 437%, mientras que el 10% más rico lo hizo solo en un 208%. Es decir, la mejora en el bienestar económico en Chile se expandió a todos los sectores sociales, pero se repartió proporcionalmente más hacia los sectores medios y más pobres del país. Los que más se beneficiaron (relativamente) de la modernización chilena fueron los estratos menos favorecidos, al ver sus ingresos crecer mucho más rápido que los de los ricos.

Por último, a nivel comparado en Latinoamérica, Chile se ubica dentro del promedio de desigualdad de la región, mostrando una disminución de la desigualdad y pasando de ser uno de los países más desiguales de la región a inicios de los años 90, a estar hoy dentro de la media regional. Si examinamos la evidencia, vemos que Chile no es necesariamente más desigual que Brasil, Paraguay, Colombia, Bolivia o Ecuador, pero sí más desigual que Argentina y Uruguay. Por lo tanto, si la desigualdad económica fuera la causa principal, el continente entero debería estar sumido en revueltas violentas. Como bien reconoce Carlos Peña (2020a), el problema fundamental de dicha tesis maximalista de la desigualdad es simplemente que no coincide de ninguna manera con los hechos históricos ni comparados de la real desigualdad en Chile, ni tampoco con su disminución en el tiempo. Este no es el lugar para poder explorar el debate de la desigualdad en Chile en profundidad, pero basta con observar algunos datos elocuentes:

Primero, el informe "Desiguales" del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2017 identificó que la desigualdad económica en Chile había disminuido sistemáticamente por más de dos décadas. Otros estudios llegaron a conclusiones similares (PNUD 2019; Sapelli 2016).

Segundo, al comparar la desigualdad generada solo por el mercado, es decir, aquella producida por ingresos de salarios y rentas antes de impuestos y transferencias del Estado, encontramos que la desigualdad de mercado en Chile es igual a la de Finlandia y Francia, e incluso menor que la del Reino Unido, España y Alemania. Esto sugiere que el problema radica más en nuestro sistema tributario y en nuestras políticas fiscales y públicas que en la modernización capitalista.

Tercero, cuando comparamos la desigualdad económica de Chile con el resto de los países de América Latina, basándonos en el coeficiente de Gini y otras formas de medición, la desigualdad en Chile se ubica aproximadamente en la mitad de la tabla de los países sudamericanos. En síntesis, ni tan mal ni tan bien, pero mejorando leve y persistentemente en el tiempo.

Con todo lo anterior solo busco evidenciar que, si fuese sólo por la desigualdad económica como factor que explica el malestar social en Chile, entonces la mitad del continente tendría que estar sumido en protestas y en violencia. Ilustrativo en este sentido son los casos de Indonesia, India, México, Costa Rica y Turquía, países que han tenido procesos modernizadores industriales o capitalistas similares al de Chile, con décadas de marcada aceleración económica entre 1990-2010 aproximadamente, pero que lamentablemente, al igual que Chile, han sido bastante incapaces de reducir drásticamente sus índices de desigualdad económica. No obstante, y a pesar de las similitudes en desigualdad y desempeño económico, en ninguno de estos otros casos hemos visto procesos de revolución social o fenómenos violentos de ‘malestar post-modernizador’ de la forma que se evidenció en Chile.

En síntesis, esto sugiere, prima facie, que la tesis de que la desigualdad económica explicaría el fenómeno de octubre es errada y que

simplemente no coincide ni con la evidencia observada en Chile y en el mundo, ni con los datos analizados por la gran parte de las organizaciones mundiales para el desarrollo. Todo esto nos lleva a concluir que es errado creer que Chile es el país más desigual de la región o del mundo, y que sería la desigualdad el motivo fundamental de nuestra crisis actual. En simple y como ya lo advertía Voltaire: “No es la desigualdad la verdadera tragedia, sino la dependencia”.

Una crisis de bienestar relativa

Visto que el mito más polémico en torno a las movilizaciones de 2019 queda refutado por la evidencia, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿qué podría explicar entonces las causas subyacentes a nuestra crisis social? Una vez despojados de aquellos falaces argumentos con relación al malestar, podemos poner finalmente foco en la evidencia económica que sugiere que lo ocurrido en octubre del 2019 estuvo fuertemente relacionado con un importante deterioro del bienestar social y económico de los chilenos desde el 2014 en adelante.

El octubre chileno ocurrió en paralelo a la peor década de desempeño económico que ha tenido Chile en los últimos treinta años. El periodo 2014-2024 es conocido hoy como la "década perdida" en materia de crecimiento económico para Chile (Claro y Sanhueza, 2023). La época dorada de nuestro crecimiento (1990-1999) ocurrió hace más de dos décadas, y el país lleva años creciendo muy por debajo de lo necesario para sustentar un proceso modernizador funcionante. El promedio de crecimiento económico anual hasta el 2012 fue de un 5,2% y desde entonces ha disminuido sostenidamente. Esta última década (2010-2019) ha sido el decenio con el peor crecimiento económico promedio (3,3%) desde la década de 1970 (2,5%); una desaceleración económica considerable.

Así las cosas, podemos advertir una contradicción profunda en la modernización chilena: un acelerado proceso de modernización que duró aproximadamente 20-25 años (1985-2011), seguido de un profundo proceso de atrofia de dicha modernización y de una marcada desaceleración económica. De hecho, los datos muestran que, mientras en la década de los noventa del siglo XX Chile crecía a más del doble que la economía mundial (2,2 veces el crecimiento de la economía mundial), luego, los siguientes quince años (2000-2015), el país sacó el pie del acelerador económico y empezó a crecer solo un 70% más rápido que el resto del mundo; finalmente, para el periodo 2015-2021 bajamos otro escalón más, creciendo apenas a la mitad que la economía mundial (solo 0,6 veces el crecimiento mundial). En simple, en tres décadas pasamos de ser los “jaguars de Latinoamérica” –con un proceso de modernización acelerado sin precedentes– a ser un país polarizado y atrofiado, que crece apenas a la mitad de velocidad que el resto del mundo. Es difícil creer que nuestra crisis no tenga relación directa con esta crisis relativa de bienestar.

Dicho proceso de desaceleración económica evidenciado en la última década se hace aún más evidente cuando comparamos, no solo el desempeño entre distintas décadas, sino también durante periodos económicos específicos, que nos permiten medir en el tiempo y capturar mejor la desaceleración ocurrida en distintos periodos de nuestra modernización. Esto se puede observar con más detalle en el Cuadro 5-2.

Este mal desempeño económico coincide además con el fin del ciclo del “boom de los commodities” (2000-2015 aproximadamente) que sostenía el crecimiento de la mayoría de los países de América Latina. No es casualidad que el fin del boom económico en el continente coincida con el hecho de que en 2018-2019 hubiera cerca de una decena de países latinoamericanos con protestas y manifestaciones

violentas. Es difícil creer que lo ocurrido en Chile no sea también parte de una convergencia natural a dicho proceso de deterioro del bienestar ocurrido en el continente.

Cuadro 5-2: Tasas de crecimiento promedio en Chile por periodos

Períodos	Crecimiento PIB Real % promedio	Crecimiento PIB Per Cápita % promedio
1970-1974	1,52%	-0,1%
1985-2000	6,22%	4,64%
2001-2013	4,46%	3,37%
2014-2019	2,00%	0,72%

Nota: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial.

Con todo, la evidencia empírica sugiere que la gran desaceleración económica que experimenta Chile hoy se empezó a manifestar desde el 2014 en adelante, lo que sugiere que dicha atrofia tiene mucho más que ver con la política interna, que con factores exógenos como el fin del “boom de los commodities” (Toni et al., 2024). En específico, diversos estudios sugieren que este periodo 2014-2024, conocido como la “década perdida”, tiene dos factores catalizadores: primero, las reformas económicas y políticas realizadas durante el 2014 (Toni et al., 2024) y segundo, una caída constante y sistemática de Chile en los rankings mundiales de competitividad y de libertad económica (Paniagua y Órdenes, 2022).

¿Éxito o fracaso de la modernización chilena?

Como hemos visto, se ha tratado de sobre manera de dar una interpretación normativa o una justificación ex post tanto política como ideológica al fenómeno social vivido hace cinco años, sin atender entonces: ni a la evidencia empírica y económica que falsifica aquellos

argumentos, ni a los elementos político-económicos que podrían explicarlo. En vista a la evidente pobreza del debate en torno al 18-O, es que el libro de Carlos Peña (2020a) *Pensar el Malestar* y su ensayo complementario publicado en el Centro de Estudios Públicos (2020b) “La Revolución Inhállable” son sin duda relevantes contribuciones para tratar de elevar el debate, desmitificar ciertas ideas erróneas entorno a la desigualdad; y, así entones, tratar de conjeturar ciertas causas que podrían explicar, o que subyacen a, los sucesos ocurridos en Chile. En esta sección simplemente trataré de esbozar una reflexión crítica en torno a una de las ideas centrales de la tesis de Peña; a saber, que la revolución “inhállable” ocurrida en Chile hace ya cinco años atrás, es el producto de “las contradicciones de la sociedad industrial”, y el resultado involuntario del éxito de un rápido proceso de modernización.

Una reinterpretación del 18-O es la que propone Peña (2020b) en su ensayo del CEP, quien argumenta que, lo que habría pasado en Chile sería una típica paradoja de la modernidad capitalista. Entonces, esto sería, según el rector, un fenómeno para nada nuevo, sino que más bien bastante común en aquellos países de corte demócrata-liberal que se modernizan rápidamente. Según Peña, “el fenómeno de octubre en Chile no es raro ni sorprendente en una sociedad que ha experimentado un rápido proceso de modernización”. Siguiendo a Tocqueville, este señala además que “la desigualdad (...) hierde más en una sociedad cuyo bienestar se incrementa”. Si bien esta tesis es plausible —y en parte hasta parcialmente correcta—, creo que nos otorga un cierto grado de complacencia que puede resultar contraproducente y hasta dañino para poder resolver nuestros problemas sociales y económicos de largo aliento y que no deberían ser ignorados frente a tesis de carácter más generales y abstractas como la enarbolada por el rector.

Siguiendo a Raymond Aron (1968), Peña argumenta que lo vivido en Chile es casi inevitable o predecible debido a que "las sociedades que experimentan rápidos procesos de modernización configuran una inconsistencia entre la racionalización técnica indispensable para promover el bienestar con la subjetivación que inunda el mundo de la vida". Sostiene que el fenómeno chileno sería similar al de mayo de 1968 en Francia, como producto del éxito y las contradicciones de la sociedad industrial.

De esta forma, se podría apresuradamente interpretar el malestar que se ha hecho manifiesto en Chile, como producto (¿casi inevitable?) de las tensiones de la modernidad capitalista, de sus éxitos y de las contradicciones —que ya advertía Max Weber (1994) con las tensiones de la "jaula de hierro"— de la sociedad industrial organizada bajo la racionalidad técnica. Dicho en simple, el fenómeno de octubre pareciera ser, según Peña, en parte un síntoma no deseado del éxito de la modernización capitalista en Chile, más que la consecuencia negativa de que dicho proceso haya quedado bastante inconcluso, truncado y desarrollado finalmente de manera insatisfactoria, como argumento a lo largo de mi libro (Paniagua, 2021). La tesis de Peña (2020a) es que lo ocurrido en Chile en el 18-O pareciera ser producto del éxito de la modernización chilena más que el producto de que dicho proceso modernizador haya quedado truncado, que es la tesis que el autor de este ensayo defiende (véase Paniagua, 2021). No obstante, dicha explicación de Peña del fenómeno de octubre presenta algunos matices o interrogantes que merecen ser consideradas.

No está claro qué determina la magnitud o intensidad de las "tensiones de la modernidad" y cómo estas se expresan en la población. Si estas tensiones ocurriesen siempre de forma intensa y directamente correlacionadas con los rápidos procesos de modernización, deberíamos haber visto procesos similares en países como Polonia, Costa Rica, Corea del Sur, Singapur, Tailandia o

Indonesia, que han experimentado altas tasas de crecimiento económico sostenidas por más de dos décadas.

Además, debemos reconocer que la época dorada del crecimiento económico en Chile (1990-1999) ocurrió hace más de dos décadas, y el país lleva años creciendo por debajo de lo necesario para sustentar un proceso de revolución modernizadora. Entre 2014 y 2019, con excepción de 2018, el PIB anual del país se situó siempre por debajo del 3%. Durante 2014-2017, la expansión promedio anual fue de 1,7%, y la tasa de crecimiento pre 18-O en 2019 seguía siendo pobre (2%). Cabe preguntarse: ¿cómo es posible que un proceso aparentemente detenido en 2014 generara un fenómeno social tan intenso en 2019?

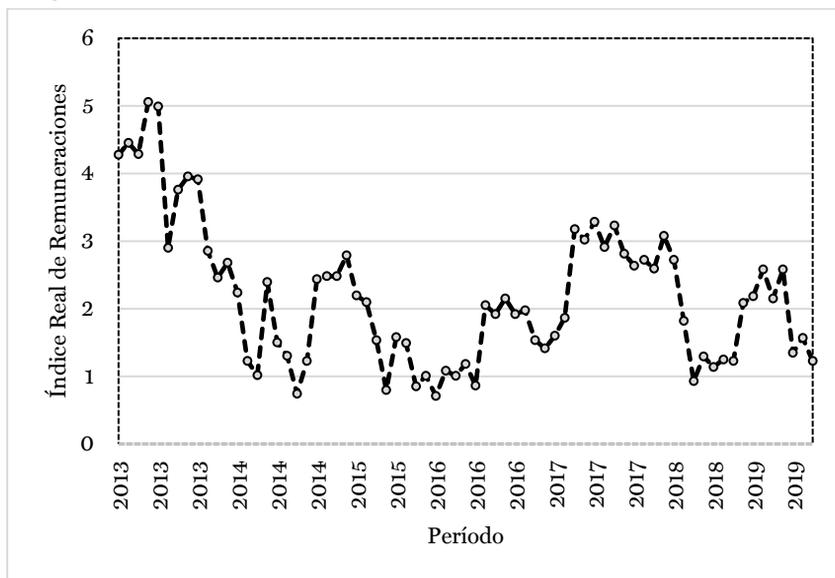
El estudio de Álvaro Donoso (2020) argumenta que la principal explicación del malestar social en Chile sería económica, señalando tres componentes clave: 1) el bajo crecimiento económico de la última década, 2) una caída dramática en las tasas de inversión desde 2014, y 3) una desaceleración notable en la demanda por trabajo entre 2014-2019 que deprimió los salarios reales de la clase media. Según Donoso, esto hizo que el crecimiento anual de las remuneraciones pasara de un 3,2% a un 0,4% después de 2014, equivalente a "cerrarle el horizonte a la gente, es cuasi estancamiento".

El Índice de Remuneraciones del INE ha mostrado descensos en los últimos años, pasando de 7,3% a mediados de 2014 a 4,4% en junio de 2017. Desde 2014, el índice muestra un claro estancamiento en las remuneraciones. Esto significa que el crecimiento de los salarios en Chile ha venido en declive desde mediados de 2014, producto de la desaceleración económica. Salarios planos y estancamiento salarial serían la nueva realidad que se ha instalado desde hace casi una década en la clase media y en los jóvenes universitarios.

Esta nueva realidad de estancamiento salarial colisiona con las antiguas expectativas de bienestar que tenían las clases medias y los

adultos-jóvenes educados de la población. El Índice Real de Remuneraciones empalmado evidencia una clara tendencia de deterioro y descenso de las remuneraciones reales, como se muestra en la Figura 3-1.

Figura 3-1: Índice Real de Remuneraciones Empalmado, Chile 2013-2019



Nota: Elaboración propia con datos desde Paniagua (2021).

Peña reconoce parcialmente este fenómeno cuando menciona que "la modernización capitalista legitima la desigualdad con la expansión creciente del consumo y la promesa meritocrática (...) Y ocurre que ambas formas de legitimar la desigualdad han fallado. La expansión del consumo y el bienestar se hizo notoriamente más lenta, y la meritocracia no ha logrado contar con estructuras que la hagan plausible". Sin embargo, no le atribuye suficiente peso causal a esta desaceleración del proceso modernizador al explicar el malestar subyacente en el país.

Difícilmente se podría argumentar que Chile ha vivido una década reciente de rápido proceso de modernización económica. Más bien, parece estar experimentando un proceso grave de desaceleración y estancamiento que ha impedido las posibilidades de mejora y bienestar de muchos chilenos. Llevamos casi una década sin ver "tiempos mejores", exacerbando los sentimientos de impotencia, frustración y una mayor vivencia subjetiva de la desigualdad.

Al comparar el proceso de modernización económica chileno con otros países, vemos que nuestro proceso duró no más de 20 años, mientras que, en países como Tailandia, Polonia, Malasia y Corea del Sur, estos procesos han durado más, con tasas de crecimiento y modernización más vigorosas, y algunos incluso continúan vigentes. Sin embargo, no vemos en estos otros procesos de modernización reciente un malestar social tan agudo y canalizado en violencia y protestas masivas como en Chile.

Pareciera ser que el rezago temporal entre el rápido proceso de modernización vivido en Chile entre 1990 y 2010, y el fenómeno de octubre del 2019 (diferencia de casi una década entre ambos), sugiere que, más que ser un producto de las contradicciones inherentes de la modernización, el fenómeno chileno pareciera ser más bien el producto de que dicho proceso se agotó o de que se perdió en el camino (el oasis era más bien un espejismo). De otra forma, sería difícil poder explicar por qué este fenómeno del malestar surge precisamente al final de la década en la cual el país experimenta el crecimiento económico promedio más bajo de los últimos 30 años y el tamaño del Estado más grande de las últimas tres décadas. El hecho de que el proceso de modernización chileno haya quedado a medio camino, inconcluso o interrumpido —producto de esta última década de pobres resultados económicos—, y la frustración generalizada que genera aquello, parecieran ser causas más inmediatas que explican el fenómeno.

Conclusiones

Finalmente, el malestar en Chile, que todavía parecíamos arrastrar en el 2024, pareciera ser no el producto “normal” y “poco sorprendente” de un exitoso proceso modernizador. Algo más profundo y complejo que las normales contradicciones de la sociedad industrial, identificadas por Aron, pareciera existir dentro de nuestro fenómeno del malestar. Es plausible que mi tesis de la desaceleración del proceso modernizador sea compatible con la tesis de Peña a través del fenómeno de las expectativas. Es decir, que el propio proceso modernizador chileno (1990-2010) haya elevado las expectativas con relación a la modernización local y el desarrollo económico, las cuales, sin embargo, parecieran haberse elevado más rápido que la real capacidad de respuesta del sistema político-económico nacional a las mismas. Dicho desajuste normativo se acentúa cuando el crecimiento económico se desacelera, abriendo paso a la anomia y a la incapacidad de nuestra estructura socioeconómica de proveer a los ciudadanos de lo necesario para lograr las metas modernizadoras. Es decir, el desajuste entre lo que promete nuestro sistema de desarrollo y lo que realmente se logró siguiéndolo en la última década. No obstante, la causa subyacente de todo esto sigue siendo el hecho innegable de que el proceso modernizador chileno lleva una década atrofiado. En retrospectiva, a cinco años del 18-O, creo que mi tesis desarrollada en el libro *Atrofia* sigue siendo aquella que mejor ha sobrevivido al paso del tiempo, al escrutinio científico y a la evidencia disponible.

En conclusión, nuestra crisis social pareciera ser el producto de una atrofia de nuestra modernización; una nefasta mezcla entre: 1) una fuerte desaceleración económica y salarial; 2) una grave desilusión producto del fin de la meritocracia y la expansión del bienestar relativo; y, finalmente, 3) un persistente deterioro de la confianza en las empresas nacionales y en el sistema educacional (los miserables abusos y falsas promesas). Así, más que ser una crisis o derrumbe del

supuesto “modelo neoliberal”, lo que estamos experimentando es una atrofia de la modernización: un fuerte agotamiento de nuestro fugaz progreso y las lamentables repercusiones de nuestra incapacidad de generar un rápido bienestar social generalizado. Con todo, el verdadero desafío para las próximas décadas pareciera estar entonces ya delineado. ¿Haremos oídos sordos a la evidencia?

REFERENCIAS

Aron, R. (1968). “La Revolution introuvable. Reflexions sur les evenements de mai”. Paris: Fayard.

CEDLAS. (2019). “Socio-Economic Database for Latin America and the Caribbean”. CEDLAS and The World Bank. Disponible en: <http://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/en/estadisticas/sedlac/estadisticas/#1496165297107-cedda6d3-6c7d>.

Claro, A., y Sanhueza, G. (2023). “Una década perdida”. *Mirada FEN - Revista Economía & Administración*, 184 (1): 22-31.

Dollar, D., y Kraay, K. (2002). “Growth is good for the poor. *Journal of Economic Growth*”, 7(1): 195-225.

Donoso, A. (2020). “Estallido social ¿Hastío con el ‘modelo’ o estrechez en el mercado laboral?” Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES), Serie Debates Públicos, No. 11, junio 2020.

ECLAC. (2017). “Social Panorama of Latin America 2016”. Santiago: United Nations Publication.

Flores, I., Sanhueza, C., Atria, J. y Mayer, R. (2019). “Top incomes in Chile: A historical perspective on income inequality, 1964-2017”. *The Review of Income and Wealth*, 66 (4): 850-874.

OECD. (2017). “Trust and public policy: How better governance can help rebuild public trust”. Paris: OECD Publishing.

Órdenes, P. y Paniagua, P. (2024). “La importancia de recuperar la libertad económica en Chile”. *Faro en Debate*, No. 25. Santiago: Faro UDD.

Paniagua, P. (2021). "Atrofia: nuestra encrucijada y el desafío de la modernización". Santiago: RIL Editores.

Paniagua, P. y Órdenes, P. (2022). "Libertad económica y desarrollo en Chile: ¿El fin de una modernización acelerada?" *Procesos de Mercado*, 19 (2): 95-132.

Peña, C. (2020a). "Pensar el malestar: Sobre la crisis de octubre y la cuestión constitucional". Santiago: Taurus.

_____. (2020b). "La revolución inhallable". *Estudios Públicos*, 158: 7-29.

PNUD. (2017). "Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile". Santiago: Uqbar.

PNUD. (2019). "Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI". Nueva York: PNUD.

Sapelli, C. (2016). "Chile: ¿más equitativo? Una mirada a la dinámica social del Chile de ayer, hoy y mañana". Santiago: Ediciones UC.

Toni, E., Paniagua, P., y Órdenes, P. (2024). "Policy changes and growth slowdown: Assessing the lost decade of the Latin American miracle". ArXiv, arXiv: 2407.02003. Doi: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.02003>.

Urzúa, S. (2018). "La batalla contra la desigualdad en Chile". Serie Informe Social. Santiago: Libertad y Desarrollo.

Valdés, R. (2018). "Growth-redistribution balance and shifting coalitions: A view from Chile". *Latin America Policy Journal*, Vol. 7: 28-34.

Weber, M. (1994). "Weber: Political writings". (Eds.) Lassman, P. y Speirs, R. Cambridge: Cambridge University Press.

SECCIÓN II:

Instituciones, Economía y Política.

LA HIPOCRESÍA

ELITES NO SINTIENTES Y EL FALSO DILEMA DE LA CUASI REFUNDACIÓN

Por Natalia González

Resumen

El mito del "pueblo versus la elite villana" se convirtió en el caballo de Troya de la izquierda radical para asaltar la institucionalidad chilena. En este ensayo, desentraño la madeja de acontecimientos que siguieron al estallido social de 2019, revelando cómo la violencia callejera fue hábilmente capitalizada para impulsar una agenda refundacional. Analizo la construcción del relato maniqueo que pintó a la derecha y la Concertación como villanos insensibles, deslegitimándolos como interlocutores válidos en la crisis. Expongo cómo este discurso permeó el diseño de la Convención Constitucional, marginando a los sectores políticos tradicionales. Cuestiono la eficacia de esta narrativa, recordando los desafíos no resueltos por el gobierno de la Nueva Mayoría y poniendo en tela de juicio la idea de que el reemplazo constitucional sea la panacea para los males sociales. Así, argumento que la elite tildada de "insensible" fue precisamente el artífice de la prosperidad chilena. Concluyo que los intentos de refundación constitucional, lejos de solucionar los problemas, han ahondado la brecha entre las elites y un pueblo que, en realidad, no parece anhelar respuestas constitucionales a sus preocupaciones cotidianas.

Introducción

El 18 de octubre de 2019 (“18O”) más de una veintena de estaciones de Metro fueron quemadas y vandalizadas de manera simultánea. Al día siguiente, el presidente de la República declaró el Estado de Emergencia y el toque de queda en la capital, y presentó una querrela por Ley de Seguridad Interior del Estado. A partir de ahí tuvieron lugar múltiples y simultáneos saqueos a supermercados, comercios y hoteles en la llamada zona cero de la capital y en diversas ciudades del país; incendios y destrucción intencional de edificios, monumentos, iglesias y mobiliario, público y privado; ataques violentos con bombas molotov y otros artefactos a comisarías; tomas de carreteras, caminos y calles, un sin número de barricadas desplegadas en diversas arterias de las principales ciudades del país y centenares de detenidos y carabineros lesionados.

A la violencia, que constituía el ethos de la protesta, se sumaron paros en varios puertos del país, la suspensión de vuelos comerciales y de recorridos de buses, de clases en varias comunas, además del funcionamiento interrumpido del comercio, tapeado para repeler ataques. Un escenario completamente inédito y alarmante, cuyas imágenes comenzaron a recorrer el mundo.

La prensa dio cuenta de la reacción de los actores políticos a las medidas adoptadas por el gobierno para el resguardo del orden público. El senador Jaime Quintana catalogó el Estado de Emergencia como “*propio de dictaduras*” (a pesar de estar contemplado en nuestra institucionalidad para la grave alteración del orden público). La entonces diputada Vallejo señaló que “*el gobierno declara estado de emergencia demostrando que no sabe responder ante legítimas demandas si no es con represión y restricción de derechos*”, y que se necesitaba diálogo (El Mercurio, 2019a).

La otrora abanderada presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, declaró que la única salida a las urgencias era el *“apoyo a la idea de los retiros de fondos de pensiones”*, que la entonces oposición pregonaba en la discusión de la reforma al sistema de pensiones del gobierno del presidente Piñera, basado en la *“desesperación de las familias para llegar a fin de mes, con el salario mínimo y debiendo gastar del orden de \$33.500 al mes solo en transporte”*. En su cuenta de X, antes Twitter, apoyaba la masiva evasión transmitiendo el mensaje de *#evasiónmasiva* en dicha red social (El Mercurio, 2019b).

El entonces diputado Boric, días antes, señaló, que *“todo acto de desobediencia civil es rechazado por quienes no quieren que las cosas cambien. La evasión masiva no se soluciona reprimiendo, sino que enfrentando el problema de fondo: el alto costo de la vida, los bajos salarios para la mayoría de los chilenos y chilenas y la desigualdad.”*²⁹. Las Juventudes Comunistas, en tanto, respaldaron las masivas evasiones.

El diputado Mulet sindicaba que el Presidente de la República *“no tiene autoridad moral para aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado a quién se pasare una barrera de metro”* (La Nación, 2019), el senador Letelier que *“la desobediencia civil de evasión masiva era expresión de indignación por la carestía, cesantía y abusos, mas no de delincuencia”* (El Mercurio, 2019b) y el entonces diputado Jackson culpaba al gobierno, el que en sus palabras *“llevo a transformar esto en un campo de batalla”* (El Mercurio, 2019b) -- a propósito de las declaraciones del Presidente Piñera en que se refirió a que estábamos en guerra contra un enemigo poderoso).

Un trabajo posterior da cuenta de la percepción de la izquierda radical respecto a cómo el gobierno enfrentaba las “movilizaciones”:

²⁹ Cuenta de “X” de Gabriel Boric, 16 de octubre de 2019.

“[C]omo un problema de violencia, incapaz de escuchar las demandas de sus pueblos y de empatizar con ellos, de asumir que la gestión política también es parte del problema. Han sido gobiernos ciegos y sordos, con malas gestiones e insensibilidad social. Sin ir más lejos, las protestas han puesto especial atención en las figuras políticas (con pancartas y memes), concentrando y encarnando el malestar en la máxima figura de poder público de un país, el presidente: “Piñera asesino”, “Piñera huele a dictadura (...)” (Jímenez-Yáñez, 2020: 951).

Durante las jornadas que siguieron al 18O empezó a hacerse evidente que el diagnóstico sobre el “malestar social” (como si el concepto fuera revelador de una demanda homogénea) servía a una parte relevante de políticos de izquierda y actores influyentes del debate público para justificar, o comprender, la violencia. Ello fue manifiesto en el caso del Frente Amplio y el Partido Comunista (hoy la principal alianza de gobierno), pero también en una facción más bien minoritaria, pero no irrelevante, de la Nueva Mayoría. Preocupante y lamentable oportunismo, con miras a un objetivo que trascendería con creces la satisfacción de demandas sociales.

Casi dos años después, cuando ya había comenzado a funcionar la Convención Constitucional, su primer acto oficial consistió en solicitar al Congreso Nacional la aprobación de los proyectos de ley sobre amnistía a los presos de la revuelta. El convencional del Frente Amplio, Fernando Atria, uno de los ideólogos de la tesis del reemplazo constitucional, sugirió en dicha oportunidad, que había una violencia buena y otra mala: *“La violencia de 2019 la podemos ver como algo que abrió la puerta a un proceso que hoy casi todos celebramos”* señalaba entonces. *“Y por eso los hechos constitutivos de delitos que se*

*realizaron el 2019 tenemos que mirarlos de un modo distinto y por eso creo que se justifica una decisión de indulto general o amnistía”.*³⁰

La izquierda condescendiente con la violencia no solo ponía en duda una de las bases fundamentales del Estado de derecho, el imperio de la ley, sino que dificultaba la gobernabilidad del mandato del presidente Piñera, a quien la izquierda radical comenzaba a sindicarse como poco apto para el desafío en ciernes y para garantizar la paz social.

De la urgencia social a la urgencia por reemplazar el modelo. El cauce constitucional del estallido.

El primer diagnóstico que se instaló tras el 18O era que el alza de las tarifas en el transporte público había actuado como un resumidero simbólico, gatillador y catártico, de un pueblo frustrado, que buscaba rebelarse frente los abusos (mayormente adjudicados a los privados) que causaban el “malestar”.

El “pueblo” había sido invisibilizado y pasado a llevar por la elite, poderosa y desconectada o indiferente a sus necesidades sociales y urgencias. Se instalaba el clivaje “pueblo” versus la elite. No está demás decir que el “pueblo” no puede ser comprendido como un conjunto homogéneo. Tampoco como uno con una voluntad natural. En realidad, el pueblo con el que se encontró la izquierda radical en 2019 era un conjunto de personas libres con demandas diversas y yuxtapuestas, que creció bajo el ethos de lo que Carlos Peña ha llamado la modernización capitalista³¹. Pero ello no importó.

³⁰ Radio Duna (2021) “Fernando Atria dice que la violencia que se vio este 18-O es diferente a la de 2019 ya que esa “abrió la puerta a un proceso que hoy casi todos celebramos”, 19 de octubre de 2021.

³¹ Declaración de Revolución Democrática en su cuenta de “X”. 19 de octubre de 2019.

Colaboró a esta tesis el que una semana después de que irrumpiera el violento estallido, un número relevante de capitalinos se uniera en una multitudinaria marcha pacífica, que colmó la principal arteria de la capital. Por cierto, dicha convocatoria reunió a personas con múltiples y diversos intereses y demandas de género, respeto a la diversidad y a las disidencias sexuales, causas ambientales, preocupación por el sobre endeudamiento, al movimiento No + AFP, anhelos de mejor convivencia y educacionales, entre otras, las que se encontraron, no obstante, en un acto con gran fuerza simbólica. A pesar de la heterogeneidad de sus causas, se instaló que ella representaba un respaldo masivo y contundente al diagnóstico general del malestar.

En ese contexto, el presidente Piñera convocó a todos los sectores, transversalmente, para enfrentar las demandas sociales y escuchar propuestas. Buscaba reformular su agenda legislativa y social para hacerse cargo de lo que aparecían como las causas más evidentes del malestar. Sin embargo, al mismo tiempo que se instaba a la unidad política para atender el malestar, los partidos de izquierda radical promovían deponer el Estado de Emergencia, que calificaban de represivo. Ninguna demanda social tenía posibilidad alguna de ser atendida si predominaba el caos y la violencia, pero el discurso imperante era otro.

Revolución Democrática, a través de su máxima autoridad, declaró que no iban a *“dialogar con el gobierno mientras éste tuviera la pistola sobre la mesa”*³² (aludiendo al Estado de Emergencia, contemplado en la Constitución). Beatriz Sánchez, advertía que el gobierno había *“renunciado a la democracia”* (a pesar de que el primer rol del Estado en una democracia constitucional es garantizar la seguridad y el orden público). Señalaba que, si el presidente *“no se sentía capaz, debía dar*

³² Diario La Tercera (2019) “Beatriz Sánchez y el Frente Amplio: “El gobierno renunció a la democracia (...) Nosotros estamos claramente con la gente”. 19 de octubre de 2019.

un paso al costado". Guillermo Tellier, por su parte, declaraba: "*Si él (presidente Piñera) está renunciando a gobernar, porque gobernar significa acoger las demandas de los ciudadanos y se escuda tras lo militares, mejor sería que dijera renunciara y llamara a nuevas elecciones*".³³

Con el correr de los días, el clivaje del "pueblo" versus elite comenzaba a tomar otro cariz. No era contra cualquier elite, sino que aquella en el gobierno, de derecha, y la elite económica. Esa elite, tildada de desconectada, empezaba a perfilarse como la villana, relato que fue reforzado, desde la izquierda, a través de las desafortunadas frases que días antes pronunciaron los ministros del área económica del gobierno del presidente Piñera,³⁴ y alocución del mandatario, conforme a la cual Chile era un oasis en América Latina³⁵.

Instalado aquello, el corolario fue que las insatisfacciones de las clases medias y vulnerables chilenas no podían reducirse a una cuestión de agenda social, aun cuando el término fuera utilizado en el más amplio de los sentidos. Era un problema de carácter estructural, causado por el modelo institucional y de desarrollo chileno, cuyos pilares estaban, ni más ni menos, que en la Constitución que esa elite villana, de

³³ Diario La Tercera (2019) "Presidente del Partido Comunista: Si el Presidente Piñera "no tiene capacidad de gobernar, lo mejor sería que renunciara y llamara a nuevas elecciones". 19 de octubre de 2019.

³⁴ La frase del Ministro Juan Andrés Fontaine fue: "*Alguien que sale más temprano y toma el metro a las 7 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy*", recogida en Diario La Tercera (2019) "Fontaine y su llamado a "madrugar" para ahorrar en el metro: "Preferiría haberlo dicho de una manera distinta". 18 de octubre de 2019.

Días antes el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, según da cuenta Radio Cooperativa (2019), hizo un llamado a "los románticos" a aprovechar la baja en el precio de las flores, cuyo valor descendió un 3,7 por ciento durante septiembre. Ello en el contexto en que celebraba la variación nula del IPC de ese mes, planteando que esa cifra se explicaba, "sin duda, por una combinación virtuosa entre crecimiento e inflación". 8 de octubre de 2019.

³⁵ Radio Cooperativa (2019) "Presidente Piñera: Chile es un verdadero oasis en una América Latina convulsionada". 9 de octubre de 2019.

derecha y economicista, había impuesto. A pesar de sus más de 250 reformas aprobadas en democracia por el Congreso Nacional, incluyendo la sustantiva reforma del presidente Lagos, la Carta Magna ya no solo era ilegítima, sino que la causa del malestar. La misma Constitución que, por años, académicos como Fernando Atria, habían instado con fuerza, pero sin éxito, reemplazar por una diametralmente opuesta en lo que al rol del Estado y la sociedad civil se refiere, entre otras dimensiones (Atria et al., 2013).

Así, de poco servirían los innumerables anuncios que, entre el 180 y el 12 de noviembre de 2019, realizó el gobierno en materia de política social para intentar aplacar la violenta protesta y las crecientes demandas de diversos sectores políticos, incluyendo a los de su propia coalición. En ellos, el presidente de la República presentó la Nueva Agenda Social, con un conjunto de medidas sobre pensiones, salud y medicamentos, ingreso mínimo, disminución de tarifas eléctricas, impuestos para los sectores de mayores ingresos, reducción de la dieta parlamentaria y plan de reconstrucción, entre otras. Previamente, había revertido el alza de los pasajes del transporte público, y dado relevantes señales políticas produciéndose cambios en las principales carteras ministeriales.

Mientras más fuerza y adhesión cobraba el diagnóstico de que el modelo era la causa del malestar, y crecía en dimensiones y magnitud la violencia (la destrucción era la ética y la estética de la protesta), más insatisfecha se manifestaba la oposición y la calle violenta con las soluciones de carácter social. Exigían adherir a su interpretación y demandaban otro desenlace y antídoto para aplacar el malestar: el reemplazo a la Constitución (Muñoz, 2021).

Cuán relacionada estaba la cuestión constitucional con los dolores de los chilenos fue disputado con poco éxito solo por un puñado de

personas, que no tuvieron eco pues pertenecían a esa elite insensible y cancelada.

La consigna “No son 30 pesos, son 30 años” dio cuenta así de la impugnación brutal y frontal al modelo de progreso chileno. Los logros de quienes habían administrado el país en ese periodo, y con mucho éxito – y que hasta el momento eran indudables (Dussailant, 2020) – eran desechados.

La izquierda fue exitosa en instalar que el problema era el “modelo”:

“Bajo el lema y hashtag #Chiledespertó, millones de personas en todo el país salieron a las calles a manifestar su inconformidad y desacuerdo con el trato que, durante décadas, los gobiernos de la concertación y la derecha, a través de sus políticas y programas, han vulnerado a las clases sociales más débiles, económicamente hablando; es decir, la clase media, la asalariada (...) en una sociedad donde todo se paga y todo se debe al mismo tiempo: educación, salud, vivienda, transporte, entre otros.” (Jímenez-Yañez, 2020: 950)

Fue tal la fuerza del cauce constitucional (apalancado fuertemente por la amenaza violenta a la institucionalidad) que no alcanzó a pasar un mes entre el “estallido social” y el anuncio efectuado por el presidente de la República, el 12 de noviembre de 2019, en que solicitó a los partidos políticos llegar a un Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución. Esa noche cerraba una de las jornadas más violentas vividas desde el 180, tras la paralización convocada por la mesa de Unidad Nacional. El mandatario junto con referirse a la grave alteración del orden público y a medidas que se adoptarían para reforzar la acción de las policías, llamó a:

“[T]odos los sectores a ser parte de la solución, convocando a todo el país a unirse en tres acuerdos nacionales: por la paz y contra la violencia; la justicia, para impulsar una agenda social hacia un Chile más justo, con igualdad de oportunidades y menos privilegios; y por una nueva Constitución en el marco de la institucionalidad democrática, pero con una clara y efectiva participación ciudadana, con un plebiscito ratificador para que los ciudadanos participen no solamente en la elaboración de esta nueva Constitución, sino que también tengan la última palabra en su aprobación y en la construcción del nuevo pacto social que Chile necesita”.

El relato constitucional satisfacía viejos anhelos en la izquierda, de reemplazo de la Carta Magna (no necesariamente los del pueblo)³⁶, pero suponía -o más grave aún supone todavía- que las constituciones políticas, en tanto pactos sociales, erigen o construyen a las sociedades. Pero las constituciones, en realidad, rigen y aplican a una sociedad preexistente. Así concebida, la propuesta de Constitución generada por la Convención Constitucional en 2022 y promovida por la elite política que hoy nos gobierna, no solo no conectó con el pueblo -heterogéneo- sino que, peor aún, lo invalidó, al no dar cuenta y menospreciar sus intereses individuales, legítimas aspiraciones y su heterogénea composición. La individualización, fenómeno que tanta crítica merece desde la izquierda y un sector de la derecha, quizá favorecida por el diseño constitucional actual, es un hecho social y sociológico y no constitucional, de manera que aun cuando ella hubiera sido reemplazada, no desaparece por ese solo hecho (Correa,

³⁶ Siguiendo datos entregados por la Encuesta del Centro de Estudios Públicos (Mayo 2019).

2020). Pero de ello no toma nota la izquierda y no es claro que tenga intenciones de hacerlo.

El objetivo no era solo el reemplazo del modelo: también borrar a la elite “economicista”

El objetivo planteado era derrocar el modelo, pero no solo el modelo, sino que, con él, a la “elite economicista”, “individualista” y “abusadora”, autora e impulsora de éste y del proyecto modernizador chileno ahora repudiado.

Por esos días, lamentablemente, parte de la derecha también cayó en el mismo relato *“La necesidad de que la clase política de este sector se preocupe de conocer a su propia sociedad. Pues conocer la realidad social no sólo es cuantificarla, medirla, objetivarla en datos, sino que detrás hay mucho sentido de subjetividad y de experiencias cotidianas concretas que ameritan ser tenidas en cuenta y que necesitan una mayor densidad comprensiva”* (Morales y Videla, 2024: 19). *“La inclinación del economicismo hacia una cultura del individualismo produce una concepción extremadamente reducida del individuo”* (Alvarado, 2019).

La crítica de este grupo, en todo caso, venía forjándose desde el primer gobierno del presidente Piñera. La celosa preocupación por el crecimiento económico, el bienestar que trae consigo y la creación de oportunidades, era catalogada de “neoliberal” o “economicista”, propio de una derecha liberal que todo lo subordinaba a criterios económicos, renunciando, según los críticos, a hacer política para hacerse cargo de las cuestiones sociales. Esa derecha habría dissociado la economía de la política, alienando a la segunda. Pero como bien explica Felipe Schwember (2020) ello es imposible pues esa relación -política y economía- no solo es natural, sino que es de carácter esencial. Como

los recursos son escasos, ante necesidades múltiples, crecientes y dinámicas, el cómo asignarlos no es solo una cuestión económica, sino que eminentemente política. Cualquiera sea la corriente política y su ideología, ellas intentan hacerse cargo de este dilema solo que con distintas herramientas y soluciones políticas y de política pública, afines a sus postulados.

Valentina Verbal (2020) describe bien el fenómeno, motivada por la reflexión de Schwember (2020): *“la idea —repetida hasta el hartazgo— de que la derecha chilena sería economicista, no se condice con los hechos.* Si bien la derecha del siglo XX propuso un proyecto de “modernización capitalista” (tesis de Sofía Correa), nunca defendió algo así como un “Estado mínimo”, o la primacía de la economía por sobre la política. Siempre creyó en un Estado en favor de los más necesitados, y en la inserción de la economía dentro de un proyecto más amplio:

“Tampoco es verdad que los Chicago Boys hayan sido responsables de un giro fundamental hacia la retirada casi completa del Estado. Todo lo contrario: El ladrillo, documento clave para ese grupo de economistas, propone una participación activa del Estado en las más diversas materias o políticas públicas, en particular referidas al combate a la pobreza. Políticas que, por lo demás, no fueron sino —al menos, en lo esencial— continuadas por los cuatro gobiernos de la Concertación. (...) Asimismo, también es un mito que la derecha de los últimos años, especialmente representada en los dos gobiernos de Sebastián Piñera, haya sido “neoliberal” o “minarquista”. Piñera no sólo ha aumentado ostensiblemente el tamaño del Estado —por ejemplo, mediante la creación de ministerios y servicios públicos—, sino que también ha impulsado una gran

cantidad de políticas sociales, que encaminan su política al Estado de bienestar.” (Schwember, 2020)

Pero el estallido no era momento para la evidencia y los argumentos. Menos para esta evidencia.

El clivaje del “pueblo versus una elite villana” se lleva al diseño de la Convención Constitucional.

El imaginario u utopía de un pueblo - homogéneo- en disputa con la elite, pero no cualquiera sino contra esa elite “económica, de derecha y poderosa”, a la que sumaban a la Concertación, se cristalizó posteriormente en las referencias a “las tres comunas” tras el plebiscito de entrada del primer proceso constitucional.

La hipótesis, ineficazmente disputada por los protagonistas de los sectores políticos y económicos aludidos, sirvió de sustento para la aprobación de las reformas constitucionales que, tras zanjarse el diseño inicial de la Convención Constitucional a fines de 2019, darían vida a un nuevo diseño de la instancia, en cuya integración sería evidente la falta de mediación (partidos políticos, menos aún los tradicionales) y la inspiración en mecanismos de democracia directa.

Pero no solo eso. Si ya estaba identificado el villano (la derecha y la Concertación), era evidente que carecía de legitimidad para participar de las soluciones a la crisis. Todo este sector quedaba desautorizado para enfrentar el desafío.

Así, la aspiración por mayor representatividad y conexión terminó paradójal (pero intencionadamente) en un diseño en el que en la integración de la Convención confluyeron un sinfín de individuos y múltiples minorías, que se incorporaban como integrantes

“independientes”³⁷ (tal vez sea más exacto decir que eran personas no militantes de partidos políticos, pero con claras agendas políticas e identitarias), bajo un intenso discurso anti-élite. También arribaron movimientos afines a la izquierda radical, además de un relevante número de escaños de reservados indígenas, de sensibilidad de izquierda y ultraizquierda, y un muy exiguo puñado de representantes de derecha y centro izquierda, que no alcanzaron si quiera el tercio de los integrantes de la Convención.

Desaparecía la despreciada “clase política de los 30 años” y emergía “otra” desde el pueblo (como la “Lista del Pueblo”), fuertemente apalancada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, mientras que buena parte del Partidos Socialista, el PPD, los Radicales y la Democracia Cristiana escondían la cabeza intentando identificarse con lo que habían creado, a pesar de que aquello quería dejarlos muy atrás.

En teoría, los sistemas institucionales deben buscar la mediación para asegurar que, en la formación de la voluntad política, todos los intereses legítimos sean considerados y que la acción estatal constituya entonces un adecuado equilibrio de dichos intereses (Correa, 2020). Pero como la derecha y la Concertación no eran consideradas representantes de intereses legítimos, el diseño simplemente las erradicó, contando con su lamentable aquiescencia en el Congreso Nacional al aprobarse las reformas que las harían desaparecer de la Convención. Se lograba el objetivo. La elite de derecha y de quienes habían sido sus “cómplices”, la Concertación, eran marginados cual pareas y, con ello, todo el electorado que representaban.

³⁷ De los 155 miembros de la Convención Constitucional, 103 no tenían militancia en la política tradicional.

Se consolidaba el relato maniqueo y excluyente, de villanos y héroes, que pocos años antes había instalado la presidenta Bachelet, en su segundo gobierno. Una elite sintiente y otra insensible, excluida.

¿Hay algo así como una elite, “sintiente”, con el monopolio para interpretar los dolores del “pueblo”? Conectar, en esa clave moralmente superior, con los anhelos del pueblo fue un fenómeno político que antecedió al estallido. Cabe recordar que la Nueva Mayoría asumió el poder en 2014 empapada de ese afán y promesa de conexión con el “pueblo” (traducida en la promesa de disminuir la desigualdad). Para ello, realizó profundos y estructurales cambios, de la mano de mayorías oficialistas en ambas cámaras. Las reformas que llevaron a cabo se plantearon desde la lógica de que conllevarían estabilidad y paz social. Pero ello no solo no llegó, como dio cuenta el estallido tan solo un año y medio después de que concluyera ese gobierno, sino que, en vez, ocurrió todo lo contrario.

Pero, además, el gobierno de la Nueva Mayoría, al que se incorporó el Partido Comunista, lo que no ocurría desde 1973, y en el cual se abrió camino el Frente Amplio en el Congreso, ejecutó con éxito el relato divisivo de la sociedad entre opresores y oprimidos.

Al mismo tiempo, el crecimiento económico dejó de ser una prioridad, más allá de declaraciones, como lo había sido en los gobiernos de la Concertación. En efecto, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, las tasas de crecimiento de la economía se desplomaron en comparación a la gestión de sus antecesores, incluso en comparación con su primer mandato³⁸. A ello se sumó la inmigración descontrolada e irregular que ingresó a Chile por esos años, presionando aún más los indicadores económicos y sociales, lo que se

³⁸ 1,8%, versus 5,4% en el primer gobierno del presidente Piñera, 3,5% en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, 4,8% en el gobierno del presidente Lagos, 5,5% en el del presidente Frei y 7,4% en el gobierno del presidente Aylwin. Fuente Clapes UC, 2024.

hizo patente en la vida cotidiana de los chilenos. Durante ese gobierno, continuó la violencia que se había apoderado de los liceos emblemáticos y bicentenario (que hace menos de una década habían sido un trampolín del mérito y de la movilidad social).

Los profundos y relevantes cambios en el ámbito educacional, en el sistema político-electoral, laboral y tributario, llevados a cabo por la presidenta Bachelet, profundizaron los desafíos, perjudicando al pueblo que decían interpretar. Y de ello fueron advertidos. Una y otra vez, académicos y profesionales, de diversas disciplinas, y miembros de la sociedad civil encendieron las alarmas sobre el impacto negativo de las reformas, las que, no obstante, se llevaron a cabo haciendo oídos sordos a las advertencias, consideradas “neoliberales”.

Durante esos años, se fue incubando un problema de expectativas en la población, que no encontraba un calce con la realidad, y fueron creciendo los niveles de insatisfacción.

Seis años después de la Nueva Mayoría, y durante el estallido, la misma elite de izquierda, más radicalizada, que había dejado al pueblo en una peor condición conforme a los indicadores, se arrogó la iniciativa exclusiva de comprenderlo e interpretarlo, únicamente, por medio de la refundación constitucional ¿Interpretaban al pueblo o canalizaban sus viejos y anhelados deseos?

Las problemáticas de entonces y actuales se deben a fenómenos políticos, sociales, económicos, de credibilidad y de confianza en las instituciones y de convivencia, entre otros. Explicarlas, así como los fenómenos que las visibilizan, simplemente a través de una sola hipótesis adolecería de arrogancia epistémica. Es posible que algunos de ellos puedan tener raíces constitucionales o relación con la cuestión de legitimidad de nuestra Constitución, pero de ahí no se colige, como ocurrió oportunamente durante el estallido, que ellos sean efecto o

consecuencia directa de disposiciones constitucionales o que se superen mediante la sustitución constitucional.

Menos aún, que sean adjudicables a una elite no sintiente, moralmente cancelada, que debe ser excluida del debate, como lo fue. Ello no solo es contrario y niega la libertad y diversidad presente en las sociedades democráticas, sino que, además, en el caso chileno, no se ajusta con la evidencia pues esa elite, cancelada, de los “30 años” fue justamente la que hizo de nuestro país y su “pueblo” el más próspero en su historia.

Más bien, como ha ocurrido en Chile, los ánimos revolucionarios que enarbolaron reemplazos constitucionales refundacionales contribuyeron a profundizar esos desafíos y han desconectado aún más a las elites con la población, que no busca, según parecieron revelar los plebiscitos de salida de los dos procesos constitucionales, refundaciones o respuestas de orden constitucional a sus problemas.

REFERENCIAS

Alvarado, C. (2019) “Primera *persona singular*. Reflexiones en torno al *individualismo*”, Santiago de Chile: Instituto de Estudios de la Sociedad.
Muñoz, S. (2021) “Estado de alerta: Entre el miedo y la esperanza”. Ediciones El Libero.

Atria, F., Larraín, G., Benavente, J., Couso, J., Joignant, A. (2013), “El Otro modelo. Del orden neoliberal al régimen de lo público”. Repositorio Universidad de Chile. Disponible en <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/171790>

Correa, R. (2020) “El Desafío Constitucional”, Intersecciones, Foros, Ideas y Democracia <https://www.intersecciones.org/foro/el-desafio-constitucional/>

Muñoz, S. (2021) “Estado de alerta: Entre el miedo y la esperanza”. Ediciones El Libero.

Schwember, F. (2020). “La derecha economicista no existe”. Diario Financiero. <https://www.df.cl/opinion/columnistas/la-derecha-economicista-no-existe>.

Dussailant, F. (2020) “¿Chile frágil? Propuestas para reducir el riesgo de grandes crisis”. En Ugalde, B., Schwember, F. y Verbal, V.(editores) “El Octubre Chileno, reflexiones sobre libertad y democracia”, Ediciones Democracia y Libertad.

Echeverría, F. (2021) “El rediseño de Chile. La crítica de Góngora a las planificaciones globales”, *Punto y coma* 4, pp. 40

El Mercurio, Cuerpo C (2019a) “De la comprensión al rechazo: las miradas sobre el impacto de las evasiones masivas”. 19 de octubre de 2019, pp. C7.

El Mercurio, Cuerpo C (2019b) “De la comprensión al rechazo: las miradas sobre el impacto de las evasiones masivas”. 19 de octubre de 2019, pp. C7.

CEP. (2019). “Encuesta del Centro de Estudios Públicos”: Mayo 2019.

Verbal, V. (2020). “La derecha economicista: Un mito histórico”. Nuevo Poder <https://www.nuevopoder.cl/la-derecha-economicista-un-mito-historico-valentina-verbal/>

Jiménez -Yañez C. (2020) “#Chiledespertó: causas del estallido social en Chile”. Revista Mexicana de Sociología, Scielo, Vol.82, No.4, pp. 949-957.

La Nación (2019) “Diputado Mulet: “El Presidente ha tenido en su vida varios episodios de evasiones”, 18 de octubre de 2019. <https://www.lanacion.cl/diputado-mulet-el-presidente-ha-tenido-en-su-vida-varios-episodios-de-evasiones/>

Morales, J. y Videla, M. “El Instituto de Estudios de la Sociedad, sus intelectuales y la revista *Punto y Coma*: una crítica a la derecha economicista y a la nueva izquierda en Chile”. Revista de Historia (Concepción), Scielo, N° 31 (2024), pp. 1-40.

LA LEGITIMIDAD

OCTUBRE COMO UNA DOBLE CRISIS

Por Rodrigo Pérez de Arce

Resumen

En este ensayo, se analiza la crisis de octubre de 2019 en Chile como una doble crisis de legitimidad, examinando tanto sus aspectos coyunturales como sus raíces más profundas. Identifico cuatro elementos claves que contribuyeron a la deslegitimación aguda: la ineficacia gubernamental, la falta de colaboración opositora, el desborde de la violencia y la incapacidad policial. Argumento que estos factores, combinados con una erosión preexistente de la confianza institucional, precipitaron una situación crítica que demandaba soluciones radicales. Para ello, observo las opciones disponibles, incluyendo el proceso constituyente, y reflexiono sobre la importancia crucial de la legitimidad política, sustentada tanto en justificaciones normativas como en resultados tangibles. Concluyo que, a pesar del aparente pesimismo, una comprensión profunda de las causas de la crisis podría orientar un camino hacia la recuperación institucional. Por lo anterior, se deben abordar no solo los síntomas inmediatos, sino también las dinámicas subyacentes de desconfianza y desconexión entre ciudadanía e instituciones. Solo mediante este entendimiento integral podremos desarrollar estrategias efectivas para reconstruir la legitimidad política y fortalecer la democracia chilena.

Introducción

Un aspecto llamativo en la forma en que se abordó la crisis de octubre de 2019 en Chile fue la decisión de iniciar un proceso de reemplazo constitucional. Esta medida, concebida como un medio para apaciguar las tensiones tras semanas de intensas protestas y episodios de violencia callejera sin precedentes desde el retorno a la democracia en 1990, no figuraba entre las prioridades manifiestas de la ciudadanía. Más aún, no se observa una relación directa entre el descontento y las soluciones que una nueva Constitución podría ofrecer, incluso si se considera un horizonte temporal mayor.

En este ensayo, exploraré algunos de los motivos que hicieron plausible la adopción de este camino en aquel entonces, particularmente al situar el problema en una crisis de legitimidad institucional anterior a octubre de 2019. Esta afirmación se comprenderá mejor a partir de una revisión de los antecedentes de violencia y la incapacidad para procesar políticamente aquel momento. Este proceso social no ocurrió en el vacío, sino que encuentra motivos en dinámicas anteriores. Con todo, en la crisis de octubre confluyen cuatro elementos que terminan generando una deslegitimación grave y generalizada: la reacción del gobierno, la táctica de la oposición, el desborde de las policías y la profundidad de la violencia. En suma, en aquel octubre confluyen dos procesos de deslegitimación: uno coyuntural y otro de larga data. La combinación entre ambos resultó ser explosiva para el sistema institucional, y la erosión de la legitimidad era tan profunda en aquel momento, que solo se podía enfrentar mediante una alternativa radical.

El propósito de este análisis es arribar al menos a dos conclusiones. Primero, que pese a esa deslegitimación, la política conserva cierta primacía en la conducción de la sociedad. A pesar de las múltiples dificultades que enfrenta nuestro sistema político, todavía es capaz de

identificar problemas y proponer soluciones. Segundo, intentaremos mostrar que la legitimidad de las instituciones se sustenta en una confianza ciudadana cada vez más frágil, y que corre el riesgo de seguir debilitándose en la medida en que quienes dirigen las instituciones no logren ofrecer: i) justificaciones normativamente aceptables para la ciudadanía en cuanto a su actuar, y ii) resultados concretos y verificables que coincidan con dichas justificaciones. Así, en la conjunción de ambos planos —el de las justificaciones y el de los resultados— se juega la legitimación política. Es posible que hubiera disonancias importantes entre el tipo de justificaciones que empleaba la política como en el funcionamiento de nuestras instituciones. Por lo mismo, la pretensión no radica exclusivamente en describir las carencias de nuestro país en este respecto, sino proponer también caminos para robustecer nuestras instituciones.

El itinerario desde el 18 de octubre al 15 de noviembre

El 6 de octubre de 2019 entró en vigor un aumento de 30 pesos en la tarifa del transporte público, lo que provocó que diversas agrupaciones estudiantiles comenzaran a protestar evadiendo los torniquetes del Metro de Santiago. Estas protestas se intensificaron durante la semana del 14 de octubre. Para el viernes 18, los enfrentamientos entre los estudiantes movilizados y Carabineros llevaron al cierre de gran parte de la red subterránea, obligando a miles de personas a transitar a pie por las principales arterias de la capital en el horario de salida de sus trabajos. El cierre de estaciones agudizó las protestas, y durante la tarde del viernes se vandalizaron varias entradas. Hacia la noche, la escalera del edificio institucional de Enel fue incendiada; lo cual sería el antecedente de los incendios en múltiples estaciones del Metro. La exacerbación de la crisis coincidió con que el Presidente Piñera hizo una pausa en el monitoreo de los

desmanes para participar de una celebración de cumpleaños en un restaurante, momento en que fue captado por fotógrafos. La imagen circuló profusamente en redes sociales, pese a que el mandatario luego volvería a sus oficinas en La Moneda.

Apenas horas después se firmaría el decreto que establecía el estado de excepción constitucional de emergencia para las provincias de Santiago y Chacabuco, junto a las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Las Fuerzas Armadas quedarían a cargo de resguardar el orden público, lo cual no impediría que manifestantes siguieran incendiando estaciones de Metro. En la tarde del 19 de octubre se decretaría un inédito toque de queda, y se amplió el estado de excepción a la región de Valparaíso y la provincia de Concepción. Poco antes, el Presidente había anunciado que suspendería el alza del pasaje del Metro y que convocaría a una mesa amplia de diálogo.

Nada de esto sería suficiente y durante esa noche, la violencia aumentaría: las protestas coincidirían con saqueos, barricadas e incendios en múltiples puntos del país. La noche del domingo 20 de octubre, a la salida de una reunión con su Ministro de Defensa, Alberto Espina, y el Jefe de Defensa Nacional, general Javier Iturriaga, el Presidente abre su larga alocución así: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada, ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite” (Prensa Presidencia, 2019). Por el equívoco que había en sus palabras, el Presidente estableció algo así como una guerra, en la cual él formaba parte de uno de los bandos.

La declaración haría patente una agenda que zigzaguearía entre dos polos durante los días siguientes: por una parte, el reconocimiento de errores y problemas por parte del Presidente, marcada por sus peticiones de perdón y promesas de cambio. Por otra, un discurso duro contra la violencia que se desplegaba en las calles.

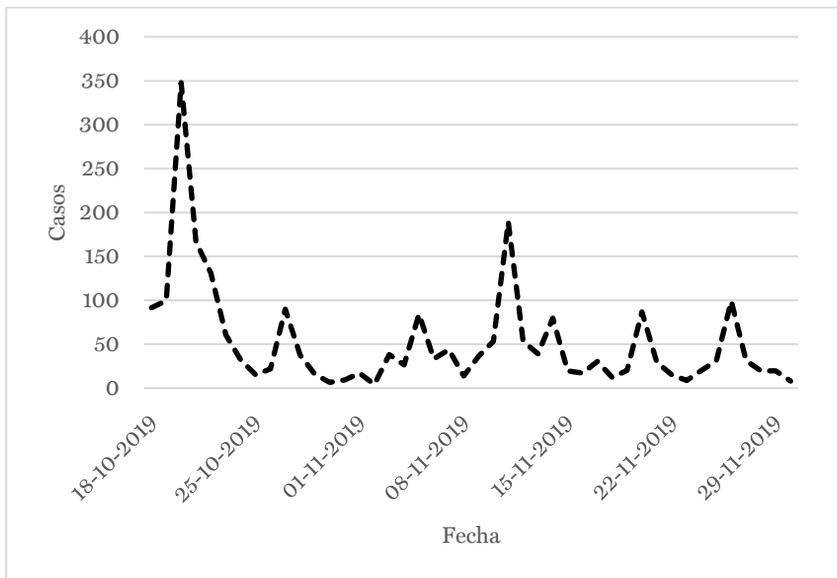
Probablemente, esta segunda línea se vio debilitada por dos hechos de ese mismo domingo: el contraste entre la dureza de sus palabras, que abrían una “guerra” contra un enemigo indeterminado (que, lamentablemente para sus propósitos, terminó acaparando toda la atención de los medios y de la ciudadanía), y las declaraciones del general Iturriaga, que al referirse a las palabras de Sebastián Piñera sostuvo que “soy un hombre feliz y la verdad, no estoy en guerra con nadie”. Es probable que la conjunción de ambas líneas de acción presidencial terminase por arrebatarle el control de la situación.

Con el avance del tiempo, y a pesar de la colaboración y despliegue de las Fuerzas Armadas, las policías no lograrían enfrentarse con eficacia a los múltiples hechos de violencia que acaecían en el país. La inquietante pregunta que rodea todo esto es por qué la ciudadanía apoyó, al menos en sus etapas iniciales, un movimiento así de disruptivo y violento, que destruyó bienes públicos y privados de gran relevancia. Aunque es una hipótesis, como veremos en el apartado final del texto, todo nos lleva a pensar que la respuesta a la pregunta anterior encuentra parte de su respuesta en un paulatino pero sostenido deterioro en la confianza en las instituciones.

Tal incapacidad para controlar la situación se hizo evidente con el reconocimiento por parte de la Intendencia Metropolitana y las fuerzas policiales de su falta de recursos para enfrentar los disturbios. Los intentos del gobierno por establecer canales de diálogo encontraron escasa recepción en la oposición y la ciudadanía, mientras que el movimiento de protesta parecía haber adquirido una dinámica propia, resistente a los esfuerzos de mediación política convencional. Pocos, fuera de la coalición oficialista, harían intentos por detener la violencia. Más aún: el 22 de octubre, Piñera convoca a una reunión en La Moneda con presidentes de distintos partidos para intentar buscar una solución. Los partidos Comunista, Socialista y aquellos pertenecientes al Frente Amplio se restaron de asistir.

Por motivos de espacio, no es posible detallar todos los actos de violencia ocurridos en el contexto de las protestas, los errores políticos cometidos, ni las ocasiones en que diversos actores se convirtieron en cómplices de lo que acontecía en las calles. Ahora bien, para dimensionar la magnitud del descontrol, se puede observar el siguiente gráfico, que resume las alteraciones graves al orden público, reportadas por Carabineros entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019. Estas comprenden los hechos de mayor gravedad, y es posible que ocurrieran más hechos de los reportados por la policía uniformada:

Figura 7-1: Alteraciones graves al orden público reportadas por Carabineros, 18 de octubre al 30 de noviembre de 2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior

Junto con las graves alteraciones al orden público, la actuación de las policías y Fuerzas Armadas abrió un álgido debate sobre la violación de DDHH. El Cuadro 7-1 muestra la cantidad de ingresos a Urgencias por hechos relacionados a las protestas (no solo atribuibles a

Capítulo 7: La Legitimidad

Carabineros, Policía de Investigaciones o FFAA), reportados por el Ministerio de Salud entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019.

Cuadro 7-1: Ingresos a urgencias período 18 de octubre al 30 de noviembre de 2019.

Arica y Parinacota	176
Tarapacá	183
Antofagasta	536
Atacama	501
Coquimbo	455
Valparaíso	1864
Metropolitana	3969
O´ Higgins	84
Maule	234
Ñuble	234
Biobío	894
La Araucanía	797
Los Ríos	198
Los Lagos	630
Aysén	123
Magallanes	302
Total	11.180

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Salud

Descomponiendo la crisis

Así, a medida que pasan los días, los caminos de salida se comienzan a estrechar. Vemos que al menos cuatro elementos se asientan para generar un momento de particular deslegitimación:

i. *La dificultad del gobierno.*

A medida que la crisis se prolongaba, el gobierno de Sebastián Piñera evidenció dificultades crecientes para abordar el fenómeno social en desarrollo. En primer lugar, hubo un discurso político inadecuado. La zigzagueante retórica gubernamental demostró ser contraproducente, exacerbando las tensiones existentes y deslegitimando su posición. Segundo, se percibió una desconexión con las demandas ciudadanas. Los intentos del gobierno por anunciar agendas sociales resultaron insuficientes y desalineados con las expectativas de la población movilizada (no solo quienes participaban en manifestaciones, sino sobre todo en la proporción de personas que validaba el proceso de protestas), sugiriendo una comprensión limitada de las raíces del descontento social y del proceso de desconfianza anterior. Tercero, la combinación de una respuesta inicial percibida como represiva y la dificultad para canalizar el diálogo social afectó la legitimidad del gobierno como actor en la resolución del conflicto. Por lo mismo, el encuadre inicial del conflicto limitó el margen de maniobra del gobierno para adaptar su enfoque a medida que evolucionaba la situación. Finalmente, la ausencia de una figura gubernamental capaz de articular un mensaje unificador y conciliador contribuyó a la percepción de un distanciamiento entre el gobierno y la realidad social.

ii. *La nula contribución opositora a la paz.*

La postura de los partidos de oposición durante el periodo merece un análisis crítico. Estos grupos interpretaron la coyuntura como un momento cero revolucionario y que podían apropiarse de la conducción, lo que se tradujo en un distanciamiento significativo y hostilidad con el gobierno. Desde su perspectiva, el estallido representaba algo así como el colapso final del “modelo”, donde la

ciudadanía terminaría de desmontar sus cimientos para luego dar paso a una reconstitución. Esto explica en buena medida la manera en que la oposición pensó el proceso constituyente (Bassa et al., 2019).

Esta actitud se manifestó, en primer lugar, en una renuencia generalizada a colaborar en las instancias de diálogo convocadas por el ejecutivo. Segundo, pese a la gravedad de la situación y al riesgo que la violencia representaba para el sistema institucional, la oposición fue ambigua en delimitar la protesta legítima en un contexto democrático. Se esperaba una condena más explícita a los actos violentos, estableciendo una frontera clara entre la manifestación pacífica y aquellas acciones que pudieran justificar una respuesta más enérgica por parte de las autoridades. Tercero, hubo una tendencia a amplificar narrativas que carecían de fundamento. Un ejemplo notorio fue la difusión de información no verificada sobre un supuesto centro de torturas en la estación Baquedano del Metro, luego desmentida por dos jueces y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, se realizaron comparaciones históricas sin asidero entre el gobierno de Piñera y el régimen de Augusto Pinochet a propósito de los excesos en el uso de la fuerza, obviando las diferencias fundamentales entre un gobierno democrático y una dictadura militar. Finalmente, el énfasis en “no criminalizar la protesta social” en ocasiones se transformó en un rechazo a condenar actos claramente delictivos. Como corolario, el 12 de noviembre, la totalidad de los partidos opositores firma una declaración en la que sostienen que “Las y los ciudadanos movilizados en todo el territorio nacional han establecido, por la vía de los hechos, un ‘proceso constituyente’ en todo el país” (*Partidos de oposición donde fijan postura común a favor de Asamblea Constituyente y plebiscito de entrada por nueva Constitución*, 2019), dejando, en la práctica, sin margen de maniobra al Ejecutivo.

iii. *El desborde de la violencia.*

La violencia se caracterizó no solo por la cantidad de incidentes, como se muestra en el Gráfico 1, sino también por su intensificación cualitativa en comparación con eventos previos. En los primeros cinco días del estallido, se registró la quema total de siete estaciones del Metro de Santiago, mientras que otras 18 fueron parcialmente incendiadas y 93 sufrieron daños significativos. La violencia también se extendió a saqueos masivos en supermercados y comercios en todo el país, donde se sustrajeron no solo bienes de primera necesidad, sino también electrodomésticos y productos de lujo, evidenciando un quiebre en las normas sociales tradicionales. Las calles de Santiago, particularmente en las inmediaciones de la Plaza Baquedano, fueron escenario de barricadas y cortes de tránsito, mientras que las veredas fueron destruidas para obtener proyectiles que serían arrojados a las fuerzas de orden. Edificios de alto valor simbólico y patrimonial, como el edificio institucional de Enel y varias iglesias, entre ellas la Iglesia de la Veracruz en Santiago, la Iglesia Presbiteriana de Valparaíso y la Iglesia Evangélica Asambleas de Dios, fueron objeto de incendios deliberados. Además, hubo ataques a la infraestructura del transporte público, quema de autobuses de la Red Metropolitana de Movilidad y también a instituciones educativas y culturales, como la sede de la Universidad Pedro de Valdivia en la casa Schneider Hernández o el Museo Violeta Parra, que tuvo que ser trasladado debido a la magnitud de los daños. Esto representó una ruptura significativa con las formas de protesta social observadas en Chile desde el retorno a la democracia en 1990. El carácter destructivo de los actos sugiere una erosión profunda del contrato social, en un contexto donde las instituciones estatales mostraron dificultades para contener y procesar políticamente las demandas ciudadanas.

iv. *El desborde de las policías.*

Junto con escenas de violencia de una magnitud y alcance nunca antes visto en la historia reciente de Chile, las policías —y particularmente Carabineros— se vieron superados por las circunstancias. No se trata solamente de las vulneraciones a derechos humanos de manifestantes — las cuales ciertamente ocurrieron, aunque no con la masividad ni sistematicidad que algunos quisieron ver— sino también al hecho de que las fuerzas de seguridad no lograron controlar el orden. La coyuntura reveló que existían carencias de personal, de formación, de equipamiento y de cadena de mano. Así lo narra uno de los testigos directos del monitoreo desde La Moneda: “Cuando a Carabineros les quedaban minutos de lacrimógenas y el triunfo de la calle estaba a punto de cocinarse, contra todo pronóstico, la primera línea comenzó a agotarse y efectuó una articulada retirada. En ese momento no lo sabían, pero si hubieran empujado algunos minutos más habrían logrado sobrepasar el último anillo de seguridad y asaltar el Palacio de La Moneda. De haber sido el caso, los gendarmes de palacio no hubieran tenido ni la más mínima chance de repelerlos. Ni por número ni por preparación, ni por armamento” (Selume, 2024). Lo relatado por Selume no es menor: los manifestantes estuvieron a un tris de llegar al palacio de gobierno, y el orden estuvo a punto de sucumbir. No lo hizo, en buena medida, por una casualidad. Varios días antes de llegar a ese extremo, Gonzalo Blumel (ministro Secretario General de la Presidencia y luego de Interior) sostenía algo parecido sobre el viernes en que se iniciaron las protestas: “el Estado chileno, en términos prácticos, no pudo o no supo responder con eficacia frente a lo que estaba ocurriendo. En más de un sentido, ese día nos desfondamos” (Blumel, 2023).

En suma, en este cuadro de desfonde institucional, en el cual el Estado no era capaz de enfrentar el dilema ni mediante las herramientas normales de la política, ni a través de las atribuciones comunes del uso

de la fuerza —estado de excepción constitucional incluido— el Poder Ejecutivo, en la persona de Sebastián Piñera, enfrentaba una decisión en algún sentido trágica para salir al paso.

Las soluciones a la crisis de legitimidad

El cuadro que hemos descrito ilustra la gravedad de la situación que Chile enfrentaba al 12 de noviembre de 2019. En ese momento, los mecanismos convencionales para la resolución de crisis eran insuficientes ante la magnitud del desafío social e institucional que el país experimentaba. La doble crisis de legitimidad hacía que los actores políticos se encontraran ante un abanico restringido de opciones, todas ellas radicales.

Por un lado, se contemplaba la posibilidad de iniciar un proceso de cambio constitucional. La propuesta se presentaba como una vía para relegitimar el orden mediante un marco institucional renovado. Esta opción, sin embargo, no estaba exenta de complejidades: existían diversas modalidades para su implementación, y podía reproducir institucionalmente lo que se veía en las voces inorgánicas de enojo. Otra alternativa era decretar un nuevo estado de excepción, más severo que el anterior, que implicaría un despliegue militar de mayor envergadura y, previsiblemente, un uso más intenso de la fuerza. Esta alternativa, aunque potencialmente efectiva para restablecer el orden público a corto plazo, conllevaba el riesgo de exacerbar las tensiones sociales y erosionar aún más la legitimidad del gobierno (Pérez de Arce P., 2020).

Subyacente a estas opciones, flotaba en el ambiente político la posibilidad, no abiertamente discutida pero sin duda presente, de la renuncia del Presidente Sebastián Piñera. Esta opción, aunque

drástica, era vista por algunos sectores como una potencial válvula de escape para la presión social acumulada.

Como sabemos, se optó por la salida constitucional. Como se observa en el gráfico, hubo cierta respuesta en la ciudadanía: los hechos de mayor violencia disminuyeron luego del acuerdo por una nueva Constitución, lo cual muestra que existe cierta sensibilidad —que, es cierto, no es infinita y se agota en el tiempo— a las propuestas de la política. Esa confianza exigua es algo que se debe promover y cuidar.

Con todo, y a pesar de las expectativas generadas, ninguno de los dos procesos constituyentes terminó en la promulgación de una nueva Constitución. Estos resultados, lejos de resolver la crisis, ha añadido mayor complejidad al debate político y social en el país, dejando abierta la pregunta sobre cómo abordar las demandas de cambio que motivaron el estallido social de 2019.

La crisis anterior

Dicho esto, los cuatro elementos escogidos para describir la deslegitimación coyuntural son insuficientes para explicar la magnitud de la crisis que estalló en octubre. La crisis política, el malestar ciudadano y la erosión institucional se habían labrado desde antes.

Por un lado, los hechos de corrupción en el ámbito político y empresarial desacoplan a la ciudadanía de la elite. Quienes detentaban cierta autoridad terminan perdiéndola. Por otro, y quizás como consecuencia de lo anterior, se desarrolló una desconfianza social generalizada, tanto entre las personas y las instituciones como entre las personas mismas (como es visible en los informes PNUD Chile, 2017, 2024; Tenemos que hablar de Chile, 2021). En último término, como muestran estos últimos informes, también existía un

malestar arraigado en la población, producto de la incapacidad de hacer ajustes institucionales a tiempo, a ciertas formas de desigualdad persistentes, la desaceleración del crecimiento económico, entre otras.

La profundidad de la crisis que reseñamos llega al punto de poner en jaque la institucionalidad completa, así como el acuerdo social de base que la sostiene —el hecho de que acatamos normas básicas, obedecemos las reglas, en favor de un régimen que nos permite llevar una buena vida—. Esto implica que, en alguna medida, la nuestra fue también una crisis de legitimidad; es decir, dejó de ser evidente el por qué debemos obedecer a quienes ejercen el poder. Se trata de un cuestionamiento demasiado profundo que, inevitablemente, se ramifica a otras manifestaciones. La falta de legitimidad corta la cadena de transmisión del mando, que va desde la ciudadanía hasta la política, y que se extiende a casi cualquier forma de autoridad, independientemente del ámbito en el que opere. Esto implica una carencia de justificaciones normativamente aceptables para la ciudadanía, es decir, la ausencia de razones que sostengan el entramado institucional desde una perspectiva de justicia.

En el ámbito del discurso político, los representantes han fallado en conectar de manera sostenida con la población. Lo que dicen los políticos para sustentar sus posiciones y agenda no convence a las personas. Son pocos los liderazgos que logran generar entusiasmo en este contexto, probablemente porque no se han hecho los suficientes esfuerzos por interpretar cuáles son los deseos y aspiraciones de la población. Interpretar no significa rendirse a los términos de la ciudadanía, sino dejarse interpelar por ella y articularlos políticamente.

Pero hay más. La legitimidad política reside también en la capacidad de obtener resultados concretos y verificables que coincidan con las justificaciones normativas ofrecidas. Dicho de otra forma, la política

se juega su legitimidad en su eficacia. Un modelo que se basa, por ejemplo, en la promesa del mérito o de mercados libres, y que no es capaz de mantener estos resultados de manera consistente, se enfrentará a cuestionamientos. Es por ello que la ralentización del crecimiento económico al menos desde 2014, la pérdida de valor de los certificados universitarios (Ortúzar, 2024), la percepción de autorreferencia e inutilidad de la política o la desconexión con la ciudadanía y sus necesidades, entre otros, contribuyen a socavar sus bases.

En suma, la dificultad para explicar por qué nuestro sistema es bueno, justo o *mejor*, sumado a los problemas para mostrar resultados palpables terminan configurando una doble crisis, azuzada por factores coyunturales. No se trata de un mero problema publicitario o comunicacional: se trata de conectar con expectativas hondas y poner los medios para resolverlas. Por eso, la ineficacia de la política explica buena parte de la deslegitimación de las instituciones. Los antecedentes expuestos sobre el proceso de octubre de 2019, junto con los rechazos a ambas propuestas constitucionales y la incapacidad de acometer reformas en áreas sensibles como pensiones, salud y educación —a lo que se sumarían la modernización de la función administrativa y una reforma tributaria para resolver problemas perennes de nuestro sistema—, evidencian hasta qué punto el descontento puede seguir acumulándose.

Ahora bien, aunque el cuadro anterior puede llevar al pesimismo respecto de nuestra crisis, lo cierto es que también contiene una clave de interpretación para pensar en posibles salidas a ella. Nos muestra que la convergencia entre discursos políticos que conecten con la ciudadanía en términos de valores y la capacidad de mostrar resultados es una alternativa real; aunque cabe preguntarse si tiene viabilidad dadas las circunstancias. A cinco años del estallido, la política haría bien en recordar los motivos que hasta ahí nos llevaron.

Si malas decisiones políticas nos llevaron a una situación de potencial colapso, mejores decisiones pueden, en el mediano plazo, reconstruir el escenario. Solo una comprensión profunda de sus causas circunstanciales y de larga data puede dar origen a un itinerario de salida. Solo entenderla en toda su magnitud —lo cual nos lleva, de paso, a situarnos en una crisis más amplia de la democracia en occidente— permitirá dar respuestas a ella. Volver a la crisis de octubre —aunque duela— para identificar algunas de sus características, situándola en una crisis mayor de legitimidad que tiene, cinco años después, a la política democrática severamente cuestionada.

REFERENCIAS

Bassa, J., Ferrada, J. C., & Viera, C. (Eds.). (2019). "La constitución que queremos: Propuestas para un momento de crisis constituyente". LOM Ediciones.

Blumel, G. (2023). "La vuelta larga: Crónica personal de la crisis de octubre". Ediciones UC.

Ortúzar, P. (2024). "Sueños de cartón. Sobreoferta de credenciales académicas y sobreproducción de élites en un país estancado". Ariel.

Partido Comunista de Chile (2019). "Partidos de oposición donde fijan postura común a favor de Asamblea Constituyente y plebiscito de entrada por nueva Constitución". (noviembre 12). <https://pccchile.cl/historico/2019/11/12/declaracion-publica-partidos-de-oposicion-donde-fijan-postura-comun-a-favor-de-asamblea-constituyente-y-plebiscito-de-entrada-por-nueva-constitucion/>

Pérez de Arce P., R. (2020). "Legitimidad de la fuerza pública: Reflexiones a partir de la crisis de octubre y la pandemia". Instituto de Estudios de la Sociedad. <https://www.ieschile.cl/2020/08/informes-ies-legitimidad-de-la-fuerza-publica/>

Capítulo 7: La Legitimidad

PNUD Chile (Ed.). (2017). "Desiguales: Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile". PNUD : Uqbar Editores.

PNUD Chile. (2024). "¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Conducir los cambios para un desarrollo humano sostenible".

Prensa Presidencia. (2019). "Presidente Piñera: "Estoy seguro de que, con la unidad de todos los chilenos, vamos a derrotar a los violentistas y vamos a recuperar el país en paz y el país con libertad que todos queremos". [Broadcast]. <https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=103689>

Selume, J. (2024). "Tiempos Mejores. Un relato personal sobre la política, el poder y de cómo casi todo se va al carajo". Planeta.

Tenemos que hablar de Chile. (2021). "Un país que se piensa y se proyecta. Diez hallazgos desde Un Chile a escala". <https://static1.squarespace.com/static/5e790bc9f3c2fc727c1fe1a8/t/6093f38abc769868c461cdb1/1620308885870/Tenemos+que+Hablar+de+Chile-Informe+Final-Chile+a+Escala.pdf>

LA ECONOMÍA

EL OCTUBRE CHILENO, SUS EFECTOS Y EL CAMINO FUTURO

Por Víctor Espinosa

Resumen

¿Cuáles son las verdaderas causas del declive económico del país y que relación guarda con el octubre chileno? El presente ensayo examina la trayectoria económica reciente de Chile, argumentando que el deterioro tiene su origen en las políticas anti-mercado implementadas durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018). Las reformas tributaria, laboral y educativa debilitaron los fundamentos de la economía chilena, provocando una desaceleración del crecimiento y exacerbando las tensiones sociales. Así, el octubre chileno de 2019 emergió como punto de inflexión, desencadenando protestas violentas que infligieron daños económicos sustanciales. Entonces, la verdadera causa de la crisis no radica en el capitalismo, sino en la erosión gradual de las dinámicas de mercado a través de la intervención estatal coactiva. Esto, sumado a la incertidumbre institucional, nos está arrastrando a una verdadera "década perdida". La situación nos obliga a abogar por un retorno a la responsabilidad fiscal, el fomento del ahorro y un cambio cultural hacia la libertad económica. En este camino, la educación económica y la construcción de instituciones que promuevan la función empresarial y la acumulación de capital son vías elementales para restaurar la prosperidad de Chile.

Introducción

El 18 de octubre de 2019 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Chile. Las masivas manifestaciones y disturbios violentos que sacudieron al país fueron inicialmente interpretados como una protesta legítima contra la desigualdad y el alto costo de la vida (Tapia et al., 2021; Peña y Silva, 2022; Guzmán-Concha, 2023). Sin embargo, el capitalismo fue erróneamente señalado como el principal responsable de las crecientes tensiones sociales de la última década, alimentando una narrativa que culpaba a la economía de mercado por no cumplir con las expectativas de bienestar general.³⁹ Lo irónico es que el verdadero declive económico fue causado por la creciente intervención estatal coactiva, que durante años fue debilitando las dinámicas de mercado (Undurraga y Gárate, 2023; Cox et al., 2024). Este sentimiento anti-mercado no surgió de manera espontánea, sino que fue el resultado de discursos promovidos por intelectuales y líderes políticos vinculados a la izquierda, quienes propagaron sus ideas a través de la cultura y la ideología.⁴⁰ Estos actores capitalizaron las frustraciones crecientes de amplios sectores de la sociedad para atacar las bases del sistema económico chileno, justificando mayores dosis de intervencionismo estatal como solución (Kaiser, 2020;

³⁹ El capitalismo, o economía de mercado, es un sistema de organización social basado en derechos de propiedad seguros, donde los individuos tienen la responsabilidad ética de poseer y controlar su mente, cuerpo, acciones y los resultados de los intercambios voluntarios que generan en el mercado. Estos intercambios se desarrollan dentro de un proceso de respeto mutuo a los derechos de propiedad, lo que fomenta la libertad individual y la responsabilidad personal. En cambio, el socialismo implica abolir los derechos de propiedad, transfiriendo el control al Estado a través de la coacción institucional sistemática sobre la acción humana. El socialismo es dinámicamente ineficiente y éticamente reprochable al suprimir la libertad individual y la responsabilidad personal, imponiendo un sistema donde las preferencias individuales quedan subordinadas a los dictados de un órgano director. Para más detalles, ver: Block (2019), Espinosa (2021), y Huerta de Soto (2024).

⁴⁰ Como dijo el teórico marxista Antonio Gramsci, “La batalla por la hegemonía cultural es, en última instancia, una lucha por la dirección ideológica de la sociedad, que se libra en los ámbitos de la cultura, la educación y la comunicación (traducción propia)” (1971, p. 245).

Merbiháa et al., 2020). El relato prosperó, en parte, gracias al silencio cómplice de quienes, en teoría, debían defender los principios de una sociedad libre (Kaiser, 2014).

La influencia de las ideas antes mencionadas en la sociedad chilena se hizo evidente durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), cuando se hicieron reformas estructurales que aumentaron la intervención estatal con el propósito político de reducir las desigualdades sociales (Espinosa, 2023a; Kaiser y Zitelmann, 2024). Entre estas medidas se destacaron la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma educativa. Estas políticas, aunque presentadas como respuestas a las crecientes tensiones sociales, tuvieron efectos económicos adversos que precipitaron el descontento social. La reforma tributaria, orientada a aumentar los ingresos estatales, terminó desincentivando la inversión privada y debilitando la confianza de los inversionistas. Como resultado, la economía chilena experimentó una desaceleración significativa, con un aumento del desempleo y una reducción en la productividad. Además, la reforma laboral, que buscaban fortalecer el poder sindical y restringir la flexibilidad del mercado, generó incertidumbre entre los empleadores, afectando negativamente la creación de empleo y perpetuando el estancamiento salarial real.

Por otro lado, la reforma educacional de Bachelet, centrada en la gratuidad y la igualdad, descuidó la calidad de la enseñanza y exacerbó los problemas de gestión en el sistema educativo. En lugar de resolver los problemas estructurales que aquejaban a la educación chilena, esta reforma aumentó las desigualdades en términos de calidad educativa, alimentando el descontento en la juventud. Lejos de tranquilizar las tensiones sociales, estas políticas anti-mercado generaron un clima de inestabilidad económica y social, aprovechado por diversos grupos políticos y movimientos radicales. El aumento de la violencia y la actividad delictiva contribuyó a desencadenar aquel octubre de 2019.

Las repercusiones económicas inmediatas fueron devastadoras: una fuerte caída en la inversión, el aumento del desempleo y el deterioro general del clima de negocios en el país. Este escenario dejó a Chile en una posición más vulnerable, con una economía menos competitiva y más dependiente del intervencionismo estatal.

Este artículo examina los impactos económicos directos e indirectos de lo que llamaré "octubre negro" de 2019 en Chile, con énfasis en cómo las políticas anti-mercado de la última década contribuyeron a esta crisis y allanaron el camino para la llegada de Gabriel Boric a la presidencia con una agenda socialista. Se argumenta que las reformas impulsadas durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y sus consecuencias económicas fueron clave en este proceso, demostrando cómo el discurso y las políticas intervencionistas desestabilizaron la economía chilena, creando un clima de descontento que culminó en la crisis de 2019. Para ello, se analizará el impacto de las reformas económicas impulsadas por Bachelet y los efectos económicos directos e indirectos que provocó en el país. Finalmente, se presenta una evaluación de la economía bajo el gobierno de Gabriel Boric y se presentan algunas estrategias para impulsar la recuperación del crecimiento económico y lograr un desarrollo sostenido.

Las reformas de Michelle Bachelet

El segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) impulsó una ambiciosa agenda de reformas estructurales, enfocada en transformar la economía chilena con un fuerte énfasis en la equidad social. El discurso anti-mercado predominó en este gobierno, criticando el modelo capitalista implementado en Chile desde los años 80, que, según la expresidenta, había generado una excesiva concentración de la riqueza y desigualdades persistentes. Sostenía que solo una mayor intervención estatal corregiría estos problemas. Aunque sectores

progresistas respaldaron sus reformas, el empresariado y parte de la clase media temieron efectos negativos en la inversión, competitividad y crecimiento económico.

Una de las reformas más significativas del gobierno de Bachelet fue la reforma tributaria de 2014, cuyo objetivo era aumentar la recaudación fiscal en 3% del PIB, lo que representaba alrededor de US\$ 8.200 millones adicionales anuales (Bachelet, 2013). Esta reforma buscaba financiar políticas sociales, como la educación gratuita, y reducir la desigualdad mediante un sistema tributario más progresivo. Para lograrlo, se aumentó gradualmente la tasa del impuesto a las empresas, elevándola del 17% al 27% sobre las utilidades percibidas.⁴¹ Este incremento generó preocupación en el sector empresarial, que temía que el mayor costo impositivo afectara la inversión y la competitividad de las empresas chilenas. Un aspecto fundamental de la reforma fue la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), un mecanismo que permitía a las empresas postergar el pago de impuestos sobre utilidades no distribuidas. Bajo el sistema FUT, las empresas podían reinvertir sus utilidades sin pagar impuestos corporativos hasta que estas fueran distribuidas a los accionistas (Arellano y Corbo, 2013; Cerda et al., 2014). La reforma implementó un sistema transitorio de integración parcial, que limitaba la deducción de impuestos previamente pagados sobre las utilidades no distribuidas, avanzando hacia una desintegración total. Esto redujo la capacidad de las empresas para diferir impuestos y reinvertir sus ganancias internamente, afectando de manera negativa su potencial de crecimiento.

La reforma también creó un impuesto verde sobre las emisiones contaminantes, con la intención de fomentar un desarrollo económico

⁴¹ Chile fue el único país que aumentó los impuestos corporativos en 10 puntos porcentuales durante la última década, mientras que en la OCDE el promedio cayó del 26% al 23% (ver KPMG, 2024).

más sostenible. Este impuesto afectó principalmente a sectores industriales y energéticos, que enfrentaron un aumento en sus costos operativos debido a las nuevas regulaciones medioambientales. Al mismo tiempo, la reforma incluyó un paquete de medidas para reducir la evasión y elusión fiscal, que se estimaba representaba una pérdida de ingresos de alrededor de un 5% del PIB. Entre las nuevas normativas se incluyeron mayores controles sobre las empresas y el establecimiento de un registro de beneficiarios finales para identificar a quienes efectivamente controlaban las utilidades generadas por las sociedades. A pesar de estos esfuerzos, la recaudación final fue inferior a la esperada. La reforma tributaria generó una recaudación equivalente al 1,6% del PIB, un 47% menos de lo previsto. La recaudación fiscal era mayor antes de la reforma, alcanzando un 17,7% del PIB en 2012, que después de su implementación, con un 17,4% en 2017. Este resultado se debió en parte a la desaceleración económica, que redujo las bases imponibles y restringió la capacidad del gobierno para financiar sus reformas sociales.

Adicionalmente, la reforma laboral de 2016 fue uno de los ejes centrales de su gobierno, diseñada para fortalecer los derechos de los trabajadores y equilibrar las relaciones de poder entre empleadores y empleados. Se incluyó la prohibición del reemplazo de trabajadores en huelga, aumentando el poder de negociación de los sindicatos y favoreciendo la negociación colectiva a nivel de empresa. También se efectuaron mecanismos para fomentar la sindicalización y procurar garantizar una mayor representatividad de los trabajadores. La reforma priorizó la equidad de género en el trabajo, introduciendo disposiciones para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras. Se otorgaron mayores derechos a los trabajadores subcontratados, quienes habían estado excluidos de muchos beneficios laborales. A pesar de estos avances, la reforma fue objeto de críticas por parte del sector

empresarial, que consideraba que las nuevas regulaciones aumentarían los costos laborales y desincentivarían la creación de empleo formal. Según el INE (2024), tras la reforma laboral, el crecimiento del empleo se desaceleró y la tasa de desempleo aumentó del 6% en 2014 al 7% en 2018. Los salarios reales crecieron más lentamente, mientras que el empleo informal afectaba al 28% de la fuerza laboral, especialmente en sectores como la construcción y el comercio.

Además de las reformas tributaria y laboral, Bachelet implementó otras políticas percibidas como anti-mercado, entre ellas la reforma educacional, que buscaba eliminar el lucro en instituciones que recibían fondos públicos y avanzar hacia la gratuidad en la educación superior. En 2016, el gasto público en educación alcanzó el 5,4% del PIB, un aumento respecto al 4,8% de 2014. Aunque la gratuidad benefició a los estudiantes más vulnerables, fue criticada por su ejecución gradual y la falta de un financiamiento sostenible a largo plazo. Un 55% de los chilenos considera que la calidad de la educación pública es mala o muy mala, un alza de 15 puntos entre 2016 y 2024 (Critería, 2024). Los aspectos más criticados incluyen la eliminación del lucro, la selección y el bajo nivel de los colegios municipales. El debate sobre la reforma se intensificó debido a la implementación fallida de los SLEP y los malos resultados en el Simce (Cubillos et al., 2024). En el sector ambiental, se usaron nuevas regulaciones que afectaron proyectos de inversión en minería y energía, lo que llevó a una caída en la inversión en estos sectores clave. La inversión extranjera directa, que promediaba más de USD \$ 24.000 millones anuales entre 2010 y 2013, disminuyó a un promedio de US\$ 15.000 millones anuales entre 2014 y 2017 (Banco Central de Chile, 2024). Esta caída fue atribuida en parte al mayor riesgo regulatorio y al aumento de la burocracia.

Los efectos económicos de las reformas se reflejaron en varios indicadores macroeconómicos (Idem). Entre 2014 y 2017, el crecimiento del PIB promedió un 1,8% anual, muy por debajo del promedio anual del 5,2% registrado entre 1990 y 2013. El crecimiento del PIB per cápita promedio anual en Chile sigue una tendencia similar al crecimiento del PIB total, con una marcada diferencia entre los dos periodos. Entre 1990 y 2013, el PIB per cápita creció a una tasa promedio anual del 4%, mientras que entre 2014 y 2017, este crecimiento se redujo al 0,6%. Esta desaceleración se debió tanto a factores externos, como la caída en el precio del cobre —principal exportación de Chile—, como a la incertidumbre interna generada por las reformas estructurales y el discurso anti-mercado promovido por las autoridades políticas. La inversión privada, que representaba el 25% del PIB en 2013, cayó al 22% en 2017, impactando negativamente la productividad, la cual se mantuvo estancada durante ese periodo.⁴² El gasto público creció significativamente, lo que llevó a un déficit fiscal del 2,8% del PIB en 2017, el más elevado en más de una década, solo comparable con el 4% registrado durante la crisis subprime. La deuda pública, que en 2013 representaba el 12% del PIB, se duplicó al 24% en 2017. Aunque la inflación se mantuvo entre el 3% y el 4% gracias a la política monetaria prudente del Banco Central, la inseguridad económica no evitó que el ahorro interno disminuyera del 26% al 20% del PIB entre 2010 y 2017. A nivel social, los avances fueron mixtos. Aunque la pobreza se redujo del 14,4% en 2013 al 8,6% en 2017, utilizando líneas de pobreza equivalentes a un tercio del salario mínimo, la desigualdad, medida por el índice de

⁴² El salario está determinado por la productividad y la oferta y demanda de trabajo. En Chile, la productividad se mantuvo estancada, situándose un 50% por debajo del promedio de la OCDE, y la oferta laboral se contrajo. Como resultado, los salarios se vieron directamente afectados. Además, con una inflación que superó la meta del 3% fijada por el Banco Central, el costo de vida de los chilenos aumentó en promedio un 14%, erosionando el poder adquisitivo de las familias.

Gini, se mantuvo elevada, con una leve disminución de 46,8 a 45,3 (Banco Mundial, 2024).

Impactos del octubre chileno

Sebastián Piñera, elegido por segunda vez como presidente para el período 2018-2022, asumió con la promesa de restaurar la confianza de los inversionistas y reactivar el crecimiento económico de Chile. Sin embargo, su gobierno enfrentó desafíos monumentales: una creciente frustración social y una cultura anti-mercado profundamente arraigada en ciertos grupos. Entre 2000 y 2017, el número de graduados universitarios en Chile aumentó un 370%, pero la debilitada economía, afectada por las reformas de Bachelet, no generó empleos dignos para estos nuevos profesionales. Muchos jóvenes, atrapados en empleos precarios y mal remunerados, quedaron sumidos en la frustración y la desesperanza. Ese malestar fue aprovechado por movimientos de izquierda radical para imponer su agenda política. El aumento de 30 pesos en el transporte en 2019 fue solo el detonante de una crisis social, impulsando demandas más amplias por reformas en pensiones, salud, educación y la desigualdad. Los grupos más radicales tomaron la reforma constitucional como su estandarte, culpando al capitalismo consagrado en la Constitución de 1980 por todas las injusticias sociales. Así apareció el "octubre negro", una revuelta que buscaba dismantelar el sistema económico vigente. Sin embargo, la verdadera causa de la crisis no fue el capitalismo, sino las políticas anti-mercado de los últimos años, particularmente durante el gobierno de Bachelet, que ya habían debilitado los pilares de la economía chilena.

El gobierno de Piñera no abordó el desafío cultural que representaba el socialismo. En lugar de promover el emprendimiento y el ahorro como pilares del crecimiento, y exponer el impacto

negativo de las políticas de Bachelet en la economía, optó por el silencio, terminando por adoptar las consignas de la izquierda.⁴³ Esta omisión desestabilizó su administración y agravó la crisis social. Además, la falta de liderazgo y una defensa firme del capitalismo por parte de quienes abogan por una sociedad libre permitió, por ignorancia, indiferencia o cobardía, que el discurso anti-mercado avanzara sin oposición durante años. Este vacío ideológico allanó el camino al "octubre negro". Entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020, Chile fue devastado por una ola de saqueos y vandalismo, que resultaron en pérdidas superiores a los US\$ 3.000 millones. Solo los daños al Metro de Santiago alcanzaron los US\$ 370 millones, afectando 118 estaciones.⁴⁴ El comercio fue gravemente afectado, con más de 14.000 tiendas vandalizadas, causando pérdidas de US\$ 1.400 millones. La infraestructura pública sufrió grandes daños, sumando aún más al colapso de la confianza en el país.

La crisis social y política de 2019 golpeó severamente las principales variables económicas de Chile. En el último trimestre de ese año, el PIB sufrió una contracción del 2,1%, la mayor caída en más de una década. Según el Banco Central de Chile (2024), el crecimiento anual fue de apenas 1%, muy por debajo del 4% inicialmente proyectado. El desempleo alcanzó el 8,2% en el primer trimestre de 2020, el nivel más alto desde 2010, debido al cierre de miles de PYMES, afectando a más de 200.000 personas. La inversión privada cayó un 9,8% en

⁴³ Por ejemplo, en medio del furor octubrista y la pandemia, el sistema político impulsó una reforma tributaria en 2020 que agravó los desequilibrios macroeconómicos del país. Además, se promovió un cambio constitucional que fue rechazado por la ciudadanía en dos ocasiones: el 4 de septiembre de 2022, con un 62% de los votos, y el 17 de diciembre de 2023, con un 56%. Estos fracasos se suman al intento fallido de cambio constitucional durante el segundo gobierno de Bachelet, reflejando una persistente inestabilidad institucional en los esfuerzos por transformar la estructura política del país.

⁴⁴ De las 136 estaciones de Metro en ese momento, 7 fueron completamente incendiadas, 18 sufrieron daños parciales, 93 presentaron múltiples destrozos y solo 18 permanecieron intactas.

2019 y un 13% en 2020, paralizando proyectos clave en medio del caos social. Además, la salida neta de capitales entre octubre de 2019 y marzo de 2020 ascendió a 7.500 millones de dólares, reflejando el escepticismo de los inversionistas. La Bolsa de Santiago (IPSA) se desplomó un 13% y el peso chileno se devaluó un 17% frente al dólar. La inflación anual llegó al 3,5%, superando el objetivo establecido por el Banco Central, mientras que el ahorro como porcentaje del PIB descendió al 19%, el nivel más bajo registrado desde 1987. Con salarios estancados y la desigualdad aumentando a un índice de Gini de 47, Chile, antes símbolo de estabilidad económica, se sumió en una profunda incertidumbre.

El colapso económico, político y social que comenzó en 2019, y que se agravó con la pandemia del COVID-19 hasta 2022, abrió las puertas a figuras alineadas con el "octubrismo", un término que describía a quienes apoyaban las demandas de los grupos radicales y justificaban la violencia que las acompañó (Espinosa, 2023b). Entre ellos, Gabriel Boric, un joven político de izquierda, quién emergió como la figura más destacada. Exlíder estudiantil y diputado, Boric aprovechó el colapso de la política y el malestar social para consolidarse como candidato presidencial. Prometió una refundación del modelo chileno a través de reformas en pensiones, salud, educación, y la creación de una nueva Constitución que reemplazaría la de 1980. Mientras tanto, los candidatos liberales y conservadores no lograron identificar las verdaderas causas del declive económico y, lo que es peor, renunciaron a la disputa de fondo, siendo incapaces de articular un proyecto coherente basado en la libertad individual y el desarrollo económico. Así, Boric ascendió al poder en 2022, reflejando el deseo de cambio de una parte de la población. Sin embargo, sus propuestas desataron el pánico en el sector productivo, que temía una profundización de la crisis. Entre otras cosas, esto llevó al rechazo del cambio Constitución en dos ocasiones y a la paralización de sus reformas en el Congreso.

Economía y futuro

La economía chilena bajo el gobierno de Gabriel Boric enfrenta un panorama desalentador, marcado por un creciente desequilibrio macroeconómico que presagia otra posible "década perdida". El Banco Central de Chile (2024) proyecta que entre 2025 y 2034 el crecimiento del PIB tendencial no superará el 1,8% promedio anual, una cifra alarmante para un país que en su momento fue el "jaguar de América Latina". La caída de la productividad y la insuficiente inversión, que representa apenas el 21% del PIB, reflejan este estancamiento. A esto se añade la disminución de la tasa de ahorro al 18%, mientras que las proyecciones para 2024 anticipan un déficit fiscal del 2%. Para empezar a estabilizar la deuda pública, que ya supera el 40% del PIB, será necesario reducir el gasto público en un 3,3% del PIB, lo que agrava aún más el panorama económico. Aunque la inflación se ha moderado al 3,4%, la tasa interanual entre agosto de 2023 y agosto de 2024 alcanzó el 4,7%, superando la meta del Banco Central y encareciendo el costo de vida, dificultando el acceso al crédito. Paralelamente, el aumento del crimen organizado ha exacerbado la crisis: los homicidios crecieron un 70% en los últimos seis años, mientras que los robos con violencia aumentaron un 37% en una década, causando pérdidas económicas anuales entre 2,5% y 3% del PIB (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2024). Se ha llegado al ridículo de que existen fechas emblemáticas para la delincuencia y la violencia, como el 29 de marzo (Día del Joven Combatiente), el 11 de septiembre (Golpe Militar de 1973), y el 18 de octubre (Aniversario del octubre negro). Consecuentemente, la percepción de inseguridad alcanza al 90% de la población, profundizando la crisis económica y social sin señales claras de mejora.

La teoría económica y la evidencia empírica señalan que la única vía para revertir el sombrío panorama económico de Chile es mediante la

construcción de instituciones que fomenten la función empresarial y la acumulación de capital físico y humano, ambos impulsados por el ahorro (Foss et al., 2019; Espinosa et al., 2021; Bylund et al., 2023). El ahorro es el motor principal que permite aumentar la productividad, mejorar los salarios y elevar el nivel de vida de la población. Sin una cultura del ahorro y políticas que lo incentiven, no es posible lograr un crecimiento sostenido y una mejora en la calidad de vida. Para superar la crisis actual, es crucial que Chile recupere las políticas fiscales responsables que mantuvieron un superávit fiscal entre 1990 y 2013. Esto permitiría reducir el gasto público, controlar la deuda, y, por tanto, bajar los impuestos, lo que generaría un ambiente más propicio para la inversión y el crecimiento. La implementación de reglas fiscales y monetarias sólidas será clave para estabilizar la economía y generar confianza en los mercados (Leeson y Subrick, 2006; Espinosa y Pino, 2024).

No es de esperar que los grupos radicales no condenen con real fuerza la violencia y el caos, ya que estas conductas son parte de su estrategia política. Frente a esto, los defensores de una sociedad libre deben ser firmes en desenmascarar dichas posiciones, promoviendo una educación económica y financiera sólida en todos los niveles. A través de un entendimiento profundo de la teoría económica es posible impulsar un cambio cultural que oriente a la sociedad hacia la libertad, la responsabilidad y el progreso (Tarko, 2015, 2021). Este conocimiento permite identificar los principios que fomentan el desarrollo y el bienestar, y es primordial para superar las barreras que limitan el potencial humano. Parafraseando al célebre economista Ludwig von Mises (1949: 1046): *El estudio de la economía es esencial para la civilización*. Ignorar estas enseñanzas no desacredita nuestra ciencia, pero sí puede llevar a la destrucción de la sociedad. Simultáneamente, el Estado moderno existe para mantener el orden público; si no es capaz de garantizar seguridad y justicia, pierde su

razón de ser. Enfrentar la delincuencia con fuerza es decisivo para restablecer la paz y la confianza, atraer inversiones y fomentar el desarrollo económico. Las grandes ideas requieren coraje y perseverancia, pues solo los valientes soportan la crítica y la incompreensión. Con la valentía de personas íntegras, Chile puede superar el furor del "octubrimismo" y reencontrar el camino hacia la libertad, la paz y la prosperidad.

REFERENCIAS

Arellano, J. P., y Corbo, V. (2013). "Criterios a considerar para una reforma del sistema tributario chileno". *Estudios públicos*, 130, 203-229.

Bachelet, M. 2013. "Programa de Gobierno 2014-2018". <https://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/646/w3-article-157782.html> (Recuperado el 13/09/2024)

Banco Central de Chile. (2024). "Estadísticas". <https://www.bcentral.cl/web/banco-central/areas/estadisticas> (Recuperado el 13/09/2024)

Banco Mundial. (2024). "World Bank Open Data". <https://data.worldbank.org/> (Recuperado el 13/09/2024)

Block, W. E. (2019). "Crony Capitalism versus Pure Capitalism". *Independent Review*, 23(3), 379-391.

Bylund, P. L., Packard, M. D., y Rapp, D. J. (2023). "From static to processual analysis: How insights from Austrian economics can advance research on public policy and entrepreneurship". *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*, 12(1), 32-48.

Cerda, R., Correa, J. L., Parro, F., y Peñafiel, J. D. (2014). "El Fondo de Utilidades Tributables (FUT): elementos para la discusión". *Estudios Públicos*, 135, 39-87.

Cox, L., González, R., y Le Foulon, C. (2024). "The 2019 Chilean Social Upheaval: A Descriptive Approach". *Journal of Politics in Latin America*, 16(1), 68-89.

Criteria. (2024). "Evaluaciones ciudadanas sobre la reforma educacional". <https://www.criterias.cl/acriterias/> (Recuperado el 13/09/2024)

Cubillos, M (ed.). (2024). "Reforma educacional: Un experimento fracasado". Santiago de Chile: Ediciones USS.

Espinosa, V. I. (2021). "Salvador Allende's development policy: Lessons after 50 years". *Economic Affairs*, 41(1), 96-110.

_____. (2023a). "Principios modernos de economía y desarrollo: Teoría y práctica". Madrid: Unión Editorial.

_____. (2023b). "The perils of lax economic policy: The case of Chile during the COVID-19 pandemic". *Review of Austrian Economics*, 1-18. <https://doi.org/10.1007/s11138-023-00619-x>

Espinosa, V. I., Alonso Neira, M. A., y Huerta de Soto, J. (2021). "Principles of sustainable economic growth and development: A call to action in a post-COVID-19 world". *Sustainability*, 13(23), 13126.

Espinosa, V. I., y Pino, A. (2024). "E-Government as a Development Strategy: The Case of Estonia". *International Journal of Public Administration*, 1-14. <https://doi.org/10.1080/01900692.2024.2316128>

Foss, N. J., Klein, P. G., y Bjørnskov, C. (2019). "The context of entrepreneurial judgment: organizations, markets, and institutions". *Journal of Management Studies*, 56(6), 1197-1213.

Gramsci, A. (1971). "Selections from the Prison Notebooks". New York: International Publishers.

Guzmán-Concha, C. (2023). "Power, Legitimacy, and Institutions in the October 2019 Uprising in Chile". *Latin American Perspectives*, 50(6), 6-23.

Huerta de Soto, J. (2024) [1992]. "Socialismo, cálculo económico y función empresarial". Madrid: Unión Editorial.

Capítulo 8: La Economía

Instituto Nacional de Estadística. (2024). “Mercado laboral”. <https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral> (Recuperado el 13/09/2024)

Kaiser, A. (2014). “La fatal ignorancia: La anorexia cultural de la derecha frente al avance ideológico progresista”. Madrid: Unión Editorial.

_____. (2020). “The fall of Chile”. *Cato Journal*, 40(3), 685-701.

Kaiser, A., y Zitelmann, R. (2024). “Moving to the Left: what people in Chile think of capitalism and the rich”. *Economic Affairs*, 44(1), 139-153.

KPMG. (2024). “Tax Rates Online”. <https://kpmg.com/bg/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online.html> (Recuperado el 13/09/2024)

Leeson, P., y Subrick, J. (2006). “Robust political economy”. *Review of Austrian Economics*, 19(2), 107-111.

Merbiháa, M. et al. (2020). “Nuestro Octubre Rojo. Orígenes de un Estallido Social”. Santiago de Chile: El Líbero.

Mises, L. (2024) [1949]. “La Acción Humana: Tratado de Economía”. Madrid: Unión Editorial.

Peña, C., y Silva, P. (Eds.). (2022). “Social Revolt in Chile: Triggering factors and possible outcomes”. New York, NY.: Routledge.

Subsecretaría de Prevención del Delito. (2024). “Estadísticas DMCS y VIF”. <https://cead.spd.gov.cl/estadisticas-delictuales/> (Recuperado el 13/09/2024)

Tapia, M. A., Duarte, C., y Miranda, D. (2021). “Saltar el torniquete: Reflexiones desde las juventudes de octubre”. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.

Tarko, V. (2015). “The role of ideas in political economy”. *Review of Austrian Economics*, 28(1), 17-39.

_____. (2021). “Simple rules for a more inclusive economy”. *European Journal of Law and Economics*, 52(2), 229-249.

Undurraga, T., y Gárate, M. (2023). “The Cultural Decline of the Chilean Model: The Aftermath of the 2019 Social Uprising”. *History of Political Economy*, 55(S1), 227-254.

LA ARGENTINIZACIÓN

LA PULSIÓN TRASANDINA EN EL OCTUBRISMO CHILENO

Por Iván Carrino

Resumen

¿Por qué el modelo chileno ha sido admirado por economistas argentinos? Porque Chile, desde 1975, logró un crecimiento económico cuatro veces mayor que Argentina, reduciendo la pobreza de 62,1% a 4,7%. ¿Cómo se explica, entonces, la violencia de octubre 2019? Algunos argumentan que fue por la desigualdad, pero los datos no respaldan esta teoría. Chile no solo mejoró en comparación con otros países latinoamericanos, sino que también redujo su propia desigualdad histórica. ¿Por qué la propuesta de la primera Convención fue preocupante? Porque, en lugar de limitar al Estado, buscaba expandir su rol en la economía, amenazando pilares fundamentales como la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. ¿Qué implicaciones tenía esto? Un Banco Central menos independiente y un Estado con mayor capacidad para interferir en la vida, asemejándose al modelo argentino. Todo lo anterior nos lleva a una conclusión inequívoca: el rechazo al texto de la Convención Constitucional fue afortunado. Chile evitó parecerse más a Argentina, manteniendo un modelo que, a pesar de sus desafíos, ha demostrado ser más exitoso en términos económicos y sociales.

Introducción

El 23 de octubre del año 2019 me invitaron a un canal de televisión para debatir sobre los recientes acontecimientos económicos que estaban teniendo lugar en Argentina. Nada estaba muy tranquilo por Buenos Aires, pues el domingo 11 de agosto las elecciones primarias habían dado vencedor a Alberto Fernández por sobre Mauricio Macri, quien buscaba su primera reelección. Ninguna encuesta anticipaba la victoria y, dados los números obtenidos, el resultado ya lucía imposible de ser revertido.

La noticia tuvo un impacto negativo en los mercados. Cuando abrieron las cotizaciones, el precio del dólar había aumentado un formidable 33%, pasando de \$AR 46 a \$AR 62 al día siguiente de la elección. Para dimensionar el cambio, si un aumento diario del 33% se mantiene por un mes, eso da una variación mensual de nada menos que 28.894%. El Índice de Riesgo País también se disparó, y los depósitos en dólares de los ahorristas en los bancos sufrieron una caída de nada menos que USD 9.500 millones en solo un mes.

Los ahorros dolarizados de los argentinos en los bancos ascendían a USD 32.600 millones antes de las famosas “PASO” (por Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias). Terminaron el año en USD 19.500 millones.

Tan caótica era la situación financiera y económica del país que el presidente Mauricio Macri, identificado como un líder no populista con ideas pro-mercado, tuvo que imponer un nuevo control de cambios: fijó un precio para el dólar y estableció restricciones para el acceso a las divisas oficiales. La medida sigue vigente hoy.

Este era el contexto local que rodeaba mi participación en dicho debate. Yo había sido invitado junto a una economista, Candelaria Botto, quien ofrecía una mirada “pro-izquierda” de la situación

general. Y así fue como debatiendo acerca del problema cambiario que teníamos entre manos, Candelaria sostuvo, y parafraseo: *“Cuidado con las ideas de mi colega [en referencia a mí], quien propone liberar los mercados, liberar el tipo de cambio y esas cosas, porque vamos a terminar como Chile”*.

“¿Cómo Chile?”, pensé yo. *“Ojalá termináramos como Chile”*. Pero, claro, lo que estábamos viendo “del otro lado de la cordillera” era el pleno auge de la violencia de octubre. Solo cinco días atrás, y como narra Luis Larraín (2020), veinte estaciones del Metro de Santiago habían sido incendiadas “en una acción coordinada de grupos violentistas”. Si en Buenos Aires veíamos caos económico, las imágenes que llegaban desde Santiago mostraban un caos social.

El desborde de violencia callejera mostraba, según los análisis más difundidos, un enorme descontento con el modelo neoliberal que se había impuesto en Chile décadas atrás y que, si bien había ordenado la macroeconomía, habría profundizado enormemente la desigualdad. Las imágenes de la violencia confirmaban que las ideas económicas ortodoxas y liberales pueden “cerrar en el Excel”, pero a costa de “dejar a la gente afuera”.

Esta narrativa no iba a ser desaprovechada por la economista que intercambiaba conmigo en ese estudio de televisión. Y frente a mi pedido de tener un manejo económico más ortodoxo, no dudó en replica: “Cuidado, porque la ortodoxia económica, y el liberalismo, nos llevarán a lo que vive Chile.”

Han pasado cinco años ya desde esos acontecimientos. Tras la violencia se sucedieron el llamado a la reforma constitucional, la deliberación acerca del contenido de esa nueva constitución y la convocatoria a un plebiscito, que finalmente le dio la victoria al “rechazo”. ¿Qué podemos reflexionar acerca de estos acontecimientos tiempo después de que tuvieron lugar? En las páginas siguientes, me

propongo comentar algunos temas vinculados al octubrismo como un analista económico argentino que siempre ha visto en Chile un modelo a seguir en cuanto a la administración económica y los logros sociales que de ella han emanado.

En la segunda sección encontrarán una comparación histórica sobre la evolución económica de Chile y Argentina y los motivos que explican el diferente devenir. La tercera sección estará dedicada a responder si la desigualdad económica y social son justificaciones suficientes para los eventos ocurridos en octubre. En la cuarta sección ofreceré un análisis sobre algunos puntos problemáticos de la primera propuesta constitucional, lo que me será útil para concluir que el triunfo del “rechazo” debe ser tomado como una buena noticia para parte de los inversores, pero fundamentalmente, por parte de quienes quieren, en Chile, aspirar a tener un futuro mejor. Finalmente, en la quinta sección, ofrezco una reflexión final.

Chile y Argentina: Dos modelos, dos resultados

El mismo día en que participé del debate económico en ese canal de TV, pusieron al aire una entrevista a un estudiante universitario chileno. Lo que sorprendió al panel fue que el estudiante (que cursaba Derecho) dijera que, a pesar de estar estudiando en una universidad pública, él tenía que pagar por hacerlo. Creo recordar que se habló de unos USD 4.000 anuales.

Como en Argentina las universidades estatales no le cobran nada a sus estudiantes, el contraste se hizo evidente. No son pocos los que reflexionan, en base a esta situación, que en Argentina rige un modelo que – con sus problemas – busca igualar a su población, dando educación gratuita y así ofreciendo más herramientas a los jóvenes

para experimentar movilidad social, mientras que en Chile el neoliberalismo excluye a cientos de miles al cobrarles por estudiar.

Otro contraste en este sentido puede hacerse con el mismísimo costo de un pasaje de metro, hito enmarcado como iniciador del proceso. En el mes de octubre de 2019, la tarifa del metro de Santiago pasó de \$CH 800 a \$CH 830 (o \$CH 720 a \$CH 750, según la franja horaria). Esto equivalía a un incremento de 30 pesos para un valor total que pasaría de USD 1,1 a USD 1,15. Para la misma época, el pasaje de metro de Buenos Aires estaba en \$AR 19, lo que equivalía a USD 0,29; nada menos que un 75% más barato que en Santiago.

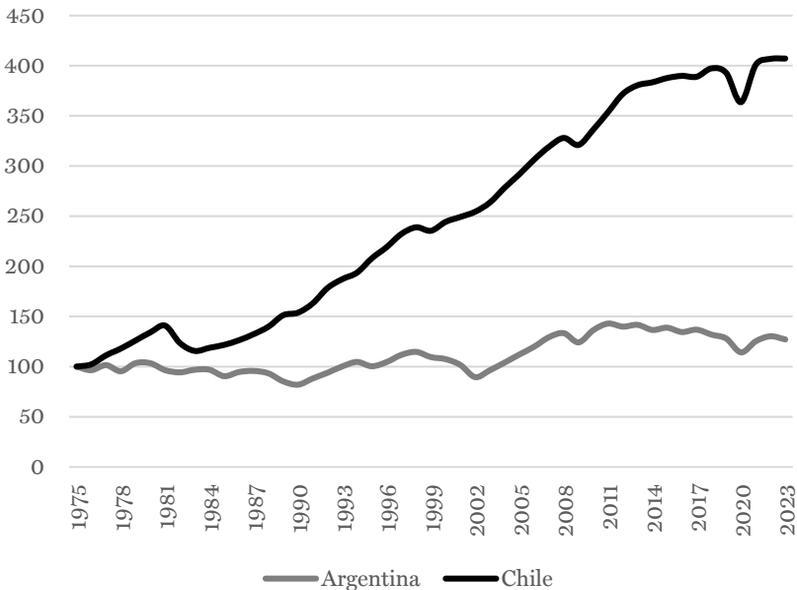
Para muchos precios donde el gobierno tiene injerencia directa, se puede decir lo mismo. Es más, durante la última gestión del peronismo, el pasaje de metro llegó a costar 8 centavos de dólar, el de autobús 6 centavos de dólar, y el litro de combustible hizo un mínimo de 28 centavos de dólar. Todo esto gracias a las fuertes devaluaciones de la moneda, combinadas con férreos congelamientos de tarifas.

Si alguien sin mucho conocimiento del fondo de estas cuestiones hace una lectura rápida podría preguntarse: ¿cómo es posible que yo aquí en Chile pague un dólar lo que en Argentina consiguen por menos de diez centavos? Acaso la culpa sea de este modelo neoliberal y seguramente la solución sea cambiar la Constitución. Al menos, así lo razonó (o aún lo razona) una parte de la ciudadanía.

Ahora bien: ¿Qué pasa si ampliamos un poco más la mirada? ¿Qué tal si comparamos datos de crecimiento, estabilidad económica y reducción de la pobreza en lugar de solo quedarnos con cómo se ofrece la educación universitaria o cuánto cuesta el pasaje de metro o de autobús urbano? Al hacer esto, se entiende por qué tantos economistas de Argentina, al contrario de los muchos activistas y políticos de Chile, ven al "modelo chileno" como uno a imitar.

Empecemos con el crecimiento económico. El año 1975 es cuando Federico Sturzenegger (2013) fecha el comienzo de una fuerte decadencia de la economía de Argentina, resultado de inconsistencias macroeconómicas que venían acumulándose en décadas previas. Al mismo tiempo, en Chile comenzaba una nueva era de administración económica, de la mano de los economistas egresados de la Universidad de Chicago quienes, siguiendo a Soto (2017), fueron los padres fundadores de una verdadera revolución capitalista.

Figura 9-1. Crecimiento económico acumulado desde 1975. (1975=100)



Nota: Elaboración propia en base a Banco Mundial.

En términos de crecimiento económico acumulado (ver Figura 10-1), las cifras no pueden ser más contundentes. Si fijamos a 1975 como punto de partida y suponemos que el PIB de ambos países era de 100, se ve que Chile entre 1975 y el año 2023 logró multiplicar su producción agregada 4 veces. En Argentina, el crecimiento económico acumulado de esos 48 años fue de solamente 27%. Esta tasa de

crecimiento económico equivale a un avance anual del 0,5%, una cifra que ni siquiera alcanza para mantener el ingreso per cápita constante. Es decir, la población crece más de lo que lo hacen los bienes y servicios que deben estar disponibles para satisfacer sus necesidades.

La comparación no es arbitraria ni antojadiza. Por seguir un modelo de administración económica similar, la performance de Chile previa a la década de los '70 no había sido nada asombrosa. Durante la década del '60, la tasa de crecimiento promedio de ambos países había sido del 2,3% en Chile y del 2,25% anual en Argentina. Al mismo tiempo, antes de los '70, Argentina tenía un PBI per cápita superior al de Chile, algo que hoy no es así.

Si uno quisiera indagar en los motivos de esta sustancial brecha de performance entre Chile y Argentina podría mirar las tendencias de gasto público y resultado fiscal, temas clave que hacen al orden macroeconómico algo que el consenso de los economistas considera deseable en cualquier parte del mundo.

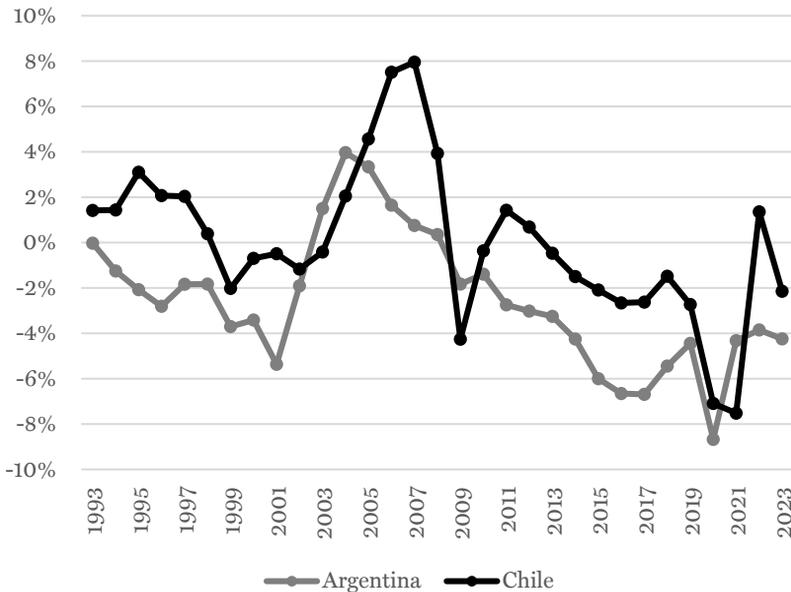
Remontándonos a tiempos en los que hay datos comparables disponibles, encontramos que entre 1993 y el año 2023, el gasto público pasó en Argentina de 21,2% a 36,4% del PBI. En Chile, si bien el gasto también creció como proporción de la producción anual agregada, la variación fue menor. Las erogaciones estatales pasaron de representar un 20,6% del producto en 1993 a un 26,9% en 2023. Un aumento de 6,3 puntos porcentuales, contra uno de 15,2.

Se podría objetar que el tamaño del gasto público puede ser alto y que eso no da origen a crisis financieras o cambiarias como la que ocurrían en Argentina en 2019, por ejemplo. Sin embargo, incluso aceptando este postulado, la conclusión se invalida si, junto con el incremento del gasto, también se observa un aumento de déficit en las cuentas públicas.

Y esto es lo que se observa para los últimos 30 años de historia argentina, una situación que luce bien distinta en Chile (ver Figura 10-2). En Argentina, en 25 de los últimos 30 años el gobierno ha cerrado el año con déficit financiero. En Chile, ese número es menor, ocurriendo el déficit solo en 17 de 30. En términos de magnitud, la diferencia también es importante. En promedio, el resultado fiscal de Argentina fue, en todo este período, de 2,6% del PBI en negativo. En Chile, por el contrario, el resultado promedio es 0%.

Si a estos números le quitamos los años de superávit, Argentina tiene 3,6% de déficit promedio, mientras que Chile arroja solo un 2,3%. Es decir, Chile tiene menos años de déficit fiscal y, cuando lo tiene, es de una magnitud menor.

Figura 9-2. Resultado fiscal en % del PBI, desde 1993.



Nota: Elaboración propia en base a World Economic Outlook, IMF.

Además de la diferencia cuantitativa, existe una diferencia cualitativa de relevancia. Es que Chile, gracias a un entorno económico de respeto

de los contratos y los derechos de propiedad, ha conseguido un impecable registro crediticio, motivo por el cual el gobierno chileno (así como las empresas que operan en el país) pueden acceder a abundante crédito internacional a tasas razonablemente bajas.

Otro dato adicional es que, gracias a la Constitución de 1980, el Banco Central de Chile tiene prohibido financiar directamente al tesoro. Es decir que incluso en una situación de estrés financiero con la deuda, los desequilibrios fiscales no se traducirían nunca (o, al menos, casi nunca) en inflación.

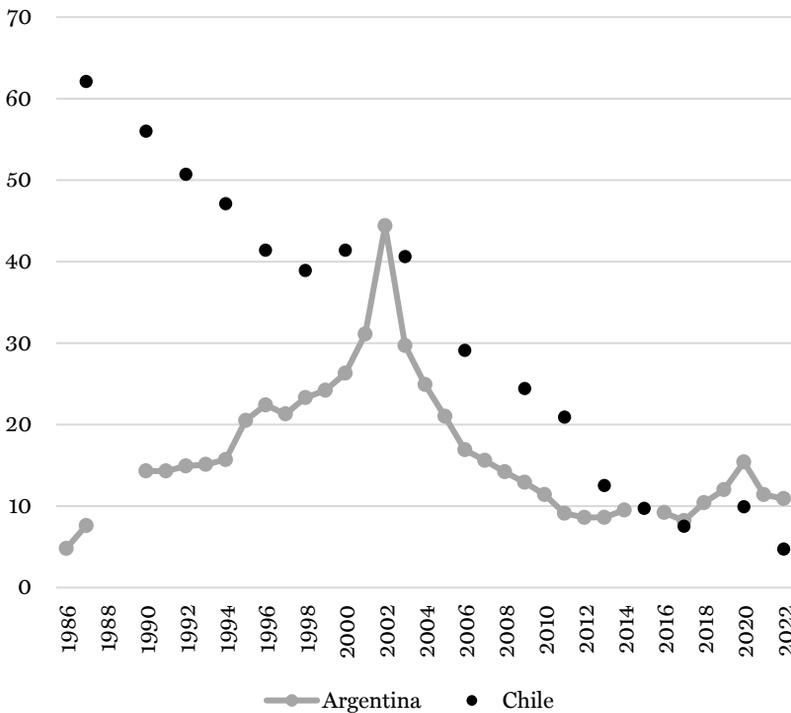
La situación es muy distinta en Argentina. Tras el default de la deuda en el año 2001, el acceso al mercado de créditos voluntarios para el país ha sido muy difícil. Sumado a esto, las restricciones institucionales al Banco Central han sido muy débiles tras el abandono de la Ley de Convertibilidad del Austral (año 2002), y es por esto por lo que hace décadas que Argentina aparece en el top 5 del mundo en materia de inflación. El corolario de esta diferencia en la política económica, una que busca preservar el orden macroeconómico y que mantiene al estado en un rol subsidiario, es que Chile logró tener décadas de estabilidad y un crecimiento muy superior al de Argentina.

Finalmente, los resultados se cristalizan en las tasas de pobreza. De acuerdo con datos comparables, realizados por el Banco Mundial (2024), no solo hoy Chile tiene una tasa de pobreza inferior a la mitad de la que muestra Argentina (4,7% vs 10,9% de la población en 2022), sino que el proceso de reducción fue fenomenal. En el año 1986, mientras en Argentina el 4,8% de las personas no conseguía un ingreso diario equivalente a USD 6,85 dólares, en Chile esa cifra alcanzaba al 62,1% de la población.

El descenso de la pobreza es el logro más impactante del "modelo chileno" (ver Figura 10-3). Sin duda, es lo que hace que muchos en

Argentina miremos con entusiasmo esta "receta neoliberal" y nos haya costado bastante entender los eventos de octubre de 2019. Sin embargo, no estamos solos en el desconcierto. Larraín (2020) desplegó el caso de que la violencia desatada en 2019 no puede ser explicada por la situación económica. Es que, en efecto, no solo en la comparación Chile sale bien parada, sino también en contrastación con su propia historia y con el resto de los países latinoamericanos.

Figura 9-3. Tasa de pobreza comparable desde 1986.



Nota: elaboración propia en base a Banco Mundial (Poverty headcount ratio at \$6.85 a day, 2017 PPP como % de la población)

Sin embargo, no estamos solos en el desconcierto. Pero ha sido Larraín (2020) quien desplegó el caso de que la violencia desatada en 2019 no puede ser explicada por la situación económica. Es que, en

efecto, no solo en la comparación con Argentina Chile sale bien parada, sino también en la comparación contra su propia historia y contra el resto de los países latinoamericanos.

Siguiendo el análisis de María Paz Arzola, Larraín (2020) narra que la pobreza en 1990 era prácticamente 7 veces mayor que 27 años después. En cuanto al acceso a la vivienda y servicios básicos, se consigna que hoy el 99,9% de la población tiene acceso a agua potable y 97,2% tiene acceso a alcantarillado. Se afirma que también existe un mayor acceso a la vivienda, reduciendo el hacinamiento de un 36,2% en 1990 a un 6,5% para 2017.

Finalmente, menciona que materia de salud a partir de 1990, se ha observado una disminución en la disparidad de acceso a servicios de salud entre las familias de altos y bajos recursos del país. El economista sostiene que más del 90% de las personas que actualmente enfrentan problemas de salud tienen acceso a atención médica, y que Chile es el primer país de América Latina en acceso y calidad de la salud, según un índice que elabora la Universidad de Washington.

La violencia no puede justificarse, tampoco, con la desigualdad

Ahora bien, si en términos comparativos Chile lo hizo tanto mejor que Argentina. Si en materia económica, los últimos 30 años de historia de Chile han sido prácticamente los mejores en tantos indicadores que miden la producción, la productividad, y el bienestar de sus ciudadanos, ¿cómo se explica la violencia desatada en octubre de 2019? Una respuesta común ha sido que, a pesar de los logros macroeconómicos, en Chile se experimenta una profunda desigualdad, y frente a esta situación, la población se cansó y decidió reaccionar con una "justificada" violencia.

Analicemos si esto es así. En un artículo de octubre de 2019, planteaba que, si bien Chile no era el "paraíso de la igualdad", tampoco era el infierno. Según datos del Banco Mundial, Chile es el octavo país de América en materia de igualdad, por debajo de Canadá, Argentina, Uruguay o Estados Unidos, pero por encima de México, Paraguay, Colombia o Brasil. Me preguntaba: "¿Por qué la desigualdad solo incendia diarios y estaciones de Subte en Chile, pero no en Paraguay ni en Colombia?"

En efecto, estaba mirando los datos del famoso Índice de Gini, que en dicho momento ubicaba a Chile en, digamos, la mitad de la tabla de los países americanos. O sea que la foto de la desigualdad, comparada con otros países no nos aportaba mucho como para sostener que algo excepcional estuviera ocurriendo en esta materia en Chile, a diferencia de otros países de la región.

Larraín (2020) aporta una mirada sobre la evolución histórica y sostiene que todos los indicadores de desigualdad en Chile muestran una evolución favorable. El coeficiente de Gini indica una reducción sostenida, aunque gradual, desde 0,522 a 0,488 entre 1990 y 2017. Otro indicador, el índice 20/20, muestra que entre 1994 y 2017, la brecha entre el 20% más rico y el 20% más pobre se redujo de 12,1 a 8,9.

Es útil también traer a la discusión el trabajo de Sapelli (2014) donde nos muestra, en un análisis por cohortes, que no solo la desigualdad social en Chile ha caído mucho más de lo que muestran los índices agregados como el Gini sin ajustes, sino que también la movilidad social ascendente es un hecho claro que queda en evidencia cuando se mira la reducción en la dependencia que tiene el nivel educativo de los hijos respecto del nivel educativo de los padres. En base a la evidencia, el autor concluye que "en Chile, las generaciones más jóvenes tienen una distribución del ingreso sustancialmente más equitativa que las

generaciones más viejas. En ellas hay también mayor movilidad social y menor pobreza que en las generaciones de sus padres.”

Todo lo anterior nos lleva a concluir que no era consistente con los hechos observados la fundamentación del estallido en una supuesta desigualdad creciente o insostenible. Incluso si la desigualdad existiera o se agravara, no debiera justificar la violencia y la destrucción de patrimonio público y privado.

Es que, como buscaba ejemplificar en mi artículo de 2019, no importa que el ladrón de un automóvil se justifique diciendo que cometió el delito porque el dueño del auto “tenía mucho” mientras que él “tenía muy poco”. Uno puede comprender determinadas situaciones, pero un pilar de los países civilizados es el respeto por la propiedad privada y el cumplimiento de ciertas normas que garantizan la convivencia pacífica. En este marco, no solo no estaba justificada la violencia por la desigualdad, sino que era legítimo reprimirla y perseguirla, puesto que los ataques de 2019 pusieron en riesgo el orden público y, por tanto, la seguridad física, la vida cotidiana, económica, cívica y social, de la enorme mayoría de los chilenos.

Todo esto ocurrió cuando menos de dos años atrás, la sociedad había elegido democráticamente a Sebastián Piñera como presidente.

En definitiva, la violencia no se justificaba, tenía que ser reprimida (siempre dentro de la ley), pero puso en jaque todo el andamiaje filosófico y legal que está detrás de las democracias representativas modernas. Y, lamentablemente, la política chilena respondió el 12 de noviembre, cuando todos los partidos de oposición firmaron una declaración a favor de una Asamblea Constituyente, afirmando que la "ciudadanía movilizada" había "corrido el cerco de lo posible". Larraín (2020) considera esto un verdadero golpe de Estado, donde bajo amenaza de violencia y caos, se somete a un gobierno a modificar una ley fundamental del país.

Tres días después se lanzaría el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, y se convocaría a un plebiscito para aprobar o rechazar el nuevo texto, lo que finalmente ocurrió en septiembre del año 2022.

Nueva constitución, Estado presente y el éxito del “rechazo”

Tras los violentos episodios de 2019 llegó el proceso de propuesta de reforma constitucional que, afortunadamente, terminó en el triunfo contundente del “rechazo”.

¿Por qué decimos que el resultado fue afortunado? Porque la nueva constitución, influenciada principalmente por ideas defendidas por partidos de izquierda, subvertía la idea original de una Constitución. En cualquier curso de derecho se estudia que las constituciones son documentos que tienen, como principal objetivo, contener los excesos del Estado. Es decir, dado que los ciudadanos en una democracia representativa ceden su propia soberanía para otorgar el monopolio de la violencia al gobierno, deben tener una garantía de que este monopolio no será mal utilizado. De ahí viene la lógica de una Constitución, una ley de leyes que establezca de forma explícita cuáles son los derechos inviolables de los ciudadanos y cuáles son los límites del Estado en su accionar.

Un pilar fundamental de las democracias liberales es, además, la consagración del individuo como principal sujeto de derecho. Otro, de igual importancia, es la igualdad ante la ley (Rallo, 2017).

Ninguno de estos dos pilares se respetaba en el proyecto de reforma constitucional en Chile. En un trabajo de Libertad y Desarrollo⁴⁵, se

⁴⁵ Nueva Constitución: Los 6 Ejes Más Dañinos Que Componen La Propuesta. Libertad y Desarrollo, 4 de julio de 2022 (disponible en: <https://lyd.org/centro-de-prensa/noticias/2022/07/nueva-constitucion-los-6-ejes-mas-daninos-que-componen-la-propuesta/>)

establecía que la propuesta constitucional generaría niveles preocupantes de incerteza e inestabilidad jurídica y económica por, entre otras cosas, intentar dotar de derechos a la naturaleza. Por otro lado, la propuesta de reforma constitucional consagraba la desigualdad ante la ley, al proponer la existencia de dos sistemas de justicia (uno Nacional y otro conformado por sistemas jurídicos indígenas), y establecer libertad educativa para pueblos y naciones indígenas

En materia económica, la nueva propuesta constitucional lesionaba la defensa del derecho de propiedad. Uno de los puntos más resonantes en este sentido era que la indemnización en caso de expropiación sería por el “justo precio” del bien expropiado, concepto ambiguo y que no equivale necesariamente al “daño patrimonial efectivamente causado” al expropiado como señala la Constitución vigente”. Además, se limitaba el derecho de propiedad en el caso de las concesiones mineras, o el derecho del agua.

Finalmente, aparecía un cambio radical en cuanto a la actitud del Estado frente a la economía pues se le atribuía al Estado un rol primordial en la provisión de los derechos sociales y de bienes públicos o de interés público, en desmedro del importante rol que juega el sector privado en ello. La nueva constitución también proponía la garantía de la soberanía alimentaria, donde “el Estado deberá promover la producción, distribución y consumo de alimentos”.

La propuesta de nueva Constitución de Chile, lejos del espíritu original de una Constitución, que es limitar el poder del Estado, parecía más una herramienta con la cual el Estado ahora podría participar más en la economía, intentando garantizar una lista larga y heterogénea de nuevos derechos sociales.

Para instrumentalizar este nuevo rol, también se propuso modificar la normativa que rige al Banco Central. Así las cosas, al ente monetario

se le agregaría a su función principal de controlar la inflación, la de “protección del empleo” y el “cuidado del medio ambiente y del patrimonio natural”. Se mencionaba, además, que el Banco Central tenía que “tener presente la orientación general de la política económica del Gobierno” a la hora de tomar decisiones. Obviamente, esto despertó temores respecto de un menor nivel de independencia y autonomía, precisamente lo que encontramos como la explicación principal de largas décadas de estabilidad de precios y financiera en Chile, y que el propio Mario Marcel, presidente de la entidad entonces, tuvo que reafirmar⁴⁶.

Para ir cerrando, de facto o de jure, en Argentina tenemos un estado más presente en materia de educación, seguridad social y salud, y también un Banco Central mucho más dependiente de las autoridades de lo que es recomendable. Y ya hemos mencionado, en la primera sección, los resultados comparados de ambos esquemas institucionales.

Conclusiones

A lo largo de este ensayo intentamos comprender los motivos del octubre chileno. A la luz de la comparativa de datos económicos entre Chile y Argentina, no pudimos encontrar algo como una justificación económica para dichos eventos. Pasamos, entonces, a analizar el tema de la desigualdad, tan citado como el desencadenante principal del descontento y los disturbios. Pero tampoco podemos encontrar una justificación allí. En primer lugar, porque la desigualdad en Chile no

⁴⁶ Presidente del Banco Central expuso ante la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional de la Convención Constituyente. Nota de prensa, Banco Central de Chile. 9 de noviembre de 2021 (disponible en: <https://www.bcentral.cl/documents/33528/133208/np09112021.pdf/4254e2a3-db6a-87e1-70c6-85a88506f013?t=1636475302830>)

es tan distinta de la del resto de los países del continente. En segundo, porque incluso si fuera la más alta, el caos organizado y la violencia como método político no puede ser admitido por un país civilizado y una democracia plena, como la de Chile.

Finalmente, indagamos en algunos puntos económicos problemáticos de la fallida propuesta de nueva constitución, y concluimos que, a pesar de los momentos de alta tensión vividos, es un alivio que el rechazo se haya impuesto. En algún punto, el octubrismo chileno quiso que Chile se pareciera más a Argentina, pero los propios chilenos se dieron cuenta que esa no era tan buena idea, después de todo.

Ojalá el camino se mantenga, e incluso se profundice, en los tiempos por venir. De todos depende.

REFERENCIAS

Larraín, L. (2020): “El otro Golpe: 18 de octubre de 2019”. Ediciones El Líbero.

Rallo, J.R. (2019): “Liberalismo: los 10 principios básicos del orden político liberal”. Editorial Planeta.

Sapelli, C. (2014): “Desigualdad, Movilidad, Pobreza: Necesidad De Una Política Social diferente”. Estudios Públicos, 134 (otoño 2014), 59-84.

Soto, Á. (2017). The founding fathers of Chile's capitalist revolution. Yale. *Journal of International Affairs*. Volume 2, Issue 2, p. 123-133.

Sturzenegger, F. (2013), “Yo no me quiero ir: Claves y razones para apostar por la Argentina”. Editorial Planeta.

SECCIÓN III:

Mitos, Discursos y Objetos.

EL MITO

18 DE OCTUBRE, MODERNIDAD Y DISCURSOS DEL MALESTAR

Por Felipe Schwember

Resumen

En este ensayo, analizo el fenómeno del "mito octubrista" surgido tras el estallido social de 2019 en Chile, basándome en las ideas de Georges Sorel sobre el poder movilizador de los mitos políticos. Examino cómo este mito evolucionó rápidamente de un sentimiento antineoliberal a una narrativa que rechazaba toda la historia nacional, exigiendo una refundación del país. Mi análisis se centra en cómo la Convención Constitucional se convirtió en la culminación de este mito, intentando plasmar sus ideales en una nueva constitución. Sin embargo, argumento que el rechazo mayoritario al proyecto constitucional en el plebiscito de 2022 marcó el declive del mito octubrista. Exploro cómo este resultado desafió la idea de que la izquierda radical representaba la voluntad popular reprimida, revelando una desconexión entre el mito revolucionario y la identidad histórica chilena. Concluyo que el fracaso del proyecto constitucional demostró la incompatibilidad del mito octubrista con la narrativa nacional que la mayoría de los chilenos reconoce como propia, sugiriendo implicaciones significativas para el futuro político del país.

Introducción

Si creemos a Georges Sorel (1847-1922), el mito explica la violencia revolucionaria mejor que la utopía. Esta, en su concepto, es una construcción puramente intelectual, incapaz de movilizar al pueblo. El mito, en cambio, es fruto de una fuerza instintiva y apela a una voluntad transformadora. Como tal, es capaz de conjurar un poder que desborde el orden existente hasta el punto de su total destrucción. Para ello, sostiene, basta con que el mito ofrezca un esbozo, una imagen o, incluso —podríamos añadir— la insinuación de un cierto futuro alternativo, cuyo anhelo entre el pueblo sea capaz desatar la violencia revolucionaria. Más concretamente, afirma Sorel que:

“[C]iertas construcciones de un porvenir indeterminado en el tiempo pueden poseer gran eficacia y muy pocos inconvenientes, cuando son de determinada naturaleza; lo cual se produce cuando se trata de mitos en los que se manifiestan las más fuertes tendencias de un pueblo, de un partido o de una clase”
(Sorel, 2005: 178).

Estas líneas pueden resultar muy sugerentes, aun cuando, por otra parte, no se comulgue con la concepción política del mismo Sorel. Dicha concepción tiene el mérito de reconocer la función que la *voluntad* o, incluso más, si se quiere, la *irracionalidad* desempeña en la vida política. La crítica de Sorel a la utopía y su reivindicación paralela del mito tiene que ver, precisamente, con el reconocimiento de esa función: la impotencia revolucionaria de la utopía —*pace* Karl Popper (1972, pp. 425-435) — se explica por su origen puramente racional. Como construcción intelectual, como simple producto de la inteligencia, la utopía puede, a lo sumo, ofrecer razones en favor del reformismo, pero nunca despertar el «fuego metafísico» (Sorel, 2005: 68) que alimenta la hoguera revolucionaria y que sí atizan los mitos.

El problema de las utopías es que no ofrecen un sentido para la lucha, lo que para Sorel vale tanto como decir que no ofrecen un sentido para la vida. El mito, a diferencia de la utopía, compromete toda nuestra existencia porque ofrece un sentido último y totalizador, que se cataliza en la acción política y, más específicamente, en lo que a juicio de Sorel es la acción política por antonomasia: el ejercicio de la violencia revolucionaria. Si la vida sólo cobra sentido una vez que la comprometemos en una acción lo suficientemente digna y noble como para justificar su sacrificio; o, dicho de otro modo, si el sentido de la vida sólo se puede medir por la sublimidad del fin por el que estamos dispuestos a arriesgarla, entonces la vida no puede tener valor de espaldas a la realización de una vida heroica. Pero si la vida debe ser heroica, entonces la política también debe serlo. En la medida en que las utopías describen sociedades estáticas, en la que la consecución de la paz ha clausurado las posibilidades del heroísmo, entonces la utopía, a diferencia del mito, no solo es incapaz de promover el único acto político verdaderamente virtuoso —la revolución—, sino que además es un engaño y una forma de alienación.

La irracionalidad que recoge Sorel (2005) en su apelación al mito es una irracionalidad *heroica y estética*⁴⁷. Su énfasis en estas dos dimensiones, le permiten advertir otra característica del mito: su impermeabilidad a la lógica. “Cuando nos situamos en el terreno de los mitos, estamos a cubierto de toda refutación” (p. 92), observa complacido. Esta característica del mito resuelve dos problemas. El

⁴⁷ Irracionalidad, por lo demás, muy reivindicada por intelectuales hasta antes de la Primera Guerra Mundial. En las páginas iniciales de *Sin novedad en el frente*, ya se da cuenta de la rápida y estrepitosa bancarrota de esa visión romántica e ingenua de la guerra. Allí Erich Maria Remarque recuerda las arengas con las que el profesor Kantorek alentaba a sus alumnos a alistarse en el ejército, las que referían a la «suerte de vivir una gran época» o un «gran proceso histórico» (Remarque, 1994, págs. 17-19; 163-164). Fuera de la novela de Remarque, se puede encontrar otro testimonio de la desolación de esa guerra en los poemas *Der Krieg* y *Grodek*, de Georg Heym (1887-1912) y de Georg Trakl (1887-1914), respectivamente. Para ello véase (Talens, 1998).

primero es, si se quiere, retórico: permite prescindir no solo de la precisión, sino de toda discusión dialéctica. Para el intelectualista “lo que carece de precisión, carece asimismo de seriedad” (p. 85). Pero es precisamente ese prurito racionalista lo que le impide comprender el papel de los mitos en la vida política y, con ello, la desventaja en que se encuentra. El segundo es epistemológico: la inasibilidad del mito lo vuelve inmune a cualquier intento de abordaje por parte del *lógos*. Esta inasibilidad no sólo supone contraponer mito y *lógos*, sino, además, declarar inabordable teóricamente el mito. Las ciencias sociales —la sociología, el derecho, la psicología social, pueden tal vez otear las insondables profundidades del mito, pero no medirla ni comprenderla.

El mito y la historia

En el pasaje citado arriba, Sorel atribuye al mito una función prospectiva: este consiste en un «porvenir», cuya sola promesa es capaz de desencadenar la violencia revolucionaria. Sin embargo, la subordinación del mito a esa dimensión prospectiva ofrece alguna dificultad, si, como observa Lévi-Strauss,

“La mitología es estática: encontramos los mismos elementos mitológicos combinados de infinitas maneras, pero en un sistema cerrado, por contraposición a la historia, que, evidentemente, es un sistema abierto”. (Lévi-Strauss, 2019: 74).

Por lo demás —cabría añadir— el mito es y solo puede ser una fuente de sentido si es capaz de ofrecer una experiencia de la *totalidad*. Ello supone, forzosamente, la representación de una historia —en este caso política— que conecte, tanto los hechos particulares con el origen que

los hace posible, como la conexión de ambos con el del fin en que se consuman. Dicho de otro modo, el mito enhebra todos los hechos particulares tanto a su origen como a su fin, y es esa concatenación la que, por medio de la representación de la totalidad, ofrece la experiencia de sentido.

Esta representación de la totalidad que se verifica en la conciencia mítica permite explicar, ahora, dos cosas. En primer lugar, la fascinación que ejerce entre los miembros de una comunidad el relato mítico de su fundación. Ese relato, de cara a la constitución de dicha comunidad, aventaja en importancia a cualquier descripción histórico-positiva de su origen, si es que derechamente no la desplaza o sustituye completamente. Por lo que concierne a la constitución de una sociedad, la historia mítica, dicho de otro modo, se impone siempre a la historia empírica. La razón de ello es que, con vistas a esa constitución, resulta muchísimo más importante la misión o destino por la que se constituye una comunidad, que los hechos históricos que en efecto le dieron origen. Rómulo y Remo, o la huida de Eneas de Troya recogen mejor el sentido de la misión histórica de Roma, que las explicaciones arqueológicas acerca de los primeros asentamientos en el Lacio; el relato —i.e., la epopeya— acerca del guerrero que, por primera vez, y bajo los auspicios de un dios, desembarcó en tal o cual isla después de tales y cuales vicisitudes es infinitamente más importante que los registros históricos de tal o cual migración.

En segundo lugar, esta representación permite explicar la capacidad inagotable del mito para *vivificar* una sociedad: esta siempre puede volver a la descripción de su fundación mítica con el objeto de recuperar su sentido y, con ello, su propia identidad. El mito constituye una fuente inagotable de renovación, pues devuelve la sociedad al momento prístino e inequívoco en que conquistó su nacimiento por medio de la consecución de un cierto fin. Ese es su momento más verdadero y por eso su historia —i.e., su historia

empírica— debe poder de algún modo referir al esplendor de ese momento genuino, mediante su recuerdo y recreación. La afirmación del filósofo alemán Ernst Cassirer (1874-1945) de que la mitología de un pueblo contiene toda su historia puede ser, entonces, una exageración, pero no una falsedad (Cassirer, 2022).

Pero el carácter estático del mito ¿no conspira contra la posibilidad del heroísmo a la que en el fondo apuntaba Sorel? No si cada uno debe participar por sí mismo en la historia mítica por medio de la recreación de los actos y episodios que la constituyen. Esa posibilidad explica la posibilidad del mito de interpelar a los individuos y de vivificar, por su intermedio, a la sociedad.

De las utopías socialistas al mito octubrista

Si echamos mano del mito como principio de explicación de la política y, sobre todo, de sus crisis ¿cómo debemos interpretar el «estallido» de 2019? Tal vez lo más conveniente sea ir mostrando su develamiento en los hechos que acontecieron desde aquel entonces. Para ello volvamos a Sorel. O valgámonos de él, concretamente cuando dice que:

“A lo largo de mis reflexiones, había echado de ver algo que me parecía tan sencillo que creía que no valía la pena destacarlo: los hombres que toman parte en los grandes movimientos sociales se imaginan su acción inmediata en forma de batallas que conducen al triunfo de su causa. Proponía yo denominar «mitos» a esas construcciones, cuyo conocimiento es de tanta importancia para el historiador”. (Sorel, 2005: 82).

La concepción de Sorel resulta provechosa porque provee una «explicación» de la violencia desatada a contar de octubre de 2019:

dicha violencia revolucionaria responde al atractivo —cuando no a la provocación— ejercida por un mito redentor. Pero ¿qué mito es ese? O, más explícitamente, ¿en qué consiste, dicho de otro modo, el «mito octubrista»?

Antes de ofrecer una descripción del mismo, es preciso reconocer aquello contra lo que en primer lugar se dirige. Su blanco. El mito que alimentó el estallido debió acumular y conjurar una fuerza suficiente como para destruir lo que, desde la perspectiva de Sorel, cabría calificar como la «utopía neoliberal», esto es, una construcción intelectual que, aun cuando en su momento pudiera haber sido impuesta por la fuerza⁴⁸, carece de potencial revolucionario, al ser incapaz de ofrecer un sentido total, por el cual arriesgar la vida.

En consecuencia, el mito octubrista es primordialmente un *mito antineoliberal*, como quedó claro en virtud del eslogan, muy prontamente acuñado, de «Chile será la tumba del neoliberalismo». A ello podría añadirse aún el hecho de que la fuerza disruptiva del mito venía cocinándose a fuego lento, durante al menos quince años, no solo en los innumerables trabajos de intelectuales de izquierda (y de derecha) que denunciaban «el modelo»⁴⁹, sino, además (y, sobre todo), en la larga seguidilla de acciones de corrupción que se fueron destapando durante esos mismos años⁵⁰. A ello se puede sumar, todavía, la pérdida de vigor del modelo neoliberal, como consecuencia de las malas políticas públicas adoptadas en Chile, particularmente durante el segundo gobierno de Bachelet⁵¹.

⁴⁸ Para la distinción de Sorel entre la fuerza (que es opresora) y la violencia (que es emancipadora), véase (Sorel, 2005, pág. 231).

⁴⁹ Por ejemplo, (Mansuy, 2016).

⁵⁰ Para la descripción de esa seguidilla de acciones y causas, véase (Mayol, 2019)

⁵¹ Véase, al respecto, (Paniagua Prieto, 2021). Los efectos de dichas políticas públicas en el agravamiento del así llamado «malestar» pueden ser convenientemente omitidas, pero difícilmente despreciadas.

Del hecho de que la explicación mítica pueda, incluso anticipadamente, señalar las condiciones que propician el desencadenamiento de la violencia, no se sigue que pueda, igualmente, señalar el día y la hora en que dicho desencadenamiento tendrá lugar. La fuerza del mito, como bien observa Sorel, se origina en su misma ambigüedad. Por eso, su apelación nos permite saber que habrá un «estallido», pero no cuándo ocurrirá, ni cuál será su alcance ni las formas concretas que adoptará. Los libros, los casos de corrupción, «el malestar», etcétera, remueven, para decirlo con el lenguaje de la escatología bíblica, el *katéchon*, el obstáculo que impide la llegada del Anticristo, pero no determinan la fecha cierta de su advenimiento. Pero, además, todos esos factores, tampoco permiten saber la forma que dicho Anticristo adoptará. En ese sentido, el profeta de la revolución anuncia un dios que intuye, pero que al fin y al cabo no conoce. En breve, el profeta puede saber que habrá un frenesí revolucionario, catártico, pero no las formas que dicho frenesí adoptará. Puede saber que arderán los edificios públicos, pero no que, al calor del fervor revolucionario, se compondrían la canción «El violador eres tú» o se profanaría del modo más inmundo la bandera nacional en una «performance» de un acto electoral.

Y a propósito de esos mismos hechos, bien puede afirmarse que el rostro del dios conjurado por el estallido, el dios que encarna el mito octubrista, empezó a aparecer durante la destrucción de esos días y no se manifestó totalmente sino hasta la Convención. Podemos denominar a ese período, el período del *develamiento del mito octubrista*.

Lo que dicho período revela es que el mito inicial del anti-neoliberalismo rápidamente mutó, desbordando las diversas utopías socialistas que lo antecedieron y lo invocaron: en la manifestación arrolladora de su fuerza, el mito redujo a la insignificancia, a la anécdota, a las utopías que abogaban por *Otros modelos* y que, en

consecuencia, se limitaban a renegar del lucro aquí o allá. Esa reducción se explica por la misma razón por la que el mito antineoliberal no podía saciarse con la destrucción del neoliberalismo: su hambre revolucionaria iba mucho más allá y si no podía colmarse con la víctima neoliberal, tampoco las ofrendas de las utopías socialistas podían serle suficientes. La ampliación de su alcance en virtud de su sed de justicia explica la rápida mutación del *mito antineoliberal* en el *mito octubrista*.

En realidad, dicha mutación fue casi instantánea. La consigna de los «treinta pesos» («no son treinta pesos, son treinta años»), acuñada con ocasión del alza de la tarifa del metro, fue superada en los hechos por la profanación y destrucción, primero selectiva y luego indiscriminada, de símbolos nacionales. Esa profanación revelaba que el objeto del mito octubrista iba mucho más allá de los treinta años de la Concertación y del modelo neoliberal y que, en consecuencia, reclamaba, como blanco de su violencia redentora, no sólo las estaciones del metro construidas durante esos treinta años, sino la historia nacional en su conjunto⁵². «No son treinta años, son trescientos años», decía la genuina —pero todavía no definitiva— consigna.

Esta ampliación nos permite volver al punto anterior, acerca de la relación entre el mito y la historia, pues, por medio de ella, este se puede conectar, no solo con el porvenir que promete, sino también al origen que proporciona un sentido de totalidad a la acción revolucionaria. El mito octubrista se conecta natural, e incluso inevitablemente, con toda la historia republicana, pues sólo por medio de esa conexión es que puede reclamar todos sus derechos y exhibir toda su fuerza; solo por medio de ella está en condiciones de alcanzar toda su expresión. Si la estatua de ningún prócer —con la excepción

⁵² Esa tesis defendí en (Schwember, 2020).

de Manuel Rodríguez, símbolo del revolucionario— es digna de permanecer en pie; si no hay ninguna figura ni ninguna institución de toda la historia nacional digna de ser rescatada, es sencillamente porque toda la historia nacional no es más que una sucesión continuada de injusticias. Por lo mismo, dicha sucesión debe ser, no solo interrumpida sino, de algún modo, resarcida. La violencia ejercida contra la autoridad —particularmente contra los Carabineros—, contra los edificios públicos, contra los emblemas patrios expresan esa voluntad punitiva y rectificadora, decidida a poner fin la seguidilla de injusticias que constituyen la historia nacional. El secreto de la fuerza del mito octubrista se encuentra, por tanto, en la convicción de que la historia nacional arranca con una injusticia original, destinada a repetirse —en virtud del poder mágico del origen— ininterrumpidamente mientras no sea sustituida por un nuevo comienzo. Lo que se necesita, entonces, es una *refundación real y simbólica* del proyecto nacional. La necesidad de dicha refundación viene, además, exigida por los pecados originales sobre los que se constituyó un país. La historia, incluso la defectuosa, puede servir de punto de partida del mito, en tanto ofrece una imagen de lo que no debe ser y de lo que, en consecuencia, se debe superar. El origen mismo reclama su abrogación o, si se quiere, su redención. Las fuerzas hercúleas para esa redención solo pueden hallarse en una revolución reparatoria. *El mito octubrista es el mito de la necesidad imperiosa de una revolución capaz de reparar el curso de toda la historia nacional.* El octubrismo es la adhesión a ese mito.

La Convención y el mito octubrista

En virtud de su misma imprecisión e inasibilidad, el mito goza de cierta impunidad histórica. Es decir, para su eficacia no necesita de la exactitud. Le basta con la verosimilitud. Los hechos puntuales que

explican la *próphasis* del estallido no alcanzan a explicar el alcance del mito octubrista que, como vemos, alcanza a toda la historia nacional. Por ello es importante la idea promovida por una parte importante de la historiografía de que la historia nacional se puede y se debe leer en la clave de la lucha entre opresores y oprimidos y, sobre todo, según la idea de que, durante todo su transcurso, el pueblo de Chile no ha podido nunca darse, verdaderamente, una constitución. Esta idea — promovida muy especialmente por influyentes historiadores⁵³— es la que le da verosimilitud al mito octubrista. Pero ¿qué significa que el pueblo no haya podido darse nunca una constitución? Obviamente eso no puede significar que Chile nunca ha tenido una constitución, pues eso es manifiestamente falso. Lo que quiere decir —sobre todo de cara a la verosimilitud del mito octubrista— es que las constituciones que ha tenido han sido siempre el resultado del acuerdo de unos pocos, que las han dictado teniendo en cuenta únicamente sus intereses. La constitución debe ser democrática y eso solo puede suceder si es «de todos». Y a la inversa, la constitución solo puede instaurar un régimen democrático si es que «todos» concurren a acordar su contenido.

El alcance constitucional del mito octubrista quedó asegurado por el *Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución* del 15 de noviembre de 2019. No obstante, antes ya de ese acuerdo, podía preverse ese alcance en virtud de las variopintas demandas levantadas o amplificadas en virtud y/o con ocasión del «estallido» social: el hecho de que distintos grupos —indigenistas, feministas, anticolonialistas, animalistas, ecologistas, veganos y minorías sexuales— hayan levantado sus demandas simultáneamente, a propósito de la misma cuestión y esgrimiendo una misma concepción de la justicia no es, sin embargo,

⁵³ Sergio Grez y Gabriel Salazar son tal vez los mejores ejemplos. Al respecto, véase (Grez Toro, 2009), (Salazar, 2011). Véase también el *Manifiesto de historiadores* (1999), editado por ambos. Esta idea, en fin, es rescatada desde un primer momento por Garcés en (Garcés, 2020).

garantía de su compatibilidad. Pero ¿cuál era esa cuestión y cuál esa concepción de la justicia que todos tenían, supuestamente, en común? La cuestión era la injusticia del sistema liberal y capitalista, precipitado de todas las aspiraciones heteropatriarcales; la concepción común de justicia era la que se seguía de la predilección compartida por la igualdad sustantiva, es decir, por la idea de que la constitución debía corregir las diferencias estructurales que el reconocimiento de la igualdad formal mantiene —supuestamente, otra vez— intactas⁵⁴.

Esta noción de justicia recibió su primera oportunidad en las reglas de elección de los convencionales. Luego, en virtud de la composición de la Convención, en el texto que esta le propuso finalmente a la ciudadanía para su aprobación.

La composición de la Convención es una consecuencia de la concepción de justicia que subyace al mito octubrista: si nunca ha habido justicia, porque las reglas siempre las han redactado los mismos (es decir, los varones blancos, descendientes de europeos, heterosexuales, ilustrados, etcétera), entonces es de la mayor importancia que esta vez *otros* lo hagan. Dicho de otro modo, la rectificación de la injusticia requiere —una vez superado el momento de la violencia y ya en el momento, por tanto, de la institucionalización del nuevo orden— de la participación y el reconocimiento de todos los

⁵⁴ Esta, por otra parte, es una idea que —pace Susan Neiman— comparte toda la izquierda progresista actual. Por ejemplo, y a propósito de los estallidos y de la capacidad de mediación social del parlamentarismo liberal, la filósofa española Jule Goikoetxea afirma que: «El problema estructural es que el parlamentarismo liberal [...] se creó principalmente por y para una clase determinada, que no es solo capitalista, sino patriarcal, colonial e imperialista, es decir, muchos pueblos no han podido decidir cómo gobernarse en ningún momento, ni siquiera por un par de décadas» (Noguera & Goikoetxea, 2021, pág. 14). En virtud de la importancia y aceptación de estas ideas entre la izquierda contemporánea, no puede descartarse que la propuesta de la Convención tenga un carácter paradigmático, en el sentido más estricto y riguroso de la palabra: esa propuesta recoge de modo *ejemplar* las ideas de la izquierda no solamente para Chile, sino para todo Occidente.

grupos antes excluidos. La representación corporativa (i.e., por grupos: los indígenas representan a los indígenas, los blancos a los blancos, los gais a los gais, etcétera) constituye la forma ideal de representación, de acuerdo con los mismos principios de la igualdad sustantiva⁵⁵.

Aquí podemos prescindir de los detalles, tanto del proyecto de la Convención, como de los episodios que contribuyeron a su descrédito. Lo que nos interesa son, fundamentalmente, dos cosas. La primera es que en y con ella termina de develarse en contenido del mito octubrista. Las normas de la propuesta, que reflejan el principio de la «igualdad sustantiva», como por ejemplo la plurinacionalidad, la paridad, la recepción (defectuosa) de la teoría *queer*⁵⁶, permiten precisar su contenido, que no es otro que el *mito del restablecimiento de la historia nacional por medio del resarcimiento de las injusticias y la restauración de la naturaleza*. Algunos de los proyectos de preámbulo para el texto de la Convención expresaban fielmente el *ethos* de este propósito. Especialmente el que afirmaba que la independencia había tenido lugar a partir de un contexto «excluyente» (sic) y que el 18 de octubre de 2019 —i.e., la fecha del «estallido»— era una fecha de «reencuentro».

La segunda es el debilitamiento decisivo del mito. El «fuego metafísico» que alimentaba la idea de la injusticia histórica y total pudo mantener su atractivo sólo mientras pudo evitar el desafío de plasmarla en una constitución. Hasta antes de eso, su intensidad daba

⁵⁵ Para una lúcida defensa de la representación formal frente a la corporativa, véase (Fuentes Caro, 2022). Para la colisión entre el feminismo y la integridad cultural que reclama el indigenismo, véase (García, 2022).

⁵⁶ Para una crítica de la recepción que tuvo la teoría *queer* en el proyecto de la Convención, véase (Schwember, 2023). Para una crítica de la paridad (o paridad de salida, como se la suele llamar en la discusión nacional), puede consultarse (Verbal, 2023). Una crítica general del multiculturalismo y de las concepciones sustantivas de igualdad, se encuentra en (Loewe, 2023).

un carácter épico a la violencia destituyente ejercida en las calles, al punto de hacerla aparecer como un fin en sí mismo⁵⁷. Los intentos por aterrizarla en un proyecto institucional —en el que el adanismo que la animaba aparece como inevitablemente ridículo y las reglas que la expresaban como injustas— sumado al hartazgo que finalmente produce la violencia en el grueso de la población y al inesperado *katéchon* de la pandemia, terminaron agotando los bríos de ese fuego aparentemente inextinguible.

El fin del Mito

¿Supuso la victoria del «Rechazo» en el plebiscito del 4 de septiembre el fin del «mito octubrista»? Ciertamente, es una temeridad desahuciar los mitos. Sobre todo, porque estos son camaleónicos y pueden reencarnarse en otros. Sin embargo, sí es posible afirmar que, a contar de esa victoria, el mito de la izquierda revolucionaria —del cual el mito octubrista es simplemente una variante— se ha visto privado de aquello que le infundía vida y por el que reclamaba toda su legitimidad: la idea de que el proyecto político que representaba era el secreta y fervientemente querido por el pueblo.

El resultado electoral del 4 de septiembre de 2022 liquidó la representación de la historia nacional que animaba al mito revolucionario. El mentís de la idea de que, durante toda la historia

⁵⁷ La idea de que el pueblo vive —de que vivimos— en dictadura o bajo alguna forma de servidumbre es una condición necesaria de esa violencia destituyente. Seguramente por ello la izquierda revolucionara necesita creer que ese es el caso. Un pasaje del libro de Garcés da cuenta de eso. Poco después de criticar, con razón, la afirmación de Piñera de que «estamos en guerra», dice que el gobierno «apostó» por el «estado de sitio». Dado que eso nunca ocurrió y que, además, la declaración de dicho estado requiere de la aprobación del Congreso, no puede más que suponerse que el *lapsus calami* de Garcés responde a su necesidad de creer que estábamos en guerra. Si así fuese, podría ironizarse con el hecho de que nunca agradeció al presidente Piñera el desatino con que satisfizo su propia necesidad psicológica de creer que vivía bajo una forma de dictadura.

republicana del país, las oligarquías político-económicas nunca habrían permitido al pueblo de Chile darse libre y soberanamente una constitución supone el fin del *hechizo* del mito revolucionario. Más específicamente, la eficacia de ese hechizo dependía de dos ideas, cuya conexión ha quedado cortocircuitada por la victoria del «Rechazo». Primero, la idea de que, a causa de los obstáculos puestos al poder constituyente popular, el pueblo de Chile ha vivido, en realidad, siempre bajo distintas formas de dictadura; segundo, que la izquierda radical, en su calidad de promotora y guardiana exclusiva de ese poder, era la verdadera y única representante del pueblo. La conexión entre estas dos ideas dependía de la verosimilitud de la afirmación que el proyecto político de esa izquierda nunca había tenido la oportunidad de ser propuesto a la ciudadanía para su votación. Mientras eso no sucediera, dicha izquierda todavía podía permitirse creer —y pretender que otros también lo hicieran— que gozaba de una especie de representación metafísica del pueblo, impermeable a los resultados de cualquier elección.

Esa conexión es la que el resultado del plebiscito de salida de 2022 cortó para siempre: el pueblo, con la representación sociológica y corporativa exigida por la izquierda radical, redactó un proyecto constitucional, que supuestamente iba, por fin, a implantar una verdadera democracia, con verdadera participación entre verdaderos ciudadanos, que se tributaban verdadero reconocimiento. Ese proyecto, sobrecargado de significados —y, peor, votado en el aniversario de la elección de Allende, es decir, el mismo día en que debía reanudarse simbólicamente el proyecto interrumpido en 1973— no solo fue desechado, sino que fue rotunda y especialmente rechazado por todos aquellos cuya representación dicha izquierda se arrogaba. La izquierda radical fue democráticamente derrotada, bajo las únicas condiciones de legitimidad que admitía y que tan perentoria y vehementemente demandaba. El significado y la gravedad de ese

hecho puede resultar insoportable para el mito en y del que vive esa izquierda.

Con todo, intentemos todavía formular ese significado, así como su alcance, en los propios términos del mito: el fracaso del mito revolucionario —y de paso del mito octubrista— se debe a su incapacidad para conectar con el origen, con la fundación mítica de la sociedad y, en consecuencia, con el sentido total de la historia de Chile. Si la izquierda revolucionaria, por medio de la Convención, tenía que relatar un mito, con la que el pueblo pudiera identificarse y, en consecuencia, reconocerse, entonces no puede más que concluirse que la Convención fracasó en su cometido y que relató un mito distinto del que el pueblo quería y necesitaba. Y eso significa, no solo que el mito de esa izquierda es distinto de aquel que podría explicar y dar sentido a la historia nacional, sino que, peor aún, es completamente incompatible con él.

REFERENCIAS

Cassirer, E. (2022). “Filosofía de las formas simbólicas. El pensamiento mítico” (Vol. II). (M. Morones, Trad.) México: Fondo de Cultura Económica.

Fuentes Caro, E. (2022). “Vox Populi. Escaños reservados, pueblo, y representación política”. En E. Fuentes Caro (Ed.), *El desafío indígena y la democracia liberal* (págs. 57-90). Santiago: Faro UDD - Tajamar Editores.

Garcés, M. (2020). “Estallido social y una Nueva Constitución para Chile”. Santiago: Lom ediciones.

García, F. (2022). “Integridad cultural o cultura patriarcal. El dilema del candado interseccional”. En E. Fuentes Caro (Ed.), *El desafío indígena y la democracia liberal* (págs. 195-231). Santiago: Faro UDD - Tajamar Editores.

Grez Toro, S. (2009). “La ausencia de un poder constituyente democrático en la historia de Chile”. *Revista Izquierdas*, 3(5), 1-21.

Grez, S., & Salazar, G. (Edits.). (1999). "Manifiesto de historiadores". Santiago: Lom ediciones.

Lévi-Strauss. (2019). "Mito y significado". (H. Arruabarrena, Trad.) Madrid: Alianza Editorial.

Loewe, D. (2023). "Multiculturalismo, identidad, plurinacionalidad y todas esas cosas". Santiago: Fondo de Cultura Económica.

Mansuy, D. (2016). "Nos fuimos quedando en silencio. La agonía del Chile de la transición". Santiago: Instituto de Estudios de la Sociedad .

Mayol, A. (2019). "Big Bang. Estallido Social 2019. Modelo derrumbado. Sociedad rota". Política inútil. Santiago: Editorial Catalonia.

Noguera, A., & Goikoetxea, J. (2021). "Estallidos. Revueltas, clase, identidad y cambio político". Manresa: Bellaterra Edicions.

Paniagua Prieto, P. (2021). "Atrofia. Nuestra encrucijada y el desafío de la modernización". Santiago: Ril editores.

Popper, K. R. (1972). "Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico". (N. Míguez, & R. Grasa, Trads.) Barcelona: Editorial Paidós.

Remarque, E. M. (1994). "Sin novedad en el frente". (J. Vilar, Trad.) Barcelona: Edhasa.

Salazar, G. (2011). "En el nombre del poder popular constituyente". Santiago: Lom ediciones.

Schelling, F. (2023). "Introducción a la filosofía de la mitología". (Y. López Frühbeck, Trad.) Salamanca: Ediciones Sígueme.

Schwember, F. (2020). "¿El eterno retorno de la violencia? Las injusticias históricas y el estallido de octubre". En B. Ugalde, F. Schwember, & V. Verbal (Edits.), *El octubre chileno. Reflexiones sobre democracia y libertad* (págs. 137-165). Santiago: Democracia y libertad.

Schwember, F. (2023). "¿Una constitución feminista? La recepción (defectuosa) de la teoría queer en la propuesta constitucional de 2022". En V.

Capítulo 10: El Mito

Verbal (Ed.), “Feminismo y Constitución. Ensayos para el debate” (págs. 19-69). Santiago: Democracia y libertad - Libertad y Desarrollo.

Sorel, G. (2005). “Reflexiones sobre la violencia”. (F. Trapero, Trad.) Madrid: Alianza Editorial.

Talens, J. (1998). “Tres poetas expresionistas alemanes”. Stadler, Heym, Trakl. (J. Talens, E.-E. Keil, & V. Forés, Trads.) Madrid: Hiperión.

Verbal, V. (2023). “La paridad de género: mal y bien entendida. En Feminismo y constitución”. Ensayos para el debate (págs. 71-116). Santiago: Libertad y Desarrollo - Democracia y Libertad.

EL DISCURSO

18 DE OCTUBRE, MODERNIDAD Y DISCURSOS DEL MALESTAR

Por Jacqueline Dussailant

Resumen

Los discursos sobre el malestar en Chile han sido una constante histórica, evolucionando junto con la modernidad del país. En este ensayo examino la relación entre modernidad y expresiones de malestar, centrándome en los eventos de octubre de 2019. Propongo un enfoque que analiza las diversas narrativas del malestar a lo largo de la historia chilena, desde el siglo XIX hasta la actualidad. El análisis revela que las manifestaciones de descontento han sido articuladas principalmente por las élites intelectuales, variando en sus focos de crítica según el contexto histórico. Destaco figuras como Marcial González en el siglo XIX, Alejandro Venegas y Luis Emilio Recabarren a principios del XX, y más recientemente, los debates sobre el malestar en los años 90. Así, se sugiere que las narrativas críticas sobre el neoliberalismo y la modernización, desarrolladas en instituciones como la Universidad Arcis, la editorial LOM y CLACSO en los 90, influyeron en los movimientos de 2006 y 2011, y en las protestas de 2019. Así, las movilizaciones recientes no fueron simplemente una expresión espontánea de malestar universal, sino el resultado de un proceso complejo de interpretación y articulación de demandas sociales, influenciado por narrativas críticas desarrolladas durante décadas.

Introducción

Las palabras que escogemos para describir o definir un fenómeno en sí funcionan como una interpretación de este. Así, cuando decimos “revolución”, “modernidad”, “malestar” o “estallido” estamos dando una interpretación de lo acontecido. Pero sabemos que el sentido que damos a las palabras cambia de un ser interpretador a otro y de una época a otra. En este punto vale la pena recordar a Edward H. Carr cuando señalaba que la historia es un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo interminable entre presente y pasado (Carr, 1990: 29). Aunque hechos y lenguaje o, si se quiere, lo acontecido y el relato de lo acontecido no son lo mismo, la interpretación histórica de los hechos no se realiza sin lenguaje por lo que siempre es “otra cosa: más o menos” (Koselleck, 2014: 88). Así, con respecto al malestar en su vinculación con la modernidad, aunque cambia de sentido de un momento al siguiente, puede seguir compartiendo algunos de elementos originales asociados a las contradicciones propias de la modernidad.

Puede que sea demasiado pronto para hacer una interpretación histórica de lo acontecido en octubre del 2019 en Chile, ya que no sabemos si fue un proceso espontáneo que sigue en curso o que se ha “cerrado”, o si fue una asonada organizada que fracasó. Si fue una manifestación de un “malestar ciudadano”, como se ha señalado, podríamos estar viviendo en estos días sus últimos estertores manifestado en el hastío que experimentan muchos chilenos y en especial en el contundente rechazo a ese primer proyecto constitucional que teóricamente venía a sanar la crisis. O bien, visto desde otra perspectiva, podría decirse que el 2019 marca el comienzo de una nueva relación entre la autoridad y la ciudadanía. El hecho de que se hayan utilizado con tanta frecuencia los conceptos de “malestar” y “estallido” resulta interesante, ya que el primero apela a una incomodidad o desazón indefinible, mientras que lo segundo

remite a algo sorpresivo... ¿fue realmente una explosión derivada de una molestia difusa?

Más allá de los estudios y explicaciones que se han hecho en estos cinco años, no hay duda de que quedan muchas interrogantes sobre la mesa. ¿Fue expresión de un malestar particular asociado a la historia del país o fue parte de un malestar global? ¿Fue fruto de una transición política estimada inconclusa o efecto de la orfandad de la izquierda tras la desintegración de la Unión Soviética y la simbólica caída del muro de Berlín? ¿Es realmente la desigualdad social y económica un problema que estaría en su origen? ¿O la frustración de quienes mejoraron su estándar de vida con el crecimiento económico del país y luego quedaron a la deriva sin poder asegurar sus logros? ¿Una pataleta juvenil de quienes nacieron y crecieron en democracia y con un relativo bienestar económico? ¿O producto de la desesperación de un estudiantado altamente endeudado? ¿Un movimiento de elites ilustradas o de sujetos marginados? ¿Cómo explicar tanto malestar en un país considerado modelo dentro de América Latina? ¿Derivó de una pertinaz desconexión entre la política y los ciudadanos? ¿Hubo de verdad más gente protestando que pobres en las estadísticas? ¿Fue realmente un “estallido” espontáneo o un trabajo orquestado? ¿O una mezcla de ambos? ¿fue la irrupción de una multiplicidad de crisis de participación política, de representación, de desconfianza en las instituciones, de la probidad pública y privada? Estas y otras preguntas siguen siendo objeto de debate y aún no hemos hallado respuestas claras y satisfactorias. Por lo pronto, al menos desde la historia se pueden identificar hechos y algunos antecedentes, pero insistimos en que difícilmente contamos con la claridad y distancia para dar una explicación completa. Tampoco es el objetivo de este ensayo, que apunta más bien a observar brevemente este fenómeno desde la perspectiva de las expresiones del malestar y su relación con la modernidad.

Malestar y Modernidad

Los discursos sobre el malestar no son nuevos. La modernidad desde sus inicios fue tanto abrazada con entusiasmo como rechazada con sospecha o abierta repulsión. Ya Rousseau con su naturalismo hacía una crítica de la modernidad, al instalar en la naturaleza el lugar del orden, de la armonía y de la razón. Siguiendo a David Lyon, la modernidad fue ese orden social surgido tras la Ilustración- pero cuyas raíces se hallan en los siglos que le antecedieron- que mostró un dinamismo sin precedentes y un cierto rechazo o alejamiento de formas de vida y convicciones tradicionales (Lyon, 1999). Pero, destaca Lyon, su orientación hacia el futuro, que está directamente relacionada “con la fe en el progreso y en el poder de la razón humana para promover la libertad”, también se representa como fuente de malestar. Desde muy temprano, junto con aparecer voces que celebraron sus logros, fueron surgiendo también miradas más escépticas, de preocupación o de abierta resistencia. El poeta francés Charles Baudelaire observó tempranamente que la modernidad era lo transitorio, lo fugaz y que, a diferencia de quienes veían con buenos ojos el progreso y los avances de la ciencia y la técnica, él advirtió deshumanización y desapego a la tradición. Luego, vendrían otras voces críticas:

“En el mundo de la producción, Marx veía a los capitalistas explotadores y los trabajadores alienados. Durkheim percibió una inquietud e incertidumbre profunda sobre el futuro entre los afectados por la nueva división del trabajo. Weber temía que la racionalización acabara por aplastar al espíritu humano, encerrándolo tras los barrotes de la jaula de hierro burocrática. Simmel intuía que la sociedad de extraños produciría un nuevo aislamiento y fragmentación social”. (Lyon, 1999: 61).

Nicolás Casullo se pregunta por qué la modernización occidental “fue sentida y leída” por muchos como “pérdida de la experiencia humana, de lo ético, de lo sensible, de lo virtuoso, de la autenticidad del ser consigo mismo” (Casullo, 1998:77), como si aquello que parecía superar la modernidad era algo mejor. ¿No es el estado moderno, la libertad de los individuos, la democracia, la igualdad ante la ley y el progreso económico un avance con respecto al pasado? ¿O han sido demasiado altos los costos pagados para alcanzar ese avance civilizatorio? Incluso se ha llevado la discusión al plano de la moral. Ross Poole, por ejemplo, señala que “la modernidad, por un lado, necesita de la moral, pero, por el otro, la hace imposible” (1993:9-12). Por su parte, en *Todo lo sólido se desvanece en el aire*, Marshall Berman observa que la modernidad “amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos” arrojando a todos “en una vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y angustia” (Berman, 2008: 1).

En el caso de Chile, a lo largo de su historia republicana se han ido alzando distintas voces para expresar ya sea un malestar momentáneo, ya sea uno arraigado en el alma nacional. Se ha intentado hallar su origen o explicación en el ámbito de la moral, de la raza, de la escasa cultura de trabajo, de las diferencias sociales, educativas y económicas de la población. Aunque resulta imposible incluirlas a todas, vale la pena señalar algunas de ellas para observar a qué apuntaban sus críticas y, en cierta medida, sus diagnósticos. En 1874 el economista liberal Marcial González pronunció un discurso titulado *Nuestro enemigo el lujo*, en el que se lamentaba la pérdida de valores de época anteriores manifestando que “la molicie ha invadido los hábitos del mayor número [de personas]”, en tanto que la “clase opulenta no quiere sino gozar por todos los medios y tratar de aumentar su riqueza a toda costa” (González, 1874: 115). También criticaba a una juventud inclinada “por el gusto caro y los placeres

fáciles”. No era el único, pues el lujo también fue juzgado por las escritoras Lucrecia Undurraga y Rosario Orrego en esos años, en especial cuando se gastaba lo que no se tenía (Undurraga, 1873; Orrego, 1873).

Más tarde, en plenos festejos del primer centenario de la independencia y en un Chile que todavía se beneficiaba de los ingresos del salitre, Alejandro Venegas, un escritor poco conocido pero muy agudo, publicó su libro *Sinceridad*. En esas páginas despliega una amarga visión del país en la forma de cartas al presidente Barros Luco, que resulta interesante por cuanto en sí misma revela esa doble cara de la modernidad. Cuando el país se modernizaba, mejoraba sus infraestructuras y avanzaba en término de acceso a servicios urbanos, educación y salud, una faceta menos feliz aparecía en el camino, en parte sintetizado en la “cuestión social” por un lado, y en el desgaste del sistema parlamentario, por otro. Descueraba a la clase política y también denunciaba la ruina y pobreza, los atrasos en la educación, la división social que le parecía irremontable, la crisis moral. Veía un país que casi veinte años después de haber sufrido una guerra civil, la de 1891, seguía dividido. En realidad, no era el único que notaba decadencia y malestar en esos inicios del siglo XX. A modo de ejemplo, el tipógrafo y fundador de los partidos Obrero Socialista y Comunista chilenos, Luis Emilio Recabarren, en una conferencia ofrecida en 1910 con motivo de la conmemoración del centenario de la independencia titulada “Ricos y pobres, a través de un siglo de vida republicana”, también dio cuenta de un malestar social que se respiraba en el país. Veía que en la clase media era donde se albergaba “el mayor número de los descontentos del actual orden de cosas”, y calificaba al pueblo chileno como “religioso y fanático” pero sin “hábitos virtuosos y morales” y a la burguesía como habituada a vivir en un “ambiente vicioso e inmoral” (Recabarren, 2017: 192-197).

Por su parte, y desde una mirada muy diferente, Francisco Antonio Encina en *Nuestra inferioridad económica* (1912) desarrolló una idea muy pesimista del pueblo chileno en relación con su mezcla racial, calificándolo de reticente al trabajo y de poco dado a las labores manuales y la actividad fabril (Encina, 1981 :79 y 86). Aunque son muchos otros los autores que interpretaron su época con cierto malestar y pesimismo, y su revisión completa desborda los propósitos de este ensayo, no podemos dejar de mencionar a Alberto Edwards. Contagiado con la mirada acerca de la decadencia inevitable de toda civilización planteada por Oswald Spengler, en La Fronda aristocrática Edwards buscaba explicar el sistema político chileno y la decadencia que en él observaba, atribuyéndola en buena parte a la frivolidad y descuido de los asuntos públicos por parte de la oligarquía (Edwards,1928; Gazmuri, 2004).

En tiempos más recientes, específicamente en la década de 1990 se dio un interesante debate sobre el tema del malestar, esta vez centrado principalmente en la búsqueda de una explicación para la apatía de los chilenos al momento de participar en las elecciones de sus autoridades. Precisamente en ese contexto, José Joaquín Brunner planteó que los discursos del malestar en relación con el “desarrollo, la modernización y la modernidad” son de larga data, pero que en el Chile de esos fines de los años noventa tenían como base lo que él definió como “visión ideológicamente neoconservadora” introducida “en algunos círculos del pensamiento progresista chileno” (Brunner, 1998: 174). Si bien hubo muchos otros analistas y académicos que participaron de estas reflexiones que no incluiremos aquí, creemos necesario destacar uno de los elementos que señala Brunner entonces, pues creemos que tiene mucho sentido en la relación entre malestar y modernidad, a saber, el choque entre expectativas y demandas. Cuando ambas no coinciden, se abre la puerta a la frustración.

Nuevas narrativas del malestar

El 14 de octubre de 2019 un número indeterminado de estudiantes secundarios y universitarios se organizó para evadir masivamente el pago del pasaje del metro capitalino. Lo hicieron física y simbólicamente “saltando los torniquetes” en protesta por un ajuste en el precio del pasaje que, sin embargo, a ellos no afectaba. Pronto empezó a acuñarse la frase “no son 30 pesos, son 30 años”, que comenzó a interpretarse como expresión de un malestar no circunscrito al alza de treinta pesos en la tarifa del metro, sino a un desprecio a los gobiernos de la Concertación y a la política de los acuerdos. El día 18 se inició un episodio de extrema violencia, saqueos, incendios, robos y un caos absoluto. Una de las imágenes más sorprendentes fue el daño a 118 estaciones de metro de Santiago y, dentro de ellas, 32 incendiadas. ¿Otro acto simbólico? Cabe tener en cuenta que el metro capitalino ha representado por décadas el orgullo de la modernización del país. También ardieron algunas iglesias, una sede universitaria y otros inmuebles, además de producirse saqueos en algunos supermercados y destrucción de locales comerciales... ¿símbolos también?

El 25 de octubre se observó una marcha multitudinaria y mayoritariamente pacífica, en la que empezó a aflorar una serie de carteles con diferentes demandas y señales de protesta, pañuelos, adhesivos, murales y figuras, como la del perro negro “matapacos” (Molina, 2020). En unos pocos días Chile se convirtió en un país rayado, grafitado, con las vidrieras cubiertas de latas y madera. Tanto en los muros como en los medios de comunicación resaltaban palabras y expresiones tales como “fin al lucro”, “demandas sociales”, “Chile despertó”, “fin al neoliberalismo”, “derechos ciudadanos”, “derechos sociales”, “abusos”, “1% más rico”, “no + AFP”, “invisibilizados”, “víctimas”, “Wallpamu”, “insuficiente” y muchas otras en contra del entonces presidente Sebastián Piñera (“dictador”), de los

carabineros y militares (irrepetibles). Ni los bomberos se salvaron. ¿Hasta qué punto dichos mensajes representaron las razones que motivaron las manifestaciones pacíficas y los actos de extrema violencia, o bien fueron apareciendo al ritmo de los hechos? ¿Representaban verdaderamente furias contenidas por parte de la población o eran el fruto de interpretaciones hechas por sectores de las elites para explicar diferentes aristas de un difuso malestar?

En un trabajo acerca de lo que denomina precisamente “narrativas del malestar”, la historiadora Cristina Moyano estudia una serie de relatos interpretativos de la realidad chilena que “configuraron sentidos críticos” respecto de la modernidad y la modernización, y que en particular pusieron en duda los logros de la transición chilena a la democracia (Moyano, 2021: 483). Con su análisis busca poner en entredicho dos argumentos que a su juicio se instalaron como “parte del sentido común de las elites políticas del país” (2021: 483). El primero sería que en esos años noventa en que gobernó la Concertación de Partidos por la Democracia se habría consolidado el crecimiento económico y reducido la pobreza y la alta brecha de desigualdad, lo que se habría visto manifestado en una consecuente reducción del conflicto social. El segundo argumento apuntaría a que la política de los acuerdos y el valor dado a los consensos habían contribuido a configurar el mito de la “transición ejemplar” (Moyano, 2021). Cuestionando la idea de que habría habido poco espacio para la crítica y escaso debate en torno a la transición, la tesis de Moyano es que, por el contrario, en esa década se desarrollaron narrativas sobre el malestar, articuladas desde diferentes frentes. Según sus palabras, “allí se fueron sembrando las semillas de un tipo de producción intelectual que fue minando, lenta pero intensamente, la hegemonía política de las elites de la transición” (Moyano, 2021: 484). Dichas narrativas, argumenta la autora, consistentes en “modelos, interpretaciones y teorías, emanadas de los dispositivos científicos,

pueden generar pautas de acción y orientación de conductas de los sujetos, contribuyendo a la producción de sentidos sociales compartidos y, por ende, colaborando a la construcción de la realidad social” (Moyano, 2021: 485).

En el 2003 el historiador Gonzalo Vial observó que la sociedad chilena desatendía un problema social relevante asociado a la pobreza y la educación, y advirtió que era un autoengaño pensar que “el solo crecimiento económico”, siendo esencial, podía por sí solo “superar el problema”. (Vial,2023:519). Tres años más tarde los estudiantes secundarios protagonizaron lo que se conoce como la “revolución pingüina”, en la que demandaban por el fin de las LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza), fin de la municipalización de la enseñanza, entre otras cosas. Es necesario tener en cuenta que el año anterior, bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos, se había aprobado la ley que dio origen al Crédito con Aval del estado (CAE), un crédito con una tasa de interés del 5,8% que abrió a muchos jóvenes el acceso a la enseñanza superior. De hecho, desde entonces y hasta 2011 el aumento de los beneficiarios fue en aumento, para mantenerse relativamente estable y decrecer a partir de 2017, con lo que el acceso a la educación superior aumentó significativamente durante una década, pero también su nivel de endeudamiento³. En 2011 otro movimiento estudiantil, esta vez liderado por los universitarios, se tradujo en sucesivas marchas en distintas ciudades del país, paralizaciones y negociaciones con el gobierno en vías de satisfacer sus demandas que fueron más allá del financiamiento y acceso a créditos, para incluir reformas sustantivas al sistema educativo del país. Pero pronto se transformaron en mucho más que eso, y surgieron críticas y demandas que involucraban áreas que desbordaban las peticiones de “educación gratuita y de calidad”. De hecho, en la búsqueda de explicaciones de los orígenes y alcances de dicho movimiento, se han esgrimido distintas líneas que podrían

sintetizarse fundamentalmente en cuatro (Paredes, Ortiz y Araya, 2018; Ortiz, 2019): el derrumbe del “modelo” (Mayol, 2013), el fin de la política de consenso de la Transición (Ruiz Encina, 2013), una pre-revolución (Salazar, 2012) y la acumulación del malestar (Tironi, 2011).

Moyano sostiene que los movimientos estudiantiles secundarios de 2006 y universitarios de 2011 “son ejemplo de cómo esas narrativas colaboraron a una crítica a la transición a la democracia [...]” (Moyano, 485). Este punto es interesante, toda vez que podría decirse que la misma generación que participó en ambos movimientos estudiantiles, tuvo asimismo un rol protagónico en las manifestaciones de octubre de 2019. De hecho, algunos de sus miembros se habían incorporado a la actividad política con las elecciones parlamentarias del 2017, ya que su triunfo les habría dado una plataforma para difundir e intentar materializar tales narrativas.

¿Dónde se habían gestado los discursos del malestar de esos años? Al respecto, Cristina Moyano sitúa entre los espacios de generación de esos contenidos o narrativas y de su difusión, la Universidad Arcis⁴, la editorial LOM y el Consejo Interamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), aunque no excluye la existencia de otros. Todos estos espacios realizaron durante los años noventa diagnósticos y explicaciones de los malestares que ellos advertían con respecto a los efectos sociales, políticos, económicos y culturales del “neoliberalismo” y al tipo de “modernización” que vivía el país. Muchos de los académicos de Arcis, dice la autora, “participaban activamente de ONGs que producían conocimiento a través de la investigación-acción” a la vez que “compartían la premisa de la necesidad de colaborar en la rearticulación de las sociabilidades populares, que permitieran producir un nuevo proyecto político popular emancipatorio y de izquierda” (Moyano, 2021:490; Moyano y Garcés, 2020). Leían a Erving Goffman, Alfred Schutz, Antonio Gramsci,

Michel Foucault, Jürgen Habermas, Ernesto Laclau, entre muchos otros autores de las áreas de las humanidades y ciencias sociales que eran entonces “novedosas” (Moyano, 2021: 491; Ramos, 2020: 461). Además de las lecturas, es interesante tener en cuenta la producción de sus académicos, sus intereses y propósitos. Al respecto, destaca la revista Investigación y Crítica. Revista del Centro de Investigaciones sociales que en un número del 2001 bajo el título “Manifiesto” explican que el proyecto académico que llevaban adelante era “un reto a provocar materialidad, corporalidad y practicidad, a partir de la pasión cognitiva, de hacer estallar la realidad [...]” (Huerta, 2001: 5). En la pluma del profesor Eduardo Santa Cruz la publicación se presentaba también como un espacio cuyo programa buscaba,

[...] “dialogar y cruzar problemáticas en el interés de dimensionar zonas prófugas de la sociedad chilena, articulando los textos sociales, los poderes iconográficos, la sensualidad catódica de la narración massmediática y su reptar sinuoso para moverse entre el consumo, el conflicto y la condenación. Nos mueve el afán de tensionar discursos, intensificar redes y aplaudir fisuras” [...] (Santa Cruz, 2001: 7).

Por su parte, el proyecto editorial LOM surgido en 1990 buscaba, entre otras cosas, “recuperar y hacer visible las huellas del olvido, donde la promesa de la ‘modernidad’ hizo caso omiso de esas culturas y esas vidas” (Araya en Moyano, 493). De tales reflexiones surgieron publicaciones críticas al sistema de AFP, al “neoliberalismo”, a la “mercantilización de la educación”, entre muchos otros temas que fueron conformando un conjunto de discursos acerca del malestar. Muchos de estos temas y puntos críticos surgieron con fuerza en octubre de 2019, con lo que el malestar de la modernidad se transforma en bandera de lucha de un sector de la sociedad.

Conclusiones

Aunque es difícil evaluar en qué medida estas narrativas surgidas especialmente desde los años noventa permearon en la ciudadanía y hasta qué punto sus contenidos se expresaron en el contexto de las revueltas de octubre de 2019, sin duda forman parte de una literatura acerca del malestar y su vinculación con la modernidad. Pero esta breve revisión de algunos discursos del malestar hace pensar que sobre todo se trata de un asunto más de las elites que de la “gente común” (Tironi, 1999: 130) y que fueron dichas elites que transformaron en palabras su interpretación de la realidad. Ello no significa, por supuesto, que la modernidad y aquello que evoca sensación de malestar no deba ser cuestionado, debatido y, de ser posible, corregido o solucionado. Para eso existen diferentes instituciones, desde las universidades al Parlamento, desde el sector público al privado. Pero lo que debe evitarse a toda costa es debilitar la democracia y la civilidad. Se trata de comenzar por definir y comprender qué entendemos realmente por malestar cuando hablamos de malestar... sin duda habrá miradas tan variadas como contrapuestas pues, como señalamos al comienzo, cada uno interpreta su realidad, cada época interpreta la suya.

REFERENCIAS

Baudelaire, C. (2012). “Les fleurs du mal”. Paris: Achat.

_____. (2017). “El pintor de la vida moderna”. Barcelona: Taurus.

Brunner, J. J. (1998). “Malestar en la sociedad chilena: ¿De qué, exactamente, estamos hablando?”. *Estudios Públicos*, n° 72.

Berman, M. (2008). “Todo lo que es sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad”. Madrid: Siglo XXI editores.

Capítulo 11: El Discurso

- Casullo, N. (1998). "Modernidad y cultura crítica". Buenos Aires: Paidós.
- Huerta, V. (2001). "Manifiesto. Investigación y Crítica". Revista del Centro de Investigaciones sociales, n° 7, Santiago.
- Encina, F.A. (1955). "Nuestra inferioridad económica. Sus causas, sus consecuencias". Santiago: Editorial Universitaria.
- Gazmuri, C. (2004). "Alberto Edwards y la Fronda aristocrática". Historia No 37, Vol. I: 61-95.
- González, M. (1874). "Nuestro enemigo el lujo". Santiago: Imprenta del Sud-América, tomo 3, número 1.
- Edwards, A. (1928). "La Fronda aristocrática en Chile". Santiago: Imprenta Nacional.
- Poole, R. (1993). "Moralidad y Modernidad. El porvenir de la ética". Barcelona: Herder.
- Ministerio de Desarrollo Social y PNUD (2017). "Evolución de la pobreza 1990-2017. ¿Cómo ha cambiado Chile?", sd.
- Molina, O. (2020). "Hablan los muros. Grafitis de la rebelión social de octubre de 2019". Santiago: Lom.
- Moulian, T. (2002). "Chile Actual. Anatomía de un mito". Santiago: Lom.
- Moyano, C. y Garcés, M. (2020). "ONG en dictadura. Conocimiento social, intelectuales y oposición política en el Chile de los ochenta". Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.
- Santa Cruz, E. (2001). "Presentación. Investigación y Crítica". Revista del Centro de Investigaciones sociales. n ° 7, Santiago, pp. 7-8.
- Ortiz Ruiz, N. (2019). "Cacerolazo: emociones y memoria en el movimiento estudiantil 2011". Polis vol.18 no.53.
- Salazar, G. (2012). "Movimientos Sociales en Chile". Santiago: Uqbar editores.

- Mayol, A. (2013). "El Derrumbe del Modelo: La crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo". Santiago, Chile: LOM Ediciones.
- Ruiz Encina, C. E. (2013). "Conflicto Social en el Neoliberalismo Avanzado". Buenos Aires: CLACSO.
- Tironi, E. (2011). "¿Por qué no me quieren? Del Piñera way a la rebelión de los estudiantes". Santiago: Uqbar editores.
- Subsecretaría de Educación Superior (2022). "Primer Informe Crédito con Aval del Estado: Características de la población deudora e impactos", sd.
- Recabarren, L. E. (2017). "Ricos y pobres a través de un siglo de vida republicana". *Nuestra Historia*, 3, pp. 191-213.
- Rousseau, J. J. (2019). "Emilio o la educación". Madrid: Verbum.
- Undurraga, L. (1873). "El lujo". *Revista de Valparaíso*. Tomo 1, 21.
- Orrego, R. (1873). "El lujo y la moda". *Revista de Valparaíso*. Tomo 1, 21.
- Vial, G. (2021). "Educación y Pobreza". En José Manuel Castro (Ed.). *Chile en el tiempo: sociedad, política y crisis*. Santiago: Tanto Monta Editorial.

LA RELIGIÓN

LITURGIAS DEL OCTUBRE CHILENO, INMANENCIA Y TRASCENDENCIA

Por Jorge Cordero y Pedro Villarino

Resumen

El presente ensayo plantea que la crisis de octubre no es solo un fenómeno político-social, sino que también responde a una conmoción religiosa. Esta dimensión se explica a través de un pathos religioso que sacraliza diferentes elementos relacionados con la protesta social. La primera sección analiza cómo las creencias religiosas transmutan a expresiones intramundanas a partir del pensamiento de Eric Voegelin. La segunda sección explora cómo la creencia inmanente y el pathos religioso se expresan en las sociedades contemporáneas. La tercera sección examina cómo ciertos símbolos y actores de la crisis adquirieron características sacralizadas y finalmente se cierra con breves reflexiones finales, además de una interrogante sobre si acaso es posible concebir esta crisis como una forma de revolución gnóstica.

Introducción

Eric Voegelin, filósofo alemán, planteó que la idea de religión no puede restringirse sólo a las religiones *supramundanas* —aquellas que buscan una trascendencia en el más allá—, pues, a sus ojos, también incluye aquellos sistemas de creencias que intentan transformar el mundo terrenal: *intramundanas*. Según este pensador, muchas ideologías modernas, aunque se presentaron como seculares, funcionaban como un inverso de las religiones, pero en el plano terrenal. Es decir, ofrecían la redención o perfección del hombre dentro de este mundo (Graíño & Carabante, 2014). Es así como Voegelin volcó su mirada a los movimientos totalitarios del Siglo XX, los que denominó como religiones políticas⁵⁸.

Para comprender la sociedad en su profundidad, Voegelin sostenía que es necesario identificar en qué lugar de la historia se empieza a situar lo “sagrado” (Graíño & Carabante, 2014). Sin embargo, en el contexto contemporáneo esto presenta una gran dificultad, ya que las grandes religiones políticas que dominaron el siglo XX, con sus proyectos de salvación terrenal, perdieron fuerza y credibilidad. La fragmentación de las ideologías y la creciente desconfianza en las instituciones políticas y religiosas afectaron los sistemas de creencias organizados. En su lugar emergen ahora manifestaciones mucho más efímeras⁵⁹, un *pathos* religioso —pulsiones— que busca diferentes contenidos a sacralizar y se expresa de manera espontánea, emotiva e irracional (Oro, 2020).

⁵⁸ Estas ideologías prometían utopías o soluciones definitivas a problemas sociales y políticos, además de una visión sacralizada de ciertos elementos o símbolos en el plano terrenal, como por ejemplo el Estado. Lo que explica su excesiva ritualización (Voegelin, 2014). Posteriormente Voegelin indaga en cómo estos movimientos políticos son similares, en su naturaleza, a las creencias de los antiguos gnósticos (Voegelin, 2006).

⁵⁹ De allí le sigue, que la teología civil, entendida como: “*aquella que estudia cómo las formas religiosas se trasuntan en la vida política*” (Oro, 2020), quizás ya no sea suficiente por sí misma, para comprender algunas expresiones de lo sagrado en nuestra época.

Frente a este contexto resulta pertinente analizar ciertos eventos políticos y sociales contemporáneos. Particularmente, aquellos fenómenos que, a primera vista, parecen estar desvinculados de lo religioso, pero que, al examinarlos con detenimiento, pueden revelar características propias de la pulsión mencionada. Un caso que merece especial atención y que constituye el motivo de este ensayo, refiere a la crisis de octubre en Chile, el año 2019.

Este evento admite múltiples lecturas sobre sus causas, significado y posibles consecuencias, además del sin fin de actos performáticos, movilizaciones y expresiones violentas que le acompañaron. Empero, cabe preguntarse si es posible concebir algunas dimensiones de esta crisis como un problema asociado a la religiosidad. Es decir, si puede comprenderse no sólo como un dilema de orden político, económico o social, sino también como un evento que refleja creencias intramundanas a través de pulsiones religiosas.

Si se observa esta crisis, difícilmente alguien podría aseverar que estaba compuesto por religiones tal como tradicionalmente lo concebimos⁶⁰. Más en una sociedad como la chilena, donde la pérdida de afiliación religiosa se ha triplicado desde las últimas dos décadas (Le Foulon, Mascareño & Salvatierra, 2021). De hecho, Chile es el país de América Latina con un mayor porcentaje de personas que afirman no tener religión (Religion Global, 2023).

No obstante, ¿qué podría explicar conductas como la devoción que se produjo hacia el perro apodado “negro matapacos”, a tal punto de construir un “becerro de oro” móvil que se paseaba por algunas de las movilizaciones? Recordemos el llamado “jardín de la resistencia” que aglutinaba diariamente a los manifestantes, ¿fue solo un simple lugar

⁶⁰ Los manifestantes durante las protestas en la crisis de octubre, en su mayoría no adherían a creencias religiosas tradicionales Véase a Montero (2023) en *El papel compensador de la religiosidad de estudiantes sobre la represión y participación en protestas del estallido social chileno*.

de encuentro o se convirtió en un espacio de liturgia? De hecho, una pareja decidió contraer matrimonio en ese lugar y durante su “ceremonia” utilizaron símbolos asociados a las distintas formas de protesta: gente disfrazada de la llamada “primera línea”, una estatua del perro, entre otros. ¿Qué connotación tuvo la llamada “Plaza Dignidad”? renombre utilizado para la Plaza Italia. ¿Funcionó sólo como un lugar de reunión para las movilizaciones o se transformó a un espacio que devino en la sacralización al que había que acudir todos los viernes? ¿A qué se debió la profanación sistemática de espacios religiosos tradicionales durante las protestas? ¿Se debió sólo al rechazo hacia la iglesia o denota una visión profana del mundo que contrasta con una experiencia religiosa trascendental? ¿Por qué manifestantes señalaban que “Chile Despertó”? ¿Fue solo un eslogan para expresar su descontento, o supone una especie de revelación secular, donde se percibe un despertar colectivo hacia una verdad oculta, que los impulsa a actuar en función de esa verdad? Esta acción se lleva a cabo incluso mediante la violencia, como si fuera un deber moral transformar la realidad que hasta entonces se disfrazaba de supuesta estabilidad.

Probablemente todas estas preguntas admiten múltiples respuestas y cuestionamientos. Este ensayo pretende entregar una más con el fin de incentivar la reflexión: parte de la crisis de octubre se explicaría a raíz de una conmoción religiosa. Pero no cualquiera, sino frente al *pathos* religioso que convierte diferentes entidades en “absolutos mundanos”, hasta que se agotan y busca nuevos contenidos para sacralizar. Oro (2020) señala que esta conmoción también se expresó a través de lo que denomina una *teología popular*⁶¹: *la propensión que*

⁶¹ El autor distingue entre teología civil y teología política. La primera refiere a aquella que estudia cómo las formas religiosas se imitan en la vida política. Por ejemplo, Rousseau y la religión civil, Raymond Aron con las religiones seculares y Voegelin con las religiones políticas (Oro, 2020). La segunda a cómo, desde los supuestos de la religión revelada, se le intenta dar fundamentos teóricos al poder político (Oro, 2020). Para profundizar en esto

existe a sacralizar “a un sector —una facción— del pueblo que se manifiesta violentamente en contra de otros sectores del pueblo” (Oro, 2020), blindándolo así, de todo cuestionamiento o juicio crítico.

Aunque varios aspectos de la crisis de octubre parecen diluirse en el pasado, la pulsión religiosa, como dijese Oro (2020), todavía sigue allí y, de hecho, goza de buena salud al esperar nuevos contenidos mundanos para sacralizar. Por lo que deberíamos mirarlo con especial atención.

En la primera sección del ensayo se plantean algunas consideraciones sobre el pensamiento de Eric Voegelin y a la idea de cómo las creencias religiosas no desaparecen, sino que cambian a expresiones intramundanas. La segunda sección reflexiona acerca de la sociedad contemporánea y como se expresa la creencia inmanente en la actualidad a través del *pathos* religioso. La tercera sección analiza algunos elementos de la crisis de octubre y como el *pathos* religioso irrumpe en la arena política al sacralizar diferentes entes, así como a una facción del pueblo. Esto propició en ciertos grupos, una mirada fanática y dualista de comprender la realidad. En la cuarta y última sección se cierra con algunas consideraciones finales y una pregunta abierta sobre si estaríamos frente a una *revolución gnóstica*⁶².

La transmutación de lo sagrado

Como bien planteó Voegelin (2014), la religión, como tal, no trata solo sobre las religiones de salvación, pues también involucra a aquellas ideologías que, en el proceso de desarrollo del Estado —política—,

último, véase a Schmitt (2004), en *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*.

⁶² Este concepto fue acuñado por Svensson (2019), en su columna de opinión publicada en The Clinic que comparte el mismo título.

creemos reconocer como religiosas. Esto supone un primer desafío puesto que se ha desarrollado una construcción lingüística simbólica en torno a la religión y la política. Por una parte, quien habla de religión, intuitivamente piensa en las instituciones eclesíásticas y por la otra, quién refiere a la política, la comprende como un sinónimo de Estado. De hecho, con el avance de la modernidad, esta distancia no ha hecho otra cosa que acrecentarse⁶³.

Voegelin sostiene que el concepto de religión debe entenderse de forma amplia y para ello distingue entre religiones *supramundanas* e *intramundanas*. Las primeras refieren a aquellas religiones espirituales que encuentran su *ens realissimum*, “lo real por antonomasia”, en la causa y origen del mundo. Es decir, la realidad trascendente que está más allá del mundo físico. En cambio, las segundas, tienen que ver con aquellas expresiones que conciben lo divino en ámbitos del mundo terrenal. De allí le sigue que la pérdida de creencia trascendental como fenómeno del espíritu, o lo que algunos erróneamente llaman secularización⁶⁴, no implica la atenuación ni la desaparición de lo sagrado. Más bien comprende su cambio de ubicación —transmutación— (Grañó & Carabante, 2014).

Esta idea contrasta con la visión weberiana que afirmó el desencanto del mundo: *Entzauberung der Welt*. Para Weber la modernidad produciría un desencanto, donde la religión y el misticismo perdería su relevancia, al ser sustituida por la razón y la ciencia. Por consecuencia, la humanidad pasaría a quedar en una situación de mayor alienación y vacío existencial (Schluchter, 2017). Voegelin, a diferencia de Weber, plantea que la modernidad no elimina las

⁶³ Bastante se ha escrito sobre cómo, tras el avance de la modernidad, las creencias religiosas terminan por separarse, cada vez más, de la esfera pública. Al punto de pensar que debería tratarse sólo como un asunto de la vida privada (Vallier, 2016).

⁶⁴ Para leer una crítica al concepto de secularización, véase el trabajo de Monod (2002), *La Querrela de la Secularización*.

creencias religiosas, sino que las transmuta a experiencias intramundanas. Esto significa que la gente no deja de tener una creencia religiosa o que la sociedad se convierte en “irreligiosa”, sino que su concepción respecto a lo sagrado, antes supramundana, cambia patológicamente a una creencia inmanente⁶⁵, lo que altera el equilibrio entre lo sagrado y lo profano.

Este desequilibrio solo puede explicarse dentro de su concepción más amplia acerca de la naturaleza humana y la conciencia. Para Voegelin la existencia de la naturaleza humana se caracteriza por una tensión enigmática y permanente entre lo divino y lo humano —*metaxy*— (Raeder, 2020)⁶⁶. Una conciencia se considera “saludable” o “equilibrada” cuando reconoce y acepta esta tensión inherente a la existencia, mediando entre ambos polos. En cambio, una conciencia “desequilibrada” o “desordenada” se caracteriza por el colapso de uno de estos. El hombre comienza a vivir en una realidad truncada “*deformada por el eclipse de una u otra de sus dimensiones inseparables*” (Raeder, 2020). Existen dos formas principales en las que puede expresarse una conciencia desordenada. La primera, que él denomina “fe metastásica”, ocurre cuando la dimensión trascendente oscurece la realidad mundana. Se lleva a la creencia en una inminente transfiguración divina del mundo⁶⁷. La segunda, más prevalente en la era moderna, implica el eclipse de lo trascendente por una expansión ilegítima de la realidad inmanente. De hecho, es a partir de esta última

⁶⁵Entiéndase por inmanente aquello que pertenece al mundo terrenal, dentro de los límites de la experiencia humana y su naturaleza.

⁶⁶“*La existencia humana es siempre y en todas partes “existencia en tensión”, existencia en la realidad “intermedia” que Platón denominó metaxy y que está constituida por una tensión simultánea hacia la existencia mundana y su fundamento divino trascendente*” (Raeder, 2020).

⁶⁷ Como por ejemplo sucede con ciertas expresiones del islam que no logran separar la dimensión trascendente del plano mundano. Véase, por ejemplo, a Paradela (2016), en “El islamismo como religión política”.

idea que escribe su libro de 1938, *The Political Religions*, sobre la naturaleza religiosa de los movimientos totalitarios del Siglo XX.

En este ensayo, Voegelin refirió a que tanto el nacionalsocialismo como los totalitarismos emergentes de la época —específicamente el comunismo—, sólo podían comprenderse en su plenitud si se estudiaban como religiones políticas, pues actuaban como expresiones intramundanas a través de la ideología política, al prometer la salvación del hombre en el mundo material —donde la inmanencia termina por eclipsar la trascendencia—. Esto explica, en parte, su excesiva ritualización, el culto al líder, la adhesión de masas entendida como una conversión a un dogma acrítico y la sacralización del Estado⁶⁸. Otro aspecto relevante tiene relación con su espíritu fuertemente antirreligioso. Esto último suena paradójico, no obstante, para estas ideologías que sacralizan lo profano, el concepto de religión es considerado un tabú. Es en base a este espíritu que abogan por construir una nueva lingüística simbólica para disolver el lenguaje de lo sagrado, lo que ayuda a explicar su abuso de la propaganda para crear una nueva simbología al servicio de la fe intramundana o al hecho de mantener una confrontación directa con los símbolos religiosos tradicionales (Voegelin, 2014)⁶⁹.

⁶⁸ Esto último es relevante. Hobbes al escribir *El Leviatán* elaboró una conceptualización de un Estado entendido como el soberano, pero que seguía anclado a un bien trascendental por fuera de este mundo: Dios. En estos términos, el Leviatán pasaría a ser la encarnación de una misión divina frente a sus súbditos. Este planteamiento del Estado hobbesiano constituye el punto de partida para su emancipación de lo supramundano y así pasar a formas totalmente sacralizadas e intramundanas, como se puede observar en las ideologías totalitarias del siglo XX (Voegelin, 2014).

⁶⁹ Una revisión de la propaganda nacionalsocialista alemana y fascista italiana del siglo XX dan cuenta de cómo, a través de la publicidad, se buscaba transmitir la sacralización de los entes divinizados. En ambos casos, como un instrumento al servicio de la construcción de un mito político fundado en la exaltación de la identidad nacional. En el primero, a través de la reivindicación de la supremacía racial; y en el segundo, aferrado al arraigo de un pasado glorioso (la República Romana antigua). Relacionado con lo anterior, la construcción del mito nacionalsocialista sólo puede explicarse a partir de la beligerancia con

A lo largo de la historia, diferentes fenómenos han derivado en su propia simbología sacralizada con ideas a las cuales demonizar, pues no es algo exclusivo solo de ideologías totalitarias⁷⁰. Entre los más relevantes, deviene, por ejemplo, en las formas en que se concibe el conocimiento. Pensemos en el socialismo científico (Voegelin, 2014). Esta forma de conocimiento dio una predominancia exclusiva a un determinado método científico como la única forma de aproximarse a la comprensión del hombre frente al mundo. La revelación y el pensamiento místico, fueron relegados sólo a pequeños grupos —que, en ocasiones, se les tildó como el “opio del pueblo”—.

Reflexiones sobre el mundo contemporáneo y la inmanencia

Para comprender la sociedad Voegelin cree que es necesario identificar en qué lugar de la historia se sitúa lo sagrado, ya sea como creencia trascendente o inmanente. Esto se explica debido a que toda sociedad se organiza alrededor de un orden simbólico que da fundamento y legitimidad a sus instituciones y prácticas determinadas⁷¹. En ese

que atacaron símbolos religioso-tradicionales. Una prueba palpable de esto es la que se conoce como ‘Noche de los cristales rotos’ (*Kristallnacht*), que ocurrió la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. Tropas de asalto de las SA, junto con la Gestapo y cuadrillas nazis, realizaron una serie de linchamientos y ataques a sinagogas, escaparates de tiendas y edificios judíos, tanto en Alemania como Austria.

⁷⁰ Ejemplo de esto mismo puede verse durante la revolución francesa y “el culto a la razón”. Pierre Chamette, político que participó en el proceso revolucionario, declaró un culto a la “diosa” de la razón representado a través de una imagen de *Sophia*, la antigua diosa griega que representaba la “sabiduría”. Este culto fue apoyado principalmente por el movimiento “hebertista”.

⁷¹ Para identificar lo sagrado es fundamental comprender la relación entre la inmanencia y la trascendencia y la forma en que se sitúa según el orden social a lo largo de la historia. En *Order and History* Voegelin (2001) describe momentos temporales donde se plantea la diferencia entre ambos conceptos y describe sociedades que no han sido capaces de diferencias ambas cosas. “*La diferencia entre inmanencia y trascendencia es fundamental en la historia en la medida en que hace posible captar y comprender el orden del ser y, por lo mismo, el orden político-social.*” (Carabante, 2023).

sentido, el mundo contemporáneo se nos presenta con un panorama muy diferente al Siglo XX, partiendo porque las ideologías se encuentran más fragmentadas.

Esta pérdida de fuerza en las grandes narrativas ideológicas fue anticipada, en cierta medida, por Francis Fukuyama en su tesis del *Fin de la Historia y el Último Hombre* (Fukuyama, 2006). Fukuyama argumentó que, con el colapso del comunismo, las grandes luchas ideológicas habían terminado, lo que daría paso a un aparente triunfo definitivo de la democracia liberal. Y aunque la supuesta estabilidad del orden liberal fue rápidamente refutada por la experiencia, la situación de las ideologías no cambió del todo. En este contexto, las observaciones de Gilles Lipovetsky sobre la sociedad *hipermoderna*, ofrecen una perspectiva interesante para reflexionar acerca de lo “sagrado” en nuestro tiempo.

Lipovetsky describió al mundo actual como una sociedad caracterizada por el individualismo extremo⁷², el consumismo y la fugacidad de las experiencias (Tamés, 2007). En su primera gran obra, *La era del vacío*, el autor señaló que el mundo pasaba por una nueva fase en la historia del individualismo occidental. Estos cambios se podían ver representados en diferentes características: primero, la diversificación de los modos de vida, impulsado por una nueva forma de socialización basado en el culto a la liberación personal; segundo, la desarticulación de las grandes ideologías que se reflejó en el abandono de lo que Lipovetsky llama la “escatología revolucionaria”⁷³ de la primera mitad del Siglo XX —este concepto da cuenta de un diagnóstico similar al de Voegelin y otros pensadores sobre la connotación “religiosa” de las ideologías totalitarias—. Se produce una

⁷² “Los valores individuales tienden más hacia la introspección, la preocupación por el “self” y la producción del placer” (Tamés, 2007).

⁷³ Entiéndase por escatología aquella doctrina teológica de origen bíblico sobre aquello que ha de suceder al final de los tiempos (Sayés. 2006).

ruptura con la “fase inaugural de las sociedades modernas, democráticas-disciplinarias, universalitas-rigoristas, ideológicas coercitivas” (Lipovetsky, 1983); y tercero, la personalización del hombre. Se crea una sociedad enfocada en la estimulación de las necesidades individuales y la asunción de factores humanos, en miras de maximizar el mayor número de elecciones privadas que sea posible.

Frente a esta realidad descrita por Lipovetsky, se observa que los grandes movimientos políticos que caracterizaron al Siglo XX quedaron relegados por una búsqueda de satisfacción más inmediata, lo que nos conduce a reconsiderar como se manifiesta lo sagrado en las sociedades contemporáneas. Pues la alteración de las ideologías políticas, no implica la desaparición de la creencia intramundana, sino su transmutación hacia nuevas expresiones ancladas a los cambios que se producen en la sociedad. La inmanencia, entonces, se ve influenciada por la revolución individualista, al crear concepciones más personalizadas y efímeras sobre la trascendencia en el mundo terrenal.

Ante este contexto, las reflexiones de Oro (2020) resultan de interés, dado que introduce el concepto de *pathos* religioso para describir como se expresa el desequilibrio entre lo sagrado y lo profano en nuestro mundo contemporáneo —ante al vacío heredado por las religiones políticas y las religiones tradicionales—. Esta idea refiere a una pulsión religiosa que no se materializa necesariamente a través de las ideologías políticas, sino que se expresa a través de un formato emocional, el cual busca contenidos para transformarlos en “absolutos mundanos”, hasta que se agotan y se ven reemplazados⁷⁴.

⁷⁴ A diferencia de las religiones políticas, que articulaban proyectos de transformación a largo plazo, el *pathos* religioso es transitorio. Se activa sólo en situaciones de agitación y reflejan una necesidad urgente de sentido, en lugar de buscar la redención a través de un cambio estructural en el orden político o social.

La crisis de octubre, ¿una conmoción religiosa?

Oro ofrece una valiosa herramienta para entender las manifestaciones contemporáneas de lo sagrado. Pues en un mundo caracterizado por la fragmentación ideológica y el individualismo extremo, esta noción captura la naturaleza evanescente y personalizada de las nuevas creencias intramundanas. Comprender las expresiones del pathos religioso se vuelve, por tanto, esencial para analizar ciertos problemas sociales y políticos. Lo que cobra especial relevancia en aquellos casos que, aunque parecen estar desvinculados de lo religioso, al ser examinados con detenimiento revelan características propias de una pulsión. Un ejemplo de esto se puede ver reflejado en la crisis de octubre de 2019 en Chile.

Varias de las expresiones asociadas a esta crisis presentan características únicas que las distinguen de otras movilizaciones sociales del país. Las que, lejos de ser meras demostraciones de descontento social, en realidad parecen reflejar una búsqueda de trascendencia y significado en el plano inmanente. Esto a través de la construcción de liturgias, símbolos y determinadas narrativas que, aunque se presentan como seculares, en su trasfondo revelan una pulsión religiosa. Sin embargo, como señala Oro (2020), no se trata de cualquier pulsión, sino de aquella que ha ingresado a la arena política —lo que genera en ciertos grupos una mirada fanática y dualista de comprender la realidad—⁷⁵.

El primer fenómeno sobre el cual cabe expresarse corresponde al denominado perro “negro matapacos”. Este perro se hizo conocido entre los años 2011 y 2013 en los movimientos estudiantiles asociados

⁷⁵ Como se trata de experiencias intramundanas, no se rigen bajo el mismo régimen de pluralismo que lo hacen algunas religiones tradicionales. Pues, a diferencia, por ejemplo, del cristianismo, estas representan formas desequilibradas donde lo inmanente consume lo trascendente. De allí le sigue su deriva patológica hacia la intolerancia. No es que haya una relación directa entre religiosidad y fanatismo.

a la educación superior. Aunque es a partir de las movilizaciones del 2019 que su imagen reaparece como un símbolo activo de protesta — a tal punto que su imagen se extendió por fuera del imaginario nacional—.

Pese a que parte del simbolismo asociado a su figura se relacionó con la idea de “lucha y resistencia”, su imagen experimentó una evolución al trascender de su papel inicial como mero símbolo de resistencia, al punto de convertirse en un “absoluto mundano” dentro del imaginario de las protestas⁷⁶.

La transformación del negro matapacos se manifestó a través de diversas prácticas y expresiones que denotaban una veneración inmanente por fuera de su papel estrictamente simbólico. Un ejemplo tangible de esta sacralización fue la creación de una estatua móvil, que se paseaba por las manifestaciones, como cual “becerro de oro” (Oro, 2020), reminisciente de iconografía religiosa tradicional. Este acto no solo representó una forma de homenaje al símbolo del perro, sino que también denotaba una atribución de cualidades cargadas de misticismo, que se mantienen presentes en la relación de los manifestantes con la estatua⁷⁷. Esta connotación mística queda

⁷⁶ El concepto de símbolo tiene relación con un signo que representa algo más allá de sí mismo. Es una construcción que tiene significados específicos dentro de un contexto. No son necesariamente sagrados, pero pueden ser portadores de múltiples significados en función de ese contexto, al servir como un puente entre el mundo físico y lo que este representa. En cambio, al hablar de un ente sacralizado, si bien, puede adquirir un carácter simbólico, la diferencia es que ha sido investido de un valor religioso, místico o espiritual. Adquiere un aura de “lo sagrado”, que lo coloca en una categoría separada de lo ordinario. Pasa a convertirse en un objeto de reverencia, culto o rituales, y se concibe como dotado de algún poder o significado trascendente.

⁷⁷ La creación del becerro de oro móvil de negro matapacos evoca inevitablemente el relato bíblico de *Éxodo 32*. En ambos casos —guardando las proporciones—, se observa a un pueblo en crisis que busca un símbolo tangible de esperanza y dirección. Así como los israelitas, en ausencia de Moisés, crearon un ídolo para adorar, algunos manifestantes chilenos, en medio de la incertidumbre social, elevaron la figura de un perro callejero a un estatus cuasi-divino que llevaban por las movilizaciones.

evidenciada por ejemplo en una entrevista a Marcel Sola, autor de la obra, cuando le preguntan sobre la razón de por qué ubicó la estatua en Metro Salvador⁷⁸: “*El perro venía a salvarnos. Tal como el original Matapacos, que estaba ahí en la vanguardia*” (El Desconcierto, 2020).

Un segundo ejemplo se puede ver en la construcción de altares dedicados al perro en diversos puntos de Santiago, particularmente fuera del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Estos espacios, adornados con flores, velas y ofrendas, se convirtieron en lugares de peregrinación y reflexión para los manifestantes, al emular prácticas religiosas tradicionales⁷⁹. Además, la proliferación de representaciones artísticas del perro con atributos angelicales o de santidad —como las observadas en murales donde aparece coronado o con alas—, refuerza la idea de su elevación a un estatus sagrado. Estas imágenes no solo honraban su memoria, sino que lo posicionaban como una figura de culto, “un protector espiritual” de las protestas.

La sacralización del Negro Matapacos aunque infantil, ofrece un claro ejemplo del pathos religioso en el contexto de la crisis social chilena. Este fenómeno ilustra cómo en una sociedad cada vez menos religiosa, la pulsión religiosa encuentra nuevas formas de expresión, al transformar elementos mundanos en objetos de veneración y dotarlos de un significado trascendente.

⁷⁸ En otro extracto de la entrevista, cuando se le pregunta por la primera vez que vandalizaron la estatua, Sola asocia la reacción de los manifestantes con actitudes propias de la religiosidad popular, particularmente respecto a la construcción de animitas: “*Pero hubo gente que llegó espontáneamente a llevarle flores, como una animita, después lo empezaron a vestir y comenzó a agarrar corporeidad con los elementos vegetales...*” (El desconcierto, 2020).

⁷⁹ Para una analogía más precisa sobre iconografía religiosa tradicional en símbolos de la crisis de octubre, véase el artículo de Alvarado (2020), “El uso de la iconografía católica en diez fotografías del estallido social chileno.”

En primer lugar, la figura del perro ejemplifica la búsqueda de trascendencia efímera en el plano inmanente. El perro, un ser terrenal y cotidiano, es elevado a un estatus cuasi-divino, convirtiéndose en un "santo patrono" de las protestas, al punto de adquirir un carácter espiritual (Almási, 2021). Esta transmutación refleja la necesidad humana de encontrar significado y orientación espiritual, incluso en contextos aparentemente desprovistos de religiosidad tradicional o que adolecen de contenido profundo. En segundo lugar, la construcción de rituales y narrativas en torno al perro, aunque se presentan como acciones seculares, revelan una pulsión religiosa. La creación de altares, la realización de "peregrinaciones" a lugares asociados con el perro, y la atribución de poderes protectores sobrenaturales a su imagen, demuestran cómo el pathos religioso se manifiesta a través de formas culturales familiares, aunque recontextualizadas en un marco secular.

El segundo fenómeno se relaciona con la relación de los manifestantes con los espacios públicos. Se analizan los casos de la "Plaza Dignidad" y el llamado "Jardín de la Resistencia".

Plaza Italia, rebautizada por los manifestantes como "Plaza Dignidad", se convirtió en el epicentro simbólico de las protestas. Este cambio de nombre no fue algo nominal, sino que reflejó una resignificación del espacio para quienes protestaban. La plaza se transformó en un punto de convergencia casi obligatorio para los manifestantes, quienes acudían de forma sagrada, especialmente los viernes, como si se tratase de una "peregrinación" masiva. De hecho, estas protestas en la plaza adquirieron un carácter ritual, con patrones repetitivos de reunión, cánticos y acciones simbólicas que derivaron en la construcción de lo que Smith (2013) denomina *liturgias culturales*.

Smith señala que todas nuestras acciones pueden constituir prácticas de rito, por más cotidianas que sean, ya que son "*rutinas materiales*,

corporizadas, que repetimos una y otra vez, dirigidas en una meta específica” (Smith, 2013). Sin embargo, no todos los rituales adquieren el estatus de liturgia, ya que se refieren a ritos de máxima preocupación. Son rituales formativos de nuestra identidad que inculcan visiones particulares sobre la vida, de manera que buscan triunfar frente a otro tipo de expresiones rituales. Al punto de moldear nuestro deseo de lo que imaginamos como redención, *“que no es más que un ideal de florecimiento humano”* (Smith, 2013). La liturgia cultural se expresa de la misma manera que una liturgia religiosa, pero implica una deformación de nuestros deseos que alejan al hombre de lo trascendente y lo llevan a volcar su mirada a prácticas y ritos que lo hacen abrazar la inmanencia —concebir la redención en este mundo.

Las manifestaciones en Plaza Dignidad se convirtieron en prácticas que moldeaban la identidad y los deseos de los participantes, orientándolos hacia un ideal disociado de justicia y dignidad, convirtiéndolo en un espacio de liturgia cultural. El cambio de nombre a "Plaza Dignidad" implica una narrativa de transformación y renacimiento, que no son simples ritos, y el mismo acto de renombrar la plaza como "Dignidad" encarna esta visión de imaginar la redención inmanente: un mundo donde la vida digna es central y respetada en la sociedad.

El caso del Jardín de la Resistencia también permite ejemplificar de forma aún más clara la sacralización de los espacios públicos durante la crisis y la realización de liturgias culturales. Este lugar, creado en medio del caos de las protestas, se convirtió para los manifestantes en un espacio de “paz” y supuesta reflexión simbólica. Las actividades regulares funcionaban como rituales, al forjar una identidad colectiva basada en la oposición al orden establecido. Prácticas como asociar plantas con los nombres de los fallecidos durante las protestas reflejaban intentos de crear una narrativa de martirio y trascendencia. El hecho de que una pareja decidiera casarse en este lugar

controvertido subraya el grado de sacralización adquirido⁸⁰. La persistencia en mantener y reconstruir el jardín frente a los intentos de desmantelarlo, puede interpretarse como una forma de devoción irreflexiva, donde el espacio se convierte en un símbolo materializado de resistencia y memoria colectiva, al reforzar el poder ritual.

El tercer fenómeno tiene que ver con la construcción lingüística-simbólica de la crisis, particularmente con la idea de que "Chile Despertó". Esta frase fue una de las consignas más recurrentes durante la crisis y su significado va más allá de un eslogan para expresar descontento frente a la situación del país. La afirmación hacía referencia a la idea de un supuesto proceso colectivo de "despertar", donde la sociedad chilena tomó conciencia de una verdad que, hasta ese momento, permanecía oculta bajo una fachada de estabilidad y progreso —la supuesta paradoja de que el crecimiento neoliberal perpetuó desigualdades estructurales en la población—. Y es que este despertar recuerda a las dinámicas de revelación presentes en las religiones, donde el "dormido" —aquel que vive en la ignorancia o el engaño— finalmente se encuentra con la verdad. En el contexto secular del estallido, esa verdad no es divina, sino social y política.

Esta consigna resuena con una fuerza similar a Efesios 5:14, que llama al creyente a "despertar" del sueño de la ignorancia y a "levantarse de los muertos" para ser iluminado por Cristo: *"Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo."*

⁸⁰ El matrimonio en el "Jardín de la Resistencia" ilustra vívidamente el pathos religioso en contextos de agitación social. La elección de este espacio controvertido como lugar de boda refleja una sacralización del sitio de protesta. La ceremonia fusionó elementos de resistencia política (como la estatua del "Negro Matapacos" y la "Brigada Wallmapu") con rituales tradicionales, creando una liturgia híbrida. La presencia de un pastor evangélico y la breve "tregua" con las fuerzas policiales sugieren una momentánea santificación del espacio. Sin embargo, la rápida transición a enfrentamientos post-ceremonia ("Terminó el casamiento y empezó la guerra") y la pérdida del vestido de novia en el tumulto revelan la naturaleza volátil de esta sacralización.

En este versículo, el despertar implica un abandono de la oscuridad, del pecado o de la ignorancia, y una apertura hacia la luz de la verdad revelada. De manera análoga, en la crisis de octubre, el "despertar" puede entenderse como una salida de la ilusión de estabilidad o bienestar del neoliberalismo, para abrazar una nueva conciencia social. Así como el cristiano es llamado a dejar atrás el pecado y a actuar en función de la verdad que le ha sido revelada, una parte del pueblo percibe que ha dejado atrás un estado de adormecimiento social, y ahora, iluminados por la "verdad" sobre las desigualdades y las injusticias, se sienten llamados a actuar. Ya no solo para sí mismos, sino también para transformar la sociedad en su conjunto. Este despertar es visto como un deber moral, que, como en la conversión religiosa, exige no solo una toma de conciencia, sino también una acción contundente para alcanzar la verdad y liberarse de la mentira que, según ellos, había prevalecido.

El cuarto fenómeno corresponde a la sacralización del manifestante, que Oro (2020) explica mediante el concepto de Teología Popular. En este fenómeno, el "manifestante colérico" es elevado por una facción del pueblo a un estatus cuasi-divino e incuestionable. Oro describe esta dinámica como "*una esquirra, un trozo del demos, que hiere al demos, paradójicamente, en nombre de este último*" (Oro, 2020), donde una minoría sacralizada justifica acciones potencialmente dañinas para la mayoría, alegando representar sus intereses.

¿Pero cuáles son las repercusiones de esta forma de sacralización? En primer lugar, la figura del "manifestante" se elevó a un estatus de adoración —basta con recordar la visita de la "primera línea" al ex Congreso Nacional—. Este proceso blindó a ciertos actores de la protesta contra las críticas, presentándolos como encarnaciones incuestionables de las demandas populares. En segundo lugar, las acciones violentas fueron reinterpretadas no como actos de destrucción, sino como expresiones legítimas de una voluntad

popular. Esta legitimación se basaba en la idea de que una minoría activa actuaba en nombre de una mayoría silenciosa. En tercer lugar, se desarrolló una narrativa que presentaba a los manifestantes como portadores de una verdad absoluta e indiscutible, mientras que sus oponentes eran retratados como encarnaciones del mal o la injusticia. En cuarto y último lugar, esta forma de sacralización dificultó la posibilidad de acuerdos, ya que cualquier cuestionamiento o desacuerdo era visto como una blasfemia en contra de la "voluntad sagrada" del pueblo. Esta dinámica no solo moldeó la naturaleza de las protestas, sino que también tuvo implicaciones profundas para la convivencia democrática y el pluralismo en el país.

Reflexión final

Los fenómenos observados durante la crisis de octubre en Chile —la sacralización del "Negro Matapacos", la transformación de espacios públicos en lugares de culto secular, la narrativa del "despertar" colectivo y la elevación del manifestante a un estatus cuasi-divino— revelan la presencia subyacente de un pathos religioso en un contexto aparentemente secular. Estas manifestaciones, lejos de ser meras expresiones de descontento social, reflejan una búsqueda de trascendencia y significado en el plano inmanente, que se expresan de forma efímera y emocional —de allí el infantilismo que muchas veces le acompaña—. La crisis de octubre, vista a través de este prisma, no se limita entonces a ser sólo un fenómeno político o social, sino que también podría interpretarse como un problema asociado a un entramado de pulsiones religiosas que han encontrado su expresión en la arena pública.

Sin embargo, cabe la pregunta si no hay una fuerza mayor que acompaña al pathos religioso. Voegelin (2006) señaló que el elemento común del pensamiento moderno se fundaba en el *gnosticismo*. Los

gnósticos —una antigua creencia espiritual del mundo tardoantiguo—, concebían que el mal constituía una fuerza independiente del bien que se explicaba a raíz de un desorden cosmológico. El mundo se entendía como la lucha entre estas fuerzas y que podía resolverse si se poseía la *gnosis*: “*un conocimiento absoluto capaz de proporcionar la salvación aquí en la tierra*” (García-Huidobro, 1984). A ojos de Voegelin, muchos profetas modernos mantuvieron una raíz gnóstica y buscaron corregir el mal del mundo, al reordenarlo según su propia visión (Birzer, 2018).

Si pensamos en la crisis de octubre ¿Qué podría explicar la disposición de personas en creer ciegamente a que después de la crisis vendría un mundo mejor, al punto de aceptar la violencia? ¿No se presentó acaso la concepción de un mal sistémico y omnipresente que constituía la fuente de todos los males? ¿No será, quizás, que estuvimos frente a una revolución gnóstica?

REFERENCIAS

Almási, L. (2021) “Negro Matapacos: street dog, hero or patron saint of protestors?”. *Cultural Anthropology journal*.

Alvarado, N. (2020). “El uso de la iconografía católica en diez fotografías del estallido social chileno”. *Religiones Latinoamericanas Nueva Época*, 6, 189-214.

Birzer, B. (2018). “Eric Voegelin’s Gnosticism”. *VoegelinView*. <https://voegelinview.com/eric-voegelins-gnosticism/>

Carabante, M. J. (2023). “La experiencia de la trascendencia: Una introducción al pensamiento de Eric Voegelin”. [Tesis de doctorado, Universidad de Murcia].

Fukuyama, F. (2006). “The end of history and the last man”. Free Press.

Capítulo 12: La Religión

- García-Huidobro Correa, J. (2016). "Voegelin y la ciencia política". *Revista de Derecho Público*, 35(36), 133-134.
- Graíño, G., & Carabante, M. J. (2014). "Presentación". En E. Voegelin, *Religiones políticas* (pp. 9-16). Editorial Trotta.
- Herrero, M. (2023). "Theopolitical figures: Scripture, prophecy, oath, charisma, hospitality" (*Edinburgh Studies in Comparative Political Theory and Intellectual History*). Edinburgh University Press.
- Ipsos. (2023). "Religion Global 2023".
- Le Foulon, C., Mascareño, A., & Salvatierra, V. (2021). "¿Chile postsecular? La necesidad de una exploración comparada". Centro de Estudios Públicos.
- Lipovetsky, G. (1983). "La era del vacío: Ensayos sobre el individualismo contemporáneo". Editorial Anagrama.
- Monod, P. (2002). "La querrela de la secularización: Religión y política en la modernidad". Taurus.
- Montero, M. (2023). "El papel compensador de la religiosidad de estudiantes sobre la represión y participación en protestas del estallido social chileno". [Tesis de pregrado, Universidad de Chile].
- Oro, L. (2020). "Teología popular". *La Razón Histórica: Revista Hispanoamericana de Historia de las Ideas Políticas y Sociales*, 49, 161-172.
- Paradela, N. (2016). "El islamismo como religión política". *Revista de Ciencias de las Religiones*, 21, 149-164.
- Raeder, L. (2020). "Voegelin on Gnosticism, Modernity, and the Balance of Consciousness". VoegelinView. <https://voegelinview.com/voegelin-on-gnosticism-modernity-and-the-balance-of-consciousness/>
- Sayés, J. A. (2006). "Escatología". Ediciones Palabra.
- Schluchter, W. (2017). "El desencantamiento del mundo. Seis ensayos sobre Max Weber". Fondo de Cultura Económica.

Schmitt, C. (2004). "Political theology: Four chapters on the concept of sovereignty". University of Chicago Press.

Smith, J. K. A. (2013). "Desiring the kingdom: Worship, worldview, and cultural formation". Baker Academic.

Svensson, E. (2019). "Una revolución gnóstica". The Clinic. <https://www.theclinic.cl/revolucion-gnostica/>

Tamés, E. (2007). "Lipovetsky: Del vacío a la hipermodernidad". Casa del Tiempo, 1(1), 47-51.

Vallier, K. (2016). "Liberal politics and public faith: Beyond separation". Routledge.

Voegelin, E. (2001). "Order and history" (Volume 1): Israel and revelation (Collected Works of Eric Voegelin, Volume 14). University of Missouri Press.

_____. (2006). "La nueva ciencia de la política". Katz Editores.

_____. (2014). "Las religiones políticas". Editorial Trotta.

EL OBJETO

CIENCIAS SOCIALES, EL OCTUBRE CHILENO Y SU DEFINICIÓN

Por Pablo Celis

Resumen

Me enfrento a un objeto indefinible que ha desafiado nuestras categorías y arsenales conceptuales. Como intelectual, reconozco la seducción que ejerció este fenómeno sobre el pensamiento social chileno, incluido el mío. Nos encontramos ante un *fármakon* que, al mismo tiempo que nos encantaba, nos sumía en la ambivalencia. Observo cómo la urgencia por comprender y explicar lo ocurrido nos llevó a una producción acelerada de interpretaciones. Esta prisa, me temo, no nos permitió habitar reflexivamente la disonancia inherente a octubre. Caímos en la trampa de querer encajar la realidad en nuestros conceptos preexistentes, sin detenernos a examinar nuestros propios supuestos. Propongo que, para realmente aprehender este fenómeno espectral, debemos primero observarnos a nosotros mismos. Solo abrazando nuestros límites y la perplejidad que octubre nos genera, podremos aspirar a una comprensión más profunda. Quizás así, el fantasma de octubre se vuelva medianamente legible para las ciencias sociales.

Introducción

A cinco años, lo sucedido en octubre de 2019 tanto en su singular forma de acontecer como en las múltiples esquivas políticas, sociales y constitucionales derivadas de él, sigue siendo, hasta el día de hoy, motivo de múltiples tematizaciones y escrutinios.

La fuerza intempestiva que lo caracterizó, no solo significó la puesta en suspenso del orden sociopolítico en Chile, sino también de las categorías y arsenales conceptuales con los que la realidad chilena era apprehendida. En ese sentido, el afán de captura y, sobre todo de hacer inteligible lo acaecido, colisionaba con una interrogante tan incombustible como compleja, a saber: ¿qué se puede decir de octubre?

Reflejo de esto, fue la temprana y acelerada producción científico-social que comenzó a elaborarse al clamor de las manifestaciones. La radical temporalidad de octubre que, en cierto modo, fue un aspecto inherente a su singularidad, devino como un virus que infectó al pensamiento y sus operaciones descriptivas-hermenéuticas. En otras palabras, había que decir algo aun cuando, como advierte Carlos Hoevel (2020: 101), *“intentar entender una crisis en medio de su desenvolvimiento no es tarea fácil”*.

Para diversos intelectuales chilenos, la fuerza de octubre, cuya dinámica y movimiento parecía actualizarse y potenciarse diariamente, a pesar de la advertencia previamente indicada, tenía un efecto seductor. Escribir y pensar, con relación a lo inmediato, resultaba urgente y, para todos los efectos, una apuesta — conceptualmente— llamativa.

Así las cosas, propuestas analíticas como la contenida en “Big Bang. Estallido social 2019. Modelo derramado - sociedad rota - política fútil” del sociólogo Alberto Mayol, “Octubre en Chile” del filósofo y

abogado Hugo Herrera o “La erosión de la democracia” del politólogo Claudio Fuentes, entre otros, constituyeron esfuerzos por comprender y dotar de algún grado de inteligibilidad lo que sucedía.

Desde ese entonces a la fecha, la producción intelectual en torno a octubre se diversificó sustantivamente sobre la base de sensibilidades teóricas, conceptuales y disciplinares distintas. Sin embargo, la pluralidad reflexiva que caracterizó la inquietud de volcarse comprensivamente sobre este fenómeno reveló que lo que estaba en juego no era tanto lo que se podía decir sobre octubre, sino más bien sobre que fue octubre.

El presente ensayo tiene por objeto reflexionar sobre esto último. El argumento que propongo apunta a comprender octubre como un objeto indefinible, vale decir, como un asunto de interrogación intelectual el cual, dada su difusa naturaleza y forma, determinó los límites y horizontes de la producción científico-social que se hizo en torno a él.

En ese sentido, el objetivo es comprender — reflexiva y especulativamente — la indefinición objetual de octubre como una máquina teórica (Galison, 2004) que alimentó la cruzada interpretativa de las ciencias sociales enfatizando como, esa ambivalencia, devino condición sine qua non para que la imaginación conceptual y especulativa que es constitutiva de las ciencias sociales tuviera lugar, aunque, con más sombras que luces.

Con ello en mente, este trabajo pretende aportar una lectura sobre octubre que no se limite a concebirlo solo como una crisis sociopolítica, sino también como una controversia ontológico-epistémica que permite iluminar como los intelectuales y las comunidades epistémicas (Knorr-Cetina, 1999) se aproximaron a este fenómeno y pretendieron aprehenderlo.

De ciencias sociales e intrigas

Las ciencias sociales, desde su fundación, se han caracterizado por una vocación descriptiva e interpretativa con relación a lo que tradicionalmente se conoce como “lo social”. Este dominio objetual, caracterizado por su orden emergente, no solo es lo que provee el fundamento operativo para que las ciencias sociales devengan disciplinas autónomas, sino también la base para que la comprensión sobre la vida social se pueda llevar a cabo.

Este aspecto metateórico, que apunta a las condiciones de posibilidad para la producción de conocimiento científico-social, es, en cierto modo, el sostén arquitectónico desde el cual la diversidad de teorías, conceptos y categorías adquieren sentido y pretenden hacer inteligible los fenómenos sociales del mundo.

Sobre esta base, en Chile, la irrupción de octubre, fue, para todos los efectos, un fenómeno social —cuya emergencia— demandó desde un primer momento que las ciencias sociales chilenas se pronunciaran al respecto y, por tanto, cristalizaran esa vocación a la cual nos referíamos al principio.

Sin embargo, no se trataba de cualquier fenómeno. En la historia reciente de Chile, si bien había habido otras expresiones sociopolíticas y culturales sobre las cuales las ciencias sociales se volcaron, con octubre pasó algo distinto. Su acaecimiento, junto con ejercer una seducción en el pensamiento, lo situaba, al mismo tiempo, en una especie de intraducibilidad.

Esta intrigante condición de octubre, generaba, en consecuencia, que las escrituras y reflexiones que comenzaron a producirse desde un comienzo se preguntaran sobre el estatuto mismo de octubre. En simple: sobre lo que era. Octubre, en ese sentido, para usar la expresión de Jacques Derrida (2015) a partir de su relectura de Platón,

operaba como un *fármakon* toda vez que su despliegue, para efectos del pensamiento y su interés de aprehensión, era tanto fuente de encantamiento como de ambivalencia.

Las ciencias sociales estaban, entonces, frente a un objeto cuya indefinición radical lo tornaba, al mismo tiempo, en un intersticio al límite de lo cognoscible. Por ello, el lenguaje hermenéutico y la producción intelectual entraba en colisión —curiosamente— con algo que si bien, para todos los efectos, era un fenómeno existente carecía, en el fondo, de una forma concreta.

Detenerse en esto, me parece, es clave porque si hay algo que caracteriza a las ciencias sociales, como plantean Didier Fassin y George Steinmetz (2023) parafraseando al sociólogo Norbert Elias, es que tanto el observador como el observado, a diferencia de las ciencias naturales, pertenecen a una misma categoría.

El asunto está, sin embargo, en que esta correspondencia ontológica entre lo observable y el observador no garantizaba, en este caso particular, que octubre pudiera ser legible inmediatamente. Lo ocurrido en 2019, tanto en sus inicios como en sus sobrevidas, por el tipo de lecturas e interpretaciones que se hacían evidenciaba como, a pesar de la potencia persuasiva y proposicional del objeto (Roosth, 2017; Whitehead, 1978), este se resistía a ser plenamente formalizado.

Hacer sociología, antropología o ciencia política de “octubre”, devino, en consecuencia, como una empresa que, más que archivar descripciones, quedaba impresa de una sensibilidad experimental y especulativa que no solo la hacía examinar internamente sus supuestos, sino también, frente al nebuloso objeto al que se enfrentaban, tener que expandir la imaginación conceptual e incluso disciplinar.

Octubre como objeto epistémico indefinible, o sobre el peligro de las rápidas seducciones

Revolución, revuelta, estallido e insurrección son parte de los conceptos que configuraron la gramática de actores tanto políticos como intelectuales con la irrupción de octubre. En estos últimos, sin embargo, estos conceptos más que orientar praxis políticas, fueron parte de la instrumentación categorial con la que se pretendía producir conocimiento.

No obstante, a pesar de la larga data que estos conceptos tienen en la historia del pensamiento social y político, lo interesante es como con el advenimiento de octubre se vieron remecidos en su aparente inmanencia y, en efecto, tuvieron una circulación y recepción en diversos circuitos institucionales que le fueron proveyendo diferentes grados de apertura y plasticidad interpretativa.

La contingente vida social de estos y otros conceptos que en diversos libros, compilaciones de ensayos, seminarios y otras expresiones intelectuales tuvieron lugar se explica porque octubre, siguiendo a Rheinberger (1997), se había convertido en un objeto epistémico. Para el historiador de la ciencia, los objetos epistémicos son — básicamente— objetos de interrogación sobre los cuales las disciplinas científicas se vuelcan para poder saber aquello que todavía no es conocido.

Sobre esta base, octubre, para las ciencias sociales, se había tornado en un objeto epistémico por excelencia ya que las categorías, enfoques y perspectivas propuestas para hacer conocible el fenómeno intentaban, en simple, auscultarlo.

Sin embargo, la particularidad de octubre como objeto epistémico es que hizo, simultáneamente, que las propias ciencias sociales y sus entramados disciplinares se volvieran espacios de experimentación.

En otros términos, si en un principio el afán de interrogación era octubre, las propias ciencias sociales, dada la complejidad del objeto epistémico, tuvieron que reexaminar si los regímenes conceptuales tradicionales sobre los cuales habían navegado eran útiles para comprender octubre.

Octubre, en tanto objeto de interrogación, estaba lejos de detentar una pasividad. Su modo de existencia afectaba directamente a la propia producción de conocimiento y viceversa. En ese sentido, entre las ciencias sociales y octubre se produjo una mutua intercalación (Rheinberger, 1997) que determinaba la forma y alcances en que el fenómeno fue leído.

Esta afectación entre objeto y conocimiento, condujo, en consecuencia, que en la producción intelectual se alojara un cierto germen de impotencia experimental-conceptual para proveer, rápidamente, alguna lectura que hiciera sentido.

Esto, cabe señalar, no supone negar la capacidad inventiva y generativa de conceptos en las ciencias sociales el cual, de hecho, es un aspecto constitutivo de su proceder disciplinario. Sin embargo, el problema estaba en qué, frente a la mayor crisis sociopolítica de la década, la premura del pensamiento no es la mejor consejera.

En esa línea, las categorías y conceptos que mencionábamos en un comienzo, cuya acogida y rápida redefinición al interior de las ciencias sociales tuvieron lugar, revelaba como esa vocación teórico-especulativa, en vez de ser fructífera, hizo que el pensamiento social y su interés descriptivo entrara en crisis.

La distancia, pausa y aprehensión moderada que, se espera, motive la teorización, en el caso de octubre como ámbito de interrogación resultó una simple quimera. La crisis de octubre y su acelerada existencia, da la impresión, terminó por gobernar y hacer también del

pensamiento una crisis. Por lo mismo, las interrogantes que caben hacerse son: ¿las ciencias sociales estaban respondiendo adecuadamente a la necesidad de saber que era lo que estaba sucediendo? O, incluso, ¿eran siquiera capaces de hacer legible lo que “octubre” era?

Mi impresión es que no. Digo esto ya que, en el fondo, octubre estaba articulado sobre una indefinición o, mejor dicho, una nebulosa sobre lo que era y eventualmente podía ser. El tema está en que esa indefinición en vez de guiar una práctica científico-social que atendiera a los límites y posibilidades de lo cognoscible, se transformó en un fetiche el cual, equivocadamente, generó que las interpretaciones realizadas parecieran como lecturas últimas, definitivas.

Disonancias no (plenamente) comprendidas

No cabe duda de que la operación práctica de las ciencias sociales, frente a sus objetos de interrogación, está impresa de un arrojo y asombro. La elaboración de interpretaciones no descansa en axiomas, sino más bien en travesías intelectuales cuyos resultados son, muchas veces, imprevistos.

Con octubre, las ciencias sociales, como vimos, seducidas por la temporalidad y ritmos de la crisis, buscaron, a nuestro juicio, fallidamente hacer legible algo que se sustraía de alguna aprehensión formal definitiva.

Ahora bien, con relación a las ciencias sociales y la diversidad de cruces interdisciplinarios y transdisciplinarios desplegados por comunidades epistémicas de universidades y centros de estudios para pensar y reflexionar sobre octubre, puso en escena una cuestión que

está al centro de la indefinición objetual sobre la cual se ha discutido, a saber: la disonancia.

El sociólogo David Stark (2011), a partir de la idea de interrogación propuesta por el filósofo pragmatista John Dewey, sugiere que, frente a situaciones o ámbitos que suscitan perplejidad, la disonancia estriba en fricciones sobre el valor de las cosas generando que, los actores involucrados en esas controversias movilicen no solo un afán de exploración, sino también de cognición reflexiva.

Si trasladamos lo propuesto por Stark, octubre generó, en un primer momento, una perplejidad que, posteriormente, motivó que las ciencias sociales emprendieran una cruzada interpretativa que se caracterizó por una radical disonancia, cuya expresión, fueron los artefactos conceptuales, teóricos y epistemológicos con los que leer la crisis.

Si bien es cierto que, frente a objetos de interés intelectual la producción de esos recursos es indispensable para la construcción de conocimiento, con octubre, precisamente por su condición indefinida, este aspecto se vio agudizado.

Así las cosas, el frenesí escritural y analítico desde 2019 hasta nuestros días, no solo respondió a las contestaciones y debates propios del campo intelectual, sino también a explorar lo que permanece como desconocido y, en último término, intraducible.

Un aspecto clave de esto, considero, como cuasi pregunta, es si efectivamente las ciencias sociales chilenas lograron hacer de la disonancia y la indefinición de octubre, para usar la expresión de Peter Galison (2004), una máquina teórica y reflexiva que les permitiera examinarse internamente, en sus supuestos y horizontes para, después de ello, hacer el intento por comprender la crisis.

Claramente, esto requiere un estudio más pormenorizado de las ciencias sociales, sus prácticas y sus actores, pero a la luz de la vorágine analítica que se pudo apreciar respecto a octubre pareciera que, aun cuando —como planteábamos en la sección anterior— hubo un espíritu experimental, este no fue del todo exitoso.

La experimentación y la cognición reflexiva (Stark, 2011) de toda práctica intelectual-científica, es un proceso que, para tener buenos resultados, requiere ni más ni menos que de tiempo. El problema con octubre, considero, es que su temporalidad terminó por colonizar los tiempos de la producción científica y, en cierto grado, los intelectuales se subsumieron a ese encanto de la aceleración.

Los intelectuales, de un modo u otro, no lograron habitar reflexivamente la disonancia y el poder resonante (Messeri, 2017) de un objeto que, indefinido, comporta extrañeza y complejidades. El intento apresurado de escribir e interpretar lo extraño, por más llamativo que fuese, terminó siendo un *fármakon* aún más dañino.

Esta lógica del “pensamiento del apuro” hizo que las ciencias sociales, frente a la indefinición de octubre, no comprendieran el sentido de la disonancia que precisamente esa ausencia de forma impone y que demanda que cualquier intento de interpretación proceda cuidadosamente.

La efervescencia con la que octubre discurrió, en sus expresiones políticas, sociales, culturales y simbólicas, no solo daba cuenta de un eclecticismo, sino también de una potencia cuya actualización era permanente. Esto, como veníamos diciendo, junto con relevar una singular forma de existencia temporal, ya hacía figurar que fuese cual fuese la conceptualización propuesta, ésta sería limitada o, derechamente, inviable.

En ese sentido, creo, hubiese sido distinto sí es que las ciencias sociales hubiesen reflexionado sobre sí mismas antes que volcarse al objeto. Por lo mismo, si ya octubre era algo distinto y, por de pronto, carente de una concreción, este extravío de las ciencias sociales subsumió al objeto epistémico en una oscuridad y resistencia a la descripción aún más fuerte.

Por esa razón, la impotencia que direccionó el pensamiento científico-social sobre la crisis de octubre es también parte de una crisis. Una crisis evidentemente no política, pero sí interpretativa y epistémica generada por claudicar a la lentitud que, debiera, ser la máxima de la actividad intelectual.

Este desvío, en parte, responde también a como la efervescencia de octubre no logró ser puesta en suspenso por parte de las ciencias sociales. El maná inmanente y trascendente (Mazzarella, 2017) que alimentaba el despliegue político de octubre, en vez de ser comprendido a la distancia resultó ser, más bien, algo que penetró directamente al intento por descripción de lo que sucedido.

Por lo mismo, la separación entre observador y lo observado se desdibujó completamente generando un poder de afectación en que la efervescencia del fenómeno estudiado se transportó hasta el pensamiento mismo impidiéndolo ser reflexivo de sí mismo (Mazzarella, 2017).

Teniendo en cuenta esto, la indefinición de octubre que, en resumidas cuentas, era un no-saber fruto de su estatuto ontológico estaba subsidiado, a su vez, por las pretensiones de las ciencias sociales que, paradójicamente, querían interpretarlo.

En otras palabras, que octubre estuviera en penumbras fue resultado de la propia ceguera intelectual, particularmente, de los artilugios teóricos-conceptuales con que se intuía que podían explorar la crisis.

En efecto, el deslizarse suavemente por la disonancia y no abrazar fructíferamente su perplejidad e ímpetu exploratorio hicieron, como decíamos antes, que el objeto en cuestión se sepultara aún más.

Afirmar esto puede, sin duda, comportar algún grado de provocación y también de polémica. Sin embargo, sin afán de querer encarnar ninguna de ambas, a lo que apunto con esto es iluminar en qué medida esa problemática paradójica, considerando los precarios resultados interpretativos respecto a octubre, tendió a estar dado por un intelectualismo, no necesariamente consciente, de los intelectuales que se abocaron al análisis mediante el uso de categorías que intentaban, desesperadamente, encajar con la realidad observable.

En esa línea, el uso y abuso de determinados conceptos o jergas más que revelar octubre, hizo más bien aparecer las posiciones y deseos de sus observadores sobre los observados. Con esto, no se está negando, por cierto, en sintonía con lo propuesto por Pierre Bourdieu (1984), que los análisis que se hacen sobre el mundo no descansen sobre la posición que los actores científicos tienen en ese mundo.

La cuestión está contenida, en este caso al menos, es qué con octubre, como hemos dicho en pasajes anteriores, se trataba de algo nuevo, completamente único y, por lo mismo, no inmediatamente traducible. La ansiedad interpretativa de los intelectuales, el abrazar conceptos como si se tratasen de fichas intercambiables, hizo que la examinación interna del propio campo intelectual y de sus condiciones de posibilidad de conocimiento quedara por completo desecha.

El vértigo, tanto escritural como analítico, hizo que octubre proliferara, circulara, motivara seminarios y exposiciones, pero ¿se estaba realmente sabiendo que era? El objeto en disputa tenía una provechosa vida social e intelectual, pero ella no es sinónima de comprensión.

En suma, la convergencia de todos estos elementos, cegueras, apresuramientos y escrituras hechas al calor de los hechos, lograron que octubre, en cuanto a su indefinición e intriga inicial deviniera, finalmente, completamente intraducible. El horizonte hermenéutico de las ciencias sociales, se terminó enfrentando más a un límite que a una posibilidad.

Reflexión final

¿Será posible, algún día, comprender lo que pasó con octubre? Esta interrogante, así como muchas otras, resultan formas fantasmáticas para el pensamiento y los intelectuales. Octubre, luego de cinco años, ha motivado cruces interdisciplinarios, zonas de intercambio conceptual y epistémico (Galison, 1997) y ha hecho posible la consecución de nuevas publicaciones. Pero, en este archipiélago de archivos, palabras y gramáticas conceptuales, ¿hay siquiera algún consenso por más mínimo que sea?

Octubre, para las ciencias sociales, ha adoptado la forma, en línea con Derrida (1994), en un espectro fantasmático. Algo que, en resumidas cuentas, puede estar como no estar, ser presente como ausente. Octubre, en su espectralidad, tiene una existencia indeterminada que no solo se encarnó políticamente, sino también como objeto intelectual.

En síntesis, de ser posible, en algún momento, que octubre sea potencialmente comprendido dependerá de cómo sus observadores puedan primero observarse a sí mismos. Quizás, solo ahí, el espectro pueda ser medianamente legible mediante una imaginación intelectual y reflexiva que, eficazmente, abrace sus límites y disonancias.

REFERENCIAS

- Bourdieu, P. (1984). "Homo academicus". Editions de Minuit.
- Cetina, K. K. (1999). "Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge" (1st ed.). Harvard University Press.
- Derrida, J. (1994). "Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International". Routledge.
- Derrida, J. (2015). "La Dissémination". Seuil.
- Fassin (editor), D., & Steinmetz (editor), G. (2023). "The Social Sciences in the Looking Glass: Studies in the Production of Knowledge". Duke University Press.
- Galison, P. (1997). "Image and logic: A material culture of microphysics". University of Chicago Press.
- Galison, P. (2004). "Einstein's Clocks and Poincaré's Maps Empires of Time". W W Norton and Company.
- Hoevel, C. (2020). "Octubre en Chile. Acontecimiento y comprensión política: Hacia un republicanismo". *Estudios Públicos*, 158, 101-106. <https://doi.org/10.38178/07161115/2020.005>
- Mazzarella, W. (2017). "The Mana of Mass Society" (1.a ed.). University of Chicago Press.
- Messeri, L. (2017). "Resonant worlds: Cultivating proximal encounters in planetary science". *American Ethnologist*, 44(1), 131-142. <https://doi.org/10.1111/amet.12431>
- Rheinberger, H.-J. (1997). "Toward a History of Epistemic Things: Synthesizing Proteins in the Test Tube". Stanford University Press.
- Roosth, S. (2017). "Synthetic: How Life Got Made". University of Chicago Press.
- Stark, D. (2011). "The Sense of Dissonance: Accounts of Worth in Economic Life" (Course Book). Princeton University Press.

Capítulo 13: El Objeto

Whitehead, A. N. (1978). "Process and Reality (Gifford lectures)" (2nd Revised edition). Free Press.

AUTORES

Claudio Sapelli. Ph.D. en Economía de la University of Chicago y Economista de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Es Profesor Investigador en Faro UDD y Profesor Titular en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Patricio Órdenes. Magíster en Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile e Ingeniero Comercial de la Universidad Autónoma. Es Profesor Investigador en Faro UDD y Docente de Ingeniería Comercial en la Universidad del Desarrollo.

Miguel Ángel Fernández. Ph.D. en Ciencia Política de la Boston University y Cientista Político de la Universidad del Desarrollo. Es Subdirector Académico en Faro UDD y Profesor Asistente en la Universidad del Desarrollo.

María José del Solar. Socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es Profesora Investigador de Faro UDD y Docente de la Cátedra de Feminismos y Patriarcado en la Universidad del Desarrollo.

Cristián Larroulet. Magíster en Economía de la University of Chicago e Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es Profesor Titular de la Universidad del Desarrollo y Docente de Facultad de Economía y Negocios UDD.

Martina Cionci. Cientista Política de la Universidad del Desarrollo. Fue Asistente de Investigación y Ayudante en la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.

María Paz Raveau. Ph.D. en Ciencias de la Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo e Ingeniera Civil de la Universidad Tecnológica de Chile. Es Profesora Asistente de Faro UDD y Docente de la Facultad de Gobierno e Ingeniería en la Universidad del Desarrollo.

Melany Sosa. Cientista Política de la Universidad del Desarrollo. Fue Asistente de Investigación y Ayudante en la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.

Pablo Paniagua. Ph.D. en Economía Política de la University of London Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María. Es Director del Magíster en Filosofía, Política y Economía de Faro UDD y Profesor Asistente de la Universidad del Desarrollo.

Natalia González. Magíster en Derecho de la University of Chicago y Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es Profesora Investigadora de Faro UDD y Consejera del Consejo Directivo en el Consejo para la Transparencia.

Rodrigo Pérez de Arce. Magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Abogado de la misma casa de estudios. Es Investigador Asociado de Faro UDD.

Victor Espinosa. Ph.D. en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos e Ingeniero Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es Profesor Investigador de Faro UDD y Docente de Ingeniería Comercial en la Universidad del Desarrollo.

Iván Carrino. Magíster en Economía Aplicada de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina y Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires. Es Investigador Asociado de Faro UDD y Subdirector de la Maestría en Economía de ESEADE.

Felipe Schwember. Doctor en Filosofía de la Universidad de Navarra y Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es Profesor Investigador de Faro UDD y Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo.

Jacqueline Dussillant. Doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Licenciada en Historia de la misma casa de estudios. Es Profesora Investigadora de Faro UDD y Miembro de Número de la Academia Chilena de la Historia.

Jorge Cordero. Magíster en Estudios Políticos de la Universidad de los Andes y Cientista Político de la Universidad Católica de Temuco. Es Profesor Investigador de Faro UDD y Docente en la Universidad del Desarrollo.

Pedro Villarino. Magíster en Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es Investigador Asociado de Faro UDD.

Pablo Celis. Magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Alberto Hurtado y Sociólogo de la misma casa de estudios. Es Profesor Investigador de Faro UDD y Docente en la Universidad del Desarrollo.

FARO UDD
NÚCLEO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

faro.udd.cl